

A photograph of a woman with dark hair, wearing a vibrant, multi-colored striped shawl, carrying a young child on her back. The child is wearing a bright blue knitted hat and a blue jacket. They are in a market stall with various items hanging on the wall behind them. The image is overlaid with a semi-transparent purple rectangle containing text.

La etnicidad y la persistencia de la desigualdad

El caso peruano

ROSEMARY THORP Y MARITZA PAREDES

LA ETNICIDAD Y LA PERSISTENCIA DE LA DESIGUALDAD
EL CASO PERUANO

La etnicidad y la persistencia de la desigualdad

El caso peruano

ROSEMARY THORP Y MARITZA PAREDES

Serie *Estudios sobre Desigualdad*, 03

La versión en inglés de este libro fue publicada por la editorial inglesa Palgrave en 2010.

© IEP Instituto de Estudios Peruanos
Horacio Urteaga 694, Lima 11
Telf.: (51-1) 332-6194
Correo-e: <publicaciones@iep.org.pe>
URL: <www.iep.org.pe>

© ROSEMARY THORP Y MARITZA PAREDES

ISBN: 978-9972-51-323-7

ISSN: 2224-7424

Impreso en Perú

Primera edición en español: Lima, noviembre de 2011

1000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2011-14916

Registro del proyecto editorial en la Biblioteca Nacional: 11501131101904

Fotografía de carátula:	Francisco Alguacil Díez
Corrección de textos:	Roberto Niada A.
Diseño editorial:	Erick Ragas
Cierre de edición:	Silvana Lizarbe/Gino Becerra
Cuidado de edición:	Odín del Pozo

Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro por cualquier medio sin permiso de los editores.

THORP, Rosemary

La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: el caso peruano / Rosemary Thorp y Maritza Paredes. Lima, IEP, 2011. (Serie Estudios sobre Desigualdad, 3)

DESIGUALDAD; POBLACIÓN INDÍGENA; ETNICIDAD; IDENTIDAD ÉTNICA; EXCLUSIÓN SOCIAL; HISTORIA; PERÚ

W/05.03.05/D/3

A Tim y José Carlos

Contenido

PREFACIO.....	13
Capítulo 1: Introducción.....	17
Capítulo 2: La complejidad y la prominencia de la identidad étnica en el Perú.....	33
Capítulo 3: Midiendo las desigualdades de grupo..... <i>(en coautoría con: Adolfo Figueroa)</i>	67
Capítulo 4: Desigualdades persistentes en la educación..... <i>(en coautoría con: Adolfo Figueroa)</i>	95
Capítulo 5: El enraizamiento histórico de las desigualdades grupales: de la colonia a la Guerra con Chile..... <i>(en coautoría con: Carlos Contreras)</i>	117
Capítulo 6: El enraizamiento de la desigualdad regional y sus consecuencias para las desigualdades de grupo: de la década de 1890 a la de 1960..... <i>(en coautoría con: Carlos Contreras)</i>	139
Capítulo 7: La evolución de la crisis y las consecuencias para la desigualdad grupal, 1968-1990.....	171
Capítulo 8: Los años de Fujimori: la recreación de la exclusión económica.....	207
Capítulo 9: Conclusiones.....	245
BIBLIOGRAFÍA.....	259
NOTA SOBRE LAS AUTORAS Y LOS COLABORADORES.....	283

Lista de cuadros

2.1: Importancia de diversos elementos en la identidad de los informantes	35
2.2: Promedio de percepción del color de la piel en localidades.....	39
2.3: Prejuicios en contra de indígenas y cholos según características importantes.....	46
2.4: Encuesta de CRISE: características principales de los encuestados según su lugar de residencia	64
3.1: La distribución del ingreso dentro de cada grupo étnico.....	72
3.2: Participación de hogares por estatus de pobreza y por grupo social del jefe del hogar	73
3.3: Niveles educativos por grupo social y género	74
3.4: Atención médica y seguro de salud, por grupo étnico.....	75
3.5: Desigualdad horizontal en la mortalidad infantil según ENNIV.....	76
3.6: Servicios de los hogares y características de la vivienda por grupo social.....	77
3.7: Oferta laboral sobrante: 2003	78
3.8: Porcentaje de personas registradas para votar en distintas regiones.....	79
3.9: Alcaldes provinciales con apellido indígena (1963-2003)	82
3.10: Jueces y fiscales con apellido indígena por periodo de selección y puesto en la jerarquía.....	84
3.11: El origen étnico afecta el acceso a... ..	86
3.12: El gobierno y las percepciones de las formas de discriminación grupal.....	92
4.1: Alfabetización y nivel educativo por grupo étnico.....	97
4.2: Años de estudio por edad y grupo étnico.....	98
4.3: Alumnos matriculados que desaprobaron o desertaron en el año escolar 2004....	99
4.4: Ingreso medio por nivel educativo y grupos sociales: 2003	100
4.5: Ingreso medio por grupo de edad y grupo social: 2003.....	101
4.6: Salario de trabajadores por nivel educativo y grupo étnico: 2003.....	102
5.1: Ingreso fiscal durante la era del guano	130
6.1: Principales productos de exportación: 1890-1960	141
6.2: Distribución regional de votantes registrados: 1940 y 1963.....	143
6.3: Distribución regional de la población.....	144
6.4: Tendencias en el ingreso per cápita real (1950-1966).....	151
6.5: Gasto del gobierno central por principales sectores (1900-1950).....	154
6.6: Tasas de analfabetismo por región.....	155
6.7: Variaciones regionales en la disponibilidad del cuidado de la salud (1943).....	157
7.1: Distribución estimada de tierra por tipo de organización agrícola.....	175
8.1: Resultados electorales en municipios provinciales (1980-1993)	220

Mapa

1.1: Mapa del Perú	31
--------------------------	----

Lista de figuras

2.1: Distribución de cada grupo étnico prominente en las tres localidades	37
3.1: Número de miembros del Congreso con nombre indígena, 1963-2006	81
3.2: Alcaldes provinciales con nombre indígena, 1964-2006.....	81
3.3: ¿Qué grupos étnicos cree que tienen poder en las siguientes instituciones?.....	88
3.4: Personas que creen que el grupo étnico al que pertenecen tiene poder	89
4.1: Relaciones teóricas entre educación, capital humano e ingreso medio.....	103
7.1: Índice de precios al productor reales (1970 = 100).....	197
7.2: Brecha de productividad entre costa y sierra.....	197
8.1: Porcentaje de municipios provinciales a cargo de organizaciones políticas locales	222

Recuadro

7.1: El testimonio de Armando.....	191
------------------------------------	-----

Acrónimos

AEMET	Asociación Gremial de Empresarios Metalmecánicos
AP	Acción Popular
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
BHP	Broken Hill Proprietary
CAA	Community Aid Abroad
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAP	Cooperativas Agrarias del Perú
CCP	Confederación Campesina del Perú
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre de Chile
CONACAMI	Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
CORECAMI	Coordinadora Regional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
CP	Comedor Popular
CVR	Comisión de la Verdad y Reconciliación
FONCODES	Fondo de Cooperación para el Desarrollo del Perú
FOVIDA	Fomento de la Vida ONG
FUCAE	Federación Unificada de Campesinos de Espinar
PBI	Producto Nacional Bruto
Ha	Hectárea
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
INTI	Movimiento Independiente Regional Inti
IU	Izquierda Unida
JNE	Jurado Nacional de Elecciones
MINCAP	Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales
N	Número
ONG	Organización No Gubernamental
PEMTEC	Pequeña Empresa Tecnología y Sociedad
PRONAA	Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
PYME	Pequeñas y Medianas Empresas
SAIS	Sociedades Agrarias de Interés Social
SEA	Servicios Educativos del Agustino
SERCOTEC	Servicio de Cooperación Técnica de Chile
SUNAD	Superintendencia Nacional de Aduanas
SUNAT	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
UNCP	Universidad Nacional del Centro del Perú
UNI	Universidad Nacional de Ingeniería
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSCH	Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
VR	Vanguardia Revolucionaria

PREFACIO

Este libro explora la desigualdad, en particular la que sufre la población indígena andina. Su eje es la explicación de la persistencia y la profundidad de dicha desigualdad mediante la exploración, en el transcurso de varios siglos, de la dinámica de las interrelaciones existentes entre política, economía, geografía y cultura.

El presente volumen es la realización de un sueño que rondó por la cabeza de una de las autoras por largo tiempo. Cuando, en la década de 1970, Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram preparaban una historia económica del Perú desde 1890 (que fue publicada en 1978), les tomó mucho tiempo y creatividad seguir el análisis de la economía exportadora moderna en dicho país, su dominio por parte del mercado internacional y el difícil nacimiento de la industrialización. Además, los autores, debido a su juventud, no contaban con los contactos necesarios para emprender un gran estudio multidisciplinario ni tenían la audacia necesaria para ello. El resultado fue un libro que esencialmente giraba en torno a la economía moderna y sus relaciones internacionales, dejando muy poco espacio para las interrelaciones entre economía y política, o para las instituciones que rigen la vida de la gente común, en particular la población indígena de la sierra y la selva. La presente obra intenta complementar ese libro anterior. Su preparación exigió un desafiante pero fructífero diálogo interdisciplinario equitativo entre ambas autoras, un esfuerzo creativo por aprender de muchas fuentes: los testimonios que la gente da de su vida, archivos, encuestas, así como el proceso mismo de *rastrear* la historia. Para que este esfuerzo fuera posible, se requirió de una extensa colaboración.

Tenemos, en consecuencia, muchísimas deudas. En primer lugar, tenemos una deuda especial con tres de nuestros colaboradores cercanos en el Perú, que pasaron a ser coautores de cuatro capítulos importantes. Carlos Contreras trabajó con nosotras en la redacción de los capítulos acerca de la colonia y la independencia hasta 1960, y su profundo dominio de la bibliografía, así como sus considerables conocimientos, nos permitieron movernos con confianza en el rico campo de la temprana política económica peruana. Adolfo Figueroa elaboró medidas empíricas usadas para estimar las desigualdades grupales y preparó el marco conceptual utilizado en el capítulo 4; también fue una constante inspiración y creyó en nuestro proyecto desde la primera conversación que mantuvimos.

Otro colaborador cercano en el Perú fue Ismael Muñoz, quien tomó de las manos de Adolfo la organización del grupo de investigadores locales que trabajaron con nosotros en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con él elaboramos el estudio de la acción colectiva, que si bien fue escrito por separado, también dio profundidad y vida al capítulo 8. David Sulmont llevó a cabo una encuesta sobre las percepciones de identidad, que brindó un rico material primario para los capítulos 2 y 3, y es el autor del apéndice metodológico del primero de los capítulos mencionados. Su propia contribución se encuentra en la página web del CRISE. Manuel Barrón trabajó con Adolfo Figueroa en las desigualdades grupales, y posteriormente con nosotras en el análisis de la dimensión de género. Andrea Portugal redactó un texto sobre los orígenes de Sendero Luminoso, que contribuyó enormemente al análisis que figura en el capítulo 7. Gisela Cánepa presentó un documento de trabajo con un perceptivo análisis de las sutilezas que la etnicidad tiene en el Perú. Juan Ansión preparó un útil texto sobre educación y Manuel Piqueras otro acerca de la etnicidad en el ejército y la policía. Javier Jiménez, Paola Lazarte y Denisse Rodríguez fueron asistentes de investigación. En Oxford, Tony Jack trabajó paciente y perseverantemente en la bibliografía. En Lima, Javier Flores hizo un excelente trabajo de traducción, capturando nuestras intenciones e ideas en inglés y expresándolas elocuentemente en español.

En segundo lugar, el libro fue preparado como parte de un trabajo de equipo más amplio, que busca reflexionar sobre la etnicidad, la desigualdad y su relación con la inseguridad. Este se llevó a cabo como parte de una investigación más amplia dirigida por CRISE, el cual a su vez fue financiado —en el contexto de un centro de investigación— por la DFID, la agencia de asistencia externa del gobierno británico, cuyo respaldo financiero agradecemos. Dicha institución es el CRISE, el Centre for Research on Inequality, Security, and Ethnicity (Centro de Investigación de la Desigualdad, la Seguridad y la Etnicidad), con sede en la Universidad de Oxford y que hasta 2010 fue dirigido por el Dr. Frances Stewart.

El trabajo teórico y comparativo efectuado por el Centro se refleja bien en su página Web y, de modo bastante bueno, en Stewart (2008). El concepto impulsor fueron las desigualdades existentes entre grupos o desigualdades “horizontales”, para así distinguir este término de una categoría ortodoxa como la desigualdad “vertical”, aquella que surge entre personas. Lo más importante es que la desigualdad horizontal se refiere a todas las dimensiones de la desigualdad y no solo a la económica. Hemos usado este marco, aunque tendemos a preferir la etiqueta de desigualdad “grupal”, puesto que en América Latina la superposición de las desigualdades étnica y de clase es tal que no hay nada intuitivamente “horizontal” en la desigualdad resultante. Estamos en deuda con todos nuestros colegas en el CRISE por su apoyo y amistad, con Nicola Shepard y Jo Boyce por su apoyo administrativo, y con Frances Stewart y Corinne Caumartin por sus valiosos comentarios, los cuales agradecemos.

Otros colegas de la comunidad académica también desempeñaron su papel. Reconocemos los importantes y útiles comentarios que hicieron Brooke Larson de Stony Brook al capítulo 5, Gonzalo Portocarrero de la PUCP y un lector anónimo de la Palgrave Press. Muchos peruanos —investigadores, diseñadores de políticas, campesinos, dirigentes y promotores sociales— hablaron pacientemente con nosotras en muchas ocasiones. La PUCP nos prestó sus instalaciones y nos dio un espacio donde realizar talleres.

Asimismo, nos debemos un agradecimiento mutuo. Hemos aprendido enormemente la una de la otra en la exigente tarea de intentar pensar de modo interdisciplinario. Por último, agradecemos a nuestras familias, que toleraron nuestras obsesiones y ausencias y nos ofrecieron todo tipo de ayuda práctica. A ellas les dedicamos el resultado.

INTRODUCCIÓN

Mientras planeábamos el esquema de este libro, el popular “Café del Mar” de Lima fue cerrado por el INDECOPI alegando la discriminación étnica de su clientela. Se trató de un acontecimiento emblemático que indicaba que en el Perú, a partir del año 2000, la cuestión de la etnicidad se ponía sobre la mesa bajo una nueva forma. Este y otros ejemplos semejantes sugieren una corriente de cambio, que efectivamente comenzó a soplar en el país con el nuevo siglo. En el 2000, la dictadura de facto de Alberto Fujimori tuvo un final sorprendente, en medio de un tumultuoso desenmascaramiento de la corrupción, parte de la cual fue captada en video y presentada en televisión para que todos la vieran. La nueva atmósfera fue encarnada por el gobierno de transición de Valentín Paniagua, cuyo mandato era llevar al país a las elecciones. Como parte de la sed de un nuevo inicio, fue posible examinar las cuestiones de la desigualdad e incluso su componente étnico. El gobierno mostró un celo sin precedentes por los derechos humanos, y dentro de ello una profunda preocupación por las injusticias inflingidas durante los doce años de guerra. Paniagua nombró una Comisión de la Verdad y Reconciliación, dirigida por el Dr. Salomón Lerner Febres, la cual trabajó durante dos años, recogió numerosos testimonios y produjo un magnífico y provocador informe de ocho mil páginas. Es más, cuando la CVR presentó el resultado de su investigación, el país ya había elegido presidente a Alejandro Toledo, su primer mandatario en autoproclamarse cholo, quien decidió celebrar su ceremonia inaugural en Machu Picchu, como una identificación simbólica con el pasado incaico y con el presente indígena del Perú. En el proceso electoral de 2006, el candidato

mestizo Ollanta Humala basó su campaña en la necesidad de afirmar las raíces indígenas peruanas (los “pueblos cobrizos”, como dijera repetidas veces), lo que despertó muchos temores pero a la vez concitó un vigoroso respaldo.¹ Finalmente, perdió las elecciones.²

La historia de este libro trata del arraigo de estas desigualdades. Estamos convencidas de que es solo enfrentando la profundidad de dicho enraizamiento que se podrán construir políticas y voluntad política que permitan el cambio. Demostraremos que el arraigamiento y la naturaleza extrema de la desigualdad global tienen bastante que ver con la profundidad y el enraizamiento de la desigualdad étnica. El libro, asimismo, tiene en cuenta las consecuencias que genera el no llevar a cabo dicho enfrentamiento, entre ellas el horroroso derramamiento de sangre y las injusticias que la CVR debió examinar. El fenómeno de Sendero Luminoso, el movimiento que desató la guerra civil a comienzos de los años ochenta en la sierra central, eventualmente abarcó a la tercera parte del país y finalmente se extendió a la misma Lima, en lo que serían algunos de los peores años en la historia de la ciudad. No consideramos a Sendero un “movimiento étnico”, sino más bien uno que se alimentó con las profundas desigualdades e injusticias étnicas del país, lo que tuvo terribles consecuencias para la población indígena. No fue ninguna casualidad que el 74% de las 72 mil personas muertas en el transcurso de la violencia haya sido de origen indígena.

En América Latina, la cuestión de la desigualdad entre los indígenas y quienes no lo son llama la atención debido a su persistencia a lo largo del tiempo en la mayor parte del continente (Hall y Patrinos 2005). Pero los pueblos nativos no han sido pasivos. Su movilización en las últimas décadas, en torno a cuestiones particulares, dio origen a una rica bibliografía. En ella, el Perú usualmente figura como un caso periférico, puesto que si bien presenta la persistente desigualdad étnica de otros países, la etnicidad no ha sido un factor prominente para la politización o la movilización (Van Cott 2005; Yashar 2005).

1. En el capítulo 2, examinamos plenamente los significados de distintas categorías y conceptos étnicos. Por ahora, el lector debe tener en cuenta que en el contexto indígena-blanco, el término *mestizo* alude a toda persona de raza mixta; pero en el Perú, quienes se sienten más cerca de sus raíces indígenas usualmente prefieren la palabra *cholo*. Dependiendo del contexto, este último vocablo se usa como despectivo o como una señal de afecto.

2. La versión en castellano se publicó en los primeros meses de su sorprendente victoria en su segundo esfuerzo.

Conceptos, métodos y bibliografía: las desigualdades “grupales” u “horizontales”, y un enfoque histórico

Nos parece que para definir el papel que la desigualdad étnica tiene en el Perú es necesario efectuar un estudio en profundidad, puesto que se trata de un caso significativamente distinto de los restantes países latinoamericanos. No obstante esta diferencia, la desigualdad en el Perú no es menos persistente. El estudio de caso es nuestra metodología fundamental y en él se aplican técnicas cualitativas y cuantitativas, así como un enfoque interdisciplinario. Nos parece que un enfoque de este tipo será importante para nuestro trabajo: las respuestas se hallan en la interacción que los aspectos económicos, sociales, políticos y geográficos de la desigualdad de grupo tienen a lo largo del tiempo.

En términos conceptuales, para hacer que nuestro análisis avance, utilizaremos el concepto de las “desigualdades grupales u horizontales”. Este alude a las desigualdades existentes entre grupos de personas antes que simplemente entre individuos, concepto que yace detrás de la mayoría de los exámenes de la desigualdad, y al cual en ocasiones se conoce como la desigualdad vertical, de ahí el adjetivo de “horizontal” empleado para enfatizar la distinción. En la bibliografía que nos sirve de base (Stewart 2005), los grupos quedan definidos por aquello que constituye la identidad prominente de cada uno. Dicha identidad sobresaliente es la que “salta a la vista”, predomina en la conciencia y muy probablemente da forma a actitudes y comportamientos. Tal identidad es normalmente la etnicidad, la religión o la clase, pero podría también darse que la identidad clave sea la de género, la edad o la región, o la fusión de más de un factor. Cuál identidad o mezcla sobresale es algo que podría verse afectado por el contexto y/o configurado por los líderes políticos.

En lo que sigue, emplearemos ambos términos, grupal y horizontal, de modo intercambiable. Nos damos cuenta de que el segundo término mencionado podría sonar extraño para quienes estudian el Perú, puesto que la diferenciación grupal más relevante —la etnicidad— se superpone marcadamente con la clase y no cuenta con ninguna característica “horizontal” intuitiva. Sin embargo, quisiéramos pedirle al lector que tenga en cuenta que la bibliografía viene usando dicha frase para enfatizar la dimensión grupal.

¿Por qué razón usar a los grupos como marco? El examen anterior ya está dejando esto en claro. En suma, en el caso peruano hay tres razones fundamentales por las cuales los grupos nos ayudan a reflexionar acerca de la persistencia de la desigualdad:

- i) La discriminación y los prejuicios siempre se dan en relación con grupos. Tales actitudes configuran las instituciones con el transcurso del tiempo, dan forma al modo en que las identidades se perciben y usan, y afectan la distribución por medio de los mercados de producción, de las relaciones sociales y de la política, en todo ámbito y en cada una de sus formas. Los elementos mencionados serán componentes importantes de nuestro análisis.
- ii) El pensar en términos de grupos llama la atención sobre el espacio. Ellos tienen una dimensión espacial, lo que resulta de crucial importancia en el Perú, puesto que históricamente la población indígena estuvo concentrada en la sierra y la mestiza en la costa. La interacción entre grupos, geografía y políticas que refuerzan y construyen la desigualdad geográfica, es un tema clave al explicar el enraizamiento de la desigualdad. El espacio importa debido a la distribución de recursos: dónde se encuentran los recursos naturales y dónde se concentran los de tipo político. En el Perú, la emigración cambia los aspectos espaciales con el paso del tiempo, pero un elemento central de nuestro argumento será que la interacción de la emigración con la discriminación y los prejuicios gradualmente dio cuerpo a nuevas formas de identidad étnica, las cuales son altamente significativas para la durabilidad de la desigualdad.
- iii) Los grupos son un elemento central del comportamiento político. Las personas usualmente se movilizan o son movilizadas en grupos. Las desigualdades políticas son un elemento central en la posibilidad de movilizarse. Que un grupo encuentre la forma de luchar por sus intereses, o no, y qué instrumentos escogerán, tiene bastante que ver con la evolución de las desigualdades grupales y por ende con el de la desigualdad a lo largo del tiempo. El recurso a la violencia, la movilización o a la política contenciosa seguida por la represión, podría afectar negativamente su fortuna. En el Perú, la ausencia de una vigorosa política indígena parecería formar parte de la explicación de la persistencia de la desigualdad.

¿“Importa” en el Perú una identidad grupal “étnica”? Para nosotros, esta es una pregunta extremadamente relevante. La significación que las personas les otorguen a distintos aspectos de su identidad variará según el contexto y el momento, y podrían distinguirse a sí mismos —o percibir que son distinguidos por otros— de acuerdo con características regionales, raciales, culturales o físicas. Sin embargo, es probable que solo aquellas divisiones que tienen una gran significación social, o que podrían adquirirla —esto es, aquellas connotaciones que influyan significativamente en la conducta y el bienestar de sus miembros y de otros

más en la sociedad—, detonarán y despertarán la conciencia de un grupo, esté politizado o no. Un elemento que tendrá que formar parte de la respuesta que intentaremos dar en los siguientes capítulos es si los peruanos perciben vigorosamente la etnicidad como algo socialmente significativo —tanto aquellos que se llaman a sí mismos “indígenas” como los que no lo hacen— y en qué formas lo es.

Interpretando la etnicidad: la bibliografía

Los científicos sociales han discrepado fuertemente en torno a cómo enfocar el estudio de la etnicidad. El debate tradicionalmente se ha dado entre los primordialistas, de un lado, y los instrumentalistas, del otro. El primer enfoque ha sido materia de bastantes exámenes (Geertz 1973; Isaacs 1975; y Van De Berghe 1981). Aunque Geertz e Isaacs le reconocen cierta transformación y fluidez a la identidad étnica, les sorprendió el poder de las “dotaciones” étnicas recibidas al nacer y durante la niñez, así como su resistencia. Como explicación se ofreció la “coercividad abrumadora” del grupo (Geertz 1973: 259; Isaacs 1975), o la “genuina seguridad” ofrecida por las dotaciones heredadas y la “necesidad de pertenencia” de la psique individual (Isaacs 1975: 35). La mayoría de estos enfoques fue desarrollada en la década de 1970. Es indudable que los lazos primarios son poderosos y se viven profundamente, pero estas perspectivas no nos ayudan a entender por qué razón algunos vínculos se han vuelto más fuertes que otros, por qué se crean nuevas identidades y se reproducen los lazos, y cómo es que las personas hacen frente a dichos cambios. Por ejemplo, en los Andes peruanos se han creado nuevas identidades mestizas y cholos (para un análisis y documentación brillantes véase De la Cadena, 2000), pero es probable que dichas identidades tengan distintos significados en el Perú y Bolivia, por ejemplo.

Los instrumentalistas, en cambio, afirman que las identidades étnicas son elegidas y manipuladas estratégicamente, e incluso son reconstruidas por las personas y por “empresarios étnicos”³ sobre la base de sus propios intereses (Brass 1997: 26), y generalmente con miras a obtener bienes del Estado a través de relaciones de patronazgo, tierras, empleos o mercados (Bates 1971 y 1998). Estos enfoques fueron empleados fundamentalmente para explicar la politización de la identidad étnica y el surgimiento de la violencia de este tipo. Pero si bien dichas aproximaciones en ocasiones resultan útiles para explicar cómo es que los grupos étnicos se movilizan y sustentan sus campañas (Latin 1986; Cohen 1985), ellas no responden a preguntas tales como por qué ciertos vínculos se vuelven más importantes que

3. La expresión se deriva de la frase en inglés ‘ethnic entrepreneurs’, la cual se refiere a líderes étnicos que recrean y dan forma a discursos, símbolos y demandas étnicas.

otros, cómo es que se convierten en la base de la acción política en un momento dado y no en otro, o por qué es que las personas ocasionalmente actúan en formas que parecen ser nocivas para sus intereses materiales. Además, tienden a asumir que las personas dentro del grupo comparten preferencias y que sus fronteras se hallan bien delimitadas. Todos estos son supuestos sumamente problemáticos en Latinoamérica, donde la etnicidad es fluida y cambia con el paso del tiempo.

Una perspectiva intermedia es la de los constructivistas sociales. Esta postura no niega que para permitir el desarrollo de una conciencia étnica o de otro tipo, es necesario contar con algunas diferencias percibidas en la conducta, las costumbres, la ideología o la religión. A diferencia de la postura instrumentalista extrema, el énfasis fundamental radica en la configuración y la reconfiguración de las fronteras étnicas. Con sus “comunidades imaginadas” —un influyente y profundo análisis histórico de la formación del nacionalismo—, Benedict Anderson hizo que el estudio de los procesos constructivos avanzara. Dicho autor sostiene que estas comunidades políticas son “imaginada[s] porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993: 23). Su obra, al igual que la de muchos otros que le han seguido, promovió una agenda de análisis cuidadoso de cómo es que las comunidades culturales y políticas surgieron históricamente, en qué formas su significado cambió a lo largo del tiempo y por qué es que hoy tienen una fortaleza tan profunda. Al estudiar este tema, algunos investigadores prestaron un mayor énfasis a los procesos que reconfiguraron la identidad de un pueblo, por ejemplo los de modernización (Gellner 1983).

Sin embargo, hay más de una manera de vernos a nosotros mismos y a los grupos a los cuales pertenecemos. Formamos parte simultáneamente de diversas categorías, algo que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. La pregunta es por qué y cómo es que ciertas identidades fueron subrayadas a lo largo del tiempo e interactuaron con nuestra capacidad para expresar nuestra identidad de una forma u otra. En Latinoamérica, una rica bibliografía ha enfatizado el desarrollo de instituciones significativas reconfiguradoras de la identidad étnica, como el Estado colonial, los regímenes corporativistas autoritarios o la política educativa. Mallon (1995), De la Cadena (2000), García (2005) y Yashar (2005) son ejemplos sustanciales y exhaustivos de este tipo de estudio para Latinoamérica, y recurrimos bastante a estas fuentes.

Si bien desde esta postura parecería que la identidad es una cuestión de descubrimiento, de nuestra pertenencia a una u otra —y a menudo a más de una—, lo cierto es que las opciones y la formación de una identidad colectiva se encuentran

limitadas por su factibilidad. “Las restricciones pueden ser especialmente estrictas cuando se trata de definir hasta qué punto podemos persuadir a *los demás* de que somos diferentes de lo que afirman que somos” (Sen 2007: 58, cursivas en el original). En este sentido, una de las contribuciones más influyentes y tempranas del enfoque constructivista fue la de Barth (1963). Él subrayó la significación que la interacción grupal tiene para la construcción de fronteras. Las identidades grupales crecen en parte de las percepciones que tienen los individuos de su pertenencia e identificación con un grupo en particular; esto es, la percepción que tienen de sí mismos quienes están dentro del grupo. Pero las identidades colectivas también están determinadas por la percepción que tienen aquellos que se encuentran afuera del grupo y las percepciones que tienen estos de los ‘otros’. En un extremo, donde la categorización efectuada por otros es la fuente de las fronteras grupales, lo que la gente misma siente sobre su propia identidad podría no ser importante en absoluto: lo relevante es lo que otros piensan que ellos son.

En suma, en casi todos los casos hay cierta fluidez e incertidumbre en torno a unas fronteras grupales precisas, las cuales se desarrollan con el paso del tiempo, en respuesta a las circunstancias. Además, si bien las personas pueden elegir qué identidades son importantes para ellas, en lo que toca a los aspectos más duraderos de su identidad no son libres de optar por alguna, usando así la que resulte más conveniente en un momento dado. De este modo, si bien alguien puede elegir fácilmente cambiar de club social o abandonarlo por completo, no puede, en cambio, adaptar su identidad con tanta facilidad. En cualquier caso particular, la historia, el contexto y el poder de las instituciones que configuran y rigen la vida serán las que determinen las posibilidades. En el Perú actual, alguien que es de origen indígena puede elegir definirse a sí mismo como mestizo, pero aún no puede evitar del todo ser víctima del racismo de otros. Donde haya una libertad limitada para cambiar de grupo las fronteras resultan particularmente importantes en lo que toca a la creación de posibles agravios grupales y, por ende, en términos de la movilización política. Las distinciones y las fronteras tienen una importancia mucho menor cuando la gente puede cambiar de grupo en forma instantánea y sin costo alguno.

La etnicidad en el Perú

En el Perú, la mezcla racial y étnica se ha dado a escala significativa desde la época colonial, y la mayoría de la población en ciertas zonas —fundamentalmente en la costa— es de etnicidad mixta. Sin embargo, este “mestizaje” no eliminó la percepción de la existencia de unos rasgos culturales y raciales distintivos y organizados

jerárquicamente, ni tampoco impidió que se dieran prácticas discriminadoras sobre la base de dichos rasgos. La idea de que la emigración, el acceso a la educación y el aprendizaje del español crearon una cultura “mestiza” homogénea, en las ciudades en particular, y que solo quedan diferencias regionales y de clase, está asociada usualmente con otra noción errada: la población “indígena” solo existe en pequeño número, dispersa en la sierra y en la Amazonía “congelada en el tiempo”. Van Cott (1994) sostiene que esta imagen es falsa. Ningún pueblo indígena vive exactamente como lo hacían sus antepasados hace quinientos años, ni tampoco sus múltiples culturas se detuvieron en un tiempo y lugar. La población indígena peruana se ha transformado a sí misma según las oportunidades y las limitaciones con las cuales se topó, incorporando costumbres, tecnologías e ideas de una sociedad dominada por blancos y mestizos. Sostenemos aquí que la afirmación de que los pueblos indígenas dejan de ser tales cuando entran en contacto con la “civilización”, yace en el centro del tipo de discriminación que ha creado las barreras culturales y psicológicas que impiden que aquellas poblaciones se organicen políticamente siguiendo criterios étnicos. Este prejuicio es un mecanismo que a lo largo de los años fue construido, reproducido y consolidado en el Perú por las instituciones levantadas a su alrededor. Lo “indígena” es una identidad comunal en la sierra, pero ha cambiado en las ciudades del mismo modo en que cambia la gente de todas las culturas. En consonancia con una sólida corriente en las ciencias sociales peruanas, entendemos que la formación de la identidad es una construcción social que se da en el tiempo y en el espacio, y que por ende tiene una historia (Cánepa 1998 y 2008, De la Cadena 2000, García 2005).⁴

El enraizamiento de la desigualdad grupal

Para explicar el enraizamiento de la desigualdad grupal, este libro toma una observación simple pero a menudo olvidada: los mecanismos de reproducción de las desigualdades, las normas y valores que sostienen desigualdades particulares entre grupos, así como las oportunidades de organización y construcción de identidades políticas con que desafiar dichas desigualdades, fueron definidos, reproducidos y consolidados históricamente por las instituciones levantadas a su alrededor. Distinguimos instituciones de organizaciones (North 1990). Por ejemplo, en el lenguaje común, un banco parecería ser una institución, pero para North y buena parte de la bibliografía académica, aquel es una organización, en

4. Sobre este aspecto, recurrimos a una rica bibliografía sobre la historia del Perú: Flores-Galindo, 1986, 1985, 1976; Larson 2004; Stern 1998, 1993, 1987; Manrique 2002, 1988, 1981; Mallon 1995, 1992, 1983; Montoya 1998, 1992, 1989; Deere 1990; y Degregori 1990, entre otros.

tanto que las “prácticas bancarias” o “el sector bancario” serían la institución. North, asimismo, enfatizó que el papel de las normas, las creencias y costumbres, es decir, las instituciones informales, es tal vez más significativo y difícil de cambiar que el practicado por las instituciones formales (“el sector bancario”, por ejemplo). Encontramos que las instituciones, formales e informales cualquiera sea su tipo, son un elemento central en nuestra comprensión de la persistencia de la desigualdad y a menudo son las que cristalizan el “enraizamiento”. Lo que nos parece falta desarrollar en las preocupaciones que muchos economistas tienen con las instituciones es de qué manera estas cambian, así como la política que yace detrás de dicha evolución. Encontramos que para entender el fenómeno de la persistente desigualdad grupal debemos explorar esta última dimensión. En esto divergimos de la nueva economía institucional, en la cual los orígenes de las instituciones quedan explicados mayormente en sentido funcional.⁵

Otro tema importante es que este enraizamiento se da a lo largo del tiempo y del espacio. Es en este sentido que unas instituciones particulares quedan profundamente incrustadas en el transcurso de periodos significativos gracias a secuencias particulares de acontecimientos, sujetas a algún tipo de repetición en momentos de cambio, que producen lo que algunos investigadores han llamado un “proceso de formación de capas institucionales” —*process of institutional layering*— (Thelen 2003). Thelen usa el término *layering* para expresar que el cambio institucional es frecuentemente acumulativo, en “capas”. Las instituciones pueden modificarse de manera parcial, dejando elementos importantes como un legado sobre el cual nuevas reglas son construidas. En otras palabras, estas instituciones se hacen parte de la infraestructura a partir de la cual pueden levantarse otras instituciones menos fundacionales, como las grandes políticas públicas. Estas últimas representan extensiones sumamente sustanciales de la autoridad política, que alteran aún más los incentivos y los recursos de los actores (Pierson 2004) y, por lo tanto, el enraizamiento de la desigualdad o la probabilidad de su cuestionamiento. Nuestro enfoque histórico tiene como objetivo lograr que el desarrollo del enraizamiento a lo largo del tiempo quede lo más claro posible. De forma paralela, este enraizamiento se ve configurado por la relación existente entre lo nacional y lo local, con lo regional como nivel intermedio. Usamos los conceptos de “micro”, “meso” y “macro”, donde el primero es el ámbito de la familia o la comunidad, macro se refiere a la escala nacional y meso alude a lo que se encuentra entre ellos. En términos políticos, este último podría ser el gobierno

5. Para una exposición brillante de las tres versiones del “nuevo institucionalismo”, consúltese Hall y Taylor 1996. Ellos distinguen tres tipos de institucionalismo: histórico, de elección racional y sociológico, y consideran que las contribuciones se efectúan por medio de las tres perspectivas.

municipal o regional; mientras que en un plano económico podría tratarse de, por ejemplo, una agencia de desarrollo con sede regional o municipal, o de una política sectorial antes que nacional.

En lo que sigue, evaluaremos de qué manera esta desigualdad ha sido cuestionada, tanto desde arriba hacia abajo como también desde la base hacia arriba. Nos enfrentamos al hecho de que la etnicidad no ha sido un factor prominente en la movilización y el cambio, a pesar de los agravios reconocidos y el sentido de alienación como grupo. Nuestra aproximación a estas cuestiones enfatiza una vez más el proceso histórico —y cómo es que la politización de la identidad étnica queda delimitada en la historia del país. Hay un consenso cada vez mayor en que ni las divisiones étnicas de larga data ni tampoco el surgimiento de empresarios étnicos, capaces de manipular estos profundos sentimientos, bastan para explicar la movilización de los grupos indígenas. Para entender correctamente la politización de los pueblos indígenas, debemos considerar cuidadosamente en qué forma sus identidades y significados cambiaron en el transcurso del proceso de movilización política, así como los rasgos particulares del proceso de movilización en marcha. La bibliografía sobre los movimientos indígenas en América Latina (Yashar 2005, Van Cott 2000, 2005) ha subrayado que para facilitar dicha movilización, se requiere por lo general que se produzcan cambios favorables en la estructura de las oportunidades políticas. Esta bibliografía enfatiza además la construcción de redes y de organizaciones de base que puedan generar y sostener la acción colectiva. Los recursos para la movilización promueven una “red entrelazada de grupos”, que brinda el estímulo para la acción colectiva, algo que Olson consideraba era sumamente improbable (Tarrow 1994).⁶ Y, sin embargo, la identidad —y en particular la de tipo étnico— puede ser transformada y aguzada en el transcurso del proceso de movilización y debido a este. Dicha naturaleza endógena de la identidad étnica, así como su politización y movilización, le dan a los investigadores una tarea compleja. Entender la movilización desencadenada por la identidad étnica requiere prestar atención a los procesos colectivos de interpretación, accesibles a los pueblos indígenas en un contexto particular, e inventar y reinventar la identidad en un campo en el cual los dirigentes indígenas actúan al lado de otros, tanto aliados como oponentes (Bedford y Snow 2000, Gamson 1992).

La violencia y la movilización de los pueblos indígenas no se deben únicamente a la acción colectiva de los manifestantes. Dadas sus características, los grupos pueden terminar del lado receptor de la violencia. Los rasgos étnicos pueden ser lo suficientemente obvios como para que otros pongan la mira sobre los grupos

6. Esta bibliografía se encuentra profundamente influida por el enfoque que enfatiza las estructuras políticas de oportunidades para la movilización. Véanse Mc Adam, Tarrow y Tilly 2001; y Tarrow 1983.

directa o indirectamente, con consecuencias drásticas para ellos. Las identidades étnicas pueden ser prominentemente importantes o no: pueden ser mantenidas dentro de la esfera de la vida “privada”, pero sin repercusión (poca o ninguna) en el espacio público, ya sea en forma de acción colectiva, organización, opción política o movilización. Aun así, no es fácil prevenir la violencia étnica: Bolivia, el Perú, Ecuador, Guatemala y México son los cinco países latinoamericanos que cuentan con una población indígena sustancial, pero solo en los tres con una identidad étnica menos politizada se produjeron conflictos armados con un número desproporcionado de víctimas de origen indígena. Y el Perú es un caso emblemático de este último grupo.

Nuestra obra: el esquema del libro

Nuestra metodología es fundamentalmente histórica; bajo este marco, le damos un vigoroso énfasis a las instituciones. Será solo mediante una cuidadosa revisión histórica de la evolución de las instituciones que podremos mostrar cómo es que las tres dimensiones de los grupos —la discriminación, el espacio y la identidad— interactúan y se desarrollan con el paso del tiempo, relacionándose entre sí y también con los elementos más familiares de la historia de la economía peruana: el mercado internacional, la dependencia del capital extranjero y la debilidad del Estado (Thorp y Bertram 1978).

Sin embargo, al inicio tenemos tres importantes capítulos que presentan el escenario, en los cuales incluimos nuestros intentos de medición. No hay forma alguna de examinar las desigualdades grupales en el Perú sin primero considerar la etnicidad, esto es su fluidez, complejidad, prominencia y los prejuicios que ella evoca. Este es el tema del capítulo 2. En el siguiente capítulo intentamos demostrar la importancia cuantitativa de las desigualdades grupales, explorando su intensidad en términos socioeconómicos y políticos. El capítulo 4 lo dedicamos al mismo tema, pero lo desarrollamos con mayor profundidad en el área específica de la educación, la cual desempeña un papel clave en nuestro análisis del enraizamiento de las desigualdades. Nuestro estudio muestra por qué: la educación forma parte tanto del problema como de su solución. Esto tiene bastante que ver con los tres aspectos de los grupos —la discriminación, el espacio y la identidad—, y la mala calidad de la educación agrava los círculos viciosos.

El armazón empírico de los capítulos 2 al 4 comprende un trabajo de medición, en el que se usaron datos de encuestas de hogares y de censos; de una encuesta de percepciones de identidad que llevamos a cabo en 2005, junto con entrevistas de seguimiento con una muestra de los encuestados; y de casos de

estudios de comunidades efectuados en tres de los lugares donde se llevó a cabo la encuesta. La metodología seguida en la elaboración de las encuestas se explica en el apéndice del capítulo 2. Con respecto a las opiniones de particulares, se ha cambiado el nombre de la persona cuando lo hemos juzgado apropiado, para así proteger su privacidad. En cambio, se ha identificado con su nombre y cargo a las personas entrevistadas por su papel o su posición representativa. Los estudios de caso de las comunidades se emplean a lo largo del texto, pero se les describe con mayor detenimiento en el capítulo 8.

Los siguientes capítulos desarrollan la manera como las desigualdades horizontales se levantan y “enraízan” con el paso del tiempo. Seguimos este proceso cronológicamente. En el capítulo 5 veremos que ya en la Colonia las instituciones de discriminación y prejuicio, del mismo modo que el papel de la población indígena de la sierra como una fuente de mano de obra barata, se hallaban profundamente enraizadas y eran a la vez complementarias. Explicamos las formas particulares por medio de las cuales en el Perú la opresión fue dejando su huella y diezmando el liderazgo indígena, lo que tuvo implicaciones en el desarrollo político. Las ambigüedades de las relaciones existentes entre indígenas-cholos y blancos-mestizos estaban indicando la complejidad de la cultura de clientelaje, que ganaría más fuerza con el transcurso del tiempo. Con la Independencia, el eje de la economía se desplazó gradualmente de la sierra a la costa, en respuesta a las reglas del mercado internacional. El dominio político de Lima creció y la interacción de la economía y la política intervino para incrustar la desigualdad entre la costa y la sierra, con consecuencias en términos étnicos. Un efecto de este desplazamiento del eje económico y político fue que en la sierra las estructuras institucionales tradicionales perdurarían: en el transcurso del siglo XIX, la institución del *gamonalismo* —la hegemonía de los mediadores mestizos con raíces poderosas en la tierra—⁷ heredó las costumbres de la Colonia en términos del dominio, la explotación y el clientelismo. No faltaban fuerzas de lucha, pero la capacidad organizativa indígena era limitada y la reacción a las revueltas nativas fue punitiva. Los indígenas se hallaba sujetos ahora a una “doble desigualdad”: la estructura de poder local y la subordinación de la región a Lima y a la costa.

En el capítulo 6 mostramos cómo fue que esta doble desigualdad se hizo aún más profunda a medida que los últimos elementos de prosperidad de la sierra se iban extinguiendo. Exploraremos luego las soluciones de moda, en ese entonces, al “problema étnico” —la educación y la higiene—, y mostraremos de qué forma la primera en particular continuó siendo a la vez parte del problema como de la

7. En el capítulo 5 definimos y exploramos este concepto con mayor profundidad.

solución. Rastreamos el flujo y el reflujo del centralismo, el desarrollo de la interacción entre las desigualdades étnicas y regionales, y las implicancias que la migración tuvo en este contexto. Desde entonces, la diferenciación regional se vuelve significativa, lo cual hace que sea más difícil presentar una imagen nacional coherente.

El capítulo 7 se ocupa de la discontinuidad que representó el radical régimen militar liderado por Juan Velasco Alvarado luego del golpe de Estado de 1968, así como las oportunidades perdidas en las siguientes dos décadas. Mostraremos cómo el gobierno de Velasco abrió oportunidades para la movilización y la representación política, pero la reforma agraria creó conflictos y ayudó a abrirle la puerta a Sendero Luminoso. El papel de los partidos políticos, y los de la izquierda en particular, pasó a ser clave en la construcción de alianzas y organizaciones, despertando así grandes esperanzas a medida que la democracia otorgaba un lugar importante a estos partidos. Explicaremos cómo es que las características de dichas agrupaciones políticas limitaron el potencial de las mismas, y de la democracia en general, como canales pacíficos de cambio. Rastreamos así la interacción entre las desigualdades horizontales, la violencia política, la represión, la movilización política y el mal manejo económico del país.

En el capítulo 8, exploraremos la relación del régimen de Alberto Fujimori con el neoliberalismo, la represión política y el auge minero, lo que llevó las desigualdades de grupo a un nuevo nivel, debilitando no solo a los partidos políticos, sino también a los movimientos sociales como un todo, además de crear nuevas exclusiones. El capítulo 9 resume y presenta las conclusiones, reflexionando acerca de por qué el proceso histórico ha producido tan poco cuestionamiento de las desigualdades grupales por medio de una acción colectiva efectiva.

Decidimos cerrar nuestro análisis detallado con el fin del gobierno de Fujimori. Nos parecía que este marcaba un punto de discontinuidad, así como de cambio: lo sucedido desde el 2000 dio razones para tener esperanzas, tal como lo indicamos, pero también hubo fuertes elementos de continuidad, además de una incapacidad para enfrentar la profundidad de las acciones necesarias para los cambios. Nos pareció que era necesario que pasara más tiempo para que la historia de lo sucedido “después de Fujimori” se pudieran narrar con claridad. Sin embargo, el lector debe ser consciente de que nuestro trabajo de campo en el ámbito local se llevó a cabo en 2005: si nos hubiésemos topado con nuevos y sorprendentes elementos de cambio, ello podría muy bien haber invalidado nuestra decisión de detener el análisis en la fecha inicial. Habríamos tenido entonces que explorar las fuentes de la sorpresa. Desafortunadamente, no fue así: si bien a escala local nos encontramos con un gran número de dinámicas aparentemente nuevas, también vimos una serie lamentable de continuidades con la década anterior.

Nuestras disculpas: lo que este libro no es

Lamentamos profundamente que, dada la naturaleza ya de por sí masiva del libro, no haya sido posible incluir a los pueblos indígenas amazónicos en nuestro análisis. De igual modo, las cuestiones medioambientales solo fueron tratadas ligeramente, en lugar de recibir toda la atención que merecen. Y si bien creemos que el género es importante cuando se interpretan las desigualdades entre los grupos y su persistencia, no diseñamos nuestra investigación para que se concentrara en este aspecto en la forma que en retrospectiva habría sido de desear. Estas son tres áreas de futuras investigaciones sobre la génesis y la persistencia de la desigualdad que deseamos reconocer y colocar firmemente sobre la mesa.

Apéndice al capítulo 1: antecedentes sobre el Perú

Esta es una traducción del libro en inglés, y esperamos también pueda ser consultada afuera del Perú. Por dicha razón hemos incluido este apéndice, para una audiencia no familiarizada con el Perú. Presentamos aquí un mínimo de información para que tales personas puedan seguir el texto.

Los rasgos geográficos figuran prominentemente en nuestro análisis: estamos tratando de un país que comprende tres zonas, cada una de ellas sumamente distinta. La geografía básica se muestra en la figura A1. La angosta franja costera es fértil, pero solo con el riego. Los Andes —o la sierra— corren en tres grandes cadenas a lo largo del país, elevándose hasta una altura por encima de los seis mil metros. Allí vive alrededor del 40 por ciento de la población, gran parte de ella en un territorio inhóspito, aunque sumamente hermoso. Los depósitos minerales de la sierra son enormes y variados; la agricultura está mayormente vinculada con la crianza de ganado (vacas lecheras, camélidos, ovejas), y el transporte es el cuello de botella clave. El 61 por ciento del territorio peruano se encuentra al este, que es la cuenca amazónica; la región es tropical y cuenta con una población pequeña, de alrededor del 9 por ciento del total del país. La Amazonía tiene petróleo, gas y madera, y su población indígena está expuesta a grandes amenazas.

En cuanto a su estructura política básica, el Perú es un Estado unitario. Al momento de independizarse,⁸ la República del Perú estuvo inicialmente dividida

8. A pesar de que es ampliamente conocido el año 1821 como el inicio de las batallas de Independencia en el Perú, no fue sino hasta 1826 que el Perú consiguió su Independencia de España en la batalla de Ayacucho.

en ocho departamentos, que se fragmentaron en 18 en menos de medio siglo; actualmente son 25. Las provincias siguieron la misma tendencia, elevándose de cincuenta a cien unidades, y luego a casi doscientos hoy en día (Contreras 2002). En varias ocasiones, se procuró resolver esta proliferación de unidades territoriales creando regiones más grandes, pero los intentos fracasaron por las mismas razones que probablemente llevaron a la fragmentación: el deseo en el ámbito local de estar en la jerarquía política y administrativa, para así compartir los recursos del centro. De este modo, para 2002 se habían creado 25 “regiones” usando los límites de los departamentos anteriores. En realidad, estos 25 últimos siguen siendo la forma comúnmente usada de describir los aspectos regionales del Perú. En gran parte del examen que efectuamos en los capítulos subsiguientes, nos referiremos a la “sierra sur”, que comprende el área que concentra la población indígena más grande y está conformada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Puno, además de las sierras de Arequipa y Moquegua. También nos referiremos a la “sierra central”, que comprende las regiones de Huánuco, Pasco y Junín; y a la “sierra norte”, que incluye a Ancash, Cajamarca y Amazonas, así como las serranías de Piura y La Libertad.

El Perú fue formalmente una democracia desde su independencia, pero con varios periodos de gobiernos ilícitos, siendo los más importantes de estos regímenes el oncenio (1919-1930) de Augusto B. Leguía, el ochenio (1948-1956) del general Manuel A. Odría y el docenio de la dictadura que llegó a su fin en 1980, luego del golpe militar que protagonizara el general Velasco Alvarado en 1968. Los diez años posteriores a 1980 se caracterizaron por la democratización de las instituciones políticas, el sufragio universal, la competencia abierta y el florecimiento del sistema de partidos políticos, pero también por el estallido de la violencia política que hizo que el país viviera muchos años en estado de emergencia, además de dejar como saldo casi setenta mil muertos. En 1992, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso; sus años restantes de gobierno son considerados como una dictadura.

FIGURA 1.1
MAPA DEL PERÚ



Reproducido con permiso de Collins Bartholomew Maps.

LA COMPLEJIDAD Y LA PROMINENCIA DE LA IDENTIDAD ÉTNICA

El primer reto al reflexionar sobre la identidad —y la de tipo étnico en particular— es que está compuesta de múltiples dimensiones. En palabras de Amartya Sen, “la misma persona puede, por ejemplo, ser un ciudadano británico, de origen malayo con características raciales chinas, agente de bolsa no vegetariano, asmático, un lingüista y fisioculturista” (2006: 50). Y qué identidad importe más dependerá a menudo de la historia y del contexto de la persona. Podría también haber una diferencia entre la identidad que siento dentro de mí, la que otros me adscriben y aquella que estoy dispuesto a presentarle al mundo externo. Las identidades evolucionan, y el empleo que hacemos de la nuestra o de la de otros puede ser sumamente utilitaria. Las actitudes y prejuicios de la sociedad también pueden afectar tanto la forma en que nos vemos y cómo es que intentamos que los otros nos vean. La discriminación y el prejuicio son realidades difíciles de analizar y evaluar, precisamente porque a menudo se las niega.

En este capítulo, presentaremos primero nuestros hallazgos en torno a la identidad y la etnicidad. Nos concentraremos en la percepción que una persona tiene de su identidad y del papel que la etnicidad tiene en ella. En segundo lugar, exploraremos la discriminación y los prejuicios.

Identidad y etnicidad

Hemos explicado en el capítulo uno que este libro pertenece a un proyecto más amplio sobre la desigualdad. Si bien es cierto que un interés clave de este programa de investigación comparativo entre países es la desigualdad definida

culturalmente —y la étnica en particular—, no podíamos asumir acríticamente que en el caso peruano la identidad étnica es sobresaliente. Para echar luz sobre esta cuestión, así como para brindar una base para la comparación con otros estudios del proyecto, llevamos a cabo una encuesta de cómo es que las personas se ven a sí mismas, su etnicidad y la importancia que esta en general tiene en el país. La encuesta fue aplicada en tres lugares, interrogándose a unos doscientos informantes en cada uno de ellos. La metodología se describe detalladamente en el apéndice de este capítulo. Los dos lugares en la sierra en los cuales se aplicó la encuesta tenían distintas experiencias con la identidad indígena: Huanta en Ayacucho y Bambamarca en Cajamarca.¹ En ambos sitios, llevamos a cabo entrevistas en áreas rurales y urbanas. Elegimos también un tercer lugar, San Juan de Lurigancho. Este grupo está conformado por migrantes y personas desplazadas de Ayacucho a dos barrios: Huanta Uno y Huanta Dos, de San Juan de Lurigancho. No intentábamos alcanzar ninguna representatividad a escala nacional.² Nos concentramos en entender cómo es que los peruanos perciben su identidad, etnicidad y experiencias de vida en comunidades con distinto grado de estatus periférico (fuera de las ciudades capitales de departamentos), y no pretendimos abarcar toda la gama de la población del país. Puesto que nuestra encuesta no aspiraba a ser representativa nacionalmente, nuestros resultados solo pueden ser tomados como sugerentes para cualquier ámbito por encima de la escala local que estudiamos.

No encontramos ninguna fórmula fácil con que resolver los problemas causados por la complejidad de nuestro tema. Sabemos que dada la discriminación y una historia de opresión, la forma en que los peruanos hablan acerca de su identidad, y en particular la de tipo étnico, jamás es directa, y, por ende, que el formato del cuestionario presenta severas limitaciones. Sin embargo, lo que sí hicimos, y que resultó ser bastante gratificante, fue llevar a cabo entrevistas de seguimiento a profundidad con una muestra (5 por ciento) de la población encuestada. Presentaremos a continuación los principales resultados que deseamos resaltar acá; los exámenes más completos están disponibles bajo el formato de documentos de trabajo (Sulmont 2009, Paredes 2007). Como explicamos ya en el capítulo anterior, hemos cambiado los nombres de las personas entrevistadas, pero los funcionarios públicos y otras personas con roles semioficiales o representativos sí figuran con su propio nombre, además de indicarse su cargo.

-
1. Como se explica en el apéndice, la experiencia de la violencia también fue considerada un criterio, dimensión esta a la que volveremos en el capítulo 7.
 2. Estudios que han intentado estimar la proporción de la población indígena en el Perú son UNDP 2005, Trivelli 2005, y Carrión y Zárate 2006. Los tres usan distintos indicadores étnicos y llegan a resultados distintos. Para un examen más cabal de la cuestión del estimado, véase el capítulo 3.

En primer lugar, pedimos a todos los informantes que nos dijeran qué tres características de una lista que se les presentaba eran las más importantes a la hora de definir “su identidad como persona”. Los resultados aparecen en el cuadro 2.1. Los encuestados abrumadoramente indicaron que las más relevantes eran “ser hombre/mujer” y su ocupación. Pero es claro que la etnicidad está ahí: los tres indicadores étnicos superpuestos en la lista —el lugar de nacimiento, la lengua materna y el origen racial— daban cuenta entre ellos de una tercera parte de las menciones, más que ningún otro; y de incluir el lugar de residencia, abarcarían prácticamente tantas como el género y la ocupación juntos. Confiamos por ello en que la etnicidad de la gente sí figura vigorosamente entre las múltiples dimensiones de su identidad. Esto quedó confirmado con las entrevistas de seguimiento, cuando una identidad regional/étnica siempre resultó ser importante en el marco de una conversación más abierta. Para quienes nacieron en la sierra, “andino” o “serrano”, *así como* indígena, eran formas comunes de expresión.

CUADRO 2.1

IMPORTANCIA DE DIVERSOS ELEMENTOS EN LA IDENTIDAD
DE LOS INFORMANTES^a

(PORCENTAJE QUE MENCIONÓ CADA ELEMENTO)

	Total encuesta	Huanta (Ayacucho)	Bambamarca (Cajamarca)	San Juan de Lurigancho (Lima)
Género	69,4	65,7	72,1	70,6
Trabajo u ocupación	52,4	38,5	62,7	56,7
Lugar de nacimiento	39,3	53,5	31,3	32,3
Lengua materna	36,1	49,8	26,4	31,3
Religión	32,7	30,5	36,8	30,8
Orígenes raciales	21,3	25,8	15,9	21,9
Lugar de residencia	18,0	18,3	19,9	15,9
Ideas políticas	13,7	11,3	10,9	18,9
Pertenencia a una organización	6,3	1,4	10,4	7,5
Otro	1,3	0,0	2,0	2,0
No disponible	4,6	3,3	4,0	6,5

Fuente: Sulmont, 2010, sobre la base de la encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

Nota: ^a Se solicitó a los informantes que enumeraran los tres más importantes para ellos.

La encuesta preguntó entonces acerca de la identidad en términos del origen étnico, usando la procedencia racial o cultural como una variable sustituta de la etnicidad.³ El resultado de esta autoidentificación fue el siguiente: 18 por ciento se consideró indígena/andino (N = 108), 9 por ciento blanco (N = 54), 18 por ciento cholo (N = 108) y 54 por ciento mestizo (N = 330).⁴ No incluimos en el análisis a la pequeña proporción de personas que se identificaron a sí mismas como negras, chinas/japonesas y amazónicas (N = 15).⁵ Recordamos al lector que estas proporciones solamente son aplicables a nuestra propia muestra y que no pueden extrapolarse al país en general.

El análisis de la autoclasificación étnica en las localidades que se han mencionado da como resultado las diferencias que eran de esperar. Huanta en Ayacucho y San Juan de Lurigancho en Lima muestran mayor diferenciación étnica que Bambamarca en Cajamarca. La figura 2.1 expone la distribución de cada grupo étnico prominente en los tres casos. Los que se identifican a sí mismos como blancos son un grupo pequeño, incluso en Bambamarca, y la categoría de cholo fue elegida en mayor proporción en el barrio migrante de San Juan de Lurigancho. En Bambamarca, la autopercepción apuntó mayormente a la variable de mestizo, en tanto que Huanta y San Juan de Lurigancho son más diferenciados.

El análisis de la lengua muestra que alrededor de la mitad de nuestra muestra habla quechua. En promedio, los blancos tienen el menor porcentaje de quechua-hablantes (28 por ciento), seguidos por los mestizos (38 por ciento), cholos (53 por ciento) e indígenas (76 por ciento). Lo revelador es la presencia de quechua-hablantes en todas las categorías étnicas autodefinidas en Ayacucho y Lima. No se habla dicho idioma en Bambamarca. Una gran mayoría en Huanta (96 por ciento) dijo hablar quechua, lo que incluye a quienes se definieron a sí mismos como blancos o mestizos (100 y 95 por ciento, respectivamente). Con respecto a San Juan de Lurigancho, en Lima, nuestro caso más heterogéneo, el 41 por ciento hablaba quechua, y si bien el porcentaje de blancos y mestizos que empleaba dicha lengua (25

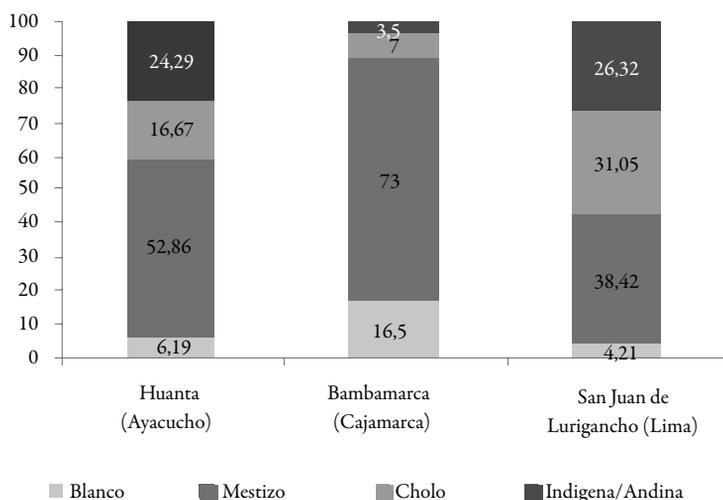
3. Se empleó una tarjeta que presentaba opciones, puesto que en la sociedad peruana los conceptos de etnicidad y raza han sido duramente censurados, y continúan siéndolo. La pregunta era como sigue: "Muchas personas creen que los grupos raciales o culturales que viven en el Perú son los siguientes: (1) indígena/andino, (2) amazónico, (3) negros o zambos, (4) blancos, (5) cholos, (6) mestizos, (7) chinos o japoneses y (8) otros. Usando esta lista, si tuviese que definir a cuál de estos grupos pertenece, ¿cuál sería éste?"

4. Por motivos de simplicidad, en el transcurso del análisis denominaremos a estos cuatro grupos de esta manera: blanco, mestizo, cholo e indígena.

5. Esta pequeña proporción era de esperar, dados los lugares en que se focalizó la muestra de la encuesta del CRISE.

FIGURA 2.1

== DISTRIBUCIÓN DE CADA GRUPO ÉTNICO PROMINENTE EN LAS TRES LOCALIDADES ==
(PORCENTAJES)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

y 28 por ciento, respectivamente) es significativamente menor que el de los cholos e indígenas (41 y 62 por ciento, respectivamente), los quechuahablantes figuraban en todas las categorías.⁶ Por ello, la lengua no parecería ser útil para distinguir las relaciones de poder y las desigualdades socioeconómicas subsiguientes entre distintos grupos étnicos, por ejemplo entre mestizos e indígenas. Es importante recordar que hace no más de 35 años, y durante varios siglos antes de ello, el uso de ambas lenguas (español y quechua o aimara) era una fuente de poder importante para los gamonales⁷ (mestizos o blancos), puesto que pocos indígenas hablaban español. El uso de los dos idiomas permitía a los hacendados de la sierra convertirse en los principales intermediarios entre los grupos indígenas marginados y las autoridades centrales (De la Cadena 2000, Bourricaud 1970, Cotler 1970).

6. Esto respalda nuestra afirmación anterior de que en el Perú la lengua no es un buen indicador étnico. Para examinar este resultado aún más, analizamos la Encuesta Nacional de Hogares 2001 (ENAH0), la cual pregunta acerca de la identidad étnica: nos encontramos con que en aquellas regiones en donde una lengua indígena predomina, esta será hablada tanto por aquellos que se definen a sí mismos como indígenas como por los que no lo hacen.

7. Terrateniente explotador, por lo general de la sierra.

Esto nos ayuda a entender por qué razón en la encuesta es más probable que una persona que habla quechua y vive en San Juan de Lurigancho (en Lima) se presente a sí misma como cholo o indígena a que lo haga un quechuahablante de Huanta, en Ayacucho (71 por ciento *vs.* 41 por ciento). Esta diferencia es sumamente considerable y crece ligeramente si restringimos el análisis a aquellos que reportaron el quechua como su primera lengua (80 por ciento *vs.* 46 por ciento). El conocimiento del mencionado idioma puede ser un rasgo étnico en Lima, pero no en Ayacucho.

Sostendremos luego que el lugar de nacimiento nos brinda el mejor indicador étnico a escala nacional, no obstante lo cual sigue siendo imperfecto. No es posible efectuar una buena comparación en el ámbito de nuestra propia encuesta, puesto que elegimos deliberadamente dos lugares en la sierra y uno en la ciudad con una alta población inmigrante.

Sin embargo, sí conseguimos una interesante observación a partir de la encuesta. Nuestros casos muestran que las personas nacidas en pequeños poblados “periféricos” (afuera de Lima y de las capitales de las regiones) tienden a definirse de distinto modo dependiendo de la localidad en la que hoy viven. Entre aquellos que nacieron en la “periferia”, es más probable que los que actualmente residen en Lima se perciban a sí mismos como cholos o indígenas (63 por ciento) que quienes viven hoy en día en Ayacucho (43 por ciento). Casi nadie se percibía a sí mismo de este modo en Cajamarca (solamente el 9 por ciento).

De esta manera, vemos ya cuán importante es la experiencia de la migración para la forma en la que la gente se define a sí misma. Esto queda reforzado cuando exploramos la importancia del color de la piel. Usamos una escala del 1 al 7, donde 1 es el color indígena (*cobrizo*)⁸ y 7 es blanco.⁹ En promedio, los blancos se consideran a sí mismos más claros que los mestizos (5,4 *vs.* 3,7). Los cholos se sienten casi idénticos a los mestizos respecto del color de piel (3,6), pero se consideran más claros que los indígenas (2,6). Y las percepciones referidas a dicho color varían entre los grupos étnicos dependiendo de dónde residan actualmente. Los blancos que viven en San Juan de Lurigancho tienden a sentirse más oscuros que los que lo hacen en Bambamarca y Huanta. En cambio, los indígenas y cholos que residen actualmente en este último lugar tienden a sentirse más oscuros que los que habitan en Lima. Las excepciones fueron los cholos e indígenas de Bambamarca. Los mestizos no muestran diferencias: en los tres lugares, ellos se sienten en el medio de la escala del color de la piel (cuadro 2.2).

8. “Cobrizo” es un término común que alude al color de la piel de la población indígena. Literalmente quiere decir: “del color del cobre”.

9. Esta pregunta tuvo como base la metodología empleada en Ñopo et ál., 2004.

CUADRO 2.2

PROMEDIO DE PERCEPCIÓN DEL COLOR DE LA PIEL EN LOCALIDADES

(COBRIZO = 1; BLANCO = 7)

Identidad étnica	Huanta (Ayacucho)	Bambamarca (Cajamarca)	San Juan de Lurigancho (Lima)
Blanco ^a	5,3	5,6	4,9
Mestizo ^a	3,4	4,0	3,9
Cholo ^a	2,8	4,1	4,1
Indígena/andino	2,1	3,9	3,0
Total	210	200	190

Fuente: Encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

^a Las diferencias son significativas al nivel del 95 por ciento.

Al evaluar las variables de la lengua, el color de la piel y el lugar de nacimiento, nuestra primera conclusión es que migrar a Lima o vivir en ella eleva la autoconciencia de los rasgos étnicos. Esto quedó confirmado con nuestras entrevistas: las personas que residían en la capital o los peruanos “cosmopolitas”¹⁰ describieron cómo surgían nuevos elementos identificadores y rasgos étnicos en Lima, o se les recreaba. Un buen ejemplo de ello es Simón Barreto, un hombre de 35 años proveniente de Bambamarca, que se considera cholo. Él nos dijo que jamás se había pensado de este modo a sí mismo cuando era joven. Al llegar a San Juan de Lurigancho por primera vez, a los 15 años de edad, oyó que las personas le decían cholo o serrano. También tomó conciencia de este asunto al observar que en un ómnibus público la gente discriminó a una mujer que tenía la vestimenta indígena tradicional llamándola “serrana” y “chola”, “quejándose además de que olía a llama”.¹¹

10. El vocablo “cosmopolita” por lo general describe un entorno en el cual coexisten muchas culturas de todo el mundo, o una persona cuyo bagaje e identidad cultural proviene de muchas culturas distintas. Su significado se superpone en cierta medida con el de ciudadanos del mundo, lo que implica la identificación con una comunidad mundial antes que con una nación o pueblo en particular. En el Perú, el término cosmopolita alude a una persona que se identifica con distintos espacios y culturas del país. Él o ella habrá viajado a otras regiones a trabajar, a Lima inclusive; habrá interactuado con gente de otras regiones y se habrá mudado de su pequeña provincia a las ciudades más grandes, o habrá retornado a su pueblo de nacimiento.

11. Entrevista con Simón Barreto, Bambamarca, 22 de junio de 2006.

Otro ejemplo interesante nos muestra que la Lima de clase media puede representar un mayor grado de “blancura”, incluso para los blancos o mestizos que residen en la comunidad migrante de San Juan de Lurigancho. Florencia, una mujer que se considera a sí misma blanca, vive en un barrio que es fundamentalmente cholo en Lima, pero trabaja en el acomodado distrito residencial de San Isidro. Ella observó diferencias entre su “blancura” y la de sus colegas en este último lugar: al hablar acerca de su centro de trabajo, ella se ve a sí misma como “solo clara” en lugar de “blanca” (la palabra que usó al compararse con sus vecinos), en tanto que sus colegas son “blancos”; ella describe a su jefe como “alto, blanco y de cabellos rubios”.¹² Resulta razonable que en una sociedad mayormente diferenciada, donde vive la mayoría de los blancos (los más ricos y educados), cuanto más profundo sea el contraste, tanto más fuerte será la conciencia que las personas tendrán de sus propios rasgos étnicos y de la forma en que otros las ven.

Así como la emigración a Lima pasa a ser una experiencia clave, con la cual se recrean y renuevan las percepciones de los rasgos étnicos, las entrevistas también ayudan a profundizar nuestra comprensión de cómo es que la geografía y el color de la piel desempeñan un papel importante en la redefinición de la identidad étnica, más que elementos tales como la lengua. La “sierra” pasa a ser el “lugar de origen” común, en el cual tanto indígenas como cholos encuentran las raíces de su identidad étnica: “venimos de la sierra”. Algunos consideran que las categorías indígena, “serrano” y cholo son lo mismo precisamente porque comparten este “origen geográfico”. Sin embargo, ciertos indígenas prefieren subrayar las diferencias, sugiriendo cierto grado de superioridad del serrano sobre el cholo. Aunque el primer término también se usa para humillar e insultar, como veremos más adelante, los cholos parecen ser más conscientes de sus rasgos étnicos y de ser objeto de desdén debido a ellos. Tienden, empero, a manifestar un orgullo especial en haber superado dichas humillaciones, en particular si han vivido un largo tiempo en Lima y han alcanzado cierta educación.

Salvo por contadas excepciones,¹³ los mestizos y blancos no mencionaron su origen serrano en las entrevistas, y la mayoría explicó sus categorías autodefinidas aludiendo al color de su piel (mixto, “morenito”). Planas y Valdivia llevaron a cabo un número significativo de *focus groups* en Lima y el Cuzco, y tuvieron un resultado similar. Lo mestizo denota la mezcla de razas, fundamentalmente la blanca y la indígena (2007: 77). En el Cuzco, el mestizo tiende a estar asociado con lo “criollo” como su manifestación cultural (2007: 78).

12. Entrevista con Fátima Aguirre, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

13. Entrevista con Beatriz Calderón, Huanta, 27 de junio de 2006.

Todas estas categorías culturales y raciales son complejas “construcciones” sociales, y la encuesta y las entrevistas nos obligan a enfrentar su naturaleza subjetiva y específica a un contexto. Los procesos de larga duración, como el mestizaje y la emigración, así como sucesivas prácticas discriminatorias a lo largo de la historia, han tenido un profundo impacto sobre la tortuosa manera en que se construyó, cuestionó y reconstruyó la identidad étnica, y, en consecuencia, ella no solo se ha vuelto fluida, sino además ambivalente y difícil de captar. Esto recuerda el sobresaliente trabajo que Marisol de la Cadena hiciera sobre este tema. Aunque ella solamente estudió una zona limitada de la sierra del Cuzco, sus resultados resuenan en todo lo que hallamos en nuestros distintos contextos. Ella encontró la frase clave: “en proceso”. Al urbanizarse, la gente se desplaza en el espectro indígena-cholo-mestizo, y —algo importante— De la Cadena halló que las mujeres se mueven con mayor lentitud que los varones. En la comunidad de Chitapampa —nos dice la autora—, cuando le preguntaba a un habitante su estatus étnico o el de otro aldeano, una respuesta común era que “no es ni uno ni otro, sino que está “en proceso”” (2000). La historia que yace detrás de esto es retomada en el capítulo 5.

Dados estos resultados, no parece útil intentar forzar una conexión entre las actuales identidades étnicas de las personas y sus “orígenes ancestrales”. Tampoco parece que sea correcto pensar que el único resultado del mestizaje ha sido una homogeneización y la desaparición de los rasgos étnicos en un *melting pot*, donde solo importarían las diferencias de clase. Parece aún más erróneo considerar que la gente ya no percibe las diferencias étnicas y que no crea nuevas divisiones de este tipo. Movidos por estas conclusiones, así como por los ricos testimonios que reunimos en nuestros tres casos, intentaremos explorar en la siguiente sección cómo es que la identidad étnica se expresa en Huanta, Bambamarca y San Juan de Lurigancho. Deseamos entender, en particular, qué papel tiene el prejuicio en la forma en que las personas establecen las diferenciaciones étnicas o sienten que son clasificadas por otros. Las identidades de grupo se deben en parte a las *propias* percepciones que la gente tiene de su pertenencia a un grupo particular y de su identificación con el mismo, esto es la autopercepción de quienes se encuentran *dentro* del grupo. Pero al mismo tiempo, las identidades de grupo también se encuentran determinadas por las percepciones que tienen *quienes se hallan fuera de él*. En ocasiones, la categorización efectuada estos últimos puede resultar ser la fuente principal de las fronteras del grupo, y en un caso extremo lo que las personas sienten acerca de su propia identidad podría no ser importante en absoluto: lo relevante es lo que otros piensan que estos son.

El prejuicio en contra de cholos e indígenas

Como ya indicamos, la teoría de la autocategorización subraya la importancia que la interacción entre miembros del mismo grupo étnico, así como las percepciones de otros tienen para la construcción de la identidad *dentro del grupo* y, lo que es muy relevante, cómo la relación que una persona puede establecer con el mundo externo queda determinada, en parte, por la evaluación que ella hace de cómo es que los demás la ven (Barth 1969).¹⁴ Muchos de los estudios de caso que examinan el fenómeno de la identidad étnica en Latinoamérica y el Perú llegaron a la misma conclusión.¹⁵ Por dichas razones, nos parece que es particularmente importante estudiar de qué manera los prejuicios étnicos operan en el Perú, al mismo tiempo que nos recordamos repetidas veces, a nosotras mismas y a los lectores, que nuestros materiales en modo alguno son representativos de todo el país. Nuestra muestra de personas blancas, en particular, es pequeña y quedó limitada a un sector más bien humilde del Perú. No exploramos las actitudes “blancas” en Lima.

El prejuicio queda definido como una actitud hostil para con un grupo, que se basa en creencias falsas, simplistas, exageradamente generalizadas o inconscientes. Se le puede sentir o expresar, o puede dirigirse contra un grupo como un todo o hacia una persona en particular porque forma parte de dicho colectivo (Allport 1954). Según esta definición, los prejuicios tienen dos ingredientes esenciales. En primer lugar, debe haber una actitud respecto de las características de un grupo. En segundo lugar, los prejuicios deben estar relacionados con una creencia muy general acerca del mismo colectivo. Un buen ejemplo de estos dos elementos figura en algunos de los resultados de las encuestas. El 45 por ciento de las personas que no podían aceptar ni que su hija o hermana contrajera matrimonio con un cholo o un indígena, ni tampoco votar por uno de ellos que postulara al Congreso, ejemplifica el factor de la actitud. El 48 por ciento que colocaba a los grupos cholo e indígena en el nivel inferior de una escala de comportamiento que iba desde lo violento (1) a lo pacífico (7), ejemplifica el factor de las creencias.

En nuestra vida cotidiana, tendemos muchas veces a generalizar en exceso o a formarnos opiniones erradas, pero no todas estas simplificaciones se convierten

14. Como se ha indicado, la imposición o presión del exterior en la autodefinición o autocategorización de la identidad social ha sido mayormente estudiada por la psicología social. Véanse los extensos trabajos de Hogg, en particular los que efectuara con McGarty (1990) y con Abrams (1988). Estos estudios rara vez han interactuado con explicaciones macropolíticas de la etnicidad. Green y Seher (2003), así como Brubaker, Loveman y Stamatov (2004) son esfuerzos en este sentido.

15. En el Perú, Portocarrero (1993), Méndez (1996) y De la Cadena (2000) han realizado trabajos interesantes en este sentido.

en prejuicios. Por ejemplo, evitamos insectos con los que no estamos familiarizados, pero luego de recibir una explicación adecuada somos capaces de distinguir cuáles son los peligrosos. Sin embargo, los prejuicios existen cuando no somos capaces de rectificar nuestras opiniones a la luz de nueva información y nuestras creencias se resisten a todas las evidencias en contrario (Allport 1954). Tales prejuicios tienen el poder de organizar los propios sentimientos y creencias (Balibar 1988).¹⁶ Florencia nos dijo que su madre se opone a su relación con un hombre al cual ella considera un cholo: su madre le dijo que los “cholos son malos, ellos abusan de las mujeres y son borrachos”. La joven, que durante unos cuatro años ha mantenido su relación con mucha dificultad, le presentó a su enamorado para que “ella pueda ver que él no es un cholo, [sino que] es una buena persona que quiere lo mejor para mí”, “pero mi madre no cambia su opinión de él, a ella simplemente no le agrada”.¹⁷

En las subsiguientes partes de esta sección, analizaremos los prejuicios existentes en contra de cholos e indígenas, recurriendo tanto a la encuesta como a las entrevistas. Después de presentar los resultados de la primera, pasaremos a las entrevistas para intentar explicar cómo es que las personas toman conciencia de que son objeto de prejuicios, particularmente en Lima; cuán fuertes parecen ser los prejuicios en contra de los serranos y de los campesinos indígenas en Huanta y Bambamarca; y de qué manera las personas responden a dichas opiniones.

Evidencias de prejuicios procedentes de la encuesta

Los resultados de la encuesta son interesantes en términos de las actitudes que se tienen con respecto a las personas cholas e indígenas. Para analizar los prejuicios, usaremos tres preguntas de la encuesta: 1) ¿aceptaría que su hija o hermana se case con un cholo o un indígena?; 2) ¿votaría usted por un cholo o un indígena que postulara al Congreso?; y 3) ¿dónde colocaría a personas de ambos grupos en una escala de violento (1) a pacífico (7)?

La primera pregunta contiene una ambigüedad, puesto que un padre indígena podría buscar una movilidad ascendente para su hija y por ende discrepar,

16. Los prejuicios se entienden como estructuras que contienen conocimientos, creencias y expectativas referidos a grupos sociales que se encuentran profundamente arraigadas en el proceso cognitivo ordinario de las personas y grupos. Su contenido es, por ello, sumamente variable entre entornos culturales, a lo largo del tiempo y entre grupos. Para un cuadro global de la bibliografía psicológica de los estereotipos, consúltese a Hamilton y Sherman (1994).

17. Entrevista con Fátima Aguirre, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

pero no por prejuicios. Por dicha razón, prestamos particular atención a las respuestas dadas por blancos y mestizos en las tres localidades que estudiamos.¹⁸ Se trata de afirmaciones sumamente fuertes; y si bien esperábamos que las personas respondieran abrumadoramente de forma “políticamente correcta”, nos encontramos con que una quinta parte de los blancos y mestizos de nuestra muestra no estaría de acuerdo con un matrimonio entre su hija o hermana con un cholo o indígena (16 por ciento). En cambio, en indígenas y cholos la cantidad de aquellos que discrepan ronda el 10 por ciento, lo que posiblemente refleja aspiraciones sociales. La educación no hace diferencia alguna, pero sí la edad y el género. El porcentaje de mujeres en la muestra que discrepan es el doble que el de los varones (20 por ciento *vs.* 10 por ciento), y la discrepancia se incrementa con la edad: 10 por ciento en el grupo de edad de 18 a 25 años, 15 por ciento en el de 26 a 40; y 20 por ciento en el de 40 a 70 años, contando varones y mujeres.

Con la segunda pregunta queda de manifiesto un mayor prejuicio. Alrededor de una de cada tres personas de la muestra no votaría por un cholo o indígena que postulara al Congreso (38 por ciento). El porcentaje de blancos y mestizos que no lo haría es el más grande (43 por ciento), pero el de cholos e indígenas que sienten lo mismo también es significativo (29 por ciento). La oposición disminuye ligeramente con la educación: el 50 por ciento de los que tienen menos de educación secundaria no votarían así, y el 31 por ciento de quienes tienen más de este nivel no lo harían. Asimismo, la oposición decrece entre aquellos que viven en San Juan de Lurigancho (47 por ciento en Huanta y 45 en Bambamarca, contra 19 en San Juan de Lurigancho). No hubo ninguna diferencia de opinión entre hombres y mujeres, pero la disposición a votar por indígenas y cholos disminuye entre los encuestados de mayor edad.

Si consideramos ambas preguntas juntas para analizar los prejuicios, el 46 por ciento de las personas de nuestra muestra tiene algún tipo de prejuicio en contra de cholos e indígenas. Los blancos (54 por ciento) y mestizos (52 por ciento) en estas tres localidades tienden a ser más prejuiciosos que indígenas (39 por ciento) y cholos (30 por ciento). Nótese que las actitudes de blancos y mestizos son bastante similares. Entre cholos e indígenas, estos últimos tienden a ser más prejuiciosos acerca de los primeros que viceversa (30 por ciento *vs.* 22). Indígenas y cholos manifiestan tener prejuicios en contra de su propio colectivo en igual proporción (17 por ciento). El porcentaje de personas con un prejuicio global en contra de mestizos y blancos es muy inferior (25 por ciento).

18. Debemos recordar que la proporción de blancos en la muestra es muy pequeña; por dicha razón, presentamos los resultados combinando a blancos y mestizos en las tres provincias.

Los prejuicios también se manifiestan claramente en la tercera pregunta, relacionada con las asociaciones existentes entre ser cholo e indígena y la violencia. La proporción de personas que creen que ambos son violentos es de 48 por ciento. Los blancos (62 por ciento) y mestizos (53 por ciento) tienden a ser más prejuiciosos que cholos (38 por ciento) e indígenas (37 por ciento) en lo que toca a este tema. La educación y el género no establecen ninguna diferencia, pero sí la edad: el prejuicio es mayor a medida que la edad aumenta.

El cuadro 2.3 muestra el perfil de aquellos que manifestaron prejuicios en contra de cholos e indígenas en al menos una de las tres preguntas: matrimonio, voto y violencia. El porcentaje de las personas prejuiciosas es mayor en Bambamarca y Huanta que en Lima, y los prejuicios asimismo predominan más entre las personas mayores que en los jóvenes, y entre las mujeres más que en los varones. La educación, de manera sorpresiva, no marca una diferencia significativa, punto este al cual volveremos posteriormente.

Víctimas del prejuicio

En las entrevistas preguntamos a las personas por qué razón no aceptarían que su hija o hermana contrajera matrimonio con un cholo o un indígena, y por qué no votarían por alguien que perteneciera a cualquiera de estos grupos. La gente no parecía estar cómoda con este tipo de pregunta. La única persona dispuesta a explicarlo fue Elvira Macedo, una mestiza de 27 años, quien nos dijo que su abuelo le había aconsejado que jamás permitiera que nadie la humillara por serlo y que debía comer “carne roja” para hacer que sus mejillas se sonrosaran más. Ella está casada con un cholo que es un “buen hombre”, pero quisiera alguien “mejor” para su hija: un “limeño”, nos dijo. Le preguntamos la diferencia existente entre un limeño y un cholo, y nos explicó que el primero es una mezcla del color de la piel y el lugar de origen.¹⁹

Si bien no podemos ocuparnos de estas preguntas directamente a partir de las encuestas, sí se puede advertir que nuestros encuestados parecían ser sumamente conscientes de las creencias negativas asociadas a las categorías de cholo y serrano. Tomando en cuenta sus respuestas, queda claro que esta conciencia se debe a experiencias negativas, ya fueran vividas por ellos o simplemente vistas.²⁰ En

19. Entrevista con Elvira Macedo, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

20. Entrevistas realizadas en el mes de junio de 2006 a Marco Balbín (el 20), Pablo Cavero (el 21), Simón Barreto (el 22) y Jorge Pajuelo (el 22), las cuatro en Bambamarca; a Beatriz Calderón (el 27), Jacinta Cáceres (el 27), Eliana Cabrera (el 28) y Soledad Tello (el 28), las cuatro en Huanta; y a Julio Aguilar (el 15), Agustín Carrasco (el 17) e Hildebrando Vargas (el 19), las tres en San Juan de Lurigancho.

CUADRO 2.3

==PREJUICIOS EN CONTRA DE INDÍGENAS Y CHOLOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES ==
(PORCENTAJES)

	Manifiestan prejuicios	Sostienen no tener prejuicio alguno	Cifras totales y absolutas
Lugar*			
Huanta (Ayacucho)	28,0	72,0	210
Bambamarca (Cajamarca)	23,0	77,0	200
San Juan de Lurigancho (Lima)	42,0	58,0	190
Grupo de edad			
- Entre 18 y 25	38,0	62,1	195
- Entre 26 y 40	30,4	69,6	207
- Entre 40 y 70	24,8	75,2	198
Género*			
- Varón	33,9	66,1	317
- Mujer	28,4	71,6	283
Educación*			
- Sin educación formal	33,3	66,7	36
- Primaria completa	23,2	76,8	164
- Secundaria completa	35,2	64,8	239
- Calificación postsecundaria	32,3	67,7	161
Etnicidad*			
- Blanco	14,8	85,2	54
- Mestizo	24,8	75,2	330
- Cholo	47,2	52,8	108
- Indígena	41,7	58,3	108
Color de la piel			
Media de la escala: 1(indígena)- 7(blanco)	3,0	4,0	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

* Las diferencias son significativas al nivel del 95 por ciento.

algunas ocasiones, han sido excluidos de ciertos círculos. Marco, de Bambamarca, quien viajó a Lima a estudiar, nos dijo:

[...] los hijos de bien jamás se unían al grupo de los provincianos, serranos o cholos [...] había un comportamiento escondido [...] la gente de la sierra se ve más agresiva pero es porque están a la defensiva, no se quedan callados. Me parece que eso es porque se sienten rechazados. No lo dicen, pero un serrano lo siente.²¹

Harold, que es de Huanta y se encontraba estudiando en la capital, señaló:

[...] en el Conservatorio hay un grupo de amigos que siempre están juntos, son de Lima y la mayoría de ellos son blancos y de cabellos rubios, que estudiaron juntos en el colegio [...] ellos no se unen al resto y en el Conservatorio les dan un tratamiento preferencial [...] mis amigos son mayormente de provincias.²²

Por último, podemos identificar una conciencia de “ser visibles”. Julio, de 48 años, un cholo que vive en Lima, indicó que cuando camina por las calles de lugares residenciales como Miraflores o San Isidro, siente que la gente le mira. Al preguntársele de qué forma, respondió que “como un cholo”.²³ Soledad, una profesora de Huanta de 38 años de edad, nos dijo que cuando tenía 17 se fue a la capital a trabajar por un año como sirvienta. La familia la trató bien, pero ella sentía que la gente la miraba como una serrana, con desprecio o desdén.²⁴ Elvira nos contó sus experiencias en las áreas residenciales de Lima en donde trabajó como criada. Cuando llegó a La Molina, se sintió “temerosa, avergonzada, diferente, observada e intimidada”. Ella jamás pudo hablar de forma relajada con su empleador, ni siquiera cuando era necesario explicar su inasistencia al trabajo, para así poder conservarlo. Su silencio despertó la ira de su patrona, la cual le tiró de los cabellos y la despidió sin su paga. En otra ocasión, intentó vender algunos artículos en las calles de Miraflores y se sintió igual que antes: “avergonzada, observada, sin palabras”. Ahora prefiere llevar a su hija a que se divierta en otros lugares, como el Parque de Huachipa y el Parque de las Leyendas (el zoológico),²⁵ lugares repletos de inmigrantes los fines de semana. Ya sea que el rechazo haya buscado ser en términos étnicos o no, lo cierto es que la forma en que la gente lo recibe tiene un fuerte componente étnico. Y si bien es difícil generalizar a partir

21. Entrevista con Marco Balbín, Bambamarca, 20 de junio de 2006.

22. Entrevista con Harold Ramos, Huanta, 28 de junio de 2006.

23. Entrevista con Julio Aguilar, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

24. Entrevista con Soledad Tello, Huanta, 28 de junio de 2006.

25. Entrevista con Elvira Macedo, San Juan de Lurigancho, 16 de junio de 2006.

de nuestras entrevistas, las experiencias más dolorosas fueron narradas por mujeres. Por ejemplo, Elvira perdió el habla: tan fuerte era el efecto desempoderador del prejuicio que experimentó.

Sin embargo, no todos los entrevistados sintieron lo mismo. Algunos de ellos eran del todo inconscientes de cualquier tipo de percepción negativa. Este grupo tenía dos características. En primer lugar, se trataba fundamentalmente de mujeres de Cajamarca (y en menor medida de Huanta), con poca experiencia de viaje a las ciudades de la costa o a Lima. En nuestras conversaciones jamás nos encontramos con esta falta de conciencia en los varones de Cajamarca. Volviendo a las mujeres, cuando ellas viajaban, lo hacían para visitar a su familia y no por buscar empleo. En segundo lugar, ellas son del tipo cajamarquino, de piel más clara, lo que probablemente minimiza los rasgos visibles que tienden a servir como “medio de condensación” del prejuicio.²⁶ Lilian, una mujer de 35 años procedente de Bambamarca, se describió a sí misma como “bastante blanca, clara y de ojos marrones”. Dos años antes había visitado a su primo en Lima por segunda vez. En sus recuerdos de niñez, su primo solía vivir en una casa pequeña con paredes de estera, pero ahora tanto la vivienda como el vecindario eran más bonitos. En la capital, la habían tratado con afecto, pero no había dejado la casa muy a menudo, y tan solo había salido de ella con su primo para ir al centro de Lima o a Huachipa (su hermano le había aconsejado que evitara salir sola porque podía perderse). En la capital, se había sentido cómoda, y comentó que si Lima le ofrecía un empleo, se iría a mudar allí con su familia.²⁷ Otro ejemplo es el de Judith, una mestiza que dijo que su padre era algo más oscuro que ella, pero que su madre era blanca y pelirroja. Ella dijo haber viajado no solo a Lima, sino también a ciudades como Cajamarca y Trujillo (siempre visitando parientes). En todos estos lugares, se había sentido cómoda y no había percibido discriminación alguna. Señaló que no pensaba mudarse a la capital porque había demasiados carros y la vida era distinta, aun cuando sus hijos estudiaban allí y ella los extrañaba.²⁸ Un tercer ejemplo de este grupo es Gladys, una blanca de Bambamarca, quien nos dijo que estaba

26. Allport (1954) subraya que una diferencia física genuina llega a ser considerada como una diferencia en categoría. Ya sea ella real, como el color de la piel, o imaginaria, como generalmente son otras cualidades “sensoriales” (el olor, por ejemplo), ellas pasan a ser un símbolo central, un “medio de condensación” que nos permite pensar acerca de otro grupo como una unidad consistente y asignarle cualidades específicas. En diferentes culturas o épocas históricas, se pensó que las mujeres no solo eran de aspecto distinto, sino también de diferente naturaleza biológica, menos inteligentes, menos racionales y —en algunas culturas— carentes de alma.

27. Entrevista con Lilian Benicio, Bambamarca, 20 de junio de 2006.

28. Entrevista con Judith Valera, Bambamarca, 21 de junio de 2006.

“enamorada de Lima”. Ella viaja con su esposo e hija cada año de vacaciones, y se queda meses en casa de su hermana en Chorrillos. Sale allí con gente y adora “los lugares verdes y los parques”. Gladys piensa que la gente de Lima es tranquila; sin embargo, enfatiza que solo camina en zonas centrales, como Surco y San Borja, pues no le gustan los suburbios.²⁹

El prejuicio contra los indios³⁰

En las entrevistas surgió un importante elemento de prejuicio que no habíamos advertido con la encuesta. Aunque en Bambamarca es moderado y muy fuerte en Huanta, las personas de los tres casos reportaron el prejuicio en contra de los indios (o *chutos*, que es como se les llama en Huanta). La encuesta, desafortunadamente, no consultó a esta población: la muestra incluía los poblados rurales circunvecinos, pero no se llegó a las comunidades campesinas de la sierra alta.³¹ Harold, un estudiante indígena de 23 años, nos explicó qué cosa es un *chuto*: “la palabra “*chuto*” se usa para identificar ofensivamente a un campesino o a un indio”. Para él, cholo es distinto; es lo mismo que indígena. “En Lima todos son cholos”, enfatiza.³² Jacinta, una mujer indígena de Huanta de 23 años que se considera a sí misma blancona (una forma de decir que es bastante blanca), lo expresó con mayor claridad: “no hay mucha diferencia entre indígenas y cholos, ambos hablamos quechua, pero los *chutos* o indios son diferentes. Ellos son los que viven en las alturas, en las montañas”.³³ Para Margarita, una mujer de Huanta de 55 años de edad, ser chola quiere decir ser serrana: “Nosotros los peruanos somos todos cholos”. Los *chutos* son distintos, dice: “No hablan español, no saben leer y escribir y tienen un carácter especial: son tercos”.³⁴

Bertha, una joven profesora de primaria, nos dijo que a los niños que vienen de las partes altas se les llama *chutos* o “los apestosos” porque no saben hablar bien el español, tienen un acento marcado y por su aspecto u olor diferente. Ella

29. Entrevista con Gertrudis Valverde, Bambamarca, 22 de junio de 2006.

30. Sí bien el término “indio” ya no se emplea usualmente en público y en la bibliografía académica, entre las personas a las que entrevistamos todavía se le usaba, y con un significado bastante definido.

31. Para llegar a estas comunidades se requiere de un transporte especial. La infraestructura es extremadamente limitada e inadecuada.

32. Entrevista con Harold Ramos, Huanta, 28 de junio de 2006.

33. Entrevista con Jacinta Cáceres, Huanta, 27 de junio de 2006.

34. Entrevista con Margarita Cárdenas, Huanta, 28 de junio de 2006.

ha oído a sus colegas, en particular a “los que vienen de la ciudad”, llamar *chutos* a “los de las alturas”. Ella añade que “es fácil identificarlos porque llevan sus ojotas (sandalias tradicionales)”.³⁵ Marco nos comenta que en Bambamarca la gente de la ciudad trata de igual modo a los campesinos: “a menudo les insultan, les llaman ignorantes, sucios”. Él ve estas situaciones fundamentalmente en los ómnibus que van a Cajamarca, puesto que no hay carros ‘exclusivos’: “la gente evita sentarse con ellos, tocarlos, y los campesinos se dan cuenta”.³⁶

Lo que Harold y Jacinta nos dejaron en claro fue que ser indígena o cholo no es lo mismo que ser indio. Los llamados indios, *chutos* o campesinos (en el caso de Bambamarca) tienden a ser vistos por los serranos como una categoría específica diferente de ellos, en la cual están presentes elementos étnicos. Eliana, una joven profesora blanca de Huanta, nos dijo que un *chutito* es alguien que viene de las partes altas, que tiene piel cobriza o más oscura, pantalones de bayeta (una tela), medias de lana de oveja y ojotas (sandalias típicas). Agregó también que estos niños solo hablan quechua y no entienden el español muy bien. Los otros alumnos, que no desean aprender el mencionado idioma nativo, se ríen de ellos y se quejan con Eliana: “profesora, no entienden”, “son burros”.³⁷ Beatriz, una maestra mestiza en Huanta, describió el caso de una niña de seis años que insultaba a un compañero de clases llamándole *chuto* y bruto, y que le hizo llorar. La profesora dijo que estas situaciones siempre ocurrían.³⁸

No sabemos como se definirían a sí mismos estos a los que se llama indios. Probablemente no usarían la palabra “indio” y se considerarían cholos, mestizos o hasta blancos. Sin embargo, este grupo sí existe para la gente serrana que vive en los pueblos o cerca de ellos como una categoría imaginada homogénea, de rasgos visibles específicos. Se les puede identificar fácilmente, y una serie de características negativas y exageradamente simplificadas están asociadas a ellos. Esto sirve para justificar prácticas (insultos, rechazo, intolerancia, humillación y vergüenza) y discursos (“ignorante”, “sucio”, “apestoso”). Dichas prácticas y discursos en torno al estereotipo de la “indianidad” no solo organizan los sentimientos y las emociones de quienes ejercen el prejuicio, sino también los de aquellos que son sus víctimas (Balibar 1991, Kaufman 2001). Beatriz enfatiza que la “gente llega

35. Entrevista con Beatriz Calderón, Huanta, 27 de junio de 2006.

36. Entrevista con Marco Balbín, Bambamarca, 20 de junio de 2006.

37. Entrevista con Jacinta Cáceres, Huanta, 27 de junio de 2006.

38. Entrevista con Beatriz Calderón, Huanta, 27 de junio de 2006.

a odiar el quechua y a hacer que sus hijos se sientan avergonzados de su lengua”.³⁹ Marco, de Bambamarca, coincide con ella. Él afirma que “cuando la gente discrimina a los campesinos y se ríe de sus tradiciones, el resultado es la pérdida de autoestima, de su propia cultura. Los jóvenes sienten vergüenza y comienzan a buscar otras formas aceptadas, alienadas”.⁴⁰

Si bien no podemos decir exactamente cómo se siente la gente acerca de estas situaciones, cómo las procesa o en qué grado suceden, aquí sí encontramos evidencias significativas de la existencia de prejuicios, mecanismos discriminadores y grados de aceptación de los mismos dentro de la sociedad peruana. Para evitar que se rían de ellos en el colegio, es necesario dejar de hablar quechua. Los campesinos pobres, que saben del sufrimiento que el estigma provoca, no arriesgarán el aprendizaje del español por parte de sus hijos; se oponen en consecuencia a la educación bilingüe (volveremos sobre esto en el capítulo 4). La vestimenta y las tradiciones son rasgos visibles del estigma. Lo que importa no es la ruptura de las reglas sobre vestimenta, o si las ropas en realidad están limpias o no: lo relevante es que los otros niños se ríen de ellos. Se vuelve así inevitable cierto grado de ruptura con la propia comunidad y un deseo de dejar atrás los rasgos étnicos despreciados.

El prejuicio en un barrio de Lima

Hemos visto cómo el prejuicio en contra de los campesinos indígenas está presente en Huanta y Bambamarca. Los indígenas urbanos les llaman indios y *chutos*, y les consideran ignorantes, sucios y tercos. En las provincias, en el interior de la sociedad andina, las diferencias entre los serranos urbanos y los indios (que es como llaman a los campesinos indígenas) son claras. En Lima, el prejuicio está dirigido a cholos y serranos. Las diferencias entre los chutos y los serranos urbanos no resultan obvias en el contexto de la capital. Eliana se quejó así: “en Lima llaman cholos a la gente serrana porque son de la sierra, y allí ven a la sierra como atrasada, pero no es así. Cholo es una expresión negativa y el serrano dice sí, soy cholo, solo para callarles la boca”.⁴¹

Según nuestras entrevistas, un migrante, ya sea uno de los llamados indios o no, intentará hablar español y vestirse a la usanza urbana; de no hacerlo así, no

39. Entrevista con Beatriz Calderón, Huanta, 27 de junio de 2006.

40. Entrevista con Marco Balbín, Bambamarca, 20 de junio de 2006.

41. Entrevista con Eliana Cabrera, Huanta, 28 de junio de 2006.

cabe ninguna duda de que alguien rápidamente aparecerá —muy probablemente otro serrano— para llamarle cholo o serrano. Esto es a fin de recordarles que están exponiendo aquellos indicadores con los cuales nadie quiere ser identificado (Nugent 1992). Si bien algunas de estas características pueden ser removidas, otras no pueden serlo. Desafortunadamente, no preguntamos cómo es que se puede reconocer a un serrano en Lima (¿cuáles son los rasgos visibles?). En el barrio, basta, sin embargo, con conocer el lugar de origen del vecino. Julio, un cholo de 48 años que vive en San Juan de Lurigancho, nos dijo que no le gusta que le digan serrano o cholo porque en el barrio la mayoría de la gente viene de la sierra: “¿por qué la gente solo llama cholos a algunos de ellos?”. Nos dijo también que en las fiestas hay peleas y que cuando están ebrios, las personas se insultan mutuamente diciéndose “cholo de mierda” y “serrano”.⁴² Fue específico en que a los norteños no se les insulta diciéndoles cholos. A los jóvenes no les gusta que les digan eso; por el contrario, desean que se les vea como limeños.⁴³

Fuera de la comunidad migrante, en las áreas tradicionales o residenciales de Lima el contraste entre los serranos y los otros puede hacerse más pronunciado, y otros rasgos pasan a ser significativos. No tenemos información en nuestros datos que describa dichos rasgos: necesitaríamos entrevistar a personas que viven en zonas más residenciales. Pero según aquellos con quienes conversamos en Huanta Uno y Huanta Dos en San Juan de Lurigancho, características tales como el acento, el color de la piel y los rasgos se hacen más importantes, en particular cuando se busca empleo. Hilario no ha completado la secundaria y dice que no hay discriminación por raza o etnicidad en construcción, su campo de trabajo: “todos somos provincianos, pero es diferente si quieres trabajar en un banco”.⁴⁴ Si bien los que vienen de la sierra son los que cargan con el mayor estigma, la discriminación sobre la base del color de la piel y el fenotipo físico parece experimentarse independientemente de la región de origen. Karen, de Chiclayo, fue discriminada cuando buscaba empleo en el centro de la ciudad. Ella sostenía que los que se seleccionaban eran “más blancos”.⁴⁵ Fhara también reportó una situación similar, que le sucedió a su amiga más oscura cuando buscaba trabajo en un

42. Este es un tema recurrente en los testimonios. Véanse, por ejemplo, las entrevistas hechas en San Juan de Lurigancho, en junio de 2006, a Julio Aguilar (el 15), Elvira Macedo (el 15) y Carlos Zambrano (el 16).

43. Entrevista con Julio Aguilar, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

44. Entrevista con Hildebrando Vargas, San Juan de Lurigancho, 19 de junio de 2006.

45. Entrevista con Karen Balcázar, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

supermercado.⁴⁶ Planas y Valdivia (2007: 68) tuvieron resultados similares en un reciente estudio basado en *focus groups*: “la raza, el color de la piel o el aspecto físico surgen como el motivo más importante de la discriminación en Lima”.

Sin embargo, en la capital se le puede restar importancia a la discriminación que tiene como base la raza o el aspecto aprovechando las oportunidades que uno tiene para cambiar de apariencia, obtener educación o poseer cierto nivel de riqueza: estos son indicadores de modernidad. Aquí no estamos ante un discurso predominante que tiene como base la superioridad de la herencia biológica de ciertos grupos: los rasgos externos, tales como el color de la piel, la vestimenta y otras características visibles, a menudo se usan para “identificar” y “dirigir” prácticas discriminadoras en contra de un colectivo, pero fundamentalmente tienen como base prejuicios en contra de su cultura, sus gustos, conductas y estilos de vida. Eliana nos dio una pista: “ellos piensan que la sierra es atrasada”, en tanto que la madre de Fátima cree que los cholos son “violentos y borrachos”.⁴⁷ En ocasiones, este prejuicio configura inconscientemente los criterios estéticos de una persona, hasta el punto en que “blanco” y “hermoso” resultan indistinguibles en una misma frase.⁴⁸ Portocarrero (2004: 286) nos brinda un marco más amplio dentro del cual entender esto. Para él, en el Perú las diferencias “físicas” y “culturales” han sido usadas históricamente para clasificar a la gente en distintos “rangos”: a un extremo, lo “indígena” es aquello que es completamente indeseable; en el otro extremo, lo “occidental” es el modelo deseable.⁴⁹ Este discurso sugiere que no hay nada malo con la sierra, o con la “naturaleza” de serranos o cholos, pero que es necesario que ellos superen los aspectos “atrasados”, “irracionales” y “autoritarios” de su cultura para que sean compatibles con el Perú moderno, con la cultura del progreso. Según Balibar (1988), en este tipo de sistema de discriminación el “criterio cultural” tiende a reemplazar al “criterio racial” para justificar el surgimiento de un nuevo conjunto de prejuicios y estereotipos en contra de grupos particulares, donde los aspectos físicos mantienen su importancia porque son rasgos visibles

46. Entrevista con Fátima Aguirre, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

47. Entrevista con Fátima Aguirre, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

48. Encontramos evidencias significativas de esto en nuestras entrevistas, particularmente entre las mujeres. Planas y Valdivia (2007: 43-54) hallaron testimonios similares.

49. Otra hipótesis a explorar en un futuro estudio es cómo se ven los “cambios rápidos”. Toma tiempo convertirse en un mestizo aceptado y asimilado. Los migrantes que regresan de Miami y Patterson (Nueva Jersey), que tienen la “carta” del aspecto, como la vestimenta moderna y cierta riqueza, conforman otro grupo distinto que no necesariamente es bien recibido.

que permiten efectuar dichas identificaciones.⁵⁰ Proseguiremos con este aspecto en los capítulos 5 y 6.

Reacciones a los prejuicios

Cómo es que las personas reaccionan a estos prejuicios es una pregunta mucho más compleja. Las respuestas de la gente pueden variar según los distintos contextos y circunstancias en las cuales viven. Sin embargo, las entrevistas nos permiten ofrecer ciertas percepciones que podrían servir como una útil base para futuras investigaciones. La emoción de la vergüenza y las consecuencias que ella tiene para quienes la sienten son importantes en nuestros casos. Por ejemplo, y tal como lo señalaran los maestros Beatriz y Marco, la humillación de los niños indios en la escuela podría tener como resultado la pérdida de la autoestima, el avergonzarse de su propia cultura y la deserción escolar.⁵¹

Hasta donde tenemos noticia, ningún investigador ha estudiado las consecuencias que las emociones tienen en la política de modo más cabal que John Elster. Su análisis de las múltiples circunstancias en las cuales se desarrolla una “cultura de la vergüenza”, inducida por la mirada desaprobadora de otros, le llevó a reconocer su importancia. “La vergüenza no es tan solo un sostén del cumplimiento de las normas sociales, sino que es *el* sostén” (Elster 1999: 145). El autor sostiene que ella es única entre las demás emociones puesto que es tan intensamente desagradable que la presión para evitarla puede minar el interés propio racional (Elster 1999: 148). El impulso inmediato es esconderse, correr, hacerse pequeño, aunque otras reacciones a la vergüenza son siempre posibles. Se puede intentar reconstruir o mejorar a uno mismo. A veces la vergüenza puede inducir la agresión, no solo como una reacción a ella, sino también como un mecanismo de diferenciación: “al despreciar a otro, uno puede intentar reparar defensivamente, y en comparación con el otro elevar su propio sentido de valía de sí mismo que está hecho añicos” (Elster 1999: 153). Encontramos todas estas reacciones complejas en nuestras entrevistas.

50. Las recientes elecciones nacionales revivieron todos estos estereotipos y prejuicios en la sierra, y las autoridades más altas del país se han sentido con libertad de hacer comentarios prejuiciosos. En 2006, el entonces primer ministro dijo a la prensa que era la falta de oxígeno lo que impedía que la gente de la sierra tomara una decisión correcta y racional, aludiendo al alto respaldo que el candidato Ollanta Humala tenía en dichas zonas (cit. por Degregori 2006). Sin duda se trataba de una broma, pero las bromas que se hacen en un país resultan sumamente reveladoras.

51. Entrevistas realizadas en junio de 2006 a Marco Balbín en Bambamarca (el 20), y a Beatriz Calderón en Huanta (el 27).

Hemos visto cómo es que en Huanta y Bambamarca están presentes los prejuicios en contra de los campesinos indígenas. Pero en Lima, las diferencias entre los *chutos* y el resto de los serranos, que podrían ser sumamente visibles en las provincias, ya no son claramente identificables. Todos los serranos pueden caer dentro de la misma categoría. En estas circunstancias, la respuesta también podría ser la negación del grupo de pertenencia, para así evitar la vergüenza. Ellos desean suprimir su identidad cuando arriban a Lima y descubren que las características adscritas a los campesinos, o —en sus propias palabras— *chutos*, tienden a ser atribuidas a todos los serranos. Como lo ejemplifican Elvira y Julio: “Soy cholo, pero no quiero que me llamen así”.⁵² Otra respuesta importante es dejar en claro las diferencias existentes entre estos “indios” y ellos mismos: aquí la educación pasa a ser una estrategia central. Agustín Carrasco, un mecánico de Volkswagen Lima de 52 años, nos dijo que “la raza cobriza es la raza con capacidades”. Añadió también que si uno es profesional, es difícil que otros lo maltraten: “te hablan con más respeto, nadie puede cholearte [llamarte cholo como insulto]”. Para él, “cholear” viene a ser lo mismo que “humillar”.⁵³ Sin embargo, al enfrentar la presión de sus colegas, él, un cholo educado, sintió la necesidad de distinguirse de los “indios” (“sin educación” y “vestidos todavía con sus ropas tradicionales”). Agustín nos describió cómo fue que una pareja de serranos llegó a la tienda de Volkswagen para comprar un carro y que sus colegas se burlaron de él, diciéndole: “anda ayuda a tus paisanos”. Nos dejó en claro que estos eran un tipo distinto de cholo que él: “estaban vestidos con sus ropas típicas y con un saco en la mano”. Para mostrarle esto a sus colegas, le vendió el automóvil a la pareja a un precio mucho más alto. “Me compré un carro con la comisión”, nos dijo orgullosamente.⁵⁴

Las entrevistas nos muestran de qué manera la construcción de la identidad étnica es un proceso ambivalente y doloroso, expresado de modo más abierto en Lima que en las provincias, por los jóvenes que por los viejos y por los varones que por las mujeres. Es contradictorio y ambivalente tanto para aquellos cholos o indígenas que están buscando sus “raíces étnicas” como para los que buscan una identidad mestiza pero que en ocasiones no pueden evitar la discriminación ni cambiar la identidad que otros les asignan. Para cholos e indígenas, la construcción de la identidad es al mismo tiempo un proceso de afirmación y negación, configurado por un contexto que impone grados de diferenciación para así

52. Entrevistas realizadas el 15 de junio de 2006, en San Juan de Lurigancho, a Elvira Macedo y Julio Aguilar.

53. Entrevista con Agustín Carrasco, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

54. Entrevista con Agustín Carrasco, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

evitar la discriminación. Por ejemplo, Soledad, Marco y otros que se definen a sí mismos como cholos y se rehúsan a sentir vergüenza⁵⁵ se comportan de distinto modo que Agustín, el mecánico de carros que se enorgullece de la forma en que estafó a sus clientes campesinos para así probar a sus amigos que no es uno de esos “paisanos”. Para Soledad y para Marco, la conciencia de ser objeto del prejuicio les ha llevado a tener una nueva apreciación de su propia identidad. Soledad se sintió obligada a esconder su lengua, pero ahora le está enseñando el quechua a su hija, aprovechando así las nuevas oportunidades que vienen apareciendo en el mercado laboral de Huanta: “el Estado y las ONG están contratando personas que saben quechua”.⁵⁶ Marco, un profesor de Bambamarca, está orgulloso de ser hijo de un campesino. Nos comentó que en su tiempo libre sigue trabajando con su padre usando la yunta, una herramienta agrícola heredada de las culturas prehispánicas. Él afirma que sus viajes a Lima y sus nuevas experiencias le han ayudado a aceptar su identidad, mientras que cuando era joven solía sentir vergüenza.

En un número importante de personas que fundamentalmente se definían a sí mismos como cholos, se admite que esta palabra se usa para humillar e insultar, pero su respuesta no es la vergüenza sino el orgullo, una afirmación deliberada contra el insulto que otros les espetan: “soy cholo, ¿y qué?”. Escuchamos esta respuesta pronunciada vehementemente tanto por las mujeres como por los varones cholos. En la encuesta, los cholos(as) aparecen como un grupo especial. Ellos tienen una educación por encima del promedio, están concentrados en Lima y es más probable que tengan una imagen positiva de los indígenas que de los mestizos. Con todo, la presión a favor de la diferenciación es una realidad en la sociedad, y ella puede hacer que incluso aquellos que se sienten orgullosos de ser cholos reproduzcan prácticas discriminadoras en contra de los que son “menos letrados” y “menos urbanos” que ellos, como se ha visto en el caso de Agustín. Quisiéramos resaltar que el problema con este círculo vicioso de la discriminación es que una cantidad importante de aquellos indígenas que “triunfen” tenderá a reproducir la “discriminación” étnica, haciendo así que la “diferenciación” y la “distinción” sean las raíces de su propia identidad.

55. Entrevistas realizadas en junio de 2006 a Soledad Tello en Huanta (el 28); y a Marco Balbín en Bambamarca (el 20).

56. Entrevista con Soledad Tello, Huanta, 28 de junio de 2006.

Conclusiones

Nuestra hipótesis inicial fue que un fuerte prejuicio en contra de las personas cholos e indígenas, fundamentalmente en Lima, y en contra de los indios en la sierra era una explicación importante de la fluidez que la identidad tiene en el Perú. Se presumió que las personas intentarían escapar a dicho estereotipo negativo y esconder dichos rasgos que permitían a otros asociarles con él. Pero lo que los datos y las entrevistas revelaron fue algo más complejo. Encontramos que ser objeto del prejuicio étnico no solo producía la pasividad, la negación del grupo o la alienación, sino que en otros casos también llevó a una nueva apreciación de la propia identidad. Sin embargo, queda claro que al venir de un entorno que guarda un fuerte prejuicio en contra de los campesinos indígenas (“indios” o “chutos”, como se les conoce en la sierra), la gente serrana se ve horrorizada al llegar a Lima y descubrir que a ellos se les coloca en la misma categoría. En este contexto, podemos entender mejor la necesidad de negar o suprimir la identidad, o de crear diferencias claras entre los cholos e indígenas no educados (indios, *chutos*) y los serranos cultos. La necesidad imperiosa de efectuar esta diferenciación puede incluir el infligirle daño al propio grupo al que uno pertenece.

Encontramos evidencias de un vigoroso sentido de identidad étnica, que es más fuerte entre aquellos que se identifican a sí mismos como cholos. En las entrevistas, la categoría de indígena/andino se superpone bastante con la de cholo; ambas enfatizan la sierra, su lugar de origen común, pero es entre los indígenas que hallamos la necesidad de diferenciarse de los cholos. También hay evidencias de la importancia que el color de la piel tiene para algunos grupos, en particular para blancos y mestizos, ya sea como un indicador importante en sí mismo o como el elemento más fácilmente aprehensible cuando se lucha con una forma de comprender la identidad (este parece ser el caso en particular de las mujeres pobres de Cajamarca).

Nuestras entrevistas también muestran de qué manera la migración es un “catalizador” clave en el proceso de construcción de la identidad étnica y cuán poderoso ha sido dicho proceso en el reordenamiento de la configuración “espacial” de la etnicidad en el país, así como en los mecanismos por medio de los cuales se trazan las fronteras. Antes de que las olas de la migración transformaran la demografía del país —de la sierra a la costa y del campo a la ciudad—, las fronteras étnicas, si bien no estaban del todo definidas, sí eran más fáciles de comprender. El censo de 1940 mostró que había un 53 por ciento de blancos y mestizos, y un 46 por ciento de indios.⁵⁷ La mayoría de estos últimos vivía en

57. Blancos y mestizos fueron reportados juntos, pero las categorías se presentaron como distintas. Los otros grupos eran considerados minorías.

sus comunidades, lejos de las áreas urbanas, y solo visitaba excepcionalmente las ciudades más grandes (y aún menos a Lima). Los mestizos residían sobre todo en las ciudades más grandes, la capital inclusive, pero muchos de ellos vivían en los pequeños poblados de las periferias, rodeados por comunidades de indios. Los blancos vivían mayormente en las ciudades principales, bastante concentrados en Lima. La migración quebró este paisaje y toda la estructura de fronteras étnicas se vio transformada en el muy complicado escenario que tenemos hoy en día.

La emigración progresiva de los mestizos, desde las pequeñas provincias de la sierra a Lima y a las ciudades más grandes, hizo que el entorno urbano “tradicional” fuera más diverso racial y culturalmente, pero lo que dislocó las fronteras étnicas fue la emigración de los “indios”. Quijano (1980) fue un visionario con respecto a este proceso, y desde fecha muy temprana vio el surgimiento de una identidad chola, tal como la que hemos registrado en nuestras entrevistas y la encuesta. Si bien los mestizos tendían a integrarse no sin cierta dificultad a la sociedad mestizo-criolla (“urbana-occidental”),⁵⁸ los indios —los hijos e hijas de campesinos indígenas que arribaban a Lima—, tendían a tomar otra ruta. A partir de la bibliografía, aprendimos que los campesinos indígenas adoptaron nuevos comportamientos, gustos y estilos de vida, y que reconstruyeron su identidad de múltiples formas, las cuales incorporaron elementos “mestizos/criollos” identificados con la ciudad y con la población mestiza. Pero al mismo tiempo aprendimos con nuestras entrevistas que mantuvieron un apego importante a la cultura y las prácticas de su lugar de origen, vínculo este que a menudo ha sido transmitido a sus hijos.⁵⁹

Estas culturas locales, múltiples y diversas —en ocasiones solo con referencia a una comunidad o localidad pequeña—, están caracterizadas no solo por tradiciones prehispánicas, sino también por elementos incorporados en el transcurso de quinientos años de subordinación, primero en la Colonia y posteriormente en la República.⁶⁰ Como Karen nos dijera, este apego no es solo a las tradiciones, como por ejemplo a fiestas especiales, sino también a prácticas tales como el uso de la lengua, la admiración por el paisaje, la forma de vivir,⁶¹ la música⁶² y los

58. Véanse López, 1997; Portocarrero, 1993; y Quijano, 1980.

59. Véanse Degregori et ál., 1986; Golte y Adams, 1990; y Franco, 1991.

60. Un ejemplo de esto es el uso de las hojas de coca. Es cierto que se la empleó en la época prehispánica en ceremonias tradicionales, pero durante la Colonia ella adquirió distintos usos y significados en el contexto de la explotación sufrida en minas y plantaciones. Su importancia global no ha disminuido, pero su significado ha cambiado.

61. Entrevista con Karen Balcázar, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

62. Entrevista con Harold Ramos, Huanta, 28 de junio de 2006.

valores.⁶³ La gente que viene de la sierra encuentra en los Andes un lugar de referencia común, pero la sierra también es una fuente común del “estigma”. No obstante estas fuerzas contradictorias, ella ha pasado a ser la esencia principal de la emergente identidad chola e indígena con que nos topamos en las entrevistas. En las provincias, esto asume la forma de un mestizaje distinto: el mestizo indígena.⁶⁴ Pero tal como Julio nos dijera al describir su barrio, la gente de distintas partes del país (la de costa y selva inclusive) se ha encontrado en los barrios de migrantes. Y hoy en día, todos aquellos que alguna vez fueron considerados miembros de culturas “menos urbanas”, “menos occidentales” o “menos modernas” vienen reconstruyendo y reconfigurando su identidad: una “más urbana”, “más occidental” o “más moderna”, pero distinta de la identidad criollo-mestiza, diferente de la que predomina en el centro y en las áreas tradicionales de Lima.

A partir de esta información, encontramos que la geografía y la historia son las mejores variables sustitutas con que comprender las fronteras étnicas en el Perú actual. La mayoría de los blancos y una parte significativa de los mestizos nació y vive en las áreas tradicionales y residenciales de Lima. La mayor parte de los mestizos y un número significativo de cholos nació y reside en los barrios periféricos y de inmigrantes, así como en las ciudades más grandes de los departamentos. En el resto del país, en el campo y en los pequeños poblados, nacieron y aún viven mestizos y cholos, pero sobre todo los campesinos indígenas (los llamados “indios”).

Apéndice del capítulo 2

La metodología de la encuesta de percepciones del CRISE:
el cuestionario y la muestra

Autor: David Sulmont

El cuestionario de la encuesta de percepciones del CRISE 2005 buscaba medir percepciones de la identidad, la etnicidad, la religión y la acción colectiva y política entre personas de los distintos países del mundo en que el proyecto CRISE viene trabajando (Latinoamérica, África y Asia). Los borradores del cuestionario

63. Entrevista con Marco Balbín, Bambamarca, 20 de junio de 2006.

64. Contra la idea del mestizo que desaparece en una cultura nacional gradualmente homogeneizadora, De la Cadena (2000) muestra cómo hay mestizos indígenas —al menos en el Cuzco— que toman distancia del estigma “indio” pero que al mismo tiempo promueven distintas formas de llevar a cabo esta desindianización y de promover características de la cultura que no sean estereotípicas.

fueron discutidos en un taller del CRISE llevado a cabo en Oxford en febrero de 2005. El cuestionario original en inglés fue traducido al español por David Sulmont para usarlo como plantilla en los países latinoamericanos (Bolivia, Guatemala y el Perú). Otras modificaciones más fueron efectuadas por los investigadores responsables de hacer la encuesta en cada país, a fin de adaptarla a su realidad específica.

En el caso peruano, el cuestionario fue probado y modificado extensamente con el objeto de incluir la terminología local y las cuestiones de identidad social, étnica y racial. Una versión del mismo fue puesta a prueba por primera vez en enero de 2005 con las comunidades y pueblos campesinos de la región del Cuzco, lo que serviría de insumo para el taller de Oxford celebrado en febrero. Posteriormente, en julio de 2005, se puso en práctica una primera versión del cuestionario posttaller con cuarenta encuestados en algunos lugares de Huanta (Ayacucho). Después de realizar las modificaciones finales, el trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo a finales de agosto y en septiembre del mencionado año.

Con respecto a la medición de las categorías étnicas o raciales, adoptamos cuatro tipos de indicadores:

- La lengua materna del encuestado.
- *Autoidentificación étnica/racial*. Se trata de la identificación que el encuestado hacía de sí mismo con una de las siguientes categorías: blanco, mestizo, indígena andino, indígena amazónico, cholo, negro/zambo,⁶⁵ chino/japonés.⁶⁶
- *Escala étnica de autoubicación*. Consiste en el lugar en que un encuestado se ubicaba a sí mismo en una “escala cromática” de siete puntos, que iba de blanco (= 1) a indígena (= 7).⁶⁷
- *Ancestros*. Se refiere a la categorización que un encuestado hacía de sus padres en las categorías étnico/raciales descritas arriba.

65. En el Perú, “zambo” es una palabra que designa a alguien de orígenes africanos negros.

66. La pregunta era la siguiente: “Si tuvieras que definir a qué grupo perteneces entre las alternativas en esta tarjeta, ¿cuál de ellos sería?”.

67. Esta interrogante se inspiró en la metodología usada en Ñopo et ál. 2004. La pregunta decía: “Muchas personas creen que la identidad de los peruanos contemporáneos es principalmente un producto del encuentro entre los españoles de raza blanca y los habitantes nativos del territorio peruano, de raza indígena. Usando esta escala, donde 1 quiere decir ‘blanco’ y 7 quiere decir ‘indígena’, ¿en qué punto te ubicarías tú? Recuerda que puedes elegir cualquier punto entre 1 y 7”.

También pedimos a los encuestados que identificaran a los dos grupos principales de sus comunidades o barrios usando las categorías étnico/raciales y que los situaran en la escala étnica de siete puntos.

Según los acuerdos alcanzados en el taller del CRISE, para efectuar un análisis exploratorio de las relaciones existentes entre desigualdades horizontales y conflicto social, el diseño de la muestra buscaba representar diferentes contextos de identificación y categorización cultural, y distintos niveles de conflicto social o violencia. A la luz de los recursos que podían asignarse a las encuestas en cada país, el tamaño promedio de la muestra fue fijado en alrededor de seiscientas entrevistas.

En el Perú, este diseño de la muestra llevó a la definición de tres tipos de casos distintos, cada uno de los cuales estaba representado por un lugar específico. A fin de maximizar la posibilidad de examinar los casos usando distintas perspectivas metodológicas, dichos lugares fueron los mismos que Ismael Muñoz, Maritza Paredes y Rosemary Thorp estudiaron en 2004 y 2005, en el contexto del proyecto del CRISE (Muñoz et ál. 2006).

Los casos fueron escogidos con el objeto de probar diferencias que tuvieran como base la región, la heterogeneidad cultural, escenarios urbanos y rurales, y zonas de personas afectadas por el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. En algunos lugares, trazamos una subdivisión que buscaba representar distintos niveles de integración y exclusión social. Es importante tener en cuenta que la muestra no representa a toda la sociedad peruana; por lo tanto, no es posible efectuar generalizaciones a escala nacional. En lugar de ello, la muestra ha pretendido representar diversos entornos sociales en donde podemos observar distintas configuraciones de desigualdades horizontales, percepciones de identidad, política y acciones colectivas.

Los lugares escogidos fueron las provincias serranas de Bambamarca en Cajamarca y Huanta en Ayacucho, y dos barrios en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la ciudad capital de Lima.⁶⁸ Con respecto a San Juan de Lurigancho, este es el distrito más poblado de la capital peruana y, dicho sea de paso, el más poblado del país. Tiene 812.656 habitantes según el censo de 2005, la mayoría de ellos inmigrantes que llegaron a la ciudad a mediados de los años ochenta y en los noventa. En este lugar elegimos dos barrios: Huanta Uno y Huanta Dos. Sus habitantes provenían mayormente de la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Ellos dejaron su región de origen debido a la violencia política que

68. Para una descripción más profunda del contexto colonial de estos lugares, véase Muñoz et ál. 2006.

experimentaron durante los años ochenta y noventa. Según la CVR, en Ayacucho la provincia de Huanta fue la más afectada por el conflicto armado interno.

Las personas que fundaron Huanta Uno en San Juan de Lurigancho provenían principalmente de las áreas urbanas de su provincia original; ellas cuentan con niveles educativos y estatus socioeconómico más altos que los de sus paisanos. En cambio, los pobladores de Huanta Dos proceden de las partes más pobres de la provincia y llegaron a la ciudad a comienzos de los años noventa. Huanta Dos es más heterogéneo que Huanta Uno puesto que algunas personas también provienen de otras provincias del Perú.

Huanta es la segunda provincia más importante del departamento de Ayacucho, ubicado en la sierra central del país. El censo de 2005 enumeró 85.559 habitantes en dicha provincia. Durante casi 15 años, la violencia política fue extremadamente intensa en Huanta y causó miles de muertes.⁶⁹ En esta región, escogimos dos lugares para encuestar: la ciudad de Huanta y el distrito de Luricocha. El primero es una zona urbana (de cuarenta mil habitantes) y el segundo un distrito rural (de 5.700 personas). La mayoría de los habitantes de la provincia de Huanta tiene al quechua como su lengua materna y posee ascendencia campesina.

El distrito de Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, se encuentra en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte peruana. En 2005, Bambamarca tenía 74.513 habitantes. Se trata de un distrito rural; muchos de sus habitantes están empleados en actividades relacionadas con la agricultura, como campesinos y artesanos, o en el sector comercial. Las organizaciones más importantes de la región son las “rondas campesinas”, una forma de policía rural autónoma y cuerpo de justicia comunal. En términos de sus características culturales, Bambamarca es más homogéneo que Huanta y que San Juan de Lurigancho.

En cada uno de los lugares, los encuestados fueron seleccionados empleando un diseño de muestra aleatoria de conglomerados por áreas y de múltiples etapas. Para ser seleccionados, los encuestados debían tener entre 18 y 70 años de edad. En total, se completaron 615 cuestionarios, distribuidos uniformemente entre las tres localidades. Los equipos del trabajo de campo fueron organizados y capacitados por el personal del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, bajo la supervisión de David Sulmont y de Vania Martínez.

69. Sobre la base de los datos de la CVR y empleando la metodología de Cálculo de Sistemas Múltiples que se usó en la elaboración de su informe, concluimos que 6.500 personas murieron en Huanta durante el conflicto, casi el 8,5 por ciento de la población global de la provincia tomando en cuenta el censo de 1981.

En el cuadro 2.4, vemos las características principales de los encuestados en los tres lugares escogidos. La distribución de las categorías en las variables socioeconómicas (estatus ocupacional, nivel educativo) es consistente con los distintos contextos sociales que se suponía que los casos debían representar. Si tuviésemos que colocar los tres lugares en una escala socioeconómica, creando un índice que combinara el estatus de la ocupación y la educación, el orden de los tres sería (de menos a más): Bambamarca, Huanta y San Juan de Lurigancho.

CUADRO 2.4

ENCUESTA DE CRISE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA
PORCENTAJE VERTICAL

Variables	Categorías	Total porcentaje				Lugar de residencia		
		Huanta	Bambamarca	SJL (Lima)	Huanta	Bambamarca	SJL (Lima)	
Género	Femenino	52,7	50,2	57,2	50,7	50,7	57,2	
	Masculino	47,3	49,8	42,8	49,3	49,3	42,8	
Grupo de edad	18 a 24	29,9	32,9	33,3	23,4	23,4	33,3	
	25 a 34	22,1	18,8	21,4	26,4	26,4	21,4	
	35 a 44	24,1	23,0	21,9	27,4	27,4	21,9	
	45 a 54	13,3	13,1	16,4	10,4	10,4	16,4	
Estatus ocupacional	Más de 55	10,6	12,2	7,0	12,4	12,4	7,0	
	Desocupado	57,1	49,2	54,9	67,7	67,7	54,9	
	Campesino	10,6	19,7	0,0	11,4	11,4	0,0	
	Autoempleado, no calificado	23,1	12,7	22,9	34,3	34,3	22,9	
	Empleado en pequeñas empresas (< 10 empl.)	1,8	0,9	4,0	0,5	0,5	4,0	
	Empleados en empresas de gran o mediano tamaño (> 10 empl.)	4,1	0,9	9,5	2,0	2,0	9,5	
	Empleado público	8,8	11,7	6,0	8,5	8,5	6,0	
	Propietario de pequeña empresa (< 10 empl.)	5,0	1,9	8,5	5,0	5,0	8,5	

Autoempleado, profesional	2,9	1,4	5,0	2,5
Propietario de gran/mediana empresa	0,8	0,0	1,0	1,5
No ocupado	42,9	50,7	32,4	45,3
Ama de casa / empleada doméstica	23,4	26,8	19,9	23,4
Estudiante	15,6	22,5	9,0	14,9
Temporalmente desempleado, no trabaja	2,9	0,5	3,0	5,5
Jubilado	1,0	0,9	0,5	1,5
Ninguno	6,0	2,3	15,4	0,5
Algo de escuela primaria o secundaria	43,1	47,9	51,8	29,4
Escuela secundaria	34,2	32,4	18,4	52,3
Postsecundaria fuera de la universidad	7,6	6,1	7,0	10,0
Título universitario	8,9	11,3	7,5	8,0
Autoidentificación racial / étnica	53,7	52,1	72,6	36,3
Indígena/andino	18,7	25,3	3,5	26,9
Cholo	17,6	16,4	7,0	29,4
Blanco	8,8	6,1	16,4	4,0
Otro/ninguno/desconocido	1,3	0,0	0,5	3,5
Número de casos	615	213	201	201

MIDIENDO LAS DESIGUALDADES DE GRUPO

EN COAUTORÍA CON ADOLFO FIGUEROA

El capítulo anterior estuvo dedicado a hacer dos observaciones. En primer lugar, en el Perú las identidades étnicas son complejas y fluidas, y hay divergencias entre las percepciones subjetivas y las objetivas. En segundo lugar, las identidades *sí importan*. Las personas ven que son relevantes como parte de la identidad, pero también como una fuente de experiencias de vida disímiles. Los prejuicios y la discriminación no son realidades que se guste admitir en el Perú, pero existen.

Habiendo comprendido esto, necesitamos evaluar ahora el grado de desigualdad grupal u “horizontal”, así como sus formas. Queda claro que resulta imposible hacer esto en una forma estadística directa y limpia. Pero sí necesitamos dar una idea cuantitativa y esa es la meta de este capítulo, donde abstraemos a partir de las complejidades que hemos desarrollado exhaustivamente en el capítulo anterior, para investigar las mejores variables ‘proxi’ que podamos encontrar para la identidad étnica de grupo en el Perú. Primero examinaremos con mayor profundidad el problema de los indicadores étnicos. Luego presentaremos, en la sección 2, nuestras evidencias de las desigualdades horizontales socioeconómicas y políticas. En la tercera sección, exploraremos las *percepciones* que la gente tiene de las desigualdades horizontales, recurriendo nuevamente a los resultados de nuestra encuesta y a las entrevistas de seguimiento. La sección 4 comprende las conclusiones. Mostramos así que los agravios de naturaleza étnica claramente existen, a pesar de las ambigüedades de la medición y del grado de fluidez.

El intento de medición es importante, no obstante su dificultad. Esto se debe no solo a que él puede reforzar nuestro argumento sobre la prominencia de la etnicidad, sino también porque sobre la base de dicha medición, uno de los aportes

de nuestro análisis será que las desigualdades entre los grupos deben ser monitoreadas como parte de una política de desarrollo responsable, y focalizadas con acciones específicas. Una política tal requiere de datos para su implementación, y probablemente sea necesario que el simple hecho de mejorar tales datos forme parte de la recomendación de políticas sobre el mencionado sector.

Indicadores étnicos

Después del examen realizado en el capítulo 2, queda claro que resulta difícil producir indicadores étnicos adecuados, dadas la fluidez y las ambigüedades que hemos descrito, además de la forma en que la gente ve que su propia etnicidad y la de los demás también van variando a lo largo del tiempo, así como en distintos contextos. Hasta el lenguaje de los indicadores también pasa a formar parte del problema: por ejemplo, uno podría pensar que “blanco” tiene un significado evidente, pero en el Perú esta palabra contiene una mezcla de elementos raciales y culturales. Así, una persona que parecería ser mestiza debido a sus padres y a su color de piel y rasgos podría muy bien ser llamada, y llamarse a sí misma, “blanca” sobre la base de características culturales.

Los candidatos usuales para ser indicadores étnicos incluyen la raza, la lengua, la religión y el lugar de origen. En el caso peruano, no se dispone de datos sobre las razas, o bien estos no son confiables. La forma usual de medir la raza es usando la autoidentificación de una persona. En nuestra encuesta, sobre la que hablamos en el capítulo anterior, usamos la autoidentificación precisamente porque nos interesaban las *percepciones* que las personas tienen de la identidad. Pero como medida objetiva, este método ha demostrado no ser confiable en una sociedad jerárquica, puesto que la gente tiende a esconder el estigma de no pertenecer al grupo dominante o, en nuestro caso, el hecho de ser “no blanco”. Es posible evadir este problema aplicando métodos sofisticados, tal como se hizo en el Brasil (Lovell 1999, Silva 1992); sin embargo, dichos métodos no fueron usados en el Perú cuando se recogieron datos sobre las razas, como en el censo de 1940 o en la Encuesta Nacional de Hogares 2001 (ENAH0).

Hemos visto que en el Perú la lengua solo es un indicador parcial de la etnicidad, no obstante ser el indicador que más se usa. Como vimos en el capítulo 2, las lenguas nativas son habladas por un subconjunto de los descendientes de la población indígena. El español es la lengua común incluso en regiones donde hubo civilizaciones precoloniales muy desarrolladas, como la de los chimúes en el norte. Hoy en día no todas las poblaciones indígenas hablan lenguas nativas. Además, otros grupos étnicos minoritarios, como los africanos, asiáticos y europeos,

hablan todos español. De ahí que la lengua sea un mal indicador étnico en el Perú. Por otra parte, la religión tampoco puede usarse como indicador social en un país que es mayormente católico (alrededor del 95 por ciento de la población), y en el cual el catolicismo está presente en casi todos los grupos étnicos.

Nos queda así el lugar de origen, a cuyo favor abonan varios elementos.¹ En el capítulo 5, describimos el proceso histórico que llevó a la separación física de indígenas y de blancos y/o mestizos: hoy la emigración ha complicado las cosas enormemente, pero usando el lugar de nacimiento y no el de residencia podemos solucionar los problemas, al menos en parte. Además, la segregación ha tendido a reproducirse a sí misma en Lima. Reconociendo plenamente la arbitrariedad del proceso, distinguimos siete categorías geográficas para el lugar de nacimiento. La ciudad de Lima-Callao está separada en dos zonas: “Lima-centro”, los distritos residenciales de la capital donde los que nacen son mayormente blancos; y “Lima-periferia”, donde nacen los hijos de los inmigrantes. En tercer lugar, tenemos a los distritos residenciales de las ciudades capitales de los departamentos —zonas fundamentalmente blancas y mestizas— a las que denominamos el “centro local”. El resto de la población de la zona andina fuera de las capitales regionales está dividida en Andes del sur, donde el quechua y el aimara son las lenguas predominantes, y los Andes del centro y del norte, donde el español predomina sobre el quechua. El “resto” de la costa y el “resto” de la región amazónica completan las siete categorías.

Como abstracción, y para intentar hacer una presentación sintética en el texto, agrupamos nuestras siete regiones de nacimiento en tres divisiones principales. El primer grupo, que es principalmente indígena/cholo, está definido como aquellos nacidos en las provincias de los Andes, la Amazonía y la costa, pero excluyendo a los distritos residenciales de las capitales regionales. Con fines taquigráficos, en el texto llamaremos “indígena” a este grupo, pero el lector debe tener en cuenta las comillas. El siguiente grupo comprende a aquellos que nacieron en las capitales de provincias o en las barriadas de Lima y que son principalmente mestizos, con muchos que se identifican a sí mismos como “cholos”. Con fines taquigráficos llamaremos a este el grupo “mestizo”, y aquí también las comillas son importantes. El último grupo comprende a aquellos que nacieron en los once distritos más residenciales de Lima (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel y Surco) y son principalmente blancos, con un gran componente mestizo pero no cholo. Su denominación será “blanco”.

1. La metodología aquí desarrollada fue presentada por primera vez en Figueroa y Barrón, 2005; ella constituye la base de este análisis.

Los cálculos para la población adulta (25 años o más) son los siguientes: “blanco”, 3,5 por ciento; “mestizo”, 27,5 por ciento; e “indígena”, 69 por ciento. Esta definición de indígena es amplia, pues incluye a quienes nacieron en las áreas rurales y en los pequeños pueblos de la costa, la Amazonía y la sierra central y norte. Una definición mucho más limitada podría comprender solo a quienes nacieron en la sierra sur, sin sus ciudades capitales. Esto nos daría una cifra de 21 por ciento. Consideramos que semejante definición es demasiado estrecha, aun cuando podría afirmarse que la nuestra es muy amplia; al final, ninguna resuelve el problema real: que el lugar de nacimiento es la mejor variable sustituta del origen étnico, no obstante lo cual sigue siendo imperfecta. Sin embargo, el análisis de sensibilidad de las distintas definiciones no hizo que matizáramos los resultados reportados.²

La mayoría de los demás estudios calculó la población indígena a partir de la lengua, lo cual arroja una cifra muy inferior. Una importante obra reciente es la de Trivelli (2005). En un cuidadoso análisis estadístico sobre la base de los datos de la ENAHO 2001, ella muestra que al combinar la autoidentificación y el uso de una lengua nativa, la definición más inclusiva arroja una cifra de 45 por ciento. Hemos explicado ya nuestra preocupación respecto del criterio de la lengua e incluso de la autoidentificación: ningún cálculo está libre de errores. Por ejemplo, nuestra medición asume que en el Perú todos los que nacieron en los distritos regionales fuera de las capitales son indígenas, lo cual obviamente está lejos de ser verdad, y ello explica por qué razón tenemos un porcentaje tan alto de indígenas, mayor incluso que en Bolivia.

Usando la clasificación propuesta —y haciendo la salvedad de sus problemas—, podemos preparar mediciones de desigualdades de grupo de carácter social, económico y político. Sin embargo, la evaluación de estas últimas requiere de algo más de ingenio, puesto que deseamos explorar la representación de distintos grupos en diversos ámbitos del sistema político y judicial. Para esto no contábamos con el lugar de nacimiento, y la mejor medida objetiva que pudimos aplicar como variable sustituta fue la de los apellidos. Su uso en Latinoamérica resulta problemático en extremo dado el proceso de mestizaje experimentado en ciertas regiones. Además, solo podemos evaluar la *tendencia*, puesto que no conocemos la proporción de personas con apellidos indígenas en el Perú. Otro problema que no podemos resolver es que la gente indígena podría haber perdido su segundo apellido de raigambre étnica en el proceso de mestizaje. Un caso ilustrativo es el

2. Una prueba técnica que evalúa la sensibilidad de los resultados a las diferentes maneras de aproximarse a la etnia.

de Máximo San Román, quien fuera vicepresidente durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992). Él ha perdido los apellidos de raíces quechuas de su madre, Natividad Cáceres Chuchullo, y de su padre, Julio San Román de Pomacanchis. Debido a situaciones como esta, muy probablemente estamos subestimando la participación de gente indígena, y la tendencia que observaremos solo será válida si dicha subestimación tiene lugar en la misma proporción en cada periodo. Encontramos, a pesar de todo, que sí podíamos conseguir ciertas percepciones, y presentamos los resultados a continuación.

Mediciones de las desigualdades grupales

Las desigualdades de grupo en el ingreso y la pobreza

Figueroa (2008) calculó la desigualdad de los ingresos laborales a partir de la ENAHO 2003. Debemos subrayar que el uso de esta fuente subestima las desigualdades grupales, puesto que una limitación muy conocida de dichas encuestas es que ellas no captan bien el ingreso no laboral, y es allí donde tiende a yacer gran parte de la desigualdad. La distribución del ingreso aparece en el cuadro 3.1. Vemos que nuestra variable sustituta para la población “blanca” solo tiene 9 por ciento en los cuatro deciles más bajos del ranking nacional, y 39 por ciento en el decil más alto, mientras que para los “indígenas” los porcentajes quedan más que invertidos: 49 por ciento en el grupo inferior y apenas 6 por ciento en el decil superior.

En el Perú, las desigualdades horizontales contribuyen significativamente al alto grado de desigualdad vertical. Figueroa calcula que de eliminarse las primeras, el coeficiente Gini del Perú de casi 0,60 caería a alrededor de 0,40. Esta es la cifra que muestran los países latinoamericanos que cuentan con una participación insignificante de la población indígena, como Argentina y Costa Rica (Figueroa 2001a: 37).

La incidencia de la pobreza puede calcularse a partir de la encuesta de hogares. Como vemos en el cuadro 3.2, el 24 por ciento de la población indígena aparece identificada como “extremadamente pobre” en comparación con el 6 por ciento de los “mestizos” y muy pocos de la población “blanca”.³

3. La línea de pobreza se define según una base fijada en 1997, para la cual se calculó una canasta de consumo alimenticio mínimo y, a partir de allí, un consumo general mínimo. Las encuestas de 2001 y 2003 trabajaron a partir de esta base, si bien efectuaron correcciones para incorporar los cambios en los precios. Los pobres extremos cuentan con un ingreso insuficiente para la canasta alimenticia, mientras que los pobres no pueden costear la de consumo total mínimo.

CUADRO 3.1

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DENTRO DE CADA GRUPO ^a			
(PORCENTAJES)			
	“Indígenas”	“Mestizos”	“Blancos”
40 por ciento más pobre de los niveles de ingreso nacional	49	22	9
50 por ciento medio de la distribución	45	62	52
Niveles de ingreso nacional más ricos (10 por ciento superior)	6	16	39
Todos los receptores de ingresos	100	100	100

Fuente: Figueroa 2008.

Nota: ^a Principalmente ingreso laboral a partir de datos de ENAHO 2003.

En su estudio, usando la ENAHO 2001, Trivelli (2005) encuentra un porcentaje mayor de población indígena pobre. Esto es consistente con nuestras distintas opciones para la clasificación: es probable que la población que ella excluye de dicho colectivo y que nosotros incluimos esté algo mejor que el promedio de su grupo “indígena”. Sin embargo, lo que llama la atención en ambos estudios es que *coincidimos* en el tamaño de la brecha: la distancia absoluta de unos veinte puntos porcentuales es similar en ambos estudios.⁴

A partir del análisis de Trivelli podemos extraer otras cosas más: ella explora la distribución de ingresos *dentro* de cada grupo y encuentra que el colectivo no indígena de su definición es significativamente más desigual que el indígena, aun cuando sigue habiendo una desigualdad significativa dentro de esta última población. Ella, asimismo, resalta la importancia del lugar de residencia: la población *rural* es más pobre que la urbana, tanto en indígenas como en no indígenas por igual. Pero “[e]ntre los hogares indígenas, son los monolingües los que registran los indicadores menos favorables” (Trivelli 2005: 23). Estos son los *chutos* del capítulo anterior, quienes enfrentan las múltiples consecuencias de la pobreza, la desigualdad y la discriminación.

4. La metodología es la misma, como ya se ha indicado, aun cuando hay problemas relacionados con la estacionalidad, que no afectarán la comparación aquí efectuada.

CUADRO 3.2

===== PARTICIPACIÓN DE HOGARES POR ESTATUS DE POBREZA^a Y POR GRUPO SOCIAL =====
 DEL JEFE DEL HOGAR
 (PORCENTAJES)

	“Indígenas”	“Mestizos”	“Blancos”	Total
Extremadamente pobres	24,1	5,8	1,8	19,5
Pobres (no extremos)	29,3	22,2	7,2	27,3
No pobres	46,6	72,0	91,0	53,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Barrón 2008, y datos proporcionados por Barrón.

Nota: ^a Según el gasto del hogar per cápita.

Indicadores de desarrollo humano

Pasemos a continuación a los indicadores de desarrollo humano. La educación, el más ilustrativo, es inmensamente importante para nuestro análisis, razón por la cual reservamos su discusión plena para el siguiente capítulo. El cuadro 3.3 presenta el resumen de los resultados de nuestros tres grupos con respecto a los años de estudio. Lo que el capítulo 4 demostrará detenidamente es que la medición por “años de estudio” subestima significativamente la auténtica desigualdad del capital humano, puesto que aquello que una persona aprende con sus años en la escuela variará enormemente dependiendo de indicadores étnicos, y en promedio las variables de resultado muestran que ser indígena es una desventaja. De modo que una vez más tenemos aquí un subestimado. El cuadro 3.3 muestra niveles inferiores de educación en grupos nacidos en regiones predominantemente indígenas. Las tasas de analfabetismo son más altas para estos colectivos. Solamente el 43 por ciento de los indígenas alcanzó la secundaria o más, *sin importar dónde vivieran*. En el otro extremo, esta participación es del 93 por ciento para el grupo nacido en Lima-centro. El capítulo 4 también examinará las dimensiones de género en las cifras, lo que demuestra otra desigualdad horizontal más dentro de los grupos, así como entre ellos, aunque esto último viene disminuyendo con el paso de las generaciones.

CUADRO 3.3

NIVELES EDUCATIVOS POR GRUPO SOCIAL Y GÉNERO ^a									
(PORCENTAJES)									
Nivel de educación	“Indígenas”			“Mestizos”			“Blancos”		
	Hom- bres	Muje- res	Total	Hom- bres	Muje- res	Total	Hom- bres	Muje- res	Total
Ninguno	6,2	21,4	14,1	1,0	5,0	3,1	0,0	0,6	0,3
Primaria	43,0	63,4	63,1	16,4	19,8	18,3	4,1	8,2	6,4
Secundaria o superior	50,8	35,2	42,8	82,6	75,2	78,6	95,9	91,2	93,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de alfa- betos 15+	91,7	75,6	83,5	98,2	95,1	96,6	99,1	99,5	99,3

Fuente: Barrón 2008, y datos suministrados por el autor.

Nota: ^a Población de 25 años o más.

Los indicadores de salud son insatisfactorios, puesto que todo lo que tenemos en la encuesta es atención médica y seguro de salud: en dicha fuente, no poseemos ningún dato sobre resultados, mientras que para la educación contamos al menos con los de lectura y escritura. Los datos del cuadro 3.4, sobre las cifras porcentuales de atención médica y seguro de salud, muestran pocas diferencias en el porcentaje que consigue atención, pero no tenemos información alguna sobre las necesidades. Los datos del seguro muestran a los grupos “mestizo” y “blanco” con un porcentaje más alto de aseguramiento: 65 por ciento del grupo “indígena” no tiene seguro, en comparación con el 40 por ciento del grupo “blanco”. En este caso, no hay diferencias de género.

Podemos, sin embargo, conseguir algo más de ayuda de una fuente distinta: las encuestas regulares de salud materna e infantil llevadas a cabo por Cuánto⁵ en colaboración con el Banco Mundial, las llamadas “Encuestas de Medición de Niveles de Vida” (*Living Standards Measurement Surveys*) —en adelante: ENNIV— Ellas, desafortunadamente, no brindan información que nos permita

5. Una agencia independiente de investigación y recopilación de datos, con sede en Lima.

CUADRO 3.4

===== ATENCIÓN MÉDICA Y SEGURO DE SALUD, POR GRUPO ÉTNICO ^a =====
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN CADA GRUPO Y SUBGRUPO)

	“Indígenas”			“Mestizos”			“Blancos”		
	Hom- bres	Muje- res	Total	Hom- bres	Muje- res	Total	Hom- bres	Muje- res	Total
Atención médica									
Pública	31,3	33,6	32,6	35,0	35,7	35,4	24,4	28,9	27,0
Privada	3,4	4,1	3,8	6,2	8,2	7,3	9,5	11,6	10,7
Ninguna	65,3	62,2	63,6	58,8	56,1	57,3	66,1	59,5	62,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Seguro de salud									
Público	34,6	34,6	34,6	40,4	41,9	41,2	41,6	45,9	43,8
Privado	0,9	0,8	0,9	3,3	3,4	3,4	18,2	14,8	16,4
Ninguno	64,5	64,6	64,5	56,3	54,7	55,5	40,3	39,3	39,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Barrón 2008, y datos suministrados por el autor.

Nota: ^a Datos de ENAHO 2002.

efectuar una clasificación comparable con nuestros datos. Ahora bien, las primeras encuestas preguntaron por la lengua hablada en casa, lo que arrojó alrededor de un 10 por ciento de quechua o aimara.⁶ Las de 2000 y 2004 no hicieron dicha pregunta, pero sí invitaron a las personas a que dijeran su origen étnico. Como ya explicamos, esto lleva a una marcada subrepresentación, puesto que la gente esconde su identidad: la cifra se encuentra alrededor del 10 por ciento. El cuadro 3.5 muestra las desigualdades grupales en mortalidad infantil sobre esta base: son significativas. No podemos decir cómo es que una clasificación distinta afectaría los resultados sobre mortalidad: con esta medida solo podemos registrar desigualdades significativas.

6. No reproducimos los datos correspondientes a 1992 puesto que la encuesta de dicho año subrepresentó seriamente a las zonas de la sierra afectadas por la violencia. Véase Hall y Patrinos 2006.

CUADRO 3.5

===== DESIGUALDAD HORIZONTAL EN LA MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN ENNIV^a =====
(RATIO INDÍGENA/BLANCO-MESTIZO)

Año	Desigualdades indígena/blanco-mestizo
1996	1,76
2000	1,85
2004	1,93

Fuente: Encuestas ENNIV.

Nota: ^a Clasificación por lengua hablada en casa.

Otro conjunto de indicadores lo brinda la calidad de la vivienda y el acceso a servicios para el hogar. Como vemos en el cuadro 3.6, el acceso al agua potable, el alcantarillado y la telefonía es progresivamente menor entre los grupos, y la vivienda es más primitiva. Solamente el 40 por ciento de los hogares “indígenas” está conectado a un sistema de alcantarillado, en tanto que sí lo está el 93 por ciento de los “blancos”; por otra parte, el 95 por ciento de estos últimos tiene agua potable, en comparación con 57 por ciento del grupo “indígena”.

Acceso al empleo asalariado

Nuestra tercera fuente de información es la igualdad o la carencia de ella en el acceso al empleo asalariado. Esto fue analizado cabalmente por Figueroa y Barrón (2005) y por Figueroa (2008), obra esta última que usamos aquí. Una fuente importante de exclusión del mercado laboral son las desiguales oportunidades educativas, que ya hemos examinado. Otra vía a explorar es si la población indígena está sobrerrepresentada en la categoría de desempleados y subempleados, controlando por los niveles de educación. Figueroa (2008) desarrolla una metodología que controla por la educación: él toma como “subempleado” a todos aquellos autoempleados cuyo ingreso es inferior al salario promedio de su categoría étnica.⁷ La exclusión del mercado laboral, que es mayor que la del efecto del capital humano diferencial, es entonces la suma del desempleo y subempleo así medidos.

7. Nótese que esta medida del subempleo se refiere solamente a uno de los componentes de la oferta laboral excedente y difiere de la medición convencional del subempleo, que usualmente se relaciona con ingresos provenientes del trabajo que son menores al salario mínimo.

CUADRO 3.6

== SERVICIOS DE LOS HOGARES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA POR GRUPO SOCIAL ==
(PORCENTAJES)

	“Indígenas”	“Mestizos”	“Blancos”	Perú
Agua potable ^a	57,4	82,4	95,0	63,9
Alcantarillado ^b	39,8	76,5	92,8	49,2
Telefonía ^c	17,3	46,6	80,7	25,2
Paredes ^d	81,3	86,6	96,0	82,7
Piso ^e	44,4	80,0	96,7	53,4
Techo ^f	40,3	63,1	88,8	46,3
Media de habitaciones per cápita	0,8	1,0	1,4	0,9
Combustible de cocina ^g	26,9	60,2	89,4	35,7

Fuente: Barrón, 2008, y datos suministrados por el autor.

Notas: ^a Conexión de agua potable en la vivienda.

^b Hogar conectado al sistema de alcantarillado (ningún pozo negro, etc).

^c Hay al menos una línea de telefonía fija o móvil en el hogar.

^d Paredes: 1: ladrillo, cemento, piedra, adobe; 0: quincha, barro, madera, estera, otro.

^e Piso, fuera de uno de tierra.

^f Techo: 1: concreto, madera; 0: caña, estera, paja, hojas de palma, otro.

^g El hogar usa electricidad o gas como combustible de cocina.

El cuadro 3.7 presenta los resultados de las tres variables sustitutas de los grupos étnicos. Vemos que tomando la población económicamente activa (PEA) de 25 años o más⁸ para el grupo “indígena/cholo”, resulta que la proporción de desempleados más autoempleados es de casi las dos terceras partes, en tanto que para el grupo “blanco” es de menos de un tercio.

8. Usualmente se subestima la PEA femenina de las áreas rurales (Figueroa 2001), pero este no parece ser el caso en la ENAHO de 2002. La razón estimada varón/mujer es sumamente parecida para el Perú urbano y el rural (entre 1,2 y 1,3) en distintos grupos de edad: de 14 en adelante, de 25 en adelante, de 14 a 65 y de 25 a 65.

CUADRO 3.7

OFERTA LABORAL SOBRANTE:^a 2003

(PORCENTAJES)

	“Indígenas”	“Mestizos”	“Blancos”	Total
Subempleo	59,0	36,4	25,1	51,4
Desempleo	6,6	8,1	6,4	7,0
Total de mano de obra sobrante	65,6	44,5	31,5	58,4

Fuente: ENAHO 2003.

Nota: ^a Incluye desempleo y subempleo.

Desigualdades políticas grupales

Si tomamos las mediciones estándares de los derechos políticos, entonces la posición del Perú puede catalogarse como buena a finales del siglo XX. El cuadro 3.8 muestra el derecho de sufragio según nuestras siete regiones. El número total de ciudadanos con derecho a sufragar se duplicó entre 1963 y 1980, de alrededor de 45 a 80 por ciento. Como vemos en el cuadro 3.8, el incremento fue mayor en las áreas más densamente pobladas por gente indígena. La posesión de los documentos de identidad también está muy difundida, incluso entre las mujeres. Se observan las desigualdades usuales de etnicidad y género, pero no son muy grandes. Sin embargo, entre los que aún se hallan excluidos, la inmensa mayoría está constituida por mujeres indígenas de la sierra o de la Amazonía.

No obstante, a pesar de las mejoras, los capítulos que siguen muestran cómo el sistema político aún se las arregla para privar de sus derechos a la gente, de modo que necesitamos una medida de “resultado”. En principio, sería razonable asumir que una mayor participación electoral generaría un mayor porcentaje de población indígena en el gobierno, capaz de defender a la población marginal, y esto es lo que quisiéramos medir para tener una visión objetiva de la igualdad política grupal. Sin embargo, y como ya se explicó, enfrentamos un serio problema de falta de información, puesto que solamente tenemos los apellidos para usarlos como variable sustituta. Debemos recordarle al lector que únicamente podemos evaluar la *tendencia*, dado que ignoramos la proporción de personas con apellidos indígenas en el país, además de que no podemos resolver el problema de que la gente indígena tal vez haya perdido su segundo apellido de raigambre étnica en el proceso de mestizaje.

CUADRO 3.8

==== PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS PARA VOTAR EN DISTINTAS REGIONES^a ====

Regiones	1963	1980	1998	2001
Lima (centro) no indígena	100	100	100	100
Lima (periferia) indígena	69	77	86	88
No indígena (centros regionales)	45	70	94	98
Costa indígena (periferia)	54	76	97	100
Amazonía indígena (periferia)	39	53	75	84
Andes del centro y norte indígenas (periferia)	36	64	84	85
Andes del sur indígena (periferia)	19	61	82	83

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tuesta Soldevilla (1994), ONPE (padrones electorales de 1998 y 2001), y censos de población del INEI de 1961 y 1993.

Nota: ^a Porcentaje de personas registradas para sufragar como proporción del total en edad de votar.

Habiendo reconocido estos problemas, vemos que la tendencia de la participación de la gente indígena en el Congreso ha sido positiva, pero moderada. La figura 3.1 muestra los resultados de las elecciones parlamentarias, donde vemos un claro incremento en la participación desde 1995.⁹ Es interesante ver la distribución de los candidatos indígenas entre los partidos en el periodo 2001-2006, cuando su proporción fue más alta. Renacimiento Andino tuvo el 24 por ciento de los candidatos con nombres indígenas y Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, el 21 por ciento. En 2001, el segundo colocó al 38 por ciento de sus candidatos con nombres indígenas en el Congreso (10 de 26). Estos diez miembros electos representaban la mayoría de quienes tenían nombre indígena y estaban

9. Las reglas para la conformación del Congreso han ido cambiando a lo largo del tiempo. Con la Constitución de 1979, el país tenía un Congreso bicameral, conformado por un Senado de sesenta miembros y una Cámara de Diputados de 180. Los representantes eran elegidos para mandatos de cinco años, y las elecciones coincidían con los comicios presidenciales. De acuerdo con dicha Constitución, se usaba en ambas cámaras una representación proporcional de las listas partidarias: distrito único para el Senado y representación departamental para la Cámara de Diputados. Luego del autogolpe de Fujimori en 1992, el Congreso Constituyente Democrático de 1993 estableció una única cámara de 120 miembros, todos ellos elegidos bajo el mecanismo de distrito electoral único. El Congreso de 2001 volvió al modelo proporcional de la representación departamental, pero mantuvo una sola cámara. Se formaron veinte distritos electorales, cada uno de los cuales representaba a por lo menos un departamento.

en el Congreso; ningún otro grupo presentó un número significativo de candidatos con dicho tipo de nombre. Los partidos de derecha presentaron el menor porcentaje de candidatos con nombre indígena: Acción Popular (AP) y Unidad Nacional tenían 9 y 8 por ciento, respectivamente. Solamente un candidato de nombre indígena de este segundo partido fue elegido. En 2006, la distribución fue distinta. La mayoría de los candidatos con nombres indígenas estaba en partidos nuevos y pequeños, que obtuvieron menos del uno por ciento de los votos. La distribución en los partidos nacionales fue como sigue: 6 por ciento en el APRA, 17 por ciento en el Frente de Centro, liderado por Valentín Paniagua, y 13 por ciento en la agrupación de Ollanta Humala.

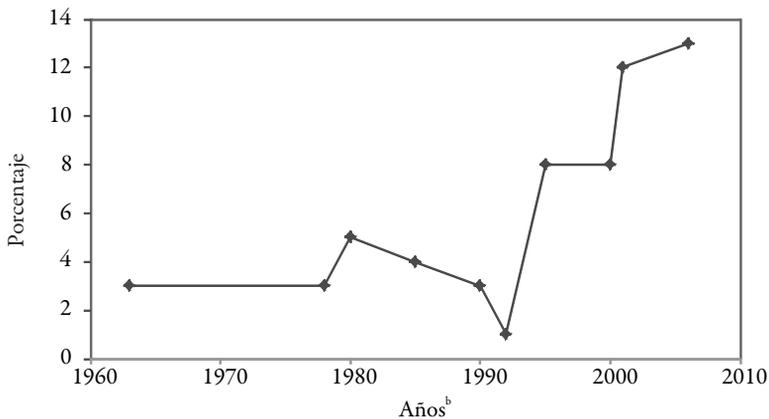
La tendencia de la participación de personas con nombres indígenas en las municipalidades provinciales como alcaldes es similar a la del Congreso: positiva, pero moderada (figura 3.2).¹⁰ Las elecciones municipales se llevan a cabo oficialmente en el Perú desde 1963, pero fueron interrumpidas en 1968 por el golpe militar de Velasco y no volvieron a efectuarse sino hasta 1980. Como la base de datos estaba organizada por provincias, nos fue posible ver la tendencia de los distintos grupos geográficos. El cuadro 3.9 muestra los resultados. Es importante advertir que estos porcentajes no pueden ser leídos entre los grupos con fines comparativos, puesto que cada región podría tener una proporción distinta de personas con nombre indígena. Podemos, sin embargo, ver la tendencia en cada región. Queda claro, en particular, que ella es positiva para la mayoría de los colectivos, pero la tendencia de los alcaldes indígenas es consistentemente positiva en la sierra sur. La situación cambió de casi ningún alcalde provincial con apellido indígena en 1963 a cerca del 40 por ciento en 2003.

En el Perú, el gabinete está conformado por 16 integrantes nombrados por el presidente de la República.¹¹ El examen de una lista completa de ministros desde

10. El territorio peruano se encuentra dividido en 25 regiones (antes departamentos), subdivididas a su vez en 180 provincias. Estas últimas están divididas en 1747 distritos. Esta es la situación hoy en día, pero ella ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

11. Las carteras de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas (llamado en esa entonces "Hacienda") se crearon después de la independencia. Justicia, Educación y Transportes y Comunicaciones vieron la luz en el siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo XX, se establecieron los ministerios del Interior, Agricultura, Salud, Trabajo y Asuntos Sociales, Marina, Ejército y Aviación. En el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1974) se crearon varios ministerios relacionados con los sectores productivos: Industria, Comercio y Turismo, Energía y Minas, Pesquería, y Vivienda y Construcción. El Ministerio de la Presidencia fue creado en 1985 por Alan García y fue conservado por Alberto Fujimori, pero se le desactivó en 2001. Las tres armas de las Fuerzas Armadas fueron unidas en el Ministerio de Defensa en 1987, en tanto que el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, que vio la luz en 1996, fue rebautizado como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en 2001.

FIGURA 3.1
 NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONGRESO CON NOMBRE INDÍGENA 1963-2006^a

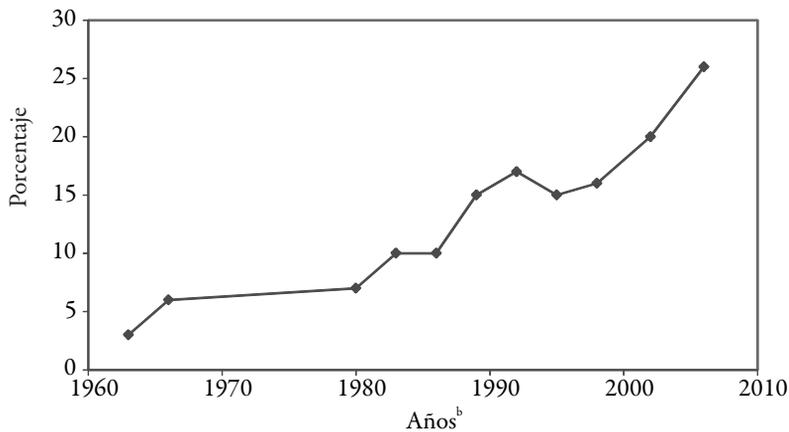


Notas:

^a Los puntos corresponden a los años de las elecciones.

^b No hubo elecciones al Congreso entre 1960 y 1978.

FIGURA 3.2
 ALCALDES PROVINCIALES CON NOMBRE INDÍGENA 1963-2006^a



Notas:

^a Los puntos corresponden a los años de las elecciones.

^b No hubo elecciones al Congreso entre 1960 y 1978.

CUADRO 3.9

===== ALCALDES PROVINCIALES CON APELLIDO INDÍGENA (1963-2003) =====
(PORCENTAJES)

	1963	1980	1983	1986	1989	1993	1995	1998	2003
Centro local	0	0	8	8	4	8	13	4	17
Resto costa	10	0	5	5	10	0	10	5	15
Resto Amazonía	0	0	11	6	17	22	17	11	22
Resto centro y norte	1	1	3	6	5	9	8	8	9
Resto Andes del sur	2	18	16	15	27	29	27	33	38

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Tuesta Soldevilla (1994) e información del JNE.

1968 solo halló seis con nombre indígena en siete periodos (uno por ciento). También quisimos examinar el cargo de viceministro, pero no encontramos casi ninguna información organizada. Pero reuniendo los pocos datos provenientes de fuentes oficiales y de entrevistas con antiguos funcionarios, encontramos que casi ningún viceministro en educación (los datos empiezan en 1986), agricultura (desde 1983) e interior (desde 1992) tenía apellido indígena. Los dos casos excepcionales eran agricultura e interior.

De otro lado, la selección de jueces y fiscales mejoró recientemente¹² e incorporó menos elementos subjetivos, aunque, según los especialistas, sigue sin ser ideal. Por ejemplo, estos nuevos métodos dan más peso a los exámenes que a las entrevistas personales. Sin embargo, en una base de datos de 2412 jueces y fiscales escogidos en el periodo 1995-2004 no hallamos ninguna tendencia clara a un incremento en el número de los de nombre indígena. Parte del problema está dada por los datos limitados, que comienzan en 1995, cuando los jueces de primera

12. La rama judicial del Estado la encabeza una Corte Suprema de 16 miembros, con sede en Lima. El Consejo Nacional de la Magistratura nombra a los vocales de esta corte. Las cortes superiores de las capitales departamentales se encargan de las apelaciones de las decisiones tomadas por las cortes inferiores. Los juzgados de primera instancia se encuentran en las capitales de provincia y están divididos en civiles, penales y especiales. El Poder Judicial, además, ha creado varios juzgados temporales especializados en un intento por reducir el inmenso número de casos atrasados que esperan una sentencia. En el nivel inferior de la pirámide se encuentran los jueces de paz alfabetos y analfabetos. Los fiscales, asimismo, forman parte del sistema y pertenecen a cada uno de los distintos niveles del sistema judicial.

instancia no eran seleccionados. El cuadro 3.10 muestra los resultados de jueces y fiscales de nombre indígena. No obstante, lo interesante es la distribución de los mismos en la jerarquía del sistema. Los jueces de nombre indígena están concentrados en las capas inferiores de la pirámide (jueces de paz y de primera instancia) y hallamos menos casos en la Corte Suprema.

Podemos extraer algunas conclusiones de este análisis. Con los datos disponibles, este sugiere que los pueblos indígenas eran los que menos derechos tenían antes de las reformas electorales y constitucionales y que estas ayudaron significativamente a su inclusión en el sistema electoral. Sin embargo, si bien hoy la población indígena puede votar masivamente y postular a cargos electos y nombrados, parecería que este logro no ha sido significativo, en particular en el ámbito central. El Estado continúa siendo dirigido mayormente por blancos y mestizos de clase media alta. Además, la participación de las personas indígenas —los Ayai-poma, Carhuaricra y Sucari, por ejemplo— formó parte de un frágil proceso de inclusión. La forma en que la democracia se ha desarrollado en el Perú, carente en gran medida de un sistema de partidos políticos y de organizaciones sociales, ha abierto la oportunidad para que los políticos empleen símbolos, demandas y candidatos étnicos, para así atraer a los votantes indígenas (para una detallada relación, consúltese Madrid, 2009). Y, sin embargo, el uso de la etnicidad se ha dado en ausencia de una organización indígena efectiva y, por ende, no ha tenido como resultado el desarrollo de canales institucionales de representación política para articular, discutir y alcanzar soluciones para las demandas de estos pueblos. En los capítulos 7 y 8, exploraremos la débil politización de los reclamos étnicos.

En general, hallamos, además, muy pocos casos de mujeres indígenas. Dados el problema del tamaño de la muestra y la dificultad que hay para realizar una identificación por medio de los apellidos, vacilamos a la hora de extraer conclusiones sólidas, pero los datos “sugieren” que la participación de estas mujeres es aún más difícil que la de los varones.

Por lo tanto, salvo por algunas importantes excepciones,¹³ no fue posible que una identidad o agenda política indígena emergiera a través de actores políticos de dicho colectivo, un factor que indica una seria desigualdad política grupal.

13. Durante su primer año en el Congreso, Hilaria Supa y María Sumire tuvieron cierto éxito en lograr que los miembros indígenas de dicho cuerpo político se presentaran como tales, reconocieran su identidad y hablaran a favor de los derechos de los nativos. Sus esfuerzos tuvieron cierta recompensa, pues se instaló un servicio en lengua quechua en la central telefónica del Congreso, así como se dio inicio a un amplio trabajo en comisiones en temas que afectan a los pueblos marginales (medio ambiente, discapacidad, extracción de materias primas, etc). Ellas tuvieron que enfrentar una notable discriminación (Entrevista a Hilaria Supa, Lima, 30 de noviembre de 2007).

CUADRO 3.10

===== JUECES Y FISCALES CON APELLIDO INDÍGENA POR PERIODO DE SELECCIÓN =====
 Y PUESTO EN LA JERARQUÍA
 (PORCENTAJES)

Año de selección	Corte Suprema	Corte Superior	Primera instancia	Juzgado de Paz	Porcentaje del total nombrado	Total nombrado
1995-1996	0	12			10	226
2000	0	13	15	14	15	708
2001-2003	8	10	19	13	15	650
2004	0	12	16	18	16	828

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes del Consejo Nacional de la Magistratura (1995-2004).

Percepciones de desigualdad entre los grupos

La encuesta de percepciones que explicamos y usamos en el capítulo 2 también dio información sobre la desigualdad, pero debemos recordar que en forma deliberada interrogamos a comunidades relativamente marginales, de modo que las opiniones de los peruanos blancos de clase media y alta se encuentran significativamente subrepresentadas. Se preguntó específicamente acerca de los efectos que la etnicidad tiene sobre las posibilidades de que una persona consiga empleo y acceda a servicios públicos, y más en general en torno a la dominación grupal en términos étnicos, así como el favoritismo y la discriminación del gobierno. También usamos nuestras entrevistas para explorar estas áreas de modo más íntimo. Estos son los tipos de percepciones que tocamos en esta sección.

Las entrevistas revelan que en tales comunidades marginales, la gente es sumamente sensible a las consecuencias que la etnicidad tiene para la desigualdad grupal. Esto también es evidente en la encuesta: el 52 por ciento considera que no ha cambiado la importancia que las características raciales y culturales tienen para conseguir oportunidades de éxito, o que ha ganado relevancia en el país con el paso del tiempo. Esta conciencia no es significativamente distinta entre los grupos étnicos, pero sí entre localidades (47 por ciento en Huanta, igual porcentaje en Bambamarca y 62 por ciento en Lima). La capital obliga a la gente, como vimos en la sección anterior, a enfrentar su etnicidad como un problema y/o como una fuente de orgullo.

Percepciones del efecto que la etnicidad tiene sobre el empleo

Al menos la mitad de todos los encuestados percibe que los antecedentes étnicos afectan las posibilidades que una persona tiene de conseguir empleo, ya sea en el sector público o en el privado (53 y 56 por ciento, respectivamente). El impacto que la etnicidad tiene sobre el acceso a contratos con el Estado es ligeramente menor (47 por ciento). Las diferencias entre las percepciones de —quienes se identifican a sí mismos como— cholos/indígenas y blancos/mestizos son estadísticamente significativas (la pregunta era en general en torno al sistema, no sobre las experiencias personales). Una proporción más alta del primer grupo que del segundo percibe los efectos de la etnicidad: 61 *vs.* 49 por ciento, respectivamente, para el empleo en el sector público, y 67 *vs.* 50 por ciento, respectivamente, para el empleo en el ámbito privado.

Las diferencias entre localidades son significativas. Más del 70 por ciento en nuestro caso de San Juan de Lurigancho cree que las características étnicas afectan las posibilidades que una persona tiene de conseguir empleo tanto en el sector público como en el privado; en Huanta, el 52 por ciento cree que esto es así en el empleo estatal y 66 por ciento en el privado; y en Bambamarca, el porcentaje de personas que creen lo mismo es mucho menor: 38 por ciento para el público y 35 para el privado. Con las entrevistas, aprendimos que es probable que los serranos que emigran a Lima sientan más discriminación que aquellos que no lo hayan hecho. Estos resultados parecen confirmar dicha idea, puesto que nuestro caso en la capital está conformado mayormente por migrantes.

Las entrevistas nos permitieron profundizar nuestra comprensión de la forma y la manera en que esta discriminación se experimenta, y por qué se la percibe más en el sector privado que en el público. Según las entrevistas, se considera que la “preparación” y las “calificaciones” son importantes, pero que la clave parecería ser la “buena presencia”.¹⁴ Eliana, de Huanta, nos dijo: “Sí, hay discriminación cuando se busca empleo. Ellos piden gente con buena presencia. Eso no quiere decir que tengas un buen vestido o que sepas expresarte, sino una persona que sea atractiva, bonita; si no eres atractiva, más oscura, te dicen ¡ay no!”¹⁵ Quienes se identifican a sí mismos como blancos son particularmente conscientes de este mecanismo. Florencia, que vive en Lima, añadió que lo primero que ven las

14. Entrevistas realizadas en junio de 2006 a Marco Balbín (el 20), Pablo Cavero (el 21) y Simón Barreto (el 22), las tres en Bambamarca; a Soledad Tello en Huanta (el 28); y a Karen Valcázar (el 15) y Karla Ramos (el 16), las dos en San Juan de Lurigancho.

15. Entrevista con Jacinta Cáceres, Huanta, 27 de junio de 2006.

CUADRO 3.11

EL ORIGEN ÉTNICO AFECTA EL ACCESO A... ^a			
(PORCENTAJE QUE DICE QUE SÍ)			
		Empleo en el sector público	Empleo formal en el sector privado
Huanta (Ayacucho)	Subtotal	100	100
	Blancos	7,3	4,7
	Mestizos	52,7	52,8
	Cholos	15,4	18,9
	Indígenas	24,6	23,6
Bambamarca (Cajamarca)	Subtotal	100	100
	Blancos	21,0	18,3
	Mestizos	68,4	67,6
	Cholos	7,9	9,9
	Indígenas	2,6	4,2
San Juan de Lurigancho (Lima)	Subtotal	100	100
	Blancos	3,0	5,0
	Mestizo	38,1	37,1
	Cholos	33,6	31,4
	Indígenas	25,4	26,4

Fuente: Encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

Nota: ^a Como estamos tratando con percepciones registradas en entrevistas informales, hemos elaborado la clasificación según la manera en que la gente se identificaba a sí misma.

compañías en la capital es si las muchachas son delgadas, altas, si tienen buenos modales y una cara bonita. “El color también es un criterio”, añadió. Florencia tenía una amiga que le dijo que una cadena de supermercados estaba contratando personal. Cuando fueron allí, un hombre separó a su amiga de la cola, a pesar que esta tenía las mismas calificaciones que ella. Florencia cree que ello se debió a que su amiga es más oscura.¹⁶

16. Entrevista con Fátima Aguirre, San Juan de Lurigancho, 17 de junio de 2006.

La percepción de la discriminación sobre la base del “aspecto físico”, ya sea puramente estética o étnica, es mayor en la búsqueda de empleo en el sector privado que en el público. No obstante, también se la percibe en este último, pero ligada más a la pertenencia a un partido y a los contactos. Gertrudis, de Bambamarca, sostiene que las entrevistas personales son convenientes porque ellas no solo evalúan su desempeño oral, sino también “su pinta” (el aspecto físico); sin embargo, para encontrar empleo en el gobierno, “las calificaciones no son importantes, sino más bien si uno está afiliado al partido en el poder o no”.¹⁷ Soledad, de Huanta, afirma que el gobierno regional de Ayacucho solamente ofrece trabajo a personas afiliadas al partido que controla el mismo: “para tener empleo en el gobierno se necesita tener relaciones con el partido gobernante”.¹⁸ Aunque las respuestas dadas en las entrevistas restan importancia a la etnicidad en comparación con la afiliación partidaria, esta es una percepción que proviene de una pregunta abierta, en comparación con la pregunta cerrada del cuestionario. El énfasis prestado a la afiliación a un partido no significa que el elemento étnico no esté presente.

Percepciones de los efectos que la etnicidad tiene sobre el poder político

Otro grupo de preguntas del cuestionario buscaba explorar las percepciones existentes en torno a si un grupo étnico tenía o no poder en cuatro instituciones del Estado (gobierno local, gobierno central, las capas superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas) y en dos del sector privado (las grandes empresas privadas y los medios de comunicación). Esta era una pregunta cerrada, y se pidió a los entrevistados que indicaran en qué instituciones era que cada grupo étnico tenía poder. La identificación del poder en manos de los blancos era significativa en todas las distintas instituciones, salvo por el gobierno local, donde se percibía que los mestizos tenían más poder (véase la figura 3.3). En el caso del gobierno central, el porcentaje de personas que creen que los mestizos tienen poder es cercano al porcentaje de quienes afirman que lo tienen los blancos, pero aun así es significativamente distinto. Un porcentaje relevante, aunque pequeño, cree que los cholos tienen poder en el gobierno central.¹⁹ La proporción de personas que

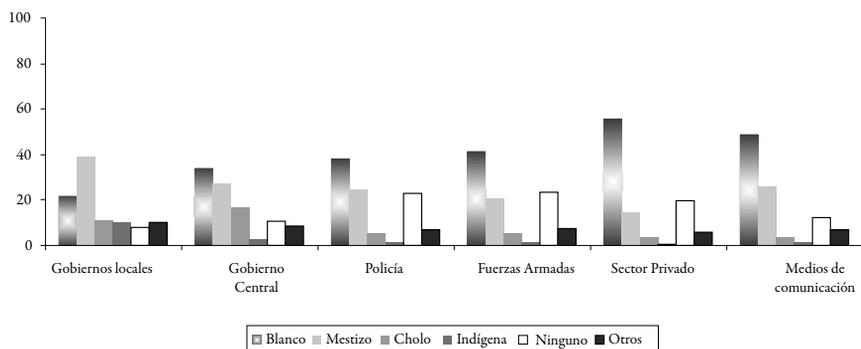
17. Entrevista con Gertrudis Valverde, Bambamarca, 22 de junio de 2006.

18. Entrevista con Soledad Tello, Huanta, 28 de junio de 2006.

19. Esto, ciertamente, está asociado con la presidencia de Alejandro Toledo, quien tenía el mando al momento en que se llevó a cabo la encuesta, y quien ha señalado repetidas veces sus orígenes indígenas y/o cholos.

FIGURA 3.3

== ¿QUÉ GRUPOS ÉTNICOS CREE QUE TIENEN PODER EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES? ==
(PORCENTAJES)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta de percepciones del CRISE, 2006. Notas: Total = 600.

afirman que los blancos tienen poder en el sector privado y los medios de comunicación es, de lejos, la más grande.

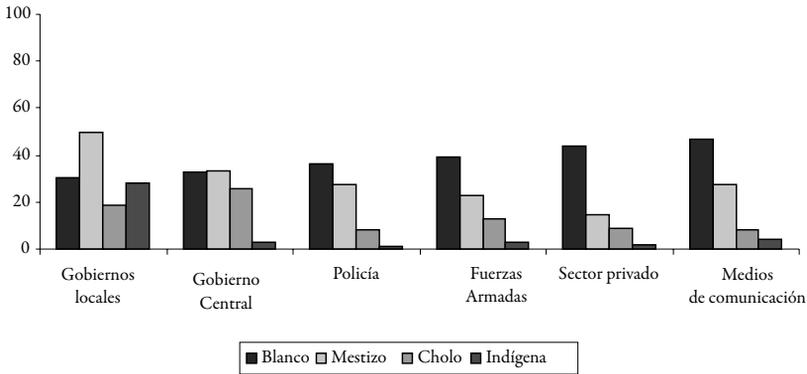
Cuando evaluamos las percepciones del poder en distintas instituciones públicas, encontramos varias diferencias significativas entre nuestros casos. El poder en el gobierno local y central es percibido de modo significativamente distinto en San Juan de Lurigancho en comparación con Huanta y Bambamarca. Para la mayoría de quienes viven en la capital, el poder de ambos gobiernos está en manos de los blancos, en tanto que para la mayor parte de quienes residen en Huanta y Bambamarca el poder del gobierno local está en manos de los mestizos y el del gobierno central lo comparten estos últimos con los blancos.

En Huanta y San Juan de Lurigancho, al preguntar acerca del poder en las capas superiores del escalafón policial y militar, un porcentaje más alto consideraba que los blancos conformaban el grupo dominante (el porcentaje para la Policía es de 46 y 53 por ciento, respectivamente, y de 47 y 55 por ciento, respectivamente, para las Fuerzas Armadas). En cambio, en Bambamarca la postura más común es que ningún grupo étnico domina la Policía (43 por ciento) o el Ejército (40 por ciento).

En el caso de las grandes empresas privadas y de los medios, los resultados son definitivamente mucho más nítidos en todas las localidades. Sin embargo, son significativas las diferencias existentes entre Huanta y San Juan de Lurigancho, de un lado, y Bambamarca, del otro. En los dos primeros, el 71 y el 61 por

FIGURA 3.4

PERSONAS QUE CREEN QUE EL GRUPO ÉTNICO AL QUE PERTENECEN TIENE PODER
(PORCENTAJE QUE DIJO QUE SÍ, POR INSTITUCIÓN)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

Nota: Total = 600; blancos = 54, mestizos = 330, cholos = 108, e indígenas/andinos = 108.

ciento, respectivamente, cree que en las grandes empresas privadas el poder está en manos de los blancos. En Bambamarca, en cambio, el porcentaje es menor y casi igual al del que cree que ningún grupo étnico en particular es el dominante. Los resultados para los medios de comunicación son similares a los de las grandes empresas privadas.

El análisis entre grupos étnicos resulta particularmente revelador cuando examinamos el porcentaje de quienes creen que las personas del grupo étnico al cual se han agregado tienen poder o no. Salvo por el gobierno local, los indígenas se ven a sí mismos como carentes de poder. Los blancos son el grupo con la mayor percepción de sí mismos con poder en la Policía, el Ejército, el sector privado y los medios de comunicación. En todas las instituciones, los mestizos se ven más poderosos de lo que los cholos, a su vez, se consideran a sí mismos. En el gobierno local, los mestizos indican que son incluso más poderosos que los mismos blancos (50 vs. 30 por ciento, respectivamente). Con respecto al gobierno central, las autopercepciones del poder son relativamente similares entre blancos (33 por ciento), mestizos (33 por ciento) y cholos (26 por ciento), pero el contraste con la autopercepción indígena resulta notable (3 por ciento).

Las entrevistas nos permitieron profundizar nuestra comprensión de cómo es que se percibe al poder. En contraste con la encuesta, en aquellas la pregunta era abierta: “¿quién crees que tiene poder en el país y en tu comunidad?”. Las

respuestas mostraron que el poder ciertamente es percibido como algo que es a la vez político y económico. Solamente uno mencionó la raza o las características étnicas. La ausencia de respuestas que consideraran la pregunta desde esta última perspectiva resulta notable cuando la interrogante se plantea en forma abierta. El poder político fue asociado directamente con el presidente (en el país) y el alcalde (en la localidad). El énfasis dado a la presidencia es sumamente fuerte en los testimonios, especialmente en Bambamarca. Tenemos así el caso de Liliam, para quien el poder está primero “en Dios” y luego “en el presidente”,²⁰ en tanto que para Fátima “el presidente tiene el poder en el país tal como los padres lo tienen en su casa”.²¹

En Huanta, también se consideraba sumamente importante al presidente y al poder político, pero en general se les reputaba como subordinados al poder económico. Beatriz afirmó que Estados Unidos tiene poder sobre el Perú en la economía, mientras que dentro del país el poder le pertenece a las “empresas privadas”.²² Lucio sostuvo que los ricos y el gobierno tienen el poder, pero agregó que este último trabaja para “los ricos” y no para el “pueblo”.²³ Por último, Pablo, de Bambamarca, afirmó que las grandes empresas privadas tienen el poder y compran a los políticos y a los medios de comunicación. Él nos contó que hace algunos años, la gente de Bambamarca organizó una huelga para protestar contra Yanacocha (una compañía privada que extrae oro en la zona). Según él, la huelga duró toda una semana y estuvo acompañada de manifestaciones y protestas, pero los medios, comprados por la empresa, no le hicieron publicidad.²⁴

Karina, de Huanta, fue la única que mencionó las características étnicas y raciales. Para ella, el poder pertenece a los grandes empresarios, a los que describe como “blancos, de cabellos rubios y vestidos con terno”. En su opinión, este grupo es más poderoso que otros: “los blancos están más involucrados en la política porque tienen más relaciones, parientes que ayudan, acceso a la educación y más oportunidades”.²⁵

La encuesta registró que el 57 por ciento de nuestros entrevistados cree que el gobierno discrimina a ciertos grupos, ya fuera por razones étnicas u otras, y el 61

20. Entrevista con Liliam Benicio, Bambamarca, 21 de junio de 2006.

21. Entrevista con Fátima Talavera, Bambamarca, 21 de junio de 2006.

22. Entrevista con Beatriz Calderón, Huanta, 27 de junio de 2006.

23. Entrevista con Lucio León, Huanta, 28 de junio de 2006.

24. Entrevista con Pablo Cavero, Bambamarca, 21 de junio de 2006.

25. Entrevista con Karla Ramos, San Juan de Lurigancho, 16 de junio de 2006.

por ciento piensa que favorece a algunos colectivos. La discriminación se expresó mayormente en términos de clase (52 por ciento aludió a “los pobres”) antes que étnicos, y el favoritismo en términos políticos (64 por ciento aludió a los “militantes políticos”) antes que de clase o étnicos.

Hubo algunas diferencias significativas entre los tres casos. La pregunta fue abierta y tendió a ser respondida en términos de clase, pero el énfasis en la discriminación de este tipo (“los pobres”) fue más fuerte en Bambamarca que en Huanta y San Juan de Lurigancho, donde el énfasis en la discriminación étnica fue notable y significativamente mayor (cuadro 3.12). De igual modo, los cholos tenían una percepción más fuerte de la discriminación étnica que los mestizos (cuadro 3.12). No hay diferencias significativas entre los casos con respecto al favoritismo del gobierno; en todos ellos se enfatizaron los contactos y afiliaciones políticos.

Vemos así un cuadro global de una percepción de discriminación y poder desigual, pero la imagen es mucho más aguda en nuestras comunidades marginales de Lima que en cualquiera de nuestros grupos de la sierra. Los informantes de la capital eran más conscientes de la etnicidad y su lado negativo, de la discriminación en el empleo y de que el poder está en manos de los blancos. Huanta y Bambamarca estaban más cerca el uno del otro, siendo algo menos probable que el segundo viera la discriminación étnica o el dominio de un grupo étnico en particular, incluso en el sector privado.

Conclusión

En estos dos capítulos, hemos intentado obtener una percepción general de las desigualdades grupales y la etnicidad en el Perú, empleando la “ventana” abierta por nuestras encuestas regionales. Intentamos reunir dos aspectos aparentemente imposibles de reconciliar: de un lado, en el Perú la identidad étnica nunca es nítida, pues la gente siempre está “en proceso”, esto es en un proceso de “modernización”, al cual ven como el abandono de sus raíces rurales/campesinas/andinas, no obstante lo cual al mismo tiempo sienten orgullo por dichas raíces. Estas dos dimensiones pueden coexistir en una misma persona.

De otro lado, las desigualdades que tienen como base el origen étnico *son* una realidad, pero para probar esto tenemos que medir lo inmensurable, usando medios estadísticos que definen con precisión a grupos que simplemente no pueden ser definidos con facilidad.

Empleando entonces nuestras variables sustitutas del origen étnico —el lugar de nacimiento y el apellido—, encontramos evidencias claras de la desigualdad

CUADRO 3.12

==== EL GOBIERNO Y LAS PERCEPCIONES DE LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN GRUPAL ====
(PORCENTAJES)

	Clase ("los pobres")	Étnica (indígenas y cholos)	Política (la oposición)	Otros	Total (cien por ciento)
Lugar					
Huanta	47,9	20,2	18,1	13,8	94
Bambamarca	64,4	5,1	9,3	21,2	118
San Juan de Lurigancho	43,8	18,8	18,8	18,8	112
Género^a					
Mujer	55,6	10,5	15,0	19,0	153
Hombre	49,7	17,5	15,2	17,5	171
Étnica^a					
Blancos	44,1	17,6	8,8	29,4	34
Mestizos	60,4	10,7	14,1	14,7	177
Cholos	36,1	23,0	18,0	23,0	61
Indígenas	50,0	13,5	13,5	17,3	52

Fuente: Encuesta de percepciones del CRISE, 2006.

Nota: ^aLas diferencias son significativas al nivel del 95 por ciento.

grupal sobre la base de la raza y la cultura. Las evidencias son consistentes tanto en nuestras medidas cuantitativas como en las percepciones que la gente tiene, tal como lo documentamos mediante nuestra encuesta y las entrevistas. La etnicidad importa en ambas medidas. Hay exclusión del mercado laboral: ambas mediciones lo indican. La gente percibe la exclusión: el trabajo cuantitativo sugiere que ella es fundamentalmente un producto del acceso desigual a la educación, aunque la discriminación salarial también juega un papel en este aspecto.

La desigualdad grupal que tiene a la cultura y la etnicidad como base coloca desproporcionalmente a la gente de origen indígena en el tercio inferior de la distribución del ingreso. Las personas indígenas están sumamente subrepresentadas

en el empleo del sector formal. A las mujeres indígenas les va mal incluso en el acceso a la educación primaria, y los varones tienen un acceso desigual a la formación secundaria y superior. Los indicadores de salud muestran menos desigualdad en el acceso, lo que refleja un avance significativo en el suministro de este servicio en las áreas rurales, pero no contamos con información acerca de los resultados en la salud de la gente.

Los indicadores políticos son tal vez los más sorprendentes. No obstante una significativa mejora, en los últimos treinta años, con respecto al sufragio y a la democracia en el ámbito local, los indígenas todavía se hallan mal representados en todas las escalas del Estado y la judicatura. El problema es que la inclusión se dio en el ámbito individual: las personas indígenas todavía no cuentan con representación como grupo, cuestión esta que examinaremos con más profundidad en los siguientes capítulos.

El mundo, tal como se ve desde estas comunidades marginales, es manejado por personas ricas y blancas. Un concepto de sí mismos que carece de aspiraciones resulta de importancia central para el desempoderamiento, y se le comprende fácilmente en términos de las actitudes predominantes del prejuicio y la discriminación. Y tales actitudes se reproducen dentro de los grupos: este es uno de los resultados más vigorosos que hasta ahora hemos tenido. Si la gente asciende socialmente castigando a los que están debajo de sí, esta es una fuerza poderosa que destruye los intereses y la acción colectiva grupales. La presión individualizadora del mercado asiste y estimula esto. Pero aquí también operan otros elementos: así, con el tiempo las instituciones han ido creando mecanismos que excluyen a los pueblos indígenas en términos económicos y políticos. Para avanzar en nuestro análisis, necesitaremos en lo que queda del libro ver de qué manera se dio dicha evolución y por qué. Pero primero debemos explorar con mayor detenimiento el papel crucial que la educación tiene en las desigualdades grupales.

DESIGUALDADES PERSISTENTES EN LA EDUCACIÓN

EN COAUTORÍA CON ADOLFO FIGUEROA

Desde el campesinado peruano hasta el Banco Mundial, se considera que la educación es el elemento más importante con que poner fin a las desigualdades y la pobreza, y brindar no solo la auténtica movilidad social, sino también la integración. En el capítulo 5, veremos cómo durante todo el siglo XX la esperanza de alcanzar la integración nacional por medio de la educación impulsó el gasto social del gobierno peruano. Este capítulo documenta primero el deseo que los grupos marginales tienen de alcanzar la educación y luego confronta esto con la realidad: los datos muestran unas persistentes desigualdades grupales en aquella y en sus beneficios. En la segunda sección, analizaremos y documentaremos las razones que explican esto, para lo cual se contará con la ayuda de un modelo desarrollado por Adolfo Figueroa. La tercera sección cierra el capítulo y examina el argumento presentado en los capítulos del 2 al 4.

En nuestro trabajo de campo, nos topamos con un tema recurrente: el de los sacrificios que las personas indígenas estaban decididas a efectuar para conseguir educar a sus hijos. A juzgar por las entrevistas, los serranos más humildes hacían el mayor esfuerzo posible para conseguirla. Los niños pobres de los Andes o bien caminan varias horas con el objeto de llegar a la escuela, en especial para asistir a la secundaria o para evitar las escuelas primarias “multigrados” (que tienden a ser de muy baja calidad), o sino viven solos en habitaciones arrendadas en los pueblos. Sonia, una profesora de Huanta que enseña a niños de 11 años, nos dijo que la población indígena de la sierra arrienda habitaciones allí para que sus hijos puedan asistir a la escuela: “están lejos de su hogar, están desorganizados en su aspecto y sucios. Los otros niños les insultan y se deprimen porque su casa está

lejos y sus padres son pobres”.¹ Este testimonio fue repetido por otros profesores de Huanta.

Juana, de Bambamarca, ha enviado a tres de sus cuatro hijos a Lima, aunque tiene sentimientos encontrados de que a ellos les guste su nueva vida en la capital. Ella les ha visitado en cuatro ocasiones (luego de al menos 18 horas en ómnibus) y está trabajando duramente para pagar sus estudios. Por su parte, Neptalí Tipto, quien casi ha terminado la secundaria, camina y toma un ómnibus para asistir a la escuela en Huanta en lugar de acudir al colegio en Luricocha, que está más cerca de su pueblo. Él está orgulloso de asistir al colegio en Huanta: “Soy el único en Llanza”, dijo.²

¿Con qué fin?

Teniendo presente semejante esfuerzo y percibiendo las expectativas que yacen detrás de él, las cifras y las evidencias cualitativas de los resultados resultan conmovedoras. No es que la matrícula no haya crecido: sí lo ha hecho. El cuadro 4.1 usa la metodología y los supuestos explicados en el capítulo 3, agrupando a las personas según su lugar de nacimiento, lo que allí sostuvimos era la variable sustituta menos inadecuada del origen étnico en el Perú contemporáneo. Recordamos al lector que por “indígena” entendemos los que han nacido en las áreas rurales del país, sin importar dónde vivían al momento de realizarse la encuesta; que con “blanco” nos referimos a los que nacieron en Lima-centro; y que empleamos “mestizo” para designar al resto.

Los datos corroboran el avance en la alfabetización de los varones indígenas (92 por ciento, en comparación con el 98 por ciento para los hombres no indígenas). Pero el cuadro 4.1 muestra que, a pesar de todo, la brecha en la educación sigue siendo marcada: en efecto, los hombres indígenas que alcanzan el nivel secundario representan el 53 por ciento del nivel de los ‘blancos’ para la población de 25 o más años. La diferencia de género muestra dónde es que todavía radica el problema. Una cuarta parte de las mujeres “indígenas” es analfabeta y apenas una tercera parte está alcanzando el nivel secundario. Nuestro propio examen de cuatro localidades mostró un cuadro similar respecto del género: de aquellos con educación primaria o menos, el 73 por ciento del grupo indígena lo conformaban mujeres, y el 79 por ciento se definía a sí mismo como cholo. Tomando en

1. Entrevista con Soledad Tello, Huanta, 28 de junio de 2006.

2. Entrevista con Neptalí Tipto, Huanta, 28 de junio de 2006.

CUADRO 4.1

ALFABETIZACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO POR GRUPO ÉTNICO				
(PORCENTAJE DE QUIENES SABEN LEER Y ESCRIBIR EN CADA GRUPO)				
	Tasa de alfabetización 15+	Nivel educativo para la edad de 25+		
		Ningún nivel	Solo primaria	Secundaria o más
“Blancos”				
Hombres	99,1	0,0	4,1	95,9
Mujeres	99,5	0,6	8,2	91,2
Total	99,3	0,3	6,4	93,3
“Mestizos”				
Hombres	98,2	1,0	16,4	82,6
Mujeres	95,1	5,0	19,8	75,2
Total	96,6	3,1	18,3	78,6
“Indígenas”				
Hombres	91,7	6,2	43,0	50,8
Mujeres	75,6	21,4	63,4	35,2
Total	83,5	14,1	63,1	42,8

Fuente: Barrón, 2008, y datos proporcionados por el autor a partir de ENAHO 2002.

cuenta las externalidades ligadas a la educación femenina, este es un aspecto muy serio del enraizamiento de la desigualdad. Dejando de lado las cuestiones de los derechos humanos, es bien sabido que educar a las mujeres —incluso solo a nivel de primaria— tiene efectos beneficiosos en la salud de la familia, así como en la educación de la siguiente generación.³

El cuadro 4.2 muestra el grado de progreso a lo largo del tiempo. Entre los jóvenes, la brecha en la desigualdad grupal en términos de los años de estudio ha pasado a ser casi inexistente. La brecha indígena/blanco es de 0,5 para los mayores de 55, y de 0,8 para el grupo de edad de 25 a 34 años. La brecha, asimismo, cae a lo largo de las generaciones entre las mujeres, aunque sí es enorme entre las de mayor edad.

3. Para un examen autorizado, véase, por ejemplo, Frost et ál., 2005.

CUADRO 4.2

	AÑOS DE ESTUDIO POR EDAD Y GRUPO ÉTNICO				Total 25-65
	Grupo de edad				
	25-34	35-44	45-54	55-65	
"Blancos"					
Hombres	13,9	14,4	12,1	13,9	13,8
Mujeres	13,9	14,4	10,8	10,4	13,4
Total	13,9	14,4	11,4	11,6	13,6
"Mestizos"					
Hombres	12,0	11,9	11,4	9,7	11,6
Mujeres	12,1	11,5	9,8	8,1	11,0
Total	12,1	11,7	10,5	8,9	11,2
"Indígenas"					
Hombres	10,9	8,9	8,0	5,5	8,6
Mujeres	9,9	7,1	5,0	3,1	6,6
Total	10,4	8,0	6,5	4,3	7,6

Fuente: Barrón 2008, y datos suministrados por el autor a partir de la ENAHO 2002.

De este modo, en los primeros pero importantes pasos fundamentales de la matrícula y del saber leer y escribir vemos un progreso significativo, aunque todavía se mantiene algo de la brecha. Pero podemos también apreciar cuán reciente es la mejora. En relación con nuestra preocupación por el enraizamiento de la desigualdad a lo largo del tiempo, las jóvenes mujeres indígenas que crecieron y tuvieron su familia en las décadas de 1950 y 1960 todavía recibían una educación sumamente limitada, incluyendo el número de años de estudio.

La historia es menos impresionante cuando exploramos más datos sobre los logros. El cuadro 4.3 muestra las tasas regionales de desaprobación y deserción usando las mismas divisiones geográficas para sustituir el origen étnico.⁴ Vemos

4. Desafortunadamente, con la información del MINEDU no podemos efectuar una clasificación por lugar de nacimiento. Por esta razón, los datos no son del todo comparables con los mostrados en nuestros demás cuadros.

CUADRO 4.3

== ALUMNOS MATRICULADOS QUE DESAPROBARON O DESERTARON EN EL AÑO ESCOLAR 2004^a ==
(COMO PORCENTAJE DE LOS MATRICULADOS)

	Tasa de desaprobación	Tasa de deserción
Lima residencial	4,6	2,7
Resto de Lima	6,8	4,2
Centro local (capitales provinciales)	7,0	4,2
Resto de la costa	7,0	5,0
Resto de la Amazonía	11,0	8,0
Resto de los Andes del norte y del centro	10,4	8,5
Resto de los Andes del sur	8,6	7,6
Total	8,2	6,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ESCALE, MINEDU.

Nota: ^a Los datos para 1998 y 2001 muestran un patrón similar.

que la tasa de deserción en las regiones indígenas es el triple de la de las zonas más acomodadas de Lima, y la tasa de desaprobación es de más del doble.

El Ministerio de Educación ha comenzado a evaluar regularmente los resultados de los alumnos en matemática y comunicación. Los datos, que comparan a escolares de primaria con una lengua materna indígena con aquellos cuyo primer idioma es el español, vienen con una saludable advertencia, pero resultan sorprendentes:⁵ la Evaluación Nacional 2004 encuentra una asociación negativa entre la lengua materna indígena y el desempeño, que es estadísticamente significativo si mantenemos constantes el nivel socioeconómico, y consideramos cuán rural es la escuela y las restantes variables del estudio (MINEDU 2007: 18).

Además, si bien la matrícula viene alcanzando la paridad, al menos para los varones, las consecuencias que los años pasados en la escuela tienen sobre el ingreso no lo están haciendo. Los cuadros 4.4 y 4.5 son muy importantes. El primero de ellos presenta datos sobre el ingreso por nivel educativo y grupo social, y sugiere la existencia de una relación positiva entre el ingreso medio y el nivel educativo de toda la

5. El estudio fue efectuado para el cuarto grado de la escuela primaria. El MINEDU explica que el grupo de "lengua materna indígena" no conformaba una muestra representativa de dicha población (comunicación personal con Patricia Arregui, 28 de marzo de 2009).

población. También podemos observar esta relación positiva en cada uno de los tres grupos étnicos. Pero las curvas que vinculan el ingreso y la educación son distintas. Figueroa (2007) señala que la relación observada entre ingreso y educación es estadísticamente separable para cada grupo étnico, y demuestra que en cada nivel educativo el ingreso medio es mayor en el grupo de los “blancos”, que es más grande que en el de los “mestizos”, y que a su vez es mayor que en el grupo “indígena”. El cuadro 4.5 muestra que, a diferencia del cuadro 4.1, donde vemos que el grupo de edad más joven casi no experimentó ninguna brecha en los años de estudio, aquí casi no hay ninguna señal real de que la brecha en retornos de dicha educación mejore con el paso del tiempo (casi todas las relaciones son estadísticamente significativas, y la prueba de significación aparece en el apéndice de Figueroa 2008).

CUADRO 4.4
INGRESO MEDIO POR NIVEL EDUCATIVO Y GRUPOS SOCIALES (2003)
(1000 PERSONAS, SOLES/MES Y PORCENTAJES)

	“Indígenas”		“Mestizos”		“Blancos”		Total		
	N (%)	Ingreso medio	N (%)	Ingreso medio	N (%)	Ingreso medio	N	%	Ingreso medio
Nivel educativo									
Ninguno	9,6	171	1,9	297	0,0		604	7,1	180
Primaria	41,0	330	13,1	479	1,0	137	2.704	32,0	346
Secundaria	32,7	592	44,0	710	22,7	798	2.998	35,4	637
Técnico	9,6	844	17,2	912	15,8	965	1.001	11,9	876
Universitario	7,1	1.529	23,8	2.005	60,5	2.721	1.148	13,6	1943
Total	100,0	535	100,0	1.015	100,0	1.981	8.464	100,0	717
Total N	5.841		2.330		293		8.464		
%	69,0		27,5		3,5		100,0		
Años de estudio									
Media	7,6		11,4		14,2		9,0		
Mediana	8,0		11,0		15,0		11,0		

Fuente: Figueroa 2008: cuadro 2, a partir de datos de la ENAHO 2003.

Nota: N = población, 25 o más años (expansión de la muestra).

El ingreso medio es mensual, soles, octubre de 2003.

CUADRO 4.5

INGRESO MEDIO POR GRUPO DE EDAD Y GRUPO SOCIAL (2003)

(SOLES)

Grupo	Grupo de edad								Total	
	25-34		35-44		45-54		55-65		N	Ingreso medio
	N	Ingreso medio	N	Ingreso medio	N	Ingreso medio	N	Ingreso Medio	N	Ingreso medio
“Indígenas”	1.551	530	1.636	596	1.260	623	850	473	5.297	563
“Mestizos”	912	771	670	987	449	1.195	218	1.626	2.249	1.003
“Blancos”	146	1.456	111	2.455	29	2.982	6	1.648	291	1.991
Total	2.609	666	2.417	790	1.738	810	1.074	713	7.837	743
Ratio de ingreso I/B	0,4		0,2		0,2		0,3		0,3	
Ratio de ingreso M/B	0,5		0,4		0,4		1,0		0,5	

Fuente: Figueroa 2008: cuadro 6b, sobre la base de la ENAHO 2003.

Notas: N = población económicamente activa (millones de personas).

El ingreso medio es en soles/mes.

Además del ingreso del hogar, analizado en el cuadro 4.5, podemos también examinar los salarios. Los datos referidos a los salarios de los trabajadores aparecen en el cuadro 4.6 para los grupos relevantes, ‘mestizo’ (M) y ‘indígena’ (I), y la relación nuevamente es estadísticamente significativa.⁶ A un nivel educativo dado, M gana más que I.

Otra forma de ver los retornos de la educación es examinando la exclusión cuantitativa del mercado laboral, en otras palabras el desempleo y el subempleo. En el capítulo 3, presentamos datos sobre esta exclusión controlando por la educación. Ahora mostramos (cuadro 4.6) que los trabajadores indígenas reciben

6. En Figueroa 2008, se presentan los datos y las pruebas de significación. Aquí no incluimos el ingreso de los oficinistas. El número de empleados “indígenas” en la categoría es tan pequeño que no resulta significativo para nuestros fines.

CUADRO 4.6

===== SALARIO DE TRABAJADORES POR NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO ÉTNICO (2003) =====
(NIVELES MEDIOS)

Nivel educativo	"Indígenas"		"Mestizos"	
	N (%)	Salario medio en soles	N (%)	Salario medio en soles
Ninguno	6	306 ^a	1,8	349 ^a
Primaria	37,5	489	21,6	518
Secundaria	46,7	616	59,4	651
Técnica	8,1	695 ^a	13,8	712
Universitaria	1,7	763 ^a	3,4	796 ^a
Total	100		100	
Total N (1000s)	1.163		482	
Porcentaje	69,7		28,9	
Porcentaje de la PEA	19,9		20,7	
Años de estudio				
Media		8		9,7
Mediana		9		11

Fuente: Figueroa 2008: cuadro 3a.

Nota: ^a Número pequeño de observaciones: 10 por ciento o menos.

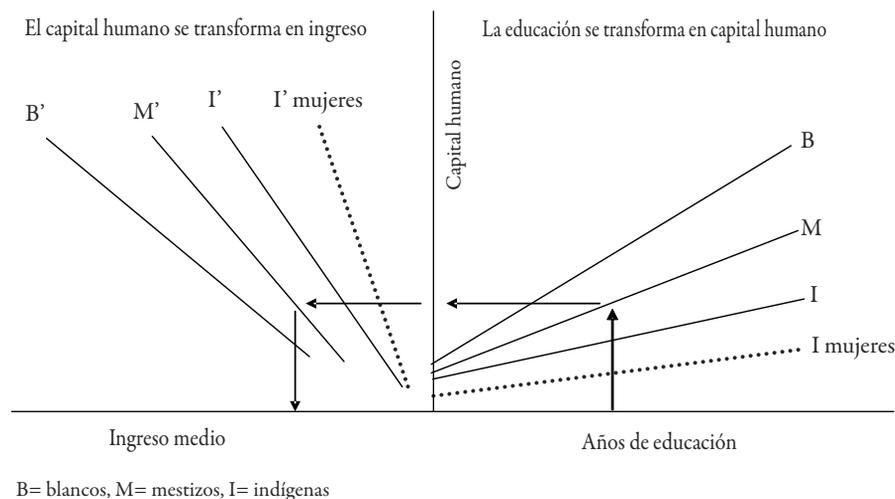
salarios más bajos que los no indígenas a un nivel educativo dado. Figueroa (2008) demuestra la significación estadística de los hallazgos.

¿Qué está pasando? Un marco y las evidencias

Para ayudar a analizar estos resultados, efectuamos una distinción fundamental, ya indicada. Las desigualdades entre grupos pueden surgir, en primer lugar, a partir de oportunidades distintas de adquirir educación. Podemos descomponer esto en las posibilidades de conseguir años de estudio y la capacidad/libertad de

FIGURA 4.1

== RELACIONES TEÓRICAS ENTRE EDUCACIÓN, CAPITAL HUMANO E INGRESO MEDIO ==



hacer algo con ello, esto es, convertir dicho esfuerzo en capital humano, definido en términos amplios (incluimos en este capital a una amplia gama de factores, que van desde la confianza y la autoestima a contactos y redes, así como a las capacidades más usuales). De otro lado, la capacidad de usar un nivel dado de capital humano para adquirir ingresos u otros activos sociales y políticos puede variar también entre grupos. Podemos representar esto gráficamente empleando el marco diseñado por Figueroa (2008). La figura 4.1 usa la misma abstracción que los cuadros anteriores, convirtiendo el mundo en “blancos”, “mestizos” e “indígenas”. Figueroa representa en el segmento de la derecha los muy distintos montos de capital humano y social que los años de educación representan para cada grupo. En el segmento de la izquierda, él representa las distintas transformaciones de dicho capital en ingreso, tomando a este como una variable sustituta de una gama más amplia de beneficios (la ciudadanía, por ejemplo).

Como ya se sugirió en el cuadro 4.1, si las funciones son descompuestas además por género, puede abrirse una brecha adicional, la cual sospechamos es particularmente pronunciada en el segmento del lado derecho, pero que aparece en ambos segmentos. Desarrollaremos este aspecto a medida que avancemos. Exploraremos ahora cuán lejos —y por qué— se hallan las mujeres en un distinto lugar de su curva con respecto a sus contrapartes masculinas, teniendo menos

acceso a años de educación, pero además operando en una curva que es inferior a la masculina.

Las distintas posibilidades de adquirir una educación

En el segmento de la derecha, la posición en la curva de cada grupo es impulsada, en primer lugar, por la disponibilidad de servicios educativos. Una oferta inadecuada significa problemas de calidad, a los cuales volveremos luego, pero también el reto de la distancia. En nuestras historias, hemos visto cómo las personas han luchado por superar este problema y a qué costo. Un caso típico es el de Eva Salazar, que vive en la comunidad de Occana, en Lauricocha (a 15 minutos de Huanta en automóvil). Ella nos dijo que no pudo terminar la secundaria: “Ya no podía hacerlo más”. Eva solía levantarse a las tres de la mañana para preparar la comida de su familia y a las seis iniciaba la caminata al colegio. El recorrido le tomaba alrededor de una hora bajo el sol, y su rostro frecuentemente estaba quemado.⁷

Carmela también nos dijo⁸ que, para ella, su experiencia formativa fue el haber sido enviada a Juliaca a los 8 años de edad a vivir con su hermano mayor, de 12 años, y su hermana menor, de 6, para que asistieran a la escuela. Ellos vivían completamente por su cuenta; sus padres les daban dinero, pero este en ocasiones se acababa. Carmela recuerda vívidamente (casi entre lágrimas) una época terrible de inundaciones en la que los precios de los alimentos fueron altos y en que ella y sus hermanos estuvieron separados de la familia; estaban desesperados, y compartían un poco de papas aplastadas.

Como estos casos muestran, la clave de la desigualdad a menudo es el *costo* del acceso a la educación, el cual tiene un componente monetario, pero aún más importante es que tiene uno inmenso en términos de la vida familiar, los valores, el aislamiento y la experiencia de la discriminación, sin contar además con un entorno que les brinde apoyo. Aquí nos concierne la forma en que toda esta experiencia podría afectar los años de educación adquiridos, pero también hay consecuencias mucho más profundas y traumáticas, a las que volveremos luego como parte de la cuestión de la transformación.

Otro punto importante es que el acceso dista de ser neutral con respecto al género. Kathy, de San Juan de Lurigancho, nos dice que ella dejó su curso de secretariado para salir a trabajar y contribuir a la educación de su hermano.⁹ Una

7. Entrevista con Eva Salazar, Huanta, 27 de junio de 2007.

8. Entrevista con Carmela Taype, Huancané (Puno), 10 de abril de 2007.

9. Entrevista con Karen Valcázar, San Juan de Lurigancho, 15 de junio de 2006.

poderosa historia intergeneracional de García (2003) habla por sí sola. La autora conversó con una mujer llamada Gloria, que al momento de la entrevista era madre y que fuera abusada sexualmente en su colegio por un profesor. “Avergonzada, jamás les contó este abuso a sus padres, pero ella también se rehusó a volver al colegio, y por esta razón fue severamente castigada por su padre”. Gloria prosigue:

Mis hermanos también se aprovecharon del hecho que mi padre me pegó, así que también me pegaban y me decían estúpida porque no iba al colegio. Pero yo sabía que sería peor si sabían por qué no quería ir. Tenía miedo de que me pegaran más fuerte por eso. (García 2003: 81)

Por dicho motivo, ella ahora solamente envía a sus hijos varones al colegio. De modo que el abuso privó a dos generaciones de niñas del acceso a la educación.

Oportunidades distintas: la conversión de años de estudio en capital humano

Diversos estudios han documentado la pobreza de recursos en las áreas rurales, y en las escuelas públicas por oposición a las particulares, distinciones que se superponen con la brecha que aquí nos interesa (Rivera 1979; Cueto, Jacoby y Pollit 1997; MINEDU 2007). Pero la brecha más importante está en la calidad de la oferta. Aquí hay abundantes evidencias acerca de las dificultades que existen para conseguir que profesores comprometidos y bien calificados se dirijan a las zonas más remotas, además del aprendizaje por paporroteo en las pequeñas escuelas rurales y la falta de libros de texto apropiados o incluso de libros *per se*.¹⁰ Los que visitan una escuela en la sierra comentan que cuando quiera que lleguen, es probable que los alumnos estén en el “recreo”. Esto refleja la falta de recursos, entre ellos la de profesores.¹¹

Una cosa es la calidad variable de la oferta, pero igual de importante es la capacidad de hacer algo con lo que se suministra. Como vimos ya en nuestros ejemplos anteriores, que mostraban la dimensión de género en la desigualdad grupal, la familia, con sus actitudes, puede marcar la diferencia en el acceso. Así, la familia y su condición socioeconómica, así como sus actitudes, son variables interventoras centrales en la transformación. Como vimos en el cuadro 3.2 del capítulo anterior, la etnicidad sí se correlaciona con la pobreza: los grupos indígenas

10. Ansión (2006) pasa revista a las evidencias.

11. Conversación con Barbara Hunt, consultora del MINEDU en 2000 y ex inspectora de colegios en Boston. La entrevista fue llevada a cabo en septiembre de 2007.

tienen por ello menores oportunidades que sus contrapartes blancas y mestizas de mejorar la capacidad de aprendizaje de sus hijos mediante la nutrición, la salud, la estimulación intelectual temprana y el lenguaje.

La nutrición tiene un efecto directo sobre el desarrollo del cerebro y de las capacidades cognitivas de las personas; también trae como consecuencia indirecta las enfermedades. Recientes estudios encontraron una significativa correlación negativa entre el desempeño en la escuela y el grado de desnutrición, a partir de una muestra de escolares en Lima, Puno-ciudad y Puno-campo. Además, en promedio, los episodios de enfermedad serán menos frecuentes en los niños que viven en Lima-centro que en los Andes. Las evidencias de la oferta de salud en el Perú dejan muy en claro que el acceso a los recursos es sumamente desigual entre regiones y entre áreas urbanas y rurales, de una manera que penaliza sobre todo a la población rural indígena.¹² Por ejemplo, a partir de estudios de caso en Puno y Huancavelica, el informe presentado por un grupo de médicos sobre la maternidad infantil en estas zonas concluye que

[1]a falta de asistencia médica disponible, accesible, aceptable y de calidad, que incluya el EmOC (cuidado obstétrico de emergencia o EmOC, por su sigla en inglés), es uno de los principales factores que contribuyen a las formas en que las mujeres —sobre todo las mujeres rurales indígenas— experimentan la pobreza y la exclusión en el Perú. (PHR 2007)

Las diferencias en las condiciones de salud están, asimismo, vinculadas con la salud medioambiental, que no es neutral con respecto a la condición socioeconómica. Las familias de Lima-centro con recursos pueden evitar problemas que involucran el daño a la salud medioambiental (la calidad del agua y el alcantarillado, y la contaminación del aire) optando por “salir” (en la célebre terminología de salida-voz [*exit-voice*] de Albert Hirschman), puesto que pueden construir exclusivos distritos residenciales. Las familias indígenas pobres en las áreas periféricas solamente pueden intentar resolver el problema usando su “voz”, esto es sus demandas, protestas, etc., y ya documentamos las desigualdades políticas grupales.

La lengua es otra condición que influye en la capacidad de un niño para beneficiarse con la educación. En primer lugar, una fuente importante de desigualdad es provenir de un entorno en el cual la lengua materna no es la dominante. Esto empeora con la forma en que la educación bilingüe se llevó a cabo en el Perú. Desafortunadamente, este tipo de educación se ha visto seriamente comprometido por dificultades en la comunicación. García (2003) reporta sus investigaciones

12. Rivera 1979. Para información sobre cómo el gasto en salud está concentrado por región y por estrato de ingreso, consúltense Ewig 2004; y Tamayo y Francke 1997.

efectuadas en la sierra del Cuzco, que mostraban cómo los honorables esfuerzos de los activistas por una educación bilingüe fueron malinterpretados por completo por los padres indígenas, quienes consideraban que sus hijos necesitaban solo del español para progresar. Una de las reuniones que aparecen mencionadas en el texto de García resulta tan instructiva que vale la pena citarla en extenso. Un profesor del programa bilingüe había arribado a la comunidad para discutir dicho programa con los padres de familia. Los varones hablaron primero, y reconocieron los beneficios potenciales del aprendizaje del español. El profesor explicó luego el valor de la participación de los padres. Entonces, una de las madres presentes se paró y comenzó a hablar en quechua:

Nuestros esposos no han sido claros. No nos parece que este cambio sea bueno para nuestros hijos. Ellos hablan quechua con nosotros y debieran hablar español en el colegio. Para eso es. Si es para enseñar quechua, ¿por qué debiéramos perder el tiempo enviando nuestros hijos al colegio, cuando pueden hablar[lo] en casa? Y ser un ciudadano significa hablar español.

Habiendo terminado, ella se sentó abruptamente y su esposo se puso de pie. Indicó lo siguiente:

Como mi mujer ha dicho, no estamos a favor del cambio. Nos parece que ahora no se espera que los profesores hagan trabajo alguno y que ustedes quieren que nuestros hijos sigan siendo pobres y sean como nosotros. Lo que más quiero para mi hijo es que no sea un campesino como yo. ¡Y ser un indio es peor! ¡Así que no debieran decirle [a nuestros hijos] que sean indios! (García 2003: 78)

La incapacidad de aceptar o siquiera escuchar el argumento de que los niños aprenden mejor el español si primero aprenden las capacidades de leer y escribir en su propia lengua, resulta del todo inteligible en términos de la historia que hemos narrado, que razonablemente da lugar a los temores que subyacen a esta cita. Pero el fracaso de la comunicación significa un deficiente refuerzo de los padres de la estrategia, por ejemplo reservando citas con los maestros y reforzando los mensajes de los profesores. La falta de apoyo se combinó con la escasez de recursos, todo lo que ha originado que la educación bilingüe resulte una estrategia ineficaz para combatir las serias limitaciones educativas involucradas cuando una lengua no es la dominante. Esto se ve reforzado si su primera lengua solo recientemente ha adquirido una cultura escrita.¹³

13. En el Perú, las lenguas indígenas tradicionalmente han sido orales. Searle (1995) sostiene que el pensamiento abstracto complejo requiere de palabras y símbolos, los cuales se desarrollan con mayor fluidez en una cultura que es tanto escrita como oral. Esta cuestión se examina con mayor detenimiento en Figueroa 2008.

Todo lo anterior afecta la capacidad de aprovechar la oportunidad que la matrícula brinda. Sin embargo, el impacto de las condiciones iniciales podría ser aún más profundo cuando interactúa con la discriminación, que frecuentemente se manifiesta en nuestras entrevistas. Aprendimos así que los niños a menudo experimentan el primer impacto hostil de un contexto urbano discriminador cuando se les envía a otro lugar a estudiar, y las consecuencias que ello tiene para la internalización de una baja autoestima, la pérdida de confianza, etc., las cuales son mucho mayores cuando el niño se encuentra solo en un mundo extraño.¹⁴

Soledad, una profesora chola de 38 años en Huanta, vivió ella misma esta discriminación. El primer año que asistió a la escuela no podía hablar el español muy bien, y en una ocasión no pudo hacer la tarea porque no entendió las instrucciones dadas por la profesora. Ella no tuvo el valor de explicar las razones de su fracaso y la profesora la golpeó contra la pizarra. El resto de la clase se rió y ella no volvió a la escuela hasta el siguiente año. Soledad recuerda que sus primeros momentos en el colegio no fueron agradables. Los estudiantes la insultaban por su lengua y por la ocupación de sus padres (campesinos). Fue solo hacia el final del segundo año que ella recuerda haberse sentido más cómoda con el español, y haberse sentido mejor en general.¹⁵

Aquí probablemente haya una dimensión de género. Si bien es cierto que nuestras entrevistas de campo no buscaban cubrir una muestra representativa, resulta ciertamente ilustrativo que los conmovedores relatos que describían al colegio como algo doloroso y que no brindaba compensación alguna provinieran de mujeres jóvenes. Aunque la discriminación internalizada y la falta resultante de autoestima claramente pueden afectar a ambos géneros, las muchachas indígenas parecen ser particularmente vulnerables a ello.¹⁶

Hemos estado considerando la conversión de la educación en un capital humano efectivo para los niños en edad escolar. Otra dimensión de esta transformación es el analfabetismo *adulto*, que es de enorme importancia en términos de los derechos fundamentales, pero también por la forma en que afecta negativamente la salud de la familia, a través de los efectos intergeneracionales que generan tanto en las actitudes como en los estímulos al aprendizaje de los niños. Los

14. Esto quedó bien expresado en las entrevistas realizadas en Huancané en 2007.

15. Entrevista con Soledad Tello, Huanta, 28 de junio de 2006.

16. Solamente nos topamos con un caso en el cual los papeles de género estaban invertidos. Beatriz, una profesora mestiza en Huanta, describió el caso de una niña de seis años que insultaba a un niño indio llamándole *chuto* y bruto, y le hacía llorar. La maestra sostuvo que esto siempre sucedía (sin embargo, no le preguntamos acerca de la dimensión de género).

costos, en términos de la pérdida de beneficios potenciales, son particularmente altos en el caso del analfabetismo femenino y constituyen una parte importante del enraizamiento que venimos documentando a lo largo de este libro. Los obstáculos al progreso en la alfabetización adulta son muy parecidos a los que estamos resaltando —temor, prejuicios, falta de confianza—, pero vale la pena subrayar elementos adicionales, en particular la deficiente política pública. A lo largo del tiempo, los programas de alfabetización adulta en el Perú han sido un desastre,¹⁷ lo que tuvo su momento culminante cuando Fujimori rechazó a las ONG y movilizó al Ejército, usó alimentos como presentes para hacer que la gente asistiera a las clases y luego falsificó los datos, sosteniendo que el analfabetismo había caído de 12 por ciento en 1993 a 8,7 en 1998. Fue sobre esta base que la UNESCO le concedió al Perú el premio coreano Rey Sejong, el cual fuera entregado en 1999 en el Día Mundial de la Alfabetización (Portugal 2004: 7).

Este escandaloso hecho estimuló un enfoque radicalmente distinto, que es importante porque muestra lo que se puede hacer. El gobierno de transición de Paniagua denunció el fraude e inició un programa simple diseñado por las ONG, que tenía como base la autoayuda, el empoderamiento y el empleo de la población local. Las comunidades elegían a su propio maestro de entre sus miembros; las lecciones usaban la propia experiencia vital de la gente, “desplazando la enseñanza con palabras muertas” (Portugal 2004: 22). No se brindó alimentos ni ningún otro beneficio en especie, no obstante lo cual la gente acudía en tropel a las clases. Una evaluación efectuada por una ONG algunos meses después calificó al programa como un éxito en términos del entusiasmo, el empoderamiento y los testimonios de los participantes. Portugal cuenta una historia conmovedora de una pastora indígena de sesenta años de edad. A ella se la convenció con cierta dificultad para que tomara parte en un juego muy simple, en el cual el jefe grita: “La gente manda que...”, y todos cumplen su orden. A la pastora le tocó el turno de ser la jefa y después de un rato comenzó a llorar. “¿Por qué lloras?”, le preguntaron. Ella respondió: “Jamás he estado a cargo de nada y nadie jamás me ha prestado atención. Sólo me obedecen mis ovejas” (Portugal 2004: 99).¹⁸

17. Para una evaluación condenatoria y convincente, véase Portugal, 2004.

18. Era demasiado temprano como para medir los resultados en términos de la misma alfabetización.

La transformación de los activos educativos en ingreso y otros beneficios

Vemos ahora las muchas razones por las que las funciones del lado derecho de la figura 4.1 son tan diferentes, mostrando una brecha clara en los niveles de ingreso. Brecha que encuentra significativamente determinada por la variable étnica. La capacidad de los distintos grupos para aprovechar la educación y transformarla en capital humano o en capacidades es diferente. Debemos pasar ahora al segmento de la izquierda de la figura 4.1. La conversión del capital humano en ingreso opera mediante el sistema de mercado. La relación general es positiva: cuanto mayor sea el capital humano, tanto más grande será el nivel de ingreso. Esto refleja los retornos económicos positivos que tiene la inversión en capital humano. Dicho beneficio económico es el resultado del efecto positivo que el capital humano tiene sobre la productividad laboral. Este efecto opera por medio de tres canales: el primero de ellos es la complementariedad existente entre capital humano y capital físico, puesto que el primero hace que la máquina sea más productiva; el segundo es la función de señalización; y el tercero se refiere a la complementariedad existente entre el capital humano y la adopción de nuevas tecnologías, dado que estas últimas son incorporadas a máquinas nuevas, cuyo funcionamiento requiere de trabajadores con un nivel más alto de capital humano.

En la sociedad jerárquica aquí ilustrada, si comparamos, en términos étnicos, a los hijos de los grupos más privilegiados con aquellos de los colectivos menos favorecidos, entonces el grupo privilegiado recibe en promedio un ingreso más alto al entrar al mercado laboral, con el mismo nivel de capital humano. Esta relación se muestra en el segmento de la izquierda de la figura 4.1. Las curvas B', M' e I' representan dichas transformaciones. Estas curvas se inclinan todas hacia arriba y muestran relaciones positivas entre capital humano e ingreso medio, pero también indican que las relaciones son jerárquicas desde el punto de vista de los grupos sociales.

La jerarquía de relaciones es, en primer lugar, el resultado de una desigual dotación inicial de activos. Una mayor provisión de capital físico y social (redes sociales) implica un mayor acceso a los mercados de factores (mercados de trabajo, crédito y seguros) y más oportunidades económicas para hacer negocios.¹⁹

Pero el resultado desigual podría también deberse a la elección que toman los empleadores. Esto no necesariamente implica la discriminación por parte de

19. Figueroa (2007) presenta una teoría que explica las diferencias en dotaciones y en la acumulación de capital social —definido como redes sociales— entre los grupos.

estos últimos en el momento de compra en el mercado laboral (aunque en tanto ciudadanos sí habrán participado en un sistema que discrimina de diversos modos, para producir parte de dicha desigualdad en el capital humano). No obstante, la discriminación mencionada se da en la realidad: por ejemplo, Ñopo et ál. (2004) encontraron evidencias de discriminación étnica en el mercado laboral. Pero Figueroa sostiene que distintos niveles de ingreso/salarios, a un mismo nivel de capital humano, podrían tener su origen en un problema de la información incompleta que rige en el mercado laboral. Por ejemplo, la preferencia de los consumidores por meseros no indígenas podría determinar las decisiones tomadas por el dueño del restaurante. O las preferencias de los consumidores podrían limitar las oportunidades de ingreso de los productores indígenas de quinua o kiwicha, productos tradicionales de la sierra. En consecuencia, la segmentación se manifestaría en el mercado laboral: dados niveles iguales de capital humano, la gente indígena conseguiría una tasa salarial inferior en comparación con los mestizos (Figueroa 2008).

Los datos con que contamos no nos permiten separar los efectos que la educación tiene sobre el capital humano de la relación existente entre este último y el ingreso. Pero la relación entre ingreso/salario y años de estudio es clara. Ya lo mostramos en los cuadros del 4.4 al 4.6, para el ingreso familiar y los salarios, y con la que tal vez es la evidencia más sólida: la cantidad excluida del mercado laboral formal. Esto nos permite hacer la observación importante, aunque limitada, de que los datos no contradicen el modelo de relaciones representado en la figura 4.1.

Conclusión

Este capítulo tiene conclusiones desalentadoras. Lo que el mundo percibe como el instrumento clave con que revertir la desigualdad, dado su efecto en las capacidades y la empleabilidad, así como en las actitudes, motivaciones y normas, se encuentra atrapado en gran medida en la estructura en la cual se halla enraizada. Se puede reducir la pobreza, no así la *desigualdad en las oportunidades*. Encontramos esto en nuestro trabajo cuantitativo, así como en los datos referidos a las percepciones, lo que confirma la desigualdad del *acceso*.

También nos topamos con una marcada diferencia de género. Los varones indígenas aún adolecen de una seria desventaja educativa en comparación con sus pares no indígenas, y las mujeres indígenas/cholas se hallan altamente sobrerrepresentadas entre los analfabetos y entre quienes solo cuentan con educación primaria. Esto último resulta particularmente serio, dado sus efectos

intergeneracionales mediante su influencia sobre la salud, la educación y las actitudes familiares.

Concluimos también que hay una fuente distintiva y adicional de la desigualdad: los retornos de cualquier nivel de educación son inferiores para los indígenas que para quienes no lo son. De modo que una primera conclusión se refiere a la importancia abrumadora de las condiciones estructurales, las cuales determinan su lugar en “su” curva.

Una importante conclusión analítica de este capítulo es el valor que tiene descomponer las fuentes de desigualdad en distintas oportunidades de adquirir educación, en primer lugar, y las opciones de usarla para adquirir ingreso y/u otros activos sociales o políticos. Si bien es cierto que la política no ha sido el eje principal de nuestro análisis, esta distinción resulta sumamente útil en dicho contexto. Por ejemplo, una política educativa para los más humildes en América Latina hoy en día es una forma de acción afirmativa. Ella consiste en la aplicación de medidas de discriminación (positivas) a favor de las familias pobres para que sus hijos puedan tener acceso a la escuela; el principal mecanismo es la entrega de subsidios a las familias pobres a condición de que sus hijos permanezcan en el colegio, lo que compensa los muchos años de discriminación en la dirección opuesta. Nuestro análisis muestra que si esto solamente lleva a un desplazamiento a lo largo de la curva I, probablemente resultará ineficaz en el Perú. Si llevar a los niños (y sus padres) a la escuela fuera el medio con que atacar los aspectos subyacentes aquí resaltados, entonces la acción afirmativa implicaría un desplazamiento de la curva I hacia M, y de ambas hacia la B.

Para decir lo mismo en otras palabras: podemos incrementar los años de educación de los niños (y adultos) indígenas, lo que viene a ser un desplazamiento a lo largo de la curva I. Pero la política resultará más efectiva si es que ella puede mejorar la calidad de la educación de la población indígena —un *desplazamiento* de la curva I— e incrementar las oportunidades de empleo, desplazando las curvas M e I hacia la curva B.

Los servicios de salud son otro factor esencial en la acumulación de capital humano. Uno de los elementos subyacentes de las relaciones mostradas en la figura 4.1(a) es la oferta de servicios de salud. Las distinciones analíticas ya mencionadas, referidas a las políticas asociadas tanto con la igualdad de oportunidades como con la acción afirmativa, también se aplican en el caso de la oferta del servicio de salud. Una forma de desplazar las curvas de la acumulación de capital humano es incrementando la cantidad y la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a los pobres.

Aunque nuestros resultados han sido por lo general negativos, no lo fueron del todo. En efecto, encontramos casos de pequeñas innovaciones que producen

cambios reales. Cuando hallamos experiencias positivas en la educación misma, estas, en su mayoría, reflejaban medidas que cuestan relativamente poco, pero que, en cambio, requieren de una considerable sensibilidad para alentarlas. Por ejemplo, el programa de alfabetización de 2002 estaba mostrando ser enormemente popular y venía teniendo un efecto considerable a pesar de ser muy simple. El estudio de García sobre la educación bilingüe en la sierra también halló casos de mujeres que se reúnen y forman sus propios grupos, decididas a aprender a leer y escribir para así apoyar a sus hijos (García 2003: 81 y ss.). Cuando el deseo es tan fuerte, ¿no puede acaso complementársele y fomentársele? Esto podría permitir que la curva del grupo I se arrastre hacia arriba de modo particularmente sostenible.

Por último, una reflexión sobre los tres capítulos que acabamos de presentar: somos sumamente conscientes de que en ellos hemos intentado dos tareas que van en sentido contrario. De un lado, encontramos que era de crucial importancia intentar detallar la naturaleza sutil, compleja y a menudo reprimida y contradictoria de la etnicidad en el Perú, lo que indica las dificultades que hay para encontrar las definiciones precisas para la medición cuantitativa. Y, del otro lado, hicimos las mediciones cuantitativas a partir de supuestos en cierta medida arbitrarios. Pero nos pareció que valió la pena. La complejidad resultará ser parte integral de nuestro análisis del enraizamiento de la desigualdad, mientras que las mediciones, tanto de las mismas desigualdades horizontales como de la fuerza de la percepción de la falta de igualdad en las oportunidades, arrojaron resultados lo suficientemente llamativos como para sugerir que la cuantificación es valiosa, y tanto más si ahora se puede construir una base de datos a lo largo del tiempo.

En cuanto a la complejidad, todos sabemos que las identidades siempre son múltiples, pero fue posible establecer, en medio de una terminología complicada y superpuesta, que la etnicidad es un *componente* importante de la identidad en las comunidades que estudiamos, y que ella interactúa y se superpone con la geografía: “nosotros vinimos de la sierra” era una frase común. Los elementos claves que *dan forma* a la identidad, la autoestima y el deseo de suprimir la misma identidad son los prejuicios y la discriminación, y hemos reportado los vigorosos resultados que hallamos, sobre todo en nuestras entrevistas. Lo que no esperábamos del todo fue el grado de los prejuicios existentes *dentro* de los grupos, en particular los que los indígenas/cholos urbanos tenían contra la gente del campo que habían dejado atrás. Llegamos a entender así en qué medida tal prejuicio es un elemento central de los procesos migratorios que han transformado el panorama étnico en el Perú.

Con respecto a la medición, explicamos y justificamos nuestra variable sustituta geográfica y mostramos cómo —luego de emplearla— los datos nacionales

arrojan una sorprendente perspectiva étnica de la distribución del ingreso y la pobreza. Mientras el 39 por ciento de la población “blanca” pertenece al decil superior del ingreso, solo el 6 por ciento de la población indígena pertenece a este decil. Por el contrario, el 49 por ciento de este último grupo pertenece al decil inferior. En cuanto a la pobreza se refiere, el 24 por ciento de los “indígenas” es extremadamente pobre, mientras que el 2 por ciento de los “blancos” es pobre. La brecha absoluta de veinte puntos coincide con la que fuera hallada por el excelente trabajo previo de Trivelli (2005), quien usó una definición distinta de los grupos étnicos.

Pasamos a presentar entonces nuestros hallazgos en cuanto a la salud, la educación, el acceso al empleo y a la política; esta última produjo tal vez el grado más sorprendente de desigualdad a pesar de años de democracia formal y sufragio universal. Profundizamos entonces nuestra exploración de las desigualdades grupales en la educación: uno de los resultados que más nos impresionó fue el grado en que la educación continúa siendo parte del problema, así como la solución. Aquí es donde más clara queda la carga extra que llevan las mujeres indígenas: el acceso a la educación y la capacidad de beneficiarse con ella está lejos de ser igual entre mujeres y hombres. Analizamos la cuestión de la desigualdad tanto entre indígenas y no indígenas, como entre hombres y mujeres, en términos de tres brechas: puede haber diferencias en el acceso a la educación; los años de estudio podrían no traducirse de igual modo en capacidades o capital humano; y las capacidades podrían no derivar en igual forma en oportunidades de ingreso, ciudadanía u otros componentes del bienestar.

Por último, presentamos nuestros resultados sobre la percepción de las oportunidades desiguales. La mitad de nuestros informantes pensaba que los antecedentes étnicos influían en las posibilidades de conseguir trabajo: en el grupo de Lima, más del 70 por ciento creía que la etnicidad era importante. Entre las poblaciones relativamente marginales que estudiamos, la percepción abrumadora es que los blancos tienen el poder en el sector privado, los medios y el gobierno, excepción hecha con los gobiernos locales. La población indígena de nuestros casos se sentía inerte, salvo en el gobierno local.

De estos materiales, que reflejan una realidad sumamente compleja, extrajimos varios puntos que iluminan el análisis —que estamos por emprender— del profundo enraizamiento de la desigualdad horizontal. En primer lugar, hoy en día estas desigualdades siguen siendo profundas y omnipresentes, y sorprendentemente lo son también en el ámbito político. En segundo lugar, las mujeres indígenas tienen múltiples desventajas en la educación, pero también en el empleo, posiblemente en salud y en la esfera política. En tercer lugar, la discriminación

y los prejuicios de raíces étnicas son profundos y omnipresentes. Las décadas de un discurso sobre una división por clases antes que por etnias podrían muy bien resultar engañosas, pero el componente étnico de la división queda demostrado en los resultados de nuestras encuestas y en otros trabajos. En cuarto lugar, la discriminación y los prejuicios se dan dentro de los grupos así como entre ellos. Esto nos lleva al quinto y último punto: hay aspectos contradictorios en funcionamiento, sobre todo como resultado de la migración. Como migrante urbano, la misma persona podría muy bien valorar su legado andino/indígena y desear diferenciarse marcadamente de la gente del campo a la que dejó atrás.

Después de revisar y comprender las desigualdades horizontales, la etnicidad, la identidad y los prejuicios, surge la siguiente interrogante: ¿por qué la desigualdad es tan profunda y tan invulnerable a los cambios? Para responder esto, necesitamos hacer un análisis del entrelazamiento de los factores económicos, políticos, geográficos y culturales a lo largo del tiempo. Sostenemos que la “incrustación” solamente puede entenderse en términos de unas interacciones dinámicas, a lo largo de un extenso periodo, de estos aspectos distintos e igualmente cruciales de la historia peruana. Necesitamos explorar cómo es que las instituciones evolucionan e interactúan con las estructuras socioeconómicas y geográficas, para dar forma a la política y a las opciones y vida de los pueblos indígenas.

EL ENRAIZAMIENTO HISTÓRICO DE LAS DESIGUALDADES GRUPALES:

DE LA COLONIA A LA GUERRA CON CHILE

EN COAUTORÍA CON CARLOS CONTRERAS

Hace cien años, muchas características importantes de la estructura étnica y de las actitudes para con la etnicidad ya se encontraban profundamente enraizadas en el Perú. Dónde debe comenzar una historia es siempre una cuestión difícil —las desigualdades anteceden a la Colonia, claro está—, pero nos parece que la configuración particular que la división étnica y las instituciones asociadas tomaron en el Perú tiene una gran deuda con la forma en que los españoles administraron su colonia y con las instituciones que crearon. Asimismo, la concentración en la costa y en Lima que surgiera con la Independencia sentó aspectos fundamentales para la estructura política del país, así como para su economía. En la primera sección, exploraremos las ambigüedades del sistema español de gobierno indirecto, el que se llevó a cabo mediante autoridades locales: los precursores de la institución del “gamonal”, cuya posición pasó a tener dos dimensiones: un mediador y cacique local. Exploraremos cómo la necesidad de mano de obra impulsó la creación de un sistema de control y explotación que era implacable y que se mantuvo vigoroso. Señalaremos también el papel de la religión como parte del ‘cemento’, y exploraremos las diferencias con lo que habría de ser Bolivia, las cuales giran en torno a la naturaleza divergente del sistema de poder “intermediario”. En la segunda sección, consideraremos cómo se desarrollaron nuevos elementos después de la Independencia, en particular la creciente concentración de la estructura política y la economía en Lima y la costa, lo que se agravó aún más con el guano. Pero las nuevas estructuras de la economía y la política fueron de la mano con la supervivencia y el arraigo cada vez mayor del intermediario, constituido ahora por el poder “gamonal”. La combinación de la marginación geográfica y

étnica de la sierra en el nuevo patrón económico y político de crecimiento, junto con la supervivencia de las instituciones de dominación y control dentro de esta región, llevó a la profundización de las fuerzas de exclusión, a las cuales en modo alguno podía enfrentar la nueva filosofía de la “asimilación” que emergiera una vez que la Guerra con Chile generara nuevos temores con respecto a las consecuencias de la marginación.

La Colonia: el enraizamiento de la desigualdad y un terreno hostil para la movilización política indígena

De una historia colonial rica y compleja solamente deseamos extraer dos dimensiones importantes para nuestro tema. La primera de ellas es el enraizamiento de la desigualdad y las actitudes étnicas, un vigoroso elemento condicionante de los acontecimientos subsiguientes. La segunda es la creación de condiciones desfavorables para la evolución de un sólido movimiento político indígena en el Perú, una historia que nos parece iluminadora contarla estableciendo un contraste. El “Alto Perú”, lo que con la Independencia habría de convertirse en Bolivia, y el “Bajo Perú”, el futuro Perú, tuvieron tal vez un conjunto sorprendente de características divergentes y una evolución política resultante muy particular.

La creación y el enraizamiento de las desigualdades grupales

Aunque los “pueblos originarios” con que los conquistadores españoles se toparon en el siglo XVI en modo alguno tenían una economía política igualitaria,¹ el arribo de los hispanos impuso un dominio colonial indirecto que introdujo nuevos y fuertes elementos de desigualdad intergrupal en el transcurso de tres siglos, factores que se encontraban profundamente arraigados en las nuevas diferencias étnicas.² La Corona española intentó levantar un *apartheid* colonial, colocando

-
1. Había desigualdades entre los pueblos de la costa y los de la sierra, entre la gente de los “valles” y los de la “puna” o pastizales altos, divisiones estas que son manifiestas incluso hoy en día. Las desigualdades intragrupalas también eran grandes.
 2. “Indirecto” en términos de la jerarquía de control por medio de los funcionarios nativos. Pero los españoles también implementaron un control sumamente directo en algunas partes de América Latina, más que en otras colonias, especialmente respecto de la religión. Y los jefes locales que implementaban el control indirecto ocupaban un lugar bajo en la jerarquía, siendo además su área de operaciones estrictamente local.

de un lado a la república de españoles y del otro a la de indios,³ vinculadas entre sí únicamente por el control del Estado, el cual estaba representado por las autoridades hispanas conocidas como corregidores, que controlaban las relaciones comerciales y el cobro del tributo.⁴

En su forma más simple, el proceso de colonización estuvo cerca de eliminar a toda la población indígena. Un estimado conservador pero autorizado calcula la población anterior a la Conquista en 2.738.673 personas, la cual se redujo a apenas 601.645 para 1630 (Cook 1965), una caída debida a las epidemias, a la violencia de la Conquista y a la perturbación de las formas establecidas de vida en un medio ambiente difícil. Los aldeanos indígenas fueron desarraigados por diversas formas de trabajo forzado, así como por las emigraciones emprendidas para escapar a este.⁵ La caída prosiguió y solamente se revirtió en el transcurso del siglo XVIII (Sánchez Albornoz 1974, O'Phelan 1985). La escasez de mano de obra producto del descenso de la cantidad de habitantes fue motivo de gran preocupación para los españoles, para los cuales la explotación de la riqueza argentífera peruana era la razón de ser de la colonia, además de ser la fuente de una gran demanda laboral. De este modo, la abundancia de tierras y la escasez de mano de obra fijaron el contexto para la evolución del trato dispensado a la población indígena y para las condiciones bajo las cuales esta se relacionó con la población blanca dominante. Para conseguir mano de obra barata en estas circunstancias, era necesario que se produjera un desarrollo institucional. Este tomó la forma de las "reducciones": la reubicación de poblaciones dispersas en aldeas con una tenencia colectiva asociada de la tierra, presididas por una autoridad indígena responsable por el cumplimiento de los pagos de mano de obra y tributo. Y por medio de los sacerdotes católicos se imponían también las "normas éticas", esto es la forma en que los españoles pensaban que los pueblos indígenas debían comportarse.⁶ Esta política de reubicación involucró a grandes poblaciones: por ejemplo,

-
3. En el Perú, los pueblos indígenas en realidad provenían de distintas etnicidades y culturas, pero los españoles los colocaron en la única categoría de "indio". El imperio incaico había intentado integrar todos estos distintos reinos y grupos apenas unos cuantos años antes, pero dicho ejercicio solamente había sido desigualmente exitoso para cuando arribaron los españoles, en tanto que el proceso de desarrollo de una lengua quechua unificada se vio interrumpido.
 4. El establecimiento de este sistema quedó consolidado con las políticas seguidas por el virrey Toledo, quien redujo significativamente el poder del sistema de encomienda, que predominó hasta su arribo.
 5. Véanse Assadourian 1994, Flores-Galindo 1986: 39, Glave 1992 y Larson 2004, entre otros. Por una vez, la palabra "diezmar" (tomar uno de cada diez) queda corta en una situación en la cual casi ocho de cada diez personas murieron.
 6. El sacerdote era la única persona no indígena que podía pasar la noche en la comunidad y así supervisar aspectos importantes de la vida comunal.

21 mil habitantes indígenas del Cuzco fueron llevados de 309 aldeas a 40 reducciones.⁷ Platt (1982) describe esto como un “pacto de reciprocidad”, mediante el cual los pueblos indígenas recibieron el derecho a sus tierras y el reconocimiento de sus autoridades comunales a cambio de un sistema tributario cada vez más duro, tanto en dinero como en especie. Las exacciones impuestas exclusivamente a la población indígena fueron la mita, el tributo y el reparto. La primera de ellas era la obligación que cada comunidad tenía de suministrar mano de obra, sobre todo para las minas, aunque hubo también otros mecanismos para proporcionar trabajadores a las haciendas y a las industrias iniciales de la Colonia. El “tributo” era el pago en dinero o en especie, que constituía el meollo de la recaudación. El reparto era un sistema mediante el cual la población indígena compraba bienes a crédito, los que luego pagaba con su trabajo o en especie a un precio inflado implícito. Esto amplió los mercados y permitió a los indígenas acceder a nuevos bienes, pero también produjo unos serios abusos (Larson 1986). El reparto fue ampliamente utilizado en el siglo XVIII, no obstante haber sido legalizado solo en 1756 y abolido en 1783.⁸

El grupo dominante de blancos siempre fue una minoría a pesar de la caída en el número de indígenas, y jamás comprendió más de una octava parte de la población. Los blancos se cuidaron de conservar esta posición al considerar que sus privilegios y exclusividad tenían su origen en su pequeño número (Mörner 1980). El sistema se vio consolidado por el factor religioso. Una evangelización agresiva equivalía a una forma de violencia cultural.⁹ Los españoles trabajaban duramente para promover una cultura de la superioridad; ellos sabían que eran superiores no solo porque tenían en sus manos las riendas del gobierno y porque controlaban los recursos, sino también porque estaban más cerca de Dios. Una reveladora parábola del siglo XVI compara a Europa y América con dos hermanas: la primera de ellas es hermosa y agraciada, y recibe rápidamente una visita de Cristo, quien contrae matrimonio con su alma. La segunda, en cambio, debe compensar su fealdad y rusticidad ofreciendo montañas de oro y plata para atraer la posesión.¹⁰

Mientras que en algunas otras sociedades la religión se superpuso con las desigualdades grupales de base étnica, a las cuales profundizó abiertamente, aquí

7. Cotlear 1989, citando a Morse 1984.

8. Como una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru.

9. Con respecto a la política cultural y religiosa del colonialismo hispano en los Andes, véanse Silverblatt 1987 y Spalding 1984.

10. El “Anónimo de Yucay”, redactado en 1571 y citado por Assadourian 1994.

tuvo más bien un papel sutil, nominalmente unificador pero en realidad reforzador de las desigualdades, e hizo que la rebelión resultara tanto más difícil gracias al poderío de su ideología.¹¹

El sistema de explotación fue impuesto en parte *por medio de* la élite indígena local (Glave 1992, Lavallé 2004). Los caciques eran “indios nobles” cuya posición hereditaria fue empleada por los españoles, quienes les asignaron la responsabilidad de cobrar los impuestos y suministrar la mita, así como el derecho a la tierra y al uso de la fuerza laboral de la comunidad (O’Phelan 1985: 139). Estas personas jugaron un papel clave en facilitar el sistema colonial de dominio y explotación indirectos, además de tener una posición ambigua entre los dos mundos, la cual, para los años finales de la Colonia, estaba —como veremos— plasmándose significativamente de distintos modos en las dos partes del país.

Pero las ambigüedades iban más allá. El *apartheid* que los españoles intentaron aplicar fue imperfecto y durante estos tres siglos el sistema dual de castas fue gradualmente erosionado, con lo cual la sociedad peruana asumió las características de una sociedad tripartita, una segmentación en castas de indios, mestizos y españoles, con numerosos vínculos entre los grupos, tanto comerciales como culturales. A medida que la expansión de la economía llevaba a la urbanización y la emigración, la población mestiza también fue creciendo y encontrando espacios, en un tiempo en que los reformadores borbónicos centralizaban el gobierno y la fiscalidad. Ellos pasaron a ser alcaldes de pueblos pequeños, cobradores de impuestos y correos mayores (Sala i Vila 1996). La progresiva destrucción y colapso de las élites indígenas en el Bajo Perú dejó un espacio, el cual sería llenado por este nuevo grupo: así, los mestizos bilingües ocuparon la cima de la estructura jerárquica, pues eran hacendados, jueces, abogados, policías, comerciantes y profesores, entre otros oficios, y residían a menudo en el centro urbano de una provincia.

La mezcla de sangre fue impulsada por la escasez de españolas y fue motivo de preocupación para las autoridades hispanas, las cuales veían que podía trastocar su mundo bipolar. La mezcla tomó dos formas: matrimonios de clase alta con familias indígenas acaudaladas o políticamente importantes, y relaciones extraoficiales que podían ser “una forma de deporte” para la población dominante, para usar la gráfica expresión de Samaniego (1974: 410). Los hijos que resultaban de estas uniones ilícitas usualmente no eran reconocidos por sus padres y crecían en la comunidad de la madre. Los mestizos ocuparon así una posición ambigua desde fecha temprana, representando para la población indígena el avance y un

11. Esto se apoya en ideas desarrolladas por Martínez y Álvarez 2004.

acercamiento al estatus deseado de blanco, mientras que eran vistos con recelo por la población blanca, la cual les describía como “hombres de vidas destruidas”.¹²

Rebelión y represión

Tanto la aceptación como el descontento fueron surgiendo a partir de las fuertes desigualdades grupales implícitas en tres siglos de explotación. La población indígena combinó el acomodamiento al sistema colonial con diversas manifestaciones de descontento, y en ocasiones de rebeldía abierta. La cartera de la “resistencia cotidiana” incluía el ausentismo, los pequeños hurtos y el acatamiento a regañadientes de las órdenes.¹³ El estudio que Stern hiciera de Huamanga en el primer siglo de la Colonia muestra la habilidad con que los indígenas utilizaron el sistema legal formalista para reducir las cargas fiscales, el trabajo forzado incluso, manipulando el conteo de la población.¹⁴ La historia de las revueltas y rebeliones del siglo XVIII ha sido explicada brillantemente por la bibliografía, sobre todo en las obras de Stern, O’Phelan y Flores-Galindo, en tanto que Thomson y Serulnikov documentaron la rebelión del Alto Perú a fines de dicha centuria. O’Phelan muestra que hubo distintos periodos en que se aflojaron las restricciones, lo que permitió el florecimiento temporal de la cultura indígena, seguidos cada uno de ellos por los renovados esfuerzos efectuados por las autoridades para recuperar el control. Dichos esfuerzos produjeron rebeliones; O’Phelan identifica tres oleadas o “coyunturas” rebeldes: 1726-1737, 1751-1756, y luego los importantes acontecimientos ocurridos a partir de 1777 y que culminaron con la Gran Rebelión de 1780-1781, que tuvo sus puntos focales en el Cuzco y en La Paz. La autora expone de modo convincente la relación existente entre las olas de rebeldía y el incremento en la explotación, esto es que la imposición de desigualdades horizontales causaba los conflictos violentos. Estas desigualdades incluían los factores culturales: la falta de respeto por las tradiciones y las indignidades impuestas.¹⁵

Sin embargo, las revueltas que estallaron en el Bajo Perú fueron fragmentadas y locales (Flores-Galindo 1986: 120), hasta que la creciente presión *también*

12. La frase la recogió Flores-Galindo como dicha por un funcionario colonial. Ares y Gruzinski (1997) es una referencia importante con respecto a las sutilezas de la “vida entre dos mundos”.

13. Con respecto a la minería, consúltense Tandeter 1992 y Glave 1992.

14. Stern (1992) sostiene que estos éxitos debilitaron la posibilidad de que surgiera un desafío más radical al sistema.

15. Para la “economía moral”, consúltese Larson 2004, y para la región de Arequipa, véase Brown 2008.

cayó sobre las poblaciones mestiza y criolla,¹⁶ lo que llevó a una alianza entre los grupos indígenas y mestizos, y al fortalecimiento del liderazgo que permitió al cacique José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru coronarse inca rey, alegando ser descendiente directo del último soberano nativo, quien fuera ejecutado en 1572 en la plaza principal del Cuzco por el virrey Toledo. Aquí estaban presentes unos fuertes elementos de una utopía inca.¹⁷ De este modo, la rebelión de 1781 en el mismo Perú —esto es, en el Bajo Perú— fue encabezada por la élite indígena aliada con mestizos y criollos, y tuvo una base ambigua en las “órdenes del rey” —así lo afirmaba Túpac Amaru— de poner fin al mal gobierno, pero también en la noción de que los españoles eran los usurpadores de la auténtica realeza.¹⁸ Esto llevó a una represión terrible: las familias de la élite que se encontraban detrás de Túpac Amaru y sus asociados debían ser exterminadas.¹⁹ Y ciertamente sus integrantes fueron muertos en una brutal forma ritual, y a partir de entonces a las familias de la élite también se les impidió el acceso a la educación, que siempre le había sido negada a las masas.

El contraste con el Alto Perú deja en claro cuán malo era este escenario para el desarrollo de un movimiento político indígena. En el Bajo Perú, la rebelión fue liderada por un cacique, y los cacicazgos del norte peruano y el Cuzco aún conservaba su influencia y poder no obstante todas sus ambigüedades, y tanto más cuanto que su estatus económico había mejorado en el siglo XVIII.²⁰ Como Mallon (1992) lo explica, la legitimidad de esta clase dominante indígena contrasta con la posición de los caciques en el Alto Perú, esto es, en la futura Bolivia (Mallon 1922: 44). En ella, las contradicciones internas habían debilitado

16. “Mestizo” alude a una persona con un padre de origen indígena y otro de origen español o criollo. Esta última palabra alude a la persona de ascendencia española nacida en el Perú. Con respecto a las reformas, consúltense O’Phelan 1985: 234 y Flores-Galindo 1986: capítulo 2.

17. Flores-Galindo 1986: 93. Este autor describe los elementos de la visión utópica que atravesaba al movimiento: en el siglo XVIII, el Cuzco pasó a ser el centro de una nueva y floreciente identidad. Los símbolos, colores y técnicas incaicos fueron incorporados a la fabricación de artesanías, el diseño de ropas, pinturas y otras expresiones plásticas. Los *Comentarios reales* de Garcilaso de la Vega tuvieron una enorme influencia sobre la forma en que la élite reinterpretó y reconstruyó una identidad neoinca, la cual se difundió mediante expresiones populares tales como representaciones teatrales y folklóricas, en las cuales “el Inca” y “el Tahuantinsuyo” eran elevados idealísticamente como símbolos de una justicia generosa, que se oponía a los abusos europeos.

18. El edicto de coronación de Túpac Amaru proclamaba que “[l]os reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y los dominios de mis gentes cerca de tres siglos”. Citado en Thomson 2002: 164. Véanse también Stavig 1999, Szeminski 1987 y Walker 1999.

19. O’Phelan documenta las redes (1985: 234-236).

20. O’Phelan 1985, Flores-Galindo 1986: 115-116.

significativamente a la institución del cacicazgo para esta fecha, puesto que las más robustas comunidades aimaras exigían rendición de cuentas y un papel representativo a sus caciques, para lo cual estos no se hallaban preparados.²¹ El impacto aquí del colapso demográfico fue menos desastroso que en el Bajo Perú (Cook 1965). Esta condición robusta se aprecia en el hecho de que muchos *ayllus* fueron *reconstituidos* en las nuevas aldeas o reducciones de la estructura colonial, lo que es una señal de su coherencia, en tanto que en la región del Cuzco un gran número de pobladores indígenas fue trasladado físicamente. Thomson anota que la rebelión en La Paz, que culminó en un cerco a esta ciudad de 184 días de duración,²² fue encabezada por Túpac Katari,²³ un campesino y comerciante analfabeto, casi sin respaldo alguno de los caciques locales. En Chayanta, el líder Tomás Katari era analfabeto y no era de un linaje “indio noble” (Serulnikov 2006: 232-233). Estos movimientos le rindieron cuentas al pueblo, hecho distinto de lo ocurrido en el Cuzco. Desde el principio, los caciques y sus familias y propiedades fueron el blanco de los ataques por ser amigos de los españoles (Thomson 2002: 217). La meta de su autogobierno era clara y nada ambigua, y esperaban el momento en que “sólo reinasen [ellos]”.²⁴ Los mestizos y criollos frecuentemente eran amenazados, se les hacía vestir ropas indígenas, mascar coca y, en el caso de Caquiaviri, jurar obediencia a los indígenas (Thomson 2002: 158 y 172). El análisis de Thomson sostiene que esta clara aspiración de autogobierno se mantendría viva y se “manifestaría repetidas veces en la historia republicana” (2002: 10 y 12).

Este era un terreno prometedor para la vida política posterior. En el Bajo Perú, en cambio, los pueblos indígenas tuvieron que enfrentar el debilitamiento de su liderazgo y redes. La mejor opción parecía ser el sobornar a un funcionario y ser redefinido como un mestizo, o dejar la comunidad, puesto que como “forastero” uno ya no se hallaba sujeto a la mita y solo debía pagar la mitad del tributo indígena (el mestizaje ya estaba identificándose con la *pérdida* de la identidad original). Resulta notable que en la futura Bolivia, quienes eligieron el camino del forastero

21. Serulnikov muestra cómo la rebelión de Chayanta en 1780 (al norte de Potosí) fue contra los caciques, entre otras cosas, por la forma en que trastornaron las normas que regían el control del acceso a los recursos.

22. En dos etapas. Consúltese Thomson 2002.

23. Katari comerciaba con coca y bayetas. Túpac Amaru también era un comerciante, pero a otra escala, pues poseía una recua de mulas.

24. “Los propios indios hablaban con gran expectativa de un tiempo no muy distante cuando “sólo reinasen los indios” (citado en Thomson 2002: 231).

(y fueron muchos) también decidieron permanecer cerca de sus ayllus y mantener sus vínculos (Thomson 2002, Saignes 1987).

La Independencia, el guano y un creciente divorcio: de la Independencia a la República Aristocrática (de 1821 al decenio de 1890)

El Perú fue finalmente independizado del dominio español en diciembre de 1824 gracias a la victoria de los libertadores en la decisiva batalla de Ayacucho. Para este país, la independencia resultó una suerte de *rara avis*, puesto que llegó del exterior y no fue solicitada.²⁵ La liberación no se dio en un solo acto: José de San Martín llegó de Chile en 1820 y dos años después Simón Bolívar, quien venía desde el norte, se reuniría con él en Guayaquil. El virrey español José de la Serna conservó el poder en la sierra hasta 1824, con su base en el Cuzco. El primer Congreso del país independiente se instaló en Lima en 1822, y la primera Constitución se proclamaría un año después. La capital cambió de manos cinco veces. San Martín partió sin haber completado la derrota de las fuerzas realistas, y tiempo después se llamó a Bolívar, quien arribó a fines de 1823 para dar inicio a la fase decisiva de la guerra.²⁶ La población se hallaba sumamente dividida, pero no de acuerdo con líneas claras de identidad étnica o alguna otra cosa. Antes de la batalla de Ayacucho se tomaron medidas para que las personas saludaran y dijieran (un) adiós (provisional) a sus parientes en el bando contrario (Contreras 2000: 65 y 67). Los grupos indígenas conformaban las tropas de ambos ejércitos; muchos serranos eran realistas (indígenas o no). Los primeros años de la vida republicana fueron extremadamente inestables y carecieron de “proyecto”; después de todo, ningún grupo interno había colocado al país en esta ruta.²⁷ Entre 1826 y 1854, hubo quince presidentes, todos ellos militares y a menudo mestizos que habían ascendido en el rango gracias a las distintas guerras.

Además, un complejo sistema regulador había desaparecido, lo que produjo un intenso desorden en el Estado. El resultado de ello, en combinación con el costo de la guerra, fue la recesión económica. El impacto del conflicto en la economía fue enorme, pues se tradujo en destrucción y dislocamientos, como en

25. Esta sección se basa en Contreras y Cueto 1999: capítulo 1.

26. En realidad, el último bastión realista fue la fortaleza del Callao, que resistió hasta enero de 1826.

27. Contreras y Cueto 1999: 42. No es que no hubiese continuas intentonas revolucionarias internas: las hubo, sobre todo en el Cuzco entre 1814 y 1815. Véase Contreras y Cueto 1999: 44-46.

el costo que tuvo para la comunidad el mantener a hombres en armas durante un largo periodo.²⁸ Muchos españoles dejaron el país, privando a la economía local de capacidades. Y en cuanto a la producción de plata en particular, esta había dependido de un papel del Estado bastante complejo para el suministro de insumos: todo ello había desaparecido. Lo mismo sucedió con el sistema estatal de compra de plata a un precio fijo (Contreras y Cueto 1999: 83). Este metal representaba el ingreso principal del país, y las exportaciones apenas si crecieron.

Pasemos ahora a considerar qué tipo de cambio realmente estuvo en juego aquí. Lo que encontramos es que hubo muchos menos cambios reales de lo que podría esperarse. Con la independencia no hubo, en efecto, ninguna modificación en las reglas que regían la propiedad de los recursos: tierras, minas, concesiones comerciales. Así, solo se trató de un mero cambio de manos en el control del botín, sin ninguna transformación en las relaciones sociales de producción. Lo que sí se produjo fue cierto relajamiento de la fiscalidad, lo que generó algún alivio, sobre todo a la población rural, pero que dejó al Estado sin recursos.

Punto y contrapunto

Tanto el cambio como la continuidad se fueron haciendo evidentes en la medida de que cierto grado de estabilidad llegaba y el nuevo país iba tomando forma. En primer lugar, se produjeron modificaciones. Un evento formativo fue el surgimiento, en 1839, de Lima como la nueva capital y no el Cuzco. Con su designación como capital y la plena aceptación de su papel, queda clara una importante implicación para nuestra historia: hasta ese entonces, la sierra había constituido la fortaleza y el eje del país. Aunque Lima había gozado de una supremacía política indiscutible durante la Colonia, las élites de la sierra habían controlado la mano de obra indígena, el recurso económico clave, además de suministrar alimentos y textiles. El dominio económico de la sierra había empezado su declinación con la decadencia de la minería en relación con el comercio (Fisher 1977, Brown 2008), y tanto más una vez que Potosí cayó bajo la administración del virrey de Buenos Aires en 1776. La configuración del país cambió radicalmente con la Independencia y el dominio político de la élite costeña, específicamente la de Lima. A partir de dicho momento, la política y la economía de la nueva conformación geopolítica tendrían enormes implicaciones para las desigualdades horizontales. De ahí que, las desigualdades que los pueblos indígenas experimentasen en su

28. Una población de un millón y medio de habitantes mantuvo a unos 25 mil hombres en armas durante casi quince años (Contreras y Cueto 1999: 70).

contexto local se *agravarían* con el impacto de otra desigualdad ya vigente, aquella entre la costa y la sierra, lo que efectivamente constituyó una carga de “doble desigualdad”.

La recuperación llegaría con el guano; sin embargo, resulta una extraordinaria ironía de la historia que el primer auge exportador de la antigua colonia independizada fuese uno que apenas necesitaba de la sierra. El guano, un excelente fertilizante que gozaba de una gran demanda en Europa en ese entonces, es simplemente el excremento de aves que durante siglos se había acumulado en las islas frente a la costa peruana. El guano fue extraído bajo condiciones intolerables por culíes chinos transportados en las mismas naves que cargaban el producto. Su venta generó inmensos ingresos para el erario peruano (cuadro 5.1). Como el capital y la mano de obra provenían del extranjero, no era necesario contar con ningún procesamiento local; y como los trabajadores eran semiesclavos y no existían los salarios, la única vinculación (muy significativa por cierto) con la economía peruana se daba mediante las rentas fiscales que le tocaban al gobierno central de Lima.²⁹ Tales rentas gradualmente permitieron la consolidación del poder de la capital, financiaron la Policía y entidades estatales por todo el país, y “colocaron al resto de la nación bajo la influencia de sus centralizadoras fuerzas armadas y burocracia” (Larson 2004: 151).

A partir de entonces, la apertura al comercio significaría que los artículos de consumo procedentes de otros lugares desplazarían a los que se producían en la sierra; y con el arribo de la mano de obra china a partir de 1849, junto con el crecimiento demográfico, iría cayendo lentamente el poder que el control de la masa indígena otorgaba. Este giro en la dinámica económica y política enraizó la importancia de la costa, lo que le permitió al Perú crecer ignorando la sierra y *a fortiori* la selva. En el largo plazo, el enraizamiento de este enfoque en el manejo económico sería uno de los elementos más profundos de la “evolución institucional”.

Con la nueva estructura, y apoyándola —lo que representaba, claro está, algo contradictorio con la supuesta ideología liberal de entonces—, llegó una cultura de desprecio a la gente de la sierra, un prejuicio que en cierta medida también se aplicaba a las élites regionales, en las cuales su par limeña jamás había confiado. En la medida de que esta nueva élite se iba configurando, fue quedando caracterizada cada vez más por una mezcla de mestizos y blancos, que contaba con una vigorosa presencia de militares, muchas veces también mestizos. El dominio de esta élite criolla limeña signaría las relaciones étnicas de la nueva República. Es más, las viejas élites regionales habían estado al menos sujetas a ciertas presiones

29. Hunt (1985, 1973) documenta esto cuidadosamente.

redistributivas surgidas de las obligaciones que tenían para con sus dependientes en tanto “señores feudales”. Sin embargo, la perteneciente a la capital se hallaba menos sujeta a tales obligaciones, una transformación que con el tiempo se vio ayudada por la debilidad que la Iglesia tuvo bajo el nuevo orden.

El cambio fue, por ende, radical, tanto en actitudes como en realidades políticas y económicas. Pero también hubo una poderosa continuidad. Un elemento de esta última subyacía a lo que parecía ser un cambio: con la independencia debía darse —en principio— el paso de un régimen mercantilista dominado internamente por mecanismos que yacían fuera del mercado a otro régimen, de carácter supuestamente liberal. El sistema colonial había estado enraizado en relaciones de poder y se mantenía gracias a la violencia. Con la independencia, la élite costeña, que ahora tenía las riendas de modo inseguro, había heredado las reformas liberales de Bolívar, pero apenas creía en ellas. Las primeras medidas incluyeron la abolición de toda distinción racial en la política pública (“todos somos peruanos”), la declaración de que todos los hijos de esclavos nacidos en el Perú serían libres, así como cambios en los derechos de propiedad. Las comunidades indígenas ya no tenían estatus legal, y los caciques perdieron dicho estatus, al igual que sus tierras.

Las ambigüedades del giro intentado en la cultura fueron analizadas de modo elocuente por Larson (2004: 142-144). No resulta ninguna sorpresa que no se aplicara este cambio y que en la práctica las relaciones laborales continuaran estando configuradas por estructuras de poder feudales, de distintas formas y respondiendo a diferentes presiones, a lo largo de la sierra. La servidumbre por deudas evolucionó poco a partir de sus formas coloniales, pero siguió muy viva como medio de asegurar la mano de obra y reapareció como un mecanismo clave con que alimentar el auge exportador de la década de 1890, que constó de azúcar y algodón. El “enganche” fue el vívido nombre dado al proceso de conseguir mano de obra indígena tanto para las minas como para la costa, usando contratistas mestizos y un mecanismo de endeudamiento para mantener a la persona en su sitio.³⁰

Pero si bien, por un lado, el poder de la élite serrana efectivamente estaba siendo erosionado por el desplazamiento del eje político y económico a Lima, por otro lado, este mismo desplazamiento de la economía comercial “modernizadora” dejó intactas las instituciones tradicionales de la sierra y, en particular, el papel dominante de un pequeño grupo de intermediarios, sobre todo terratenientes. Sur-

30. Los contratistas prestaban el dinero para hacer el viaje, lo que iniciaba el endeudamiento. El contrato usualmente era firmado por siete años. A esto rápidamente le seguía el incremento de la deuda en la tienda de la compañía, de modo tal que un trabajador quedaba pronto “cogido” y se le perseguía violentamente si huía. Véanse Klaren 1977 y González 1980.

gieron así nuevos mediadores políticos para llenar el espacio que quedó vacío al debilitarse aún más a la élite indígena. Ellos prolongaron la tradición colonial del monopolio en la movilización de favores del poder central. Estos nuevos actores gradualmente pasaron a ser conocidos como “gamonales”.³¹ Los privilegios quedaban asegurados manteniendo pequeño el tamaño del grupo intermediario. Las oportunidades indígenas de acceder a la tierra, la educación, la toma de decisiones o de movilizarse colectivamente quedaron mediadas por estos intermediarios bajo muchas y diversas formas de patronazgo político y clientelismo, explotación y protección, que tenían como base su poder económico, político, cultural y militar tanto en la hacienda como —a menudo— en el ámbito del gobierno provincial. Algunos indígenas podían ser cooptados por el sistema, y se encontraban con que sutilmente se les hacía rechazar sus antecedentes y colaborar en su propio avance a costa de sus compañeros étnicos.³² En este sistema omnipresente y penetrante, al que gradualmente se fue conociendo como “gamonalismo”, la propiedad de la tierra resultaba importante, pero no era su característica definitoria. Así,

[...] primero, al convertirse en propietario de los pastos, don Santos se convierte en patrón de los indios allí instalados. Segundo, a este doble título se le debe respeto. Tercero, este orden que la ley humana nos obliga a respetar, Dios, que está en el cielo, también lo respeta (José María Arguedas, cit. en Bourricaud 1970: 32-33).

De modo que el gamonal tenía poder no solo en virtud de la autoridad delegada, sino también en sí mismo. Era más apropiado verlo como un aliado del Estado central antes que como un funcionario (Ibarra 2002).

Sin embargo, no podemos exagerar la profundidad de este elemento de continuidad y su importancia para el dominio y la marginación de la población indígena. La siguiente sección explica cómo ciertas oportunidades se abrieron para esta última —aunque brevemente— con la eliminación del tributo y una menor demanda de tierras y mano de obra en la sierra: la respuesta limitada apenas sorprende dada la pervivencia de una estructura social opresiva y la falta de infraestructura con que unificar el país y hacer que la sierra fuera competitiva.

31. El uso del término “gamonal” está registrado por vez primera en 1863, por Pablo Macera, en la *Revista Americana* de Lima. El gamonal es allí descrito como “el sátrapa de la parroquia”. La palabra fue tomada de las ciencias naturales, donde alude a una planta parasitaria. Véanse Ibarra 2002; y también Burga y Flores-Galindo 1985: 106.

32. De este modo, era concebible, aunque improbable, que una persona indígena llegara a ser un gamonal luego de varias generaciones de “blanqueo”, matrimonio y educación, pero solo imponiéndole la “indianidad” a otros.

CUADRO 5.1

INGRESO FISCAL DURANTE LA ERA DEL GUANO					
(PORCENTAJE DEL TOTAL)					
	Aduanas	Guano	Empréstitos	Otros	Total (000 pesos)
1846	26,3	8,4	0,0	65,3	6.113
1847	40,1	0,0	0,0	59,9	5.005
1851	29,1	28,7	0,0	42,1	7.636
1852	35,8	37,9	0,0	26,3	8.699
1861	15,3	80,0	0,0	5,0	21.246
1862	16,3	70,1	6,0	7,6	19.949
1863	13,4	42,6	37,5	6,6	26.235
1866	19,4	67,4	0,0	13,2	20.128
1868	10,9	65,7	17,2	6,2	32.370
1871	12,1	83,5 ^a	0,0	4,4	51.181
1872	10,9	50,8 ^a	31,1	7,1	67.987
1873	12,2	73,9 ^a	10,2	3,7	67.710
1876	12,5	57,3 ^a	18,8	11,4	44.246
1877	30,6	29,1	5,2	35,1	22.500

Fuente: Hunt, 1973: 70, cuadro 8. Para las fuentes originales, consúltese la misma obra.

Nota: ^a Incluye los adelantos efectuados sobre el guano, así como el ingreso corriente.

Una oportunidad de breve duración, conflictos y renovada represión

En la bibliografía, se sostiene que el nuevo eje de la economía y la estructura política en Lima y la costa al menos sí aliviaron un poco la presión en la sierra. Pero este “alivio” en realidad solamente ayudó a la sierra central, que ya se encontraba muy vinculada con la capital y la costa —el valle del Mantaro, Jauja, Huancayo, Tarma—, y además el alivio fue breve: doce años, por ejemplo, en el caso del tributo indígena.

Los ingresos provenientes del guano solo comenzaron a ser significativos a comienzos del decenio de 1850 (cuadro 5.1). Durante los primeros años posteriores

a la independencia, las necesidades de ingresos eran desesperadas y se decidió conservar el tributo colonial, pero cambiándole el nombre al eufemismo de “contribución indígena”. También hubo una “contribución de castas”.³³ Pero el cobro del impuesto resultaba difícil: en la Colonia, los mecanismos de recaudación dependían de un tejido social que la independencia había perturbado. En 1854, el alza en el ingreso procedente del guano permitió eliminar el impuesto. Las comunidades, en consecuencia, pudieron reducir su integración al mercado, una vez que disminuyó la necesidad de efectuar pagos en dinero, y eso fue lo que algunas de ellas hicieron.³⁴

Otra “presión” que se retiró fue la de la minería. Las exportaciones de plata se estancaron a mediados de siglo. A unos serios problemas del lado de la oferta, se les sumó la sobrevaluación de la tasa de cambio real mientras el guano tenía su auge.³⁵ El estancamiento de la minería presuntamente redujo la demanda de alimentos provenientes de las áreas vecinas, pero al mismo tiempo los pequeños mineros indígenas lograron incrementar su participación en el sector. Cerro de Pasco continuó en manos europeas, pero en otros casos los mineros locales conservaron su lugar.

La historia social de la sierra en el siglo XIX se vio configurada por el variado impacto regional que tuvieron los distintos auges en la demanda internacional de materias primas. La concentración de tierras y la presión ejercida sobre la mano de obra se debieron, de diversos modos, a la creciente demanda de las haciendas azucareras de la costa norte y, para la década de 1860, al auge de la lana en el sur. Fue en la sierra central donde la población indígena se benefició más al reducirse la presión ejercida sobre la tierra, la mano de obra y los recursos minerales. Al menos para algunas partes de aquella región esta fue una época de consolidación e incluso —tal vez— de mejora en la calidad de vida.³⁶ El sistema de haciendas parece haberse afianzado al sur y al norte, pero en la región central algunas personas dejaron sus comunidades y se aseguraron títulos de tierras (Contreras 1988: 540). Los cálculos del ingreso en tiempos de la matrícula de 1827 daban una

33. El término “casta” aludía a todos aquellos que no pagaban el tributo indígena ni los impuestos predial e industrial.

34. Contreras 1988: 521-522. Su análisis tiene como base Jauja, en la sierra central.

35. Dado el patrón estándar de intercambio bimetálico del periodo, el efecto de la enfermedad holandesa durante el auge del guano se manifestó por medio de la inflación interna. Para su documentación, véase Hunt 1973.

36. Esto fue bien argumentado por Mallon 1987 y Gootenberg 1991.

razón de 2 a 1 en el ingreso monetario de no indígenas a indígenas (Gootenberg 1991: 45). Dado que en algunas zonas se produjo cierta desmonetarización y en otras una mayor monetarización, resulta imposible indicar cómo se movió este ratio en las siguientes décadas, pero aún más importante es que podemos indicar que en la sierra central, el acceso a los recursos mejoró para la población indígena. Hubo cierta recuperación del número de la población: la tasa nacional de crecimiento demográfico fue de 1,2 por ciento anual en 1827-1876. El porcentaje de indígenas en esta población en crecimiento fue de 62 en 1827 y 58 en 1876; una ola de epidemias golpeó la sierra en la década de 1850, lo que supuestamente dejó unos trescientos mil indígenas muertos.³⁷ Aunque no hubo ninguna mejora en la educación o en el suministro de salud, esta liberación de la presión con respecto al acceso a los recursos coincidió con una paz relativa, como lo predice la teoría de las desigualdades de grupo: ningún conflicto serio estalló entre la población indígena y las autoridades después de 1815 y hasta 1867.³⁸

Sin embargo, los conflictos sí estallaron. La ocasión para ello fue la reimposición del tributo en 1866,³⁹ antes del colapso del guano, como vemos en el cuadro 5.1. La abolición previa de este impuesto había privado a las élites regionales de su principal fuente de ingreso público y fue la causa de muchos conflictos con el gobierno central, lo que llevó a su reestablecimiento. El centro específico de la revuelta fue Huancané, en el departamento de Puno, al sur. Aquí, una severa sequía estaba agravando la presión sobre los campesinos, pero el conflicto también fue emergiendo a medida de que el mercado mundial de la lana vivió un auge en el decenio de 1860, lo cual hizo que hubiese un número cada vez más grande de comerciantes que ansiosamente buscaban nuevas fuentes de lana barata.⁴⁰ El conflicto difícilmente fue una mera reacción a las crecientes presiones del mercado, como algunos han sugerido, dado que la “era del mercado” todavía continuaba siendo una ilusión. Tanto los hacendados como los comerciantes seguían usando

37. Esto tiene como base un fascinante y detallado análisis que Gootenberg hiciera a partir de la matrícula o censo fiscal de 1827, antes no explorada. También logró corregir los célebres estimados de Kubler para el periodo 1795-1876, que no incluyeron 14 provincias, entre ellas Puno. Véase Gootenberg 1991.

38. Una excepción es la revuelta de los iquichanos en Huanta en 1825, contra el nuevo régimen republicano (Klaren 2000), pero se trató de algo sumamente localizado.

39. Esta vez, como un impuesto individual sin características étnicas (Contreras y Cueto 1999: 118).

40. Como lo expresara vívidamente Larson, iban “batiendo la árida meseta en pos de lana barata” (2004: 157).

el servicio no remunerado de los indígenas, y estos tenían muchas cuentas que saldar, entre ellas la servidumbre.⁴¹

La reacción a la revuelta fue punitiva. Una “ley del terror” fue aprobada, a lo que siguieron asesinatos y encarcelamientos en masa. Aldeas íntegras fueron desarraigadas y exiliadas a campos de trabajo en la selva (Larson 2004: 158). El levantamiento fue reprimido brutalmente y Juan Bustamante, su líder, fue muerto a pedradas.⁴²

Lo que estamos viendo, entonces, es que la *recuperación* económica habría generado el conflicto, en el contexto histórico de unas relaciones sociales y económicas profundamente explotadoras, cuando toda la economía regional estaba creciendo visiblemente en respuesta a la demanda mundial. No obstante ello, nuevamente se usaron duros medios y prácticas para impedir que el ingreso de los indígenas también creciera.

Sin embargo, la prosperidad había llegado a su fin para la economía en general. El guano colapsó debido a los bienes sustitutos; los ferrocarriles habían sido contruidos con créditos garantizados con este producto, de modo que la deuda gubernamental pasó ahora a ser un problema sumamente grande. Y, sin embargo, la costosa aventura ferroviaria no había llegado a la sierra, excepción hecha de unas cuantas líneas. Aunque las ciudades de la serranía figuraban en los planes originales, la falta de capacidad estatal y la mínima rendición de cuentas contribuyeron al fracaso (Contreras y Cueto 1999: 123). Aunque no se registró ninguna pérdida significativa de tierras comunales hasta la década de 1850, en el sur la lana estaba expandiéndose, aunque bajo circunstancias altamente conflictivas, en las cuales las comunidades a menudo eran desplazadas (Jacobsen 1997).

La Guerra con Chile

A los problemas económicos y las revueltas se le sumó ahora un gran conflicto internacional: la Guerra del Pacífico. Esta fue una contienda librada contra Chile entre 1879 y 1883 por la posesión de los campos de nitrato, lo que tuvo como

41. La interpretación de este acontecimiento es materia de debate en la historiografía. Algunos autores sostienen que se trató fundamentalmente de una disputa entre caciques locales rivales, que aprovecharon los agravios indígenas. Véase McEvoy, 1999.

42. Véanse Larson 2004: 158, Rénique 2004: capítulo 1 y Jacobsen 1997. Bustamante era hijo de madre indígena y padre español, del cual decía que sabía poco o nada (Rénique 2004: 28). Él se identificaba con sus raíces indígenas. Hoy en día se le habría llamado un cholo. Contaba, sin embargo, con una educación excepcional y había viajado bastante. Véase McEvoy 1999.

resultado la ocupación de la costa y la sierra central por parte de las tropas chilenas y una costosa derrota.⁴³

La guerra constituye un momento importante en nuestra historia. El efecto de las tropas chilenas que arribaron a la sierra central fue desencadenar una movilización indígena en defensa del país (Mallon 1987), construida sobre los elementos de autonomía que vimos desarrollarse en la mencionada región. La naturaleza de la “conciencia” que yacía detrás de este movimiento ha sido materia de un gran debate,⁴⁴ pero no parece probable que haya sido otra cosa que nacionalista y patriota. Pero las relaciones con la élite mestiza/blanca se agravaron incluso en medio de la guerra, y el enfrentamiento devino en un conflicto de clase y étnico. Esto se prolongó por casi tres años antes de que se firmara un tratado de paz con Chile (Manrique 1988). Las élites rápidamente advirtieron que la movilización y la autonomía indígenas constituían un mayor peligro que Chile, y comenzaron a presionar para que se estableciera la paz a cualquier precio (Mallon 1987).

El impacto fue profundo en el ámbito nacional: entre las élites se culpaba a los indígenas por la derrota, con todo el impacto emocional que semejante postura debía tener, dada la necesidad de contar con un chivo expiatorio ante una catástrofe tan grande y un acuerdo punitivo. Ricardo Palma fue explícito al escribirle a Nicolás de Piérola:

En mi concepto, la causa principal del gran desastre del 13 [de enero, día de la batalla de San Juan, que precedió a la caída de Lima] está en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada, que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene el sentimiento de la patria; es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa y, señor por señor, tanto le da ser chileno como turco.⁴⁵

El resultado político fue un nuevo enlazamiento de Lima con las élites regionales, cuya necesidad de refuerzos para enfrentar la “amenaza india” fue percibida vívidamente. Ello ayudó a consolidar la emergente institución del gamonalismo. Por vez primera en toda la sierra, este era claramente el mecanismo de dominación más importante. El gamonalismo se afianzó aún más con la decadencia de la práctica de nombrar oficiales militares en el cargo local de “prefecto”, tras la

43. Lima estuvo ocupada unos tres años y medio, y el Perú tuvo que cederle a Chile los territorios con nitrato, además de pagarle una gran indemnización en guano.

44. Los indígenas sí combatieron en ambos bandos. Sin embargo, Manrique (1988) presenta un análisis convincente que va contra las tesis de Bonilla y Favre. Este último interpreta todo el episodio de la movilización indígena como un fenómeno de clase y étnico. Manrique señala que de haber sido así, muchos más indígenas se habrían unido al bando chileno.

45. Palma 1979: 20.

pérdida de prestigio de las fuerzas armadas luego de la derrota con Chile, y dado el bajo nivel de confianza que la élite limeña tenía en este grupo.⁴⁶ El Estado era cada vez más conciente del valor que tenía el delegar funciones, en el ámbito local, al grupo que tuviera el monopolio del poder, legitimando así su propio poder y reproduciendo fronteras que mezclaban elementos de clase y étnicos (Bourricaud 1970, Larson 2004, Rénique 2004). Los gamonales locales competían entre sí sobre la base de su capacidad para movilizar el favor del gobierno central. La formación de estos “circuitos de poder público privatizado” —que es como O’Donnell (1999) denomina a este tipo de poder delegado, permitido o al menos tolerado por las autoridades estatales— habría de tener profundas implicancias en el siguiente siglo, cuando el Estado intentase —en distintos momentos y de diversos modos— penetrar en la sierra con sus propias instituciones, como veremos en los siguientes dos capítulos.

Entretanto, los pueblos indígenas aprendían cada día con más fuerza a desconfiar de sus élites regionales. De modo perverso, la nueva alianza de Lima con estos grupos fortaleció una cultura de dirigirse directamente a la capital, y específicamente al mismo presidente de la República. Esto respondía a la tradición monárquica del régimen incaico, la cual llevó naturalmente a una relación “filial” con el “rey”, así como al Estado patrimonial colonial español y al poder simbólico del patriarcado benévolo encarnado en el monarca hispano. De este modo, el sistema de patronazgo vertical heredado se vio fortalecido y continuó canalizando el resentimiento y las demandas indígenas; se trataba, pues, de la continuidad de las relaciones de patrón/cliente que habían estructurado la jerarquía y la desigualdad, desde la cima hasta la base de las relaciones de poder coloniales. Diversos presidentes sabían muy bien cómo aprovechar esto. Sin embargo, una consecuencia posiblemente más productiva de la guerra, en otro ámbito, fue la creciente toma de conciencia de que el “problema indígena” debía ser resuelto bajo otras condiciones fuera de la represión brutal. Un acontecimiento emblemático fue la respuesta dada a la rebelión de Atusparia por los dos sucesivos gobiernos que le hicieron frente.⁴⁷ La revuelta se originó por los esfuerzos de las autoridades locales por cobrar la contribución personal, impuesta una vez más para financiar la guerra. El presidente Iglesias (1883-1886) aplicó la fuerza enviando tropas desde

46. A comienzos de siglo, también se tomaron medidas para profesionalizar el Ejército, retirando a sus miembros de los cargos públicos.

47. La revuelta se produjo en el Callejón de Huaylas, en la sierra norte. Los alcaldes indígenas que acudieron a presentar una petición, y que Atusparia lideraba, fueron humillados cortándoseles las trenzas, una práctica que deliberadamente recordaba la Colonia. Miles de campesinos indígenas tomaron entonces la ciudad de Huaraz y otras más del departamento (Stein 1988, Thurner 1997).

Lima; en 1886, el presidente entrante, Andrés A. Cáceres, sacó a Atusparia de la cárcel y le invitó a su casa, donde se abrazaron: un abrazo que habría de convertirse en el símbolo de la reconciliación de los dos Perús. A su partida, Atusparia le encargó su hijo al presidente, como padrino y tutor (Stein 1988, Thurner 1997).

Con este cambio de actitud entre las élites luego de la guerra, se fortaleció el movimiento civilista, que habría de dominar la política peruana hasta la década de 1920.⁴⁸ A partir de este momento, la élite costeña civilista logró imponer su discurso y su programa. En el decenio de 1880, la conclusión era que la inmigración debía ser la respuesta para “diluir” y mejorar a la gente “bárbara”. Pero ya en ese entonces se iba haciendo evidente que el Perú jamás podría competir exitosamente por las grandes oleadas de inmigrantes que estaban ingresando al Brasil, el cono sur y a algunos países del Caribe. De modo que la nueva filosofía pasó a ser la civilización y la asimilación por medio de la educación, lo que significaba escuelas pero también elementos más amplios, como la enseñanza de la higiene —como una forma de enfrentar las cuestiones de salud— y la nutrición. La oleada descentralizadora que acompañó al fin del auge guanero incluyó así los orígenes de un traslado paternalista de las responsabilidades a las regiones, con recursos sumamente limitados. Se decretó un “impuesto escolar”, y todos los impuestos locales iban a las autoridades departamentales, las cuales eran ahora responsables por la educación y la salud (Contreras 1996: 215-219). Cuánto logró esto modernizar las desigualdades entre grupos, es algo que forma parte de la historia del siglo XX, el tema del siguiente capítulo.

Conclusión

Este capítulo ha explorado cómo tanto la Colonia como las primeras décadas posteriores a la independencia configuraron a la vez las desigualdades horizontales y las instituciones que habrían de enraizar y condicionar dichas desigualdades. Hemos mostrado de qué manera el sistema colonial produjo un profundo efecto sobre la subyugación y fragmentación de la población indígena al crear instituciones de prejuicio, trabajo forzado y fiscalidad —que reforzaron las desigualdades políticas, económicas y sociales—, y al destruir virtualmente el liderazgo de los pueblos indígenas mediante la muerte y la represión. Mostramos cómo, con la independencia, unos grandes factores de continuidad y cambio se pusieron

48. Nacido formalmente en 1871 bajo el nombre de “Sociedad Independencia Electoral”, al año siguiente tomó la denominación de Partido Civil. Durante la guerra estuvo desorganizado, y reapareció formalmente en 1894.

en marcha. La transformación poderosa fue el establecimiento de Lima como el centro clave del poder y la capital de la nueva República, con todo lo que se encontraba detrás de esto, y el dominio resultante de la costa, consolidado con el auge del guano. El Perú fue reconfigurado en estos años tanto en su estructura política como en su economía, lo que tuvo importantes consecuencias para toda la población de la sierra (las élites y las comunidades de indígenas por igual). Pero la paradoja fue que el mismo desplazamiento del eje a la costa permitió que hubiese una continuidad fundamental en las estructuras sociales en los Andes. Ninguna fuerza modernizadora cuestionó la reproducción esencial del sistema colonial de mediadores: se trataba de intermediarios que monopolizaban el acceso al poder, los privilegios y las oportunidades. La decadencia de la élite indígena y sus formas internas de gobierno —debilitadas aún más después de la independencia— brindó nuevas oportunidades para que esta institución intermediaria quedara establecida. De este modo, el “gamonalismo” llegó a dominar gradualmente la vida en la sierra, y específicamente a los pueblos indígenas. La tierra era importante en dicho dominio, pero la institución del gamonalismo era mucho más que la propiedad de la misma o el poder de la élite: de lo que se trataba era de reforzar mecanismos de monopolización del acceso al poder y a las oportunidades, apoyados sobre una red de obligaciones y posibilidades que arrastraron la población a su cultura y sus actitudes. De este modo, personas indígenas podían verse cooptadas —“arrastradas”— y encontrarse con que su propio asenso pasaba por colaborar en el desempoderamiento de sus compañeros.

Para comienzos del siglo XX, vemos así dos líneas cruciales de evolución institucional, ya incrustadas en décadas de normas impuestas y de actitudes: en primer lugar, que el “Perú” podía arreglárselas sin la sierra; y en segundo lugar, que “el gamonal es el amo de los indios”. Ambas características serían fundamentales en la configuración de la carga de la “doble desigualdad”, ahora que pasamos a las desigualdades horizontales en el siglo XX.

EL ENRAIZAMIENTO DE LA DESIGUALDAD REGIONAL Y SUS CONSECUENCIAS PARA LAS DESIGUALDADES DE GRUPO: DE LA DÉCADA DE 1890 A LA DE 1960

EN COAUTORÍA CON CARLOS CONTRERAS

Hemos indicado cómo el surgimiento de Lima como la capital del Perú independiente tuvo una importancia central para el destino de los pueblos indígenas. En la medida de que el tipo de crecimiento que habría de dominar el siglo XX se iba configurando década tras década, así también se veía reforzado el dominio de la costa y de Lima. De este modo, surgió un patrón de crecimiento que no tenía necesidad alguna de modernizar la sierra y, mucho menos, la selva. Al mismo tiempo y de igual importancia, fue que el “gamonalismo” gradualmente dominó el poder de la intermediación estatal en la sierra. Ambas líneas cruciales de evolución dieron forma a las instituciones estatales y las reconfiguraron de varias formas. Ellas pasaron a formar parte de la infraestructura sobre la cual se levantaron otras instituciones menos “fundacionales”, como las grandes políticas públicas.¹ Una consecuencia de este patrón de crecimiento fue la incapacidad de desarrollar la capacidad estatal para entender qué se necesitaría para mejorar la sierra. Otro efecto importante fue que el Estado usó a los intermediarios tradicionales para canalizar los recursos. Los pueblos indígenas tenían acceso a tales recursos en las condiciones configuradas por la predominante cultura clientelista y discriminadora. El patrón de crecimiento y sus consecuencias institucionales condujeron inevitablemente al cambio, y dejaron también un legado de falta de capacidad, de liderazgo débil y de normas de discriminación y paternalismo que impidieron el surgimiento de los desarrollos que podrían haber modificado el patrón a favor de la población indígena. Este capítulo documenta dichos procesos.

1. Pierson (2004) sostiene que las políticas públicas representan una extensión sustancial de la autoridad política y que alteran aún más los incentivos de los actores y sus recursos.

El capítulo anterior comenzó a esbozar cómo se intersecan la desigualdad regional y la étnica. En el presente, exploraremos cuidadosamente de qué manera evolucionó la desigualdad regional y por qué, para así mostrar la forma en que la élite de la sierra se vio severamente afectada en la medida de que esta región, como un todo, sufría cada vez más con la dinámica interregional política y económica. Al padecer las élites, las estructuras represivas incrustadas hicieron que los indígenas sufrieran aún más, lo cual solamente les dejaba dos opciones: emigrar, o retroceder y regresar nuevamente a la hacienda.

La clave del proceso fue la evolución de las exportaciones de materias primas. El crecimiento de dichas exportaciones aparece en el cuadro 6.1. Se ve allí que en los años finales del siglo XIX y los primeros del XX sí hubo elementos de crecimiento en el Perú no costero, bajo la forma del caucho y la lana. Pero estos elementos eran de naturaleza fuertemente excluyente. Como vimos en el último capítulo, en el caso de la lana, la expansión generó una feroz competencia tanto por la tierra como por la mano de obra, lo que llevó a una mayor marginación de la población indígena en todo el sur peruano (Larson 2004). Sin embargo, para finales de la década del veinte, no quedaba ningún elemento de estímulo directo al crecimiento. La lana había iniciado su decadencia terminal para fines de dicho decenio al haberse erosionado su mercado con los sustitutos sintéticos. Por su parte, el caucho, la única materia prima demandada de la selva, cayó antes y por la misma razón, como por la competencia de las plantaciones asiáticas; sin embargo, para los pueblos indígenas de la selva, este producto fue más una amenaza que una oportunidad (Santos-Granero y Barclay 2002). La cocaína y la coca también fueron exportaciones significativas hasta la primera década del siglo XX: la supresión de cocaína del lado de los Estados Unidos después de 1910, a lo que se sumó la creciente competencia de Java, afectó a la agricultura en la sierra (Gootenberg 1999).²

Irónicamente, a medida de que la lana colapsaba, las consecuencias desfavorables para la equidad del auge anterior no se revirtieron, en una típica asimetría del auge y la caída. Si bien la competencia en pos de las tierras y la mano de obra disminuyó —lo que favoreció en sí mismo a la población indígena—, la política, así como las estructuras y prácticas clientelistas de la oligarquía, configuradas para beneficiarse con la expansión anterior, mantuvieron sometidas a la población indígena. Y una vez que las violentas protestas de los años veinte fueron reprimidas, no sería sino hasta las décadas de 1950 y 1960 que el descontento del campesinado indígena nuevamente volvería a plantear un desafío a la institución del

2. Véanse las cifras sobre las exportaciones de los dos productos en el cuadro A.2 en Gootenberg 2008: 330.

CUADRO 6.1

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (1890-1960)

(PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES)

Año	Plata	Cobre	Plomo y zinc	Hidrocarburos	Azúcar y algodón	Lana	Caucho
1890	33	1	0	0	37	15	13
1900	22	18	0	0	39	7	13
1910	10	18	0	2	34	7	18
1920	5	7	0	5	72	2	1
1930	4	10	7	30	29	3	0
1940	10	19	3	25	28	5	0
1950	4	5	11	13	51	4	0
1960	5	21	9	4	28	2	0

Fuentes: Thorp y Bertram 1978; *Extracto Estadístico* y BCR, *Memoria*.

Nota: Las cifras de metales de 1940 corresponden a 1939.

gamonalismo a medida que esta comenzaba a colapsar, e incluso entonces las señales de descontento emergentes fueron fragmentadas y no coordinadas entre sí.

Todo el Perú sufrió, claro está, cuando el modelo tuvo un breve tropiezo en los años treinta, al igual que en toda Latinoamérica; no obstante, el impacto de la Gran Depresión de 1929 fue menor que en cualquier otro país de tamaño similar (Thorp 2000), y el Perú retomó con bastante rapidez su patrón de crecimiento impulsado por las exportaciones primarias.³ Desde mediados del siglo XX, los principales productos que impulsaban el crecimiento tuvieron su centro en —o frente a— la costa, siendo la minería de metales la única excepción importante. De este modo, el petróleo, el algodón, el azúcar y la harina de pescado, sucesivamente, llevaron expansión y prosperidad a la costa. Y al igual que en todo el mundo, la minería pasó a ser de mayor escala, más intensiva en capital y, en consecuencia, más controlada por extranjeros. Las oportunidades para las poblaciones locales fueron cada vez más limitadas: la necesidad de mano de obra cayó, los equipos eran comprados en el extranjero y la infraestructura en general ya existía a comienzos

3. Los precios de las principales materias primas peruanas se recuperaron con relativa rapidez incluso en la década de 1930 (Thorp 2000: 83).

del siglo. Se construyeron entonces más vías de acceso: carreteras diseñadas para llevar los productos mineros a la costa y no para desarrollar a la sierra.⁴

La exclusión económica se vio agravada con la de tipo político, como la representada en la ley electoral de 1895, que limitó el sufragio a la población que sabía leer y escribir. Como vemos en el cuadro 6.2, la población que sí tenía estas capacidades estaba concentrada sobre todo en la costa. La mayoría de los habitantes de la sierra, incluido el grueso de los indígenas, perdió formalmente sus derechos ciudadanos y la voz política quedó concentrada en una pequeña élite. Con tales medios y semejante evolución, una geografía ya hostil se vio agravada con la política y la economía asociadas con el patrón de desarrollo. Para la población indígena, esto comenzó a parecer insuperable.

En todo este proceso, que redujo la importancia de la sierra, la emigración desde esta región fue a la vez consecuencia y causa. La versión más temprana del modelo impulsado por las exportaciones al menos necesitaba su mano de obra, pero incluso este impacto positivo ya se había visto debilitado con el arribo de los trabajadores culíes en el siglo XIX. Esta demanda laboral se había reducido significativamente para el decenio de 1930 y llegó a su fin para el de 1960, con el crecimiento poblacional de la costa y la migración.⁵ El cuadro 6.3 muestra la aceleración del ascenso de la población a lo largo del siglo; se produjeron unos flujos migratorios pronunciados después de 1940, lo que redujo la tasa de crecimiento de la población de la sierra a 1,2 por ciento al año a partir de esa fecha. Esta fue una consecuencia del modelo económico, que concentró las actividades en la costa además de reforzar el dominio de esta región, puesto que las personas más educadas y con visión empresarial eran las que tendían a emigrar. Veremos luego los efectos que esto tuvo para el liderazgo en la sierra.

Del mismo modo, la concentración del crecimiento en la costa debilitó a las élites de la sierra: esto también llevó a la emigración y minó un proceso de modernización en esta región, que eventualmente podría haber desarrollado y fortalecido nuevas voces políticas regionales para que cuestionaran el modelo, como sostendremos luego.

Debemos ahora desarrollar estos temas uno por uno. En la primera sección, analizamos el macronivel: la forma en que el Estado y la economía evolucionaron.

4. El extremo norte de la costa —Tumbes y Piura— sufría un aislamiento parecido al de la sierra, aunque sí contaba con petróleo. El primer aeropuerto fuera de Lima fue construido en Talara, en 1928.

5. La bibliografía muestra que el enganche aún seguía en uso en la década de 1930, pero que estaba ya en decadencia. Consúltese Deere 1990: 45-50, donde se hace una detallada descripción de esta institución, la que se empleó hasta la década de 1950. Véanse también Klaren 1976 y Gonzales 1978.

CUADRO 6.2

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE VOTANTES REGISTRADOS (1940 Y 1963)

(CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)

Regiones ^a	1940 (%)	1963 (%)	Proporción de la población (censo de 1961)
Costa			
Lima	26	39	
Total costa	51	63	38
Total sierra	42	30	51
Total selva	7	7	11
Total inscrito	100	100	100
– cifra absoluta	392.381	2.070.727	

Fuente: Elaboración propia a partir de Basadre 1980: 161; de los datos del *Anuario Estadístico*, 1966: 973; y del cuadro 6.3.

Nota: ^a Según la ubicación de la capital del departamento.

Nótese que la clasificación es en el ámbito departamental, que no es exacto.

Costa: Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes.

Sierra: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno.

Selva: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín.

En la segunda sección, examinamos detenidamente la respuesta de política dada al “problema indígena”, tal como fuera definido a finales del siglo anterior. En la tercera, rastreamos las consecuencias políticas y sociales de estos acontecimientos en el ámbito local, y en particular los efectos del patrón de integración a la economía internacional, así como el impacto que la emigración tuvo sobre las identidades y la movilización política. La cuarta parte explora la intersección de los desarrollos políticos locales con los de escala nacional, así como el destino de

CUADRO 6.3

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA POBLACIÓN

	Distribución porcentual		Tasas de crecimiento anual promedio	
	1876	1961	1876 a 1940	1940 a 1961
Sierra	69,0	50,6	1,2	1,2
Selva	8,2	11,1	1,6	2,8
Costa	22,7	38,2	1,6	3,9
Principales valles costeros			1,6	2,0
Lima-Callao			2,2	5,1

Fuente: Hunt 1977: cuadro 4-1.

Nota: La distribución regional es la misma que en el cuadro anterior.

los esfuerzos reformistas resultantes. La situación, para finales de la década de 1960, estaba signada por las incoherencias e ineficacias nacionales, y fue en ella que ingresó el gobierno militar del general Velasco Alvarado: esta es la historia del siguiente capítulo.

La vía de crecimiento emergente y sus consecuencias para el crecimiento en la sierra y la desigualdad

Demostramos ya en otro lugar las pronunciadas características negativas de esta forma de expansión liderada por las exportaciones, no obstante el crecimiento razonable que brinda (Thorp y Bertram 1978). Aquí resaltaremos dos de ellas: el tipo de Estado que habría de surgir y el tipo de política económica concomitante, sobre todo aquella que configuraba la relación con el mercado internacional.

La primera característica, la naturaleza del Estado, tuvo una enorme importancia indirecta para nuestro análisis de las desigualdades de grupo. Su evolución se vio configurada profundamente por la inexistencia, entre las élites empresariales, de una percepción de la necesidad que había de contar con un Estado desarrollista, como por un sistema político cada vez más receptivo a un electorado concentrado en la costa. La influencia de las necesidades de la sierra era cero: la inmensa mayoría de su población no votaba, y la élite empresarial de mayor influencia tenía su base en la costa. Sus intereses eran claros: la rápida expansión del

azúcar, el algodón, el petróleo y el cobre en los primeros 35 años del nuevo siglo necesitaban un Estado que pudiera conservar el orden —lo que incluía garantizar el derecho de propiedad— en los sectores modernos de la costa, y en Lima en particular.⁶ Pero las necesidades de infraestructura —transporte, electricidad y comercialización— eran cubiertas mayormente por empresas extranjeras, y más aún, por empresas foráneas dispuestas a dar cabida a las élites locales.⁷ La élite minera peruana —un grupo de empresarios serios y calificados— en su mayoría optó racionalmente por unas sociedades rentables con el capital extranjero, o vendió y usó el dinero para desarrollar empresas en la costa, como lo hiciera Rizo-Patrón.⁸

La cultura en vías de desarrollo de una estrecha sociedad con los extranjeros y la dependencia de ellos, quedó captada (involuntariamente) en una sentencia que Augusto Weise, un distinguido miembro de la élite empresarial, hiciera en 1964 cuando decidió ingresar a la producción de la harina de pescado en sociedad con Mecom, un petrolero tejano: “Este negocio siempre me ha apeestado. Pero si al Sr. Mecom le interesa, entonces huele como una rosa”.⁹

Semejante patrón de desarrollo, en el cual los “hacedores” —la élite empresarial— no compartían la necesidad percibida de desarrollar el papel del Estado, es una explicación que yace detrás de por qué razón para la década del sesenta, las instituciones subyacentes necesarias para enmarcar y respaldar una floreciente economía moderna eran débiles, si es que existían. La década de 1930 fue una época de construcción de instituciones, al igual que en todos los países de mediano y gran tamaño de América Latina, en parte como respuesta a la crisis, pero también a influencias internacionales como las misiones Kemmerer.¹⁰ En 1922,

-
6. Como ya explicamos, en la sierra se mantenía el orden por medio de la institución del gamonalismo: se trataba de la versión peruana del gobierno indirecto.
 7. Aquí el contraste interesante es Chile, donde no les convenía a los intereses de las multinacionales estadounidenses involucradas con el cobre permitir que los locales participaran. En consecuencia, un rasgo del desarrollo chileno fue la existencia de una burguesía local interesada en animar al gobierno nacional a que asumiera un papel desarrollista, para que así brindara oportunidades (Thorp 1998: capítulo 3).
 8. Consúltese Low, 1976, un trabajo inusual y emprendedor que rastrea lo que sucedió con las personas que vendieron sus minas a la Cerro de Pasco Copper Corporation a comienzos del siglo XX, y a las pocas que no lo hicieron.
 9. La cita originalmente apareció en inglés: “This fishmeal business has always smelled highly to me. But if Mr Mecom is interested, why then, it smells like a rose” (*Peruvian Times*, 5 de marzo de 1964, cubierta posterior).
 10. El Perú no fue la excepción a la tendencia general latinoamericana, en las décadas de 1920 y 1930, de crear bancos centrales, superintendencias de banca y contralorías, lo que fue difundido por las

ya se había creado un Banco Central contando con la asesoría de este último personaje; en 1931 se creó la Superintendencia de Banca. Pero los gobiernos del general Óscar Benavides (1933-1939) y de Manuel Prado (1939-1945) también contribuyeron bastante a la creación de ministerios modernos.¹¹ En 1935 se crearon los de Salud y Educación; en 1931 se creó el Banco Agrario, un Banco Industrial en 1936, el Banco Minero en 1940 y un Ministerio de Agricultura en 1944, para no mencionar sino unas cuantas de las innovaciones realizadas.

Sin embargo, el incipiente desarrollo estatal se vio severamente afectado por un periodo caótico de diseño de políticas en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente José Luis Bustamante y Rivero intentó gobernar en alianza con el APRA, lo que produjo un periodo de excepcionales contradicciones internas que hicieron que las élites empresariales y políticas nuevamente se volvieran decididamente al *laissez faire*.¹² El golpe de 1948 llevó al poder al general Manuel A. Odría, cuyo gobierno fue decididamente conservador y pro mercado, dispuesto a allanar el camino al capital extranjero.

Tanto el régimen de Odría como el de Augusto B. Leguía (1919-1930) reforzaron el centralismo del modelo, concentrando las actividades en la costa, pero sobre todo en Lima. Los gobiernos que se sucedieron en las décadas del treinta y cuarenta no debilitaron este centralismo de modo alguno: la protección de la industria creció, pero ella fue mayor en Lima.¹³ Esto respondía a las crecientes políticas populistas seguidas en la costa, en donde se concentraba la mayor parte del electorado (Basadre 1980, Aljovín y López 2005). El resultado fue que a lo largo de todo el periodo hubo una creciente concentración de las actividades económicas y políticas en la capital. Por ejemplo, los datos sobre el número de establecimientos industriales muestra que mientras que en 1943 el 43 por ciento de ellos se hallaba en Lima, para 1954 dicha cifra era del 75 por ciento (Caravedo 1978: 105).¹⁴

llamadas misiones Kemmerer, cuerpo de asesores encabezados por Edwin Kemmerer, que tuvieron una influencia que traspasó las fronteras de América Latina (Drake 1989).

11. Consúltese una relación completa de estos desarrollos institucionales en Schmidt 1984.
12. Consúltense Thorp y Bertram 1978: capítulo 10, Caravedo 1978: 63. Este fue el caso sobresaliente de una élite regional —la de Arequipa— que ejerció influencia política, aunque finalmente sin éxito.
13. Esto se debió fundamentalmente a que la administración aduanera era mucho más eficiente en Lima que en los restantes puertos de la costa (Caravedo 1976: 90).
14. Los datos de préstamos de los bancos muestran las mismas evidencias de concentración: en 1945, el 77 por ciento de los préstamos de la banca comercial tuvieron lugar en Lima. La participación arequipeña cayó de 24 por ciento en 1945 a 18 en 1955 (Caravedo 1978: 93).

El resultado de todo el periodo que corre entre las décadas de 1920 y 1960 fue un continuo descuido institucional de la sierra, excepción hecha de centros educativos y entidades encargadas de cuidar el orden. Durante estos años, se abrieron sobre todo puestos policiales a lo largo de la sierra. Y gradualmente se fueron construyendo escuelas: volveremos luego a esta parte importante de la historia. Pero visto en una perspectiva latinoamericana comparativa, el sector público peruano experimentó una promoción limitada del desarrollo y un correspondiente y limitado aprendizaje por ensayo y error. Las instituciones estaban subdesarrolladas y/o se hallaban limitadas a Lima y la costa en los campos del apoyo tecnológico, el crédito para la industria o la tributación y el gasto eficientes.¹⁵

La segunda característica del periodo que debemos resaltar aquí —las políticas que daban forma a la relación mantenida con el mercado internacional— tiene una relevancia más directa y evidente para nuestra historia de desigualdad. Las oportunidades para las exportaciones primarias eran lo suficientemente abundantes como para que pareciera del todo racional un modelo que tenía como base unas importaciones baratas y falta de protección, en particular dada la percepción del Perú como un mercado pequeño, percepción esta que quedaba agravada, claro está, con la marginación de la sierra.¹⁶ Y nuevamente en términos latinoamericanos comparativos, el Perú contó con bajos niveles de protección hasta finales de los años sesenta, junto con una provisión abundante de dólares que brindaban una tasa de cambio alta. A medida de que las poblaciones urbanas crecían (otro tema importante que exploraremos luego), tenía buen sentido político y (aparentemente) económico permitir una importación barata de alimentos, a menudo hasta el punto de convertirse en subsidios.¹⁷

Y no es que nadie estuviese pensando en la sierra en términos estratégicos: sí lo estaban haciendo. Un nuevo grupo de intelectuales surgió después de la Guerra del Pacífico; ellos eran de tendencia positivista, en consonancia con la moda de ese entonces en Latinoamérica. Estos no eran los historiadores y escritores románticos de la era del guano, sino ingenieros, geógrafos, economistas y médicos, quienes trajeron consigo nuevos diagnósticos del atraso y tenían en mente un papel claro para la sierra.¹⁸ En sus reflexiones, la costa debía especializarse en

15. Para las comparaciones regionales, consúltase Thorp 1998.

16. En términos demográficos, Chile era más pequeño, pero significativamente más industrializado.

17. Thorp y Bertram 1978: capítulos 10-13. Por ejemplo, las importaciones de trigo y harina subieron de 9 a 14 por ciento en 1948 (Thorp y Bertram 1978: 200). Para los problemas de la agricultura en la sierra, consúltense Caballero 1981, Manrique 1987 y Martínez Alier 1977.

18. Entre los miembros más conocidos de esta nueva generación podemos mencionar a Joaquín Capelo, Carlos Wiese, José Rodríguez, José Payán, Javier Prado, Alejandro Garland, Luis Carranza y

la agricultura de exportación, dada su ventaja comparativa en azúcar y algodón, en tanto que la sierra debía producir los alimentos de ambas regiones. Ellos eran sumamente conscientes de lo que esto implicaba en términos de una buena comunicación física entre esas dos zonas del país y de medidas con que incrementar la producción de las industrias agrícolas y ganaderas.

Sin embargo, estas ideas jamás se plasmaron en un programa significativo con que superar las barreras que existían, a lo que no ayudó la caída en los costes del transporte internacional o la naturaleza del modelo mismo, que —como luego veremos— debilitaron aún más la capacidad de las élites regionales para construir un consenso en torno a la necesidad de contar con un proyecto modernizador y de cuál sería su naturaleza.

La misma mentalidad positivista estuvo presente en algunas ciudades del interior, como Ayacucho y Cuzco, donde el estadounidense Albert Giesecke produjo una revolución en la Universidad de San Antonio Abad a comienzos del siglo XX. Sin embargo, una vez más el creciente centralismo, reforzado por la nueva oleada exportadora, dejó a estos intelectuales sin peso político y, en consecuencia, sin capacidad de ejercer influencia alguna. A medida de que transcurría el siglo XX, se fueron dando intentos de plasmar un cambio sobre la base de las fuerzas regionales, sobre todo en la década de 1930 y a comienzos del siguiente decenio, pero ellos jamás alcanzaron coherencia como proyectos regionales (Rénique, 2004; Portocarrero, 1983).

El impacto de las políticas económicas en el crecimiento de la sierra y la desigualdad

El impacto que las políticas comerciales tuvieron en la sierra fue particularmente severo. Este se sintió sobre todo en los alimentos, lo que tuvo importantes consecuencias para la población indígena. Las industrias nativas de harina y lácteos fueron las más devastadas. La agricultura de Ayacucho quedó paralizada con el ingreso de trigo importado, así como de bienes procedentes de otras regiones (Degregori 1990). Todo el sur peruano se benefició inicialmente con la instalación de

Alberto Ulloa. La Facultad de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de San Marcos y la Escuela de Ingenieros (ambas fundadas en los años inmediatamente anteriores a la Guerra del Pacífico) produjeron varias promociones que poco después llenaron las filas de la burocracia estatal, en especial en los ministerios de Hacienda y Fomento.

Para el pensamiento económico en esta época, véase Jacobsen 2002. Las memorias que el nuevo Ministerio de Fomento (encabezado por Alejandro Garland hasta 1908) comenzó a publicar después de 1903 son excelentes ejemplos del programa de desarrollo propuesto por el nuevo grupo.

la planta procesadora de la Nestlé Corporation en 1943, pero la industria láctea local comenzó a sufrir a medida de que la compañía mezclaba cada vez más importaciones de leche en polvo con la leche nacional. En el norte, las exportaciones tradicionales de alimentos a la costa también sufrieron con el crecimiento de las importaciones. Esto llevó al establecimiento de una industria ganadera y láctea. PERULAC, la subsidiaria de Nestlé, abrió una planta de tratamiento en Cajamarca a finales de los años cuarenta (Deere 1990: 151). Sin embargo, el mismo problema volvió a aparecer, aunque con retraso. Para adelantarnos a nuestra historia, en los años ochenta las políticas de libre comercio generaron una aceleración del paso a las importaciones de leche en polvo, y los productores lácteos de Cajamarca también sufrieron.¹⁹ El valle del Mantaro, en la sierra central, tuvo beneficios tanto como costos por su mayor acceso a Lima, pero el balance neto fue una situación de “crecimiento sin capacidad de acumulación”, tal como lo describiera Samaniego (1974). Él documenta que los pequeños productores independientes indígenas del valle encontraron que para poder comprar los bienes de consumo cada vez más disponibles en Lima vía la Carretera Central, debían trabajar estacionalmente en las minas y en la costa, pero que con esto jamás podrían ganar lo suficiente como para ahorrar y así incrementar la productividad.

La industria textil de Huancayo es un interesante indicador de los procesos regionales.²⁰ Esta —ciertamente la experiencia industrial regional más interesante— se inició en la década de 1930 para abastecer al modesto mercado local generado por la minería. Para los años sesenta, dicha industria vivía una severa decadencia debido a la competencia.

Lo que sí comenzó a florecer fue el comercio. Los ferrocarriles de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y los caminos construidos en la década de 1920, permitieron la penetración de la sierra, pero la balanza comercial fue usualmente desigual y a favor de la costa. Degregori cita a Miró Quesada: ellos servían, “[n]o de puerta de entrada sino de puerta de salida”.²¹ A partir de los años treinta, comenzaron a surgir nuevos y activos pueblos en lugares claves, de los cuales un caso notable es Juliaca, en Puno, al que se describe como un “Chimbote andino”, siendo este último, en ese entonces, el floreciente pueblo de harina de pescado en la costa al norte de Lima (Rénique 2004: 160). La población de Juliaca creció de

19. Deere (1990) documenta este proceso, en una historia regional de riqueza inusual por sus minuciosos detalles como por la interrelación de los procesos sociales y económicos. Con respecto a las importaciones de alimentos en general, consúltese Lajo 1983.

20. Documentado con muchos detalles en Long y Roberts 1978: capítulo 5.

21. Citado en Degregori 1990: 30.

siete mil en 1940 a más de veinte mil en 1961 (Dew 1969: 33). Pero para muchas haciendas, este crecimiento comercial urbano fue de la mano con la crisis económica, sobre todo en el sur, donde no era posible reemplazar la lana con otro producto. El crecimiento del comercio, asimismo, provocó la continua decadencia de la industria textil artesanal de la sierra. El número de mujeres dedicadas a las artesanías rurales —que es razonable asumir eran indígenas— cayó entre 1876 y 1940 en cuarenta mil, y del 15 al 6 por ciento de la fuerza laboral (Hunt 1974: 4). Estas familias perdieron una importante fuente secundaria de ingreso y las mujeres volvieron a las actividades de subsistencia.

Documentar qué sucedió con los ingresos en la sierra y en la población indígena de la costa antes de 1940 es algo que va más allá de la capacidad hasta de un valeroso reconstructor como Hunt: él sí cuenta con una serie salarial de la sierra para el caso del trigo, que ciertamente muestra la brecha entre dicha región y la costa, pero ella, desafortunadamente, solo existe a partir de la década de 1930.²² Pero lo que sí sabemos acerca de la decadencia de la agricultura y las actividades artesanales de la sierra sugiere que las condiciones no eran buenas para los indígenas en comparación con quienes no lo eran, antes incluso del inicio de un vigoroso crecimiento demográfico, aunque una inmensa diversidad regional hace que resulte difícil efectuar generalizaciones.²³ Deere (1990) analizó las cuentas de la hacienda Combayo —localizada en el relativamente próspero norte, en Cajamarca— correspondientes a 1917. La autora logró mostrar —en un acto sujeto a todas las dificultades de semejante comparación— que en 1973 el ingreso de los minifundistas era en cualquier caso inferior al de los peones en 1917, en tanto que los campesinos indígenas “ricos” sí obtuvieron mayores ganancias (Deere 1990: 289). Las oportunidades de ingreso de las mujeres cayeron, y ellas dedicaron más tiempo a las actividades de subsistencia para la familia.²⁴ Deere concluye que la prosperidad causada por la expansión de la industria láctea a mediados del siglo XX generó pocos empleos y sí un crecimiento que provocó bastante desigualdad (Deere 1990: 291).

Para los años posteriores a 1950, contamos con el trabajo de Webb sobre la distribución del ingreso. Los datos del cuadro 6.4 provienen de esta *magnum*

22. Para 1940, da 0,67 soles, en comparación con 1,62 en la cosecha de algodón o 1,87 en el trabajo de la caña de azúcar.

23. Véanse los numerosos estudios de caso efectuados por Matos Mar y su equipo en el Instituto de Estudios Peruanos. Long y Roberts (1978) es una excelente colección de estudios de caso de la vitalidad de algunas comunidades locales en la sierra central.

24. La moderna industria láctea requiere de capacidades “masculinas”.

opus, en la cual él recalculó las cuentas del ingreso nacional desde el mencionado año. Aquí vemos que el grupo más necesitado —los pequeños agricultores de la sierra— experimentó un crecimiento cero en su ingreso real, en tanto que el

CUADRO 6.4

TENDENCIAS EN EL INGRESO PER CÁPITA REAL (1950-1966)

(PORCENTAJES)

Grupos de fuerza laboral	Tasa del crecimiento per cápita anual del ingreso real (1950-1966)
Sector moderno ^a	
Obreros	4,9
Empleados públicos	3,6
Empleados	3,3
Urbano tradicional	
Trabajadores	2,5
Trabajadores independientes	1,9
Empleadores	1,8
Trabajadores domésticos	1,6
Rural tradicional	
Trabajadores en la costa	4,1
Trabajadores en la sierra y la selva	1,5
Pequeños agricultores	0,8
La costa y su hinterland	2,0
Otras regiones	
5-50 hectáreas	2,7
0-5 hectáreas	0,0

Fuente: Webb 1974: 35.

Nota: ^aWebb toma en cuenta todas las firmas registradas o que presentan reportes, más el gobierno. Deja de lado la agricultura, salvo el cultivo del azúcar.

sector informal urbano, en expansión numérica, tuvo un lento crecimiento del ingreso, en comparación con el sector moderno.²⁵ Esto, sin embargo, constituye sobre todo una hipótesis que funciona con un *benchmark* en 1961, año para el cual sí contamos con datos.

De modo que si bien hubo zonas de crecimiento, así como casos de gran esfuerzo comunal, la sierra en general perdió con respecto a la costa, y el crecimiento, donde quiera que este se dio, fue desigual dentro de la sierra, así como entre esta y la costa, lo que dio pocas señales de mejora para la mayoría de la población indígena.

El crecimiento costeño fue, asimismo, desigual en su impacto, como lo muestran los datos de Webb. El sector tradicional urbano creció con mucha mayor lentitud que el sector formal. Y esto se vio agravado en términos del bienestar por el hecho de que los beneficios relacionados con el salario (subsidio por enfermedad, vacaciones remuneradas), introducidos en las décadas de 1910 y 1920 (como fue la norma en América Latina), solo se aplicaban en el sector formal. Lo que originalmente buscaba ser una medida progresista se convirtió con el tiempo en parte del problema de la desigualdad, al crecer el sector informal en el periodo de la posguerra. Estas leyes jamás habían beneficiado al campesinado rural indígena, y ahora esta población seguía siendo excluida al emigrar y unirse a las filas de los informales.

La forma en que el Estado hizo frente a las desigualdades de grupo: la asimilación por medio de la higiene y la educación

El gobierno civilista que presidió las tres primeras décadas del crecimiento impulsado por las exportaciones tuvo una clara política de asimilación de los pueblos indígenas, y consideraba que la sierra constituía el meollo de dicho reto. Sus líderes estaban profundamente convencidos de que la ciudadanía estaba abierta a todos y que el Estado debía brindarle canales de acceso a la población en general (Contreras 1996). La educación era la clave del necesario proceso “civilizador”. Era, asimismo, importante mejorar la cantidad y la calidad de la fuerza laboral, y en esto la higiene tenía un papel clave para reducir la mortalidad infantil y mejorar los niveles de nutrición. Hemos descrito también el temor a la desintegración

25. No hay ninguna serie de datos para los trabajadores informales o de subsistencia en este periodo. El censo de 1961 nos da un *benchmark*, y todo tiene que ser extrapolado hacia atrás. En otro trabajo, sostuvimos, a partir de datos sobre el consumo de alimentos, que los cálculos de Webb podrían ser demasiado optimistas con respecto al crecimiento del ingreso de los grupos más pobres, pero aquí lo que importa es que no contamos con buenas evidencias.

nacional provocado por la Guerra del Pacífico; de ahí que ferrocarriles y carreteras debían complementar las políticas civilizadoras en salud y educación.

Durante el gobierno de Leguía (1919-1930) en particular, hubo también medidas específicas, pero que no fueron bien implementadas. Buscando apoyo popular en la capital, el presidente intentó proyectar la imagen de un reformador inflexible y de protector de los indígenas, que habría de poner fin a los abusos y garantizar la paz en el país. En efecto, durante los primeros años de su régimen se promulgaron muchas leyes favorables a las comunidades indígenas. También creó la Oficina de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y el “Patronato de la Raza” para que se hicieran cargo de las demandas y problemas de los pueblos, y reconoció legalmente a sus comunidades por primera vez desde la independencia.²⁶ La mayoría de estas políticas no fue implementada (Stern 1998, Kapsoli 1987). Indígenas nombrados por sus comunidades fueron a quejarse de los abusos cometidos por las autoridades locales, y el Comité “Pro-indígena” les ayudaba a contactarse con el presidente, además de brindarles ayuda con el alojamiento y la comida durante su estadía en Lima (Davies 1975). Se crearon comisiones para investigar los abusos cometidos contra la población indígena en las regiones. En varias ocasiones se prepararon informes importantes, como el de José Antonio Encinas (Rénique 2004: 69), pero estos no tuvieron ningún impacto en las situaciones de abuso y explotación. Por el contrario, presionado por las élites locales de la sierra concentradas en el Congreso, Leguía terminó poniendo fuera de la ley al Comité “Pro-indígena” y encarceló a muchos de sus dirigentes (García 2005: 70).

Los dos esfuerzos legislativos más significativos que pusieron la mira sobre la población indígena de modo aparentemente positivo fueron la ley de comunidades de 1920 y la ley de yanaconaje de 1947. La primera de ellas establecía que las comunidades indígenas debían ser reconocidas como propietarias de las tierras que ocupaban. La segunda norma fortalecía los derechos de los yanaconas, prohibía su expulsión, les daba contratos permanentes y exigía que los terratenientes les pagaran un salario monetario. En ambos casos, las leyes venían a ser una apuesta a favor de la paz social ante la posibilidad de que se produjeran protestas. Sin embargo, al ir en contra de los intereses inmediatos de la élite serrana (en un caso, al amenazar con inmovilizar la tierra; en el otro, la mano de obra), ambas leyes hicieron retroceder la agenda al alienar todavía más a las élites regionales, a quienes les tocaba un papel central en todo proyecto modernizador posible dentro de un sistema mixto.²⁷

26. Este reconocimiento fue incorporado en la Constitución de 1920.

27. Esta interpretación es provisional y requiere de más investigaciones, pero parecería ser una pista importante a seguir en el estudio de las razones por las cuales las medidas de corto plazo a favor de

El otro brazo de la estrategia de asimilación fue el uso de los programas sociales. El incremento del gasto en educación aparece en el cuadro 6.5. Hasta 1935, la educación estuvo combinada en el presupuesto nacional junto con la justicia y la salud, pero vemos que una vez que se desagregan los datos, ella comprende casi las dos terceras partes del total y se eleva de alrededor del diez por ciento del gasto público total a comienzos del siglo a treinta por ciento para los años sesenta.

CUADRO 6.5

===== GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL POR PRINCIPALES SECTORES (1900-1950) =====
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

Año	Educa- ción	Salud	Fomento y Obras Públicas	Agri- cultura	Fuerzas Armadas	Gobierno y Policía	Hacienda y Comercio	Otros	Total
1900	1,2	s.d.	3,0	s.d.	25,4	24,1	27,8	18,4	100,0
1910	8,0	0,0	6,1	s.d.	20,5	19,4	15,6	30,4	100,0
1920 ^a	8,1	1,2	8,3	0,5	15,8	12,4	34,3	19,5	100,0
1930	7,6	1,7	6,5	0,4	17,3	15,7	38,9	11,9	100,0
1940	10,8	3,7	4,5	0,8	22,7	20,3	26,7	10,6	100,0
1950	14,1	4,1	4,6	1,8	22,6	16,3	24,1	12,4	100,0
1960	26,0	4,1	3,2	3,2	21,6	18,6	16,1	7,3	100,0

Fuente: Balanza y Cuenta General de la República
(Archivo General de la Nación), años varios.

Nota: ^a Datos de 1919.

la población indígena resultaron inadecuadas para su desarrollo en el largo plazo, pues ellas carecían de una política coherente que les sirviera de sustento. En efecto, en este caso la ley no fue aplicada, motivo por el cual no fue el mecanismo clave que inmovilizó el mercado de tierras. El principal mecanismo inmovilizador fue la baja productividad, lo que significaba que los hacendados solo podían tener ganancias controlando grandes cantidades de tierra y mano de obra.

En la década de 1960, una motivación del todo distinta volvió a poner en la agenda el interés por la tenencia de la tierra, a medida de que las protestas rurales que describiremos en la cuarta sección iban ganando fuerza, aunque no coherencia. En su forma original, la ley de reforma agraria aprobada en 1964 era sumamente modesta y la oposición política redujo sus alcances aún más, de modo tal que para finales de esta década apenas se había transferido el cuatro por ciento de las tierras que en principio se hallaban sujetas a la reforma (Matos Mar y Mejía 1980). La represión, rápidamente, había mostrado ser una respuesta más adecuada.

Como vemos en el cuadro, la tasa de crecimiento del gasto social se desaceleró en los años veinte, en consonancia con los distintos intereses del gobierno de Leguía (construcción urbana, edificios públicos, grandes proyectos). El gasto volvió a crecer después de 1940 y su naturaleza cambió. El censo de dicho año mostró el fracaso del mencionado gasto en el campo importante de la alfabetización, lo que condujo a otro enfoque. Los resultados del censo figuran en el cuadro 6.6.

CUADRO 6.6

TASAS DE ANALFABETISMO^a POR REGIÓN^b
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ADULTA DE LA REGIÓN)

Año	Lima	Resto de la costa	Sierra norte y central	Sierra sur	Selva
1876	45,4	74,0	85,8	91,8	85,8
1940	10,6	40,6	66,2	79,8	51,0
1961	10,5	28,3	50,8	61,8	39,3
1972	10,3	23,0	43,8	49,6	34,4

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos nacionales.

Notas: ^a Tasas de analfabetismo: $I_{1876} = (\text{no saben leer o escribir}) / \text{población total}$; $I_{1940\text{ e }1961} = (\text{no sabe leer o escribir y tiene más de seis años}) / \text{población mayor de seis años}$; $I_{1972} = (\text{no sabe leer o escribir y tiene más de cinco años}) / \text{población mayor de cinco años}$.

^b La división regional se efectuó en el ámbito provincial. Lima = provincias de Lima y Callao; sierra norte y central = provincias de la sierra de los departamentos de Lima, Junín y los departamentos al norte de estos; sierra sur = sierra - sierra norte y central. Se entiende por costa aquellas provincias costeras con una altura media inferior a los 1.001 metros por encima del nivel del mar. Clasificamos como "selva" a todas las provincias de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como a las de Jaén, Leoncio Prado y Satipo. Los resultados no cambian significativamente si las provincias andinas que tienen tanto sierra como bosque tropical son reclasificadas como sierra o selva.

Vemos que para 1940 los resultados eran decepcionantes. Los departamentos fuertemente indígenas del sur —Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Puno— mostraban menos mejoras que el promedio; y con un promedio de más de ochenta por ciento de analfabetismo,²⁸ la población indígena se hallaba

28. Si en la sierra sur el 79,8 por ciento en promedio de toda la población era analfabeta, podemos asumir razonablemente que la cifra correspondiente a la población indígena era más alta.

seriamente perjudicada. Aún más escandaloso era que el porcentaje de niños de 6 a 14 años que recibían instrucción *cayó* en Ayacucho, Huancavelica y Puno, y se mantuvo constante en el Cuzco (Contreras 1996: 41, cuadro 7).

Después de 1945, la conmoción causada por estas cifras hizo que el gobierno repensara las cosas, y Luis Eduardo Valcárcel llevó a cabo un cambio de política en el Ministerio de Educación, concentrándose ahora mucho más en la educación bilingüe y recurriendo a profesores provenientes de las comunidades locales. El incremento en el número de escuelas y docentes fue encomiablemente paralelo en la costa y la sierra entre los decenios de 1940 y 1960. Pero para 1961, esta última seguía mostrando cifras mucho más altas de analfabetismo que la costa. Las dos terceras partes de los analfabetos eran niñas (Contreras 1996: 26).

El problema era que el gasto venía dándose sin que se produjeran cambios más amplios en la institución del gamonalismo, lo que era esencial para que dicha inversión tuviera éxito. La postura tradicional en las comunidades de la sierra rural era que la educación “haría que su hijo no sea respetuoso”. Y al gamonalismo se le sumaba una discriminación de género que era de esperar en tal fecha: se sentía que las muchachas, en particular, se encontraban en riesgo; y en efecto, han quedado muy bien documentados los abusos sexuales cometidos por profesores.²⁹ Dados todos estos aspectos que afectaban la calidad de la educación, los mejores profesores preferían con razón un empleo urbano y en el sector privado, agravando así el problema de la calidad. La enseñanza, típicamente, era de *pa-porreta* y se recurría al temor. Fuera de la escuela, en una comunidad rural, lo usual era que no hubiese libros o periódicos con qué fomentar las capacidades de lectoescritura.

Vemos así que las desigualdades de grupo en la educación no habían mejorado significativamente para la década de 1960 no obstante los serios esfuerzos desplegados. Hubo más mejoras en las condiciones de salud. El trabajo efectuado por la Fundación Rockefeller en toda América Latina entre las décadas de 1920 y 1940 tuvo un impacto por medio de la creciente disponibilidad de vacunas y de campañas como aquella que buscaba exterminar los mosquitos.³⁰ Sin embargo, cuando vemos los datos, las disparidades en la expectativa de vida y la mortalidad infantil siguen siendo enormes. La campaña contra la malaria resulta interesante por las desigualdades horizontales: ella pasó de ser la principal causa de muerte en 1945

29. Véanse las monografías preparadas en la década de 1960 por el Instituto Indigenista Peruano.

30. Cueto comenta que si bien su obra tuvo un impacto, su sensibilidad a los factores comunales fue, en cambio, pobre (1997: 61).

a la décima en 1955. Aun así, las muertes por malaria *subieron* en la sierra debido a la migración, puesto que los migrantes temporales que volvían a esta región la llevaban consigo (Cueto 1997: 165).

La información más temprana sobre el cuidado de la salud que hemos encontrado, correspondiente a 1943, figura en el cuadro 6.7. Ella, desafortunadamente, no presenta resultados, sino insumos: la disponibilidad de servicios. Los datos muestran una enorme desigualdad en el grado en que el sistema formal del cuidado de salud llegaba a las distintas regiones.

Las desigualdades políticas se redujeron con la introducción de las elecciones en el ámbito municipal, no obstante lo cual seguía en pie el problema principal: mientras que la votación continuara dependiendo del hecho de saber leer y escribir, y las desigualdades en la alfabetización no se combatieran, este importante logro continuaría siendo una ganancia potencial más que real.

CUADRO 6.7

== VARIACIONES REGIONALES EN LA DISPONIBILIDAD DEL CUIDADO DE LA SALUD (1943)^a ==

	Número de personas por médico	Porcentaje sin atención médica
Costa	2.110	37
Sierra	18.978	84
Selva	11.690	62

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos el *Extracto Estadístico*, 1943.

Nota: ^a Costa = Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Incluye, por ende, parte de la población de la sierra, lo que reduce la desigualdad observada. Adviértase que en este caso no pudimos refinar la clasificación, tal como se hizo en el cuadro 6.6, en el cual se dio un análisis a escala provincial.

De modo tal que las políticas, ya fuera mediante la protección de las poblaciones indígenas, o su asimilación y civilización por medio de la educación y del servicio de salud, eran todas bien intencionadas, pero ineficaces; además, estaban descaminadas. Quienes las promovían no captaban que se requería algo más radical que las políticas educativas y de higiene en sí mismas. Se debían cuestionar las estructuras institucionales que distorsionaban los incentivos y hacían que las personas fueran temerosas e incapaces de aprovechar por sí mismas las

oportunidades existentes. El Estado no estaba listo para ello.³¹ Para mediados de los años sesenta, los pueblos indígenas de la sierra tenían bajos niveles de alfabetización y un acceso mínimo al cuidado de la salud, en tanto que la intervención directa en la regulación de la tierra y la mano de obra o bien no estaba implementada, o si lo estaba, tenía efectos perversos. Ahora podemos pasar a las repercusiones que el patrón de crecimiento de las exportaciones tuvo, primero que nada, a escala local.

Las repercusiones sociales y políticas del patrón de crecimiento impulsado por las exportaciones

El proceso que hemos descrito aquí tuvo importantes repercusiones sociales y políticas. Las dos a las que debemos tener en cuenta ahora son la emigración de las élites y de la población indígena más educada y talentosa, así como la creciente división que se iba abriendo entre los mismos pueblos indígenas: entre aquellos que seguían en la agricultura —los campesinos— y los que pasaron a conformar la columna vertebral de una cultura “chola” con aspiraciones. Como demostraremos más adelante, ambos procesos —en formas distintas y complejas— erosionaron el terreno para la generación de “comunidades imaginadas” indígenas o andinas. Con esto, las posibilidades que había de reducir el descuido de la sierra por parte de la costa pasaron a ser virtualmente inexistentes.

Distintas regiones de la sierra tenían diferentes historias. En el sur, el impacto de la decadencia de la lana hizo que muchos hacendados perdieran el interés por sus tierras y que se ausentaran de ellas; incluso algunos emigraron a Lima, Arequipa o hasta Europa. Aquí recibirían noticias de cuando en cuando de que unas “cuadrillas de bandoleros indígenas” les habían robado su ganado, tal como fuera descrito vívidamente en 1928 por un orador en la conferencia anual de la Sociedad de Ingenieros del Perú.³² En la medida de que el derecho a la propiedad empezó a ser criticado, las inversiones comenzaron a retraerse. Algunos hacendados vendieron todas sus tierras o parte de ellas, en tanto que otros las abandonaron. En la sierra central, por ejemplo en Ayacucho, la decadencia de la agricultura trajo consigo también la emigración, aunque menos pronunciada, y muchos

31. Philip Ainsworth Means, académico estadounidense que era buen amigo de los intelectuales cuzqueños y limeños que favorecían estas políticas, apoyó a estas últimas pero predijo su fracaso; él sostuvo, por ejemplo, que la propuesta Oficina de Asuntos Indígenas no tendría ni las ganas ni los medios de eliminar el poder de los gamonales (Means 1920).

32. Carlos Barreda, citado en Rénique 2004: 135.

pueblos indígenas continuaron viviendo en condiciones de servidumbre en ausencia de los terratenientes. A veces, algunos mestizos o indígenas más acomodados, pero siempre modestos, adquirirían las tierras y reproducían las condiciones de servidumbre en forma tal que el conflicto podía agudizarse, puesto que era menos probable que los trabajadores aceptaran a los nuevos patrones del mismo modo que habían aceptado a los antiguos propietarios.³³ Algunos hacendados tradicionales dejaron aquellas partes de la sierra central, que estaban más vinculadas a la costa, en tanto que otros se quedaron allí en una situación de creciente presión económica, lo que significaba que la opresión de sus trabajadores tendía a incrementarse.³⁴ En Piura, los trabajadores de las haciendas se concentraron más en sus condiciones de empleo que en el problema de la propiedad, algo en lo cual les apoyó el Partido Socialista. Pero el desenlace fue el mismo.³⁵ Podemos obtener cierta idea de las fortunas de la élite regional y el peso relativo de la sierra y la costa a partir de un trabajo innovador que analiza los datos recogidos de miembros de la élite en el momento de su fallecimiento, en relación con la imposición del impuesto a la herencia.³⁶ Esto respalda nuestra imagen de unas élites regionales que sufren relativamente y que emigran, minando así la base política y económica de un proceso de crecimiento autónomo en la sierra, en tanto que la selva quedaba excluida por completo. El estudio analizó las ochocientas fortunas más grandes dejadas en el Perú por quienes fallecieron entre 1916 y 1969. De ellas, solamente el 12 por ciento era de personas nacidas en la sierra; no debe sorprender que ninguna haya nacido en la selva. Pero aún más revelador es que el análisis detallado de las cien fortunas más grandes solamente arroja siete peruanos nacidos en la sierra, tres de los cuales habían invertido su dinero en propiedades urbanas o tierras en la costa. De las otras cuatro personas, tres eran mujeres fallecidas en Lima o en el extranjero que habían dejado tierras en los Andes a sus descendientes. La persona restante fue Lizandro Proaño, el importante empresario minero que libró sus luchas exclusivamente en torno a la protección de sus propios intereses.³⁷

33. Degregori cita el caso de Orcasitas, en Ayacucho, donde siete familias tenían una relación de "colono-servil" con un campesino mestizo que era su patrón (1990: 105).

34. Alberti y Sánchez 1974: 207. Tullis (1970) describe, para el caso de Yanamarca, que lo que hacía que la resistencia estallara podía ser el retorno de un hacendado ausente que intentaba hacer cumplir el sistema tradicional.

35. Apel (1957) muestra una relación detallada a partir de las quejas presentadas en Piura ante el Ministerio de Justicia y Trabajo.

36. Portocarrero 2006. El archivo incluye testamentos, pero también documentos tales como valoraciones.

37. Fernandini, asimismo, aparece en la lista y uno podría pensar incluirlo en la sierra dada su riqueza minera. Él, en realidad, nació en Ica y tuvo importantes intereses en la costa. Los dos, Proaño y

Vemos que la decadencia de las élites de la sierra tuvo diversas consecuencias para nuestro análisis. En el norte y en partes de la sierra central, este debilitamiento podía brindar la oportunidad para que los pequeños agricultores independientes tuvieran acceso a la tierra. En otras, se mantuvo en pie la vieja estructura de poder, o incluso se afianzó aún más. Pero, en definitiva, ello ciertamente significó que quienes podrían haber hecho gestiones en Lima para conseguir más recursos fueron más bien los que optaron por partir.

La élite puede haber estado decidiendo mudarse o no participar, pero el número de los menos acomodados que también decidían mudarse estaba creciendo aún más. Para finales de los años sesenta, Apurímac y Ayacucho eran los departamentos que perdían población con mayor rapidez, con una emigración anual neta de 16,5 y 14 por millar, respectivamente. Luego venían Huancavelica, Áncash y Cajamarca, con 13,4, 11,9 y 11,6 por millar (Degregori 1990: 32). En numerosos estudios, queda claro que los emigrantes eran las personas mejor educadas y más acomodadas (Degregori 1990: 40). Samaniego presenta unos cuidadosos datos de encuestas para la sierra central, que demuestran esto para la década del sesenta (1974: 267).

Los procesos de emigración y de diferenciación económica tuvieron profundas consecuencias para la identidad indígena, así como para las relaciones al interior de sus comunidades. En realidad, en el ámbito de la identidad se dieron varios procesos. En un nivel, lo que hubo fue una evolución de las percepciones. En otro nivel tenemos el impacto de la emigración, ya fuera a las ciudades de la costa o a urbes más grandes dentro de la sierra, junto con la evolución de la identidad dentro de la comunidad rural remanente.

El censo de 1940 sostuvo que había un 53 por ciento de blancos y mestizos, y un 46 por ciento de indios.³⁸ La mayoría de estos últimos vivía en sus comunidades, lejos de las áreas urbanas, y solo ocasionalmente visitaba las ciudades más grandes (y aún menos Lima). Los mestizos vivían en las urbes más grandes, la capital incluida, pero muchos residían también en los pequeños pueblos de la “periferia”, rodeados por comunidades de indígenas. La población blanca vivía sobre todo en las principales ciudades, aunque estaba muy concentrada en Lima. La emigración rompió este paisaje y toda la estructura de las fronteras étnicas se vio transformada, hasta llegar a ser el muy complicado escenario que vemos hoy en día.

Fernandini, eran proveedores satélites de la fundición de La Oroya, propiedad de la Cerro de Pasco Copper Corporation (Thorp y Bertram 1978: 81).

38. Los blancos y mestizos fueron reportados juntos, pero las categorías fueron mencionadas como distintas. A otros grupos se les consideró minorías.

Si tomamos primero el nivel de las percepciones, debemos decir que un proceso de hegemonía nacional mestiza ya estaba tomando forma (Mallon 1992, García 2005). Para finales de la década de 1960, la palabra “mestizo” ya no aludía a una categoría racial —una persona con antepasados blancos europeos y aborígenes—, sino más bien a un proceso cultural y de base clasista. Jorge Basadre, el historiador más influyente del periodo republicano, expresó esta idea con meridiana claridad: “Aun hoy mismo, en aquel indio que usa un arado, hace pastar unas ovejas y viste calzón corto hay un proceso de mestizaje cultural, aun cuando se trate de un ejemplar de pura raza” (Basadre y Yepes 2003). El mestizaje pasó a ser así un proceso de crecimiento, de la situación “india” de exclusión y explotación, a una vida de ciudadanía y progreso mediante el aprendizaje del español, la educación y la emigración a los centros urbanos. Esta construcción de las diferencias culturales de base clasista hizo que para los peruanos resultase sumamente problemático separar la clase de la etnicidad.

De este modo, el contenido “racial” que la categoría *mestizo* alguna vez tuvo se transformó en un contenido “cultural”, que expresa una combinación jerárquica de las culturas occidental y aborígen. Se esperaba que los mestizos adoptasen las costumbres, tecnologías y modos de vida de la sociedad dominante blanca-mestiza, y que al mismo tiempo rindieran tributo a sus orígenes glorificando el pasado indígena. La cultura aborígen fue convertida en productos culturales a encontrar en museos, conmemoraciones, el folclore, los ítems para turistas y la historia de los incas.³⁹ No se trataba de lenguas vivas y formas organizativas, ni tampoco de la recreación de tradiciones y conocimientos a medida de que entraban en contacto con otras culturas. Vargas Llosa ilustra muy bien el poder que esta concepción tiene y su continua y significativa influencia en intelectuales y políticos:

El campesinado indio vive en forma tan primitiva que la comunicación resulta prácticamente imposible. Es solo cuando se muda a las ciudades que tienen oportunidad de mezclarse con el otro Perú. El precio que deben pagar por la integración es alto: la renuncia a su cultura, su lengua, sus creencias, sus tradiciones y costumbres, y la adopción de la cultura de sus antiguos amos. Después de una generación se convierten en mestizos y ya no son más indios. (Vargas Llosa 1990: 52; cita traducida del inglés.)

Sin embargo, esta conceptualización en modo alguno hace justicia a la realidad. No se trata solamente de que los esfuerzos estatales de integración

39. Mallon (1992) resume correctamente la construcción del Estado-nación en el Perú durante el siglo XX como un proceso en el cual el pasado “indio” fue glorificado, en tanto que los “indios” contemporáneos debían “incorporarse” en la sociedad por medio de la educación, la reforma agraria y programas de desarrollo auspiciados por el Estado.

“quedaran mayormente sobre la mesa” (Mallon 1992), sino que además los procesos físicos de la emigración fueron produciendo algo mucho más complejo. Quijano (1980) sostuvo que las áreas urbanas del Perú vieron un masivo proceso de “cholificación” durante el último tercio del siglo XX, a medida de que un número significativo de indígenas dejaba el campo y rechazaba su asociación con la “indianidad”, como una visión del campesinado rural, analfabeto y monolingüe. La descripción de Quijano tiene como base los migrantes llegados a Lima, pero los mismos procesos venían operando en la emigración a las ciudades más grandes de la sierra. Ellos se adaptaron a la cultura occidental predominante como una forma de mejorar su situación socioeconómica, pero, al mismo tiempo, cuestionaron una identificación total con los mestizos “aculturados”, que habían olvidado su origen y sus comunidades, y que se avergonzaban de sus tradiciones. Los cholos se aferraron a sus costumbres, las que les definían como andinos y se enorgullecían de su identidad. La nueva identidad chola cuestionó así la construcción de base clasista dentro de la cual quedaba enmarcada la etnicidad.

El trabajo más importante acerca de la manera como se redefinió y cuestionó la identidad en las áreas urbanas es el de Marisol de la Cadena (2000). A partir de una extensa documentación histórica y de una investigación etnográfica del Cuzco actual, ella exploró el significado que tenía el ser un indígena-mestizo, y sostiene que los cuzqueños actuales recrearon y redefinieron su significado.⁴⁰ El terreno de la “choledad”, en cambio, se mantiene altamente disputado. Los cholos no son el producto del proceso de mestizaje, sino más bien de su fracaso. Los emigrantes indígenas irrumpieron en el Perú “moderno” y construyeron una nueva y cuestionadora identidad “chola” en una sociedad que aún no había superado sus prejuicios “oligárquicos”. En el capítulo 2, mostramos que para evitar la discriminación, los cholos de Lima y de otros centros urbanos de provincias, como Huanta y Bambamarca, reproducen el racismo y otras prácticas discriminadoras en contra de quienes son “menos alfabetos” y “menos urbanos” que ellos. Y como estas son “fronteras” sumamente fluidas y subjetivas, y dado que los mismos cholos estaban viviendo en los “bordes” de lo urbano/rural, lo educado/lo no educado y lo moderno/lo no moderno, rápidamente fueron víctimas de la discriminación que

40. Otros autores han examinado estas transformaciones en distintos contextos. Rénique (2004) explica detalladamente la historia de Puno y de qué manera se construyó un nuevo tipo de identidad indígena —el cholo de Juliaca— por medio de la historia de la lucha. Quijano (1980) y Nugent (1992) examinan el surgimiento de una nueva identidad chola o chicha en el Perú, para así explicar el mismo proceso de redefinición de la identidad mestiza dominante.

ellos mismos ejercían contra otros. Esto se dio en particular al pasar de centros poblados más pequeños a otros centros más grandes y urbanizados.⁴¹

De este modo, para los años sesenta distintos procesos estaban confluyendo para producir un terreno de mayor fragmentación entre los pueblos indígenas, lo que tuvo como resultado la complejidad y fluidez que intentamos captar en el capítulo 2. La división de intereses entre las poblaciones urbanas que valoraban la importación barata de alimentos y las poblaciones rurales que vivían de su producción; la emigración y el debilitamiento de las élites mestizas; la partida de la población indígena más educada; y el crecimiento de una cultura chola que era internamente contradictoria y que se construía a sí misma en torno a la superioridad con respecto a “lo indio”, significaban en conjunto una ruptura compleja del paisaje social y étnico. Para proseguir con nuestro análisis, necesitamos entender el papel de los actores, y precisamente a esto volveremos en la última sección.

Los orígenes de una movilización de base clasista en el campo y la intersección con la política nacional

Hemos estado documentando el alto grado de diferenciación económica y social existente entre la costa y la sierra. Esta diferenciación configuró distintos tipos de movilización política.⁴² En la costa central y septentrional, así como en la sierra central, la economía de plantación —sobre todo de algodón y azúcar— y la minería erosionaron las bases del sistema tradicional y, en gran medida, desplazaron las formas arcaicas de producción y las relaciones sociales afines. Estos sectores favorecían la concentración de empleados en un régimen laboral, abriendo así espacios para los procesos de sindicalización y participación política. El APRA tuvo un papel importante entre estos trabajadores rurales organizados, pero la situación no fue de total cooptación. Por ejemplo, los trabajadores azucareros organizados en la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP) se hallaban altamente concentrados con lo cual lograron negociar con su gerencia contando con una autonomía relativa del APRA. Sin embargo, el resto de los trabajadores del sector rural, que formaban parte de la Federación Nacional Campesina del Perú (FENCAP), enfrentaba una mayor dispersión geográfica y la falta de homogeneidad. Estas características minaron la capacidad de la FENCAP para

41. Para una relación más detallada de este proceso de discriminación y reproducción de la discriminación, véase Paredes 2007: 10-19.

42. Sobre la base de Portocarrero y Cotler 1976.

movilizar sus propios recursos, razón por la cual dependieron más de su colaborador, el APRA.⁴³ La FENCAP creció en la década de 1950 mediante la incorporación de otras organizaciones campesinas más tradicionales.⁴⁴

La situación era en general muy distinta en la mayor parte de la sierra norte y sur, donde se mantuvo el sistema tradicional. Sin embargo, y como ya sostuvimos, el poder de estos hacendados había caído para la segunda mitad de los años cincuenta, al no haber nada que reemplazara la lana y disminuir la necesidad que los políticos de Lima tenían de su respaldo político. Fue entonces que se produjo una oleada de movilizaciones entre el campesinado indígena de estas zonas: Wesley (1968) da un buen ejemplo de esta pérdida de poder. El campesinado indígena del valle de La Convención, empezaba a organizarse en sindicatos, se movilizó e hizo que las élites locales se quejaran ante el gobierno nacional. En lugar de enviar a un destacamento del Ejército a mantener el orden, que era lo que esta élite esperaba y lo que usualmente sucedía antes, el presidente Prado envió más bien una comisión investigadora. Los políticos toleraban cada vez más la formación de una representación de base clasista en oposición directa a las élites locales de la sierra. Su meta era construir una base de apoyo popular independiente de la que el APRA controlaba en la costa. De este modo, la movilización social en estas zonas no está relacionada directamente con la modernización, sino más bien con el colapso de la economía tradicional y con las influencias, vigorosas y transformadoras, provenientes del exterior.

La expansión de la educación, la creciente relación entre lo rural y lo urbano, y la difusión de ideologías antioligárquicas y de partidos marxistas llevaron a la formación de posturas críticas del Antiguo Régimen (Cotler et ál. 1976). Gracias a estos cambios y al retorno de la democracia electoral en 1956, las actividades asociativas fueron haciéndose más dinámicas hacia finales del decenio, en tanto que los nuevos grupos surgidos en la esfera política exigían reformas más profundas (Cotler 1995).⁴⁵ Acción Popular hizo su aparición como una estructura

43. A partir de 1956, los sindicatos asociados al APRA obtuvieron el reconocimiento de diversas agencias gubernamentales y organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo.

44. Los "sindicatos" de las haciendas, las asociaciones de pequeños agricultores y apareceros, y las comunidades de indígenas.

45. En la bibliografía peruana, se considera que este periodo dio origen al sistema de partidos que dominaría la política democrática entre 1980 y 1992 (Cotler 1995, Tanaka 1998). En los años sesenta, solo Acción Popular representaba una estructura organizada alternativa al APRA en el terreno electoral, pero durante estos años los grupos de izquierda rápidamente se convertirían en una alternativa al aprismo en las movilizaciones de base.

organizada alternativa al APRA en el terreno electoral, pero durante estos años los grupos de izquierda también fueron convirtiéndose rápidamente en una alternativa al aprismo en las movilizaciones de base. Estas agrupaciones izquierdistas no constituían una fuerza unida, sino que eran más bien una plétora de nuevas facciones surgidas en la década de 1960 para competir con el tradicional Partido Comunista del Perú (PCP). Diversas organizaciones maoístas,⁴⁶ trotskistas⁴⁷ y guevaristas⁴⁸ cuestionaban la moderación estratégica del PCP y su lealtad doctrinal para con la Unión Soviética (Roberts 1992).

Por otra parte, los esfuerzos desplegados para realizar una reforma agraria fueron bloqueados repetidas veces durante la mayor parte de la década del sesenta por una coalición conservadora —conformada por la UNO (el partido del ex presidente Odría) y el APRA— que respaldaba a las élites terratenientes, no obstante lo cual esta cuestión estuvo presente en todas las campañas presidenciales celebradas entre 1956 y 1963. La rápida erosión del poder de las élites hacendadas era clara (Matos Mar et ál. 1980: 294).⁴⁹ A partir de 1956, unas tomas de tierras simultáneas, llevadas a cabo por campesinos en todo el país, impresionaron a Lima. Casi un centenar de invasiones fueron reportadas en el periodo 1959-1966,

46 El movimiento maoísta surgió a partir de una división del PCP en 1964, con la fundación del partido prochino Bandera Roja-PCP. Sendero Luminoso provenía de otra división más del PCP, ocurrida en 1969: así, esta división llevó a la creación de Patria Roja-PCP y de Sendero Luminoso-PCP.

47 Las organizaciones trotskistas desarrollaron una base en el movimiento obrero, así como en el movimiento campesino que Hugo Blanco liderara en el valle de La Convención, en el Cuzco, a comienzos de los años sesenta. Los trotskistas, al igual que los maoístas, sufrieron repetidas divisiones y faccionalismos.

48 Influidos por la revolución cubana, hubo en el Perú dos grupos guerrilleros por un periodo extremadamente breve. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron creados ambos en 1962. En 1965, iniciaron las operaciones guerrilleras en zonas de protesta campesina, pero fueron rápidamente vencidos al tener una escasa preparación y no poseer casi ningún contacto con las organizaciones populares. El MIR fue fundado por José de la Puente Uceda, quien dejó el APRA (junto con otros jóvenes) debido al pacto que este partido estableciera con el gobierno “oligárquico” de Manuel Prado. Uceda cayó en combate en 1965 y el grupo fue desmantelado. Sus integrantes intentaron reconstruir el partido en los años setenta, pero esta vez con vínculos organizativos con los movimientos populares.

49. En el Perú, los campos agrícolas aún se hallaban altamente concentrados a comienzos de la década de 1960. Según el censo de 1961, las tenencias individuales privadas comprendían el 94,9 por ciento de las tenencias y abarcaban el 88,3 por ciento de la tierra en las haciendas. El resto estaba conformado por tierras ubicadas en distintos tipos de posesiones comunales. En cuanto a las posesiones individuales, el 70 por ciento de la tierra estaba concentrado en 3400 propiedades individuales de más de 500 hectáreas, lo que representaba menos del 0,5 por ciento de todas las posesiones individuales en el país (INEI, Censo Nacional, 1961). Para un estudio más detallado, consúltense Brodsky et ál., 1968, y Alvarado, 1989.

y 77 se produjeron en los últimos seis meses de 1963 (Cotler et ál. 1976: 292). El campesinado indígena ganó capacidad organizativa gracias a sus contactos con las organizaciones urbanas, los sindicatos y los partidos políticos de la izquierda; de esta manera, asimilaron sus formas de organización y sus tácticas. Por primera vez, formaron organizaciones a escala regional. Las primeras fueron creadas en el Cuzco en 1961 —y en ese mismo año en Cajamarca— como organizaciones “campesinas” (no indígenas).⁵⁰ Dos años más tarde, se creó una federación en Ayacucho, y en 1967 esta unió a las comunidades campesinas indígenas en el ámbito regional. Otras federaciones fueron creadas en Pasco, Junín y Áncash (Matos Mar y Mejía 1980: 71). Este ciclo de movilización rural en la sierra fue controlado por el gobierno mediante la aplicación parcial de una reforma agraria, que contó con la intervención militar en las regiones convulsionadas claves.⁵¹ Aunque esta reforma fue muy limitada, el Estado alcanzó su meta de contener la movilización del campesinado indígena y de neutralizar sus nuevas organizaciones.⁵²

La lucha por la tierra en gran parte de la sierra central ha sido bien documentada (Tullis 1970, Guzmán y Vargas 1981). Al examinar los datos reunidos por Guzmán y Vargas, vemos que entre 1956 y 1964 estas movilizaciones eran todavía muy espontáneas y dispersas, no obstante lo cual gradualmente comenzaron a mostrar una evolución en sus formas de organización (sindicatos campesinos) y en sus repertorios (huelgas). Con el tiempo, las peticiones se convirtieron en huelgas y estas se transformaron en tomas de tierras. La movilización solo quedó controlada temporalmente en 1964 con la acción militar, así como con el inicio de una reforma agraria parcial en las zonas más movilizadas (véase el capítulo 2). Las protestas alcanzaron su objetivo principal: debilitar aún más el sistema de hacienda. Se toparon con la respuesta policial y con muertes, pero la decisión de la élite de buscar oportunidades rentables en otros lugares —lo cual ya era manifiesto—, así como la naturaleza fragmentaria de las rebeliones, presumiblemente

50. Para el creciente discurso clasista y su papel en la movilización, consúltese el capítulo siguiente.

51. La violencia se propagó a medida de que grupos guerrilleros como el MIR y el ELN intentaban montar operaciones en las áreas más convulsionadas, como el Cuzco y Ayacucho. No está claro si recibieron el respaldo de los campesinos. Los poderes tradicionales en el Congreso comenzaron a pedir medidas represivas más fuertes; de allí que entre 1959 y 1963 el Estado llevara a cabo operaciones militares para desmovilizar dichas zonas, lo que tuvo como resultado 32 campesinos muertos y miles de personas encarceladas. Las guerrillas de 1965 sumaron una docena de bajas a esta lista fatal, tanto entre los guerrilleros como entre las fuerzas del Ejército (Degregori 1992: 414).

52. En la sierra central de Junín y Pasco, se expropiaron dos propiedades de alrededor de seiscientas mil hectáreas, y se inició un proceso de distribución en el valle de La Convención, en el Cuzco (Cotler et ál., 1976).

explican por qué no se produjo una escalada. Guzmán y Vargas documentaron siete tipos distintos de movimientos campesinos indígenas entre 1956 y 1965, todos ellos sumamente desarticulados. Las autoras creen que los movimientos fueron más vigorosos en el sur, donde la falta de conexiones a escala nacional y el pequeño poder electoral de la población llevaron a respuestas represivas. Para finales de 1963, todas y cada una de las tomas de tierras en el sur eran desalojadas violentamente (Guzmán y Vargas 1981: 16 y ss.).

La movilización política descrita jamás fue violenta en la escala de anteriores acciones colectivas. En la década de 1920, la crisis de la lana y el incremento resultante de la red de opresión generaron episodios de violentas protestas, que fueron reprimidas con una severidad que tendría su eco en los años ochenta con la reacción contra Sendero Luminoso. Pero entre los años veinte y los sesenta, los elementos violentos eran aislados y de pequeña escala, aun cuando las relaciones conflictivas formaban parte de lo que incentivó a los hacendados a ausentarse y, en general, a perder el interés: la combinación del recuerdo de la represión y la decisión de los propietarios de retirarse probablemente redujo el nivel de violencia. Pero la acción colectiva era una constante: el caso de Pomacocha en Cangallo, Ayacucho, tal como lo refiere Degregori (1990: 102), es un buen ejemplo de un proceso típico. Las 1162 familias estaban “sujetas a las formas más abyectas de servidumbre”. La acción colectiva se inició en 1942 entre los colonos, con un memorando presentado al Ministerio de Trabajo. El nivel de actividad fue persistente a lo largo de los años, con numerosas e infructuosas protestas escritas, aunque las actividades tuvieron que cesar durante el gobierno de Odría. Para 1959, se venían estableciendo lazos con la nueva Confederación Campesina por medio de los contactos que sus hijos tenían en Lima, lo que constituye una dimensión interesante de la emigración. Para este momento, el propio análisis de los trabajadores era que habían estado viviendo un continuo proceso de “movimientos sin dirección”.⁵³ En los años sesenta, las acciones subieron en intensidad y tomaron la forma de una toma de tierras, una huelga y la expulsión de la policía de la hacienda.

Conclusión: el final de una era

Un tema clave en este capítulo fue la forma en que la economía y la estructura política se intersecaron en la configuración de instituciones particulares. La desigualdad política y económica entre la costa y la sierra quedó incrustada en la

53. Documento citado por Degregori 1990: 104.

medida de que esta evolución institucional se iba desarrollando en las primeras siete décadas del siglo XX, de tal modo que resultaba casi imposible imaginar cualquier posibilidad de una vía de crecimiento alternativa que fuera más beneficiosa para la población indígena de la sierra. A lo largo del análisis, lo que hemos dicho con respecto a la sierra es *a fortiori* también válido para la selva. En este proceso, el debilitamiento de oportunidades para las nuevas élites de la sierra, los patrones migratorios, las políticas económicas que favorecían a los alimentos importados y el fracaso de los planes educativos desempeñaron todos su parte. También lo hizo la evolución de las complejas identidades indígenas/cholas, así como las continuas actitudes discriminadoras, sutiles pero omnipresentes, que servían de sustento a las jerarquías. Hemos mostrado que la evolución de las identidades y la configuración de la economía condujeron a un proceso de creciente complejidad y fluidez en las identidades indígenas. También mostramos que una movilización significativa ganó fuerza entre las poblaciones campesinas indígenas, no obstante verse reprimidas por las acciones militares y, en cierta medida, haber quedado aplacadas con la reforma agraria parcial.

Este análisis histórico puede enriquecer ahora lo aprendido en los capítulos del 2 al 4, donde logramos demostrar, a partir de datos cualitativos y cuantitativos, cuán profundas son hoy en día las desigualdades grupales u horizontales. Ellas empeoraron con el tiempo, pero lo significativo es que quedaron más arraigadas y resultaron por ello más insolubles a medida de que la geografía, la política y la economía iban interactuando. El análisis del proceso brinda evidencias convincentes. La dinámica de las desigualdades grupales se refiere a la forma en la que la sierra ha resultado cada vez más marginal para los centros de poder, la acumulación y la toma de decisiones de los actores, en tanto que el fracaso experimentado en la modificación de los patrones de dominación y explotación —los mecanismos del gamonalismo y el clientelismo en particular— dejó a la población indígena serrana en posición inerme y en la pobreza. Esto sucedió no obstante el incremento en el gasto social, quedando gran parte de la explicación evidenciada en el cuadro 6.6, el cual muestra el pobre retorno obtenido de la alfabetización con la expansión de la educación en los Andes. En suma, con el paso del tiempo el análisis hecho en la figura 4.1 (véase el capítulo 4) cobra dimensiones adicionales, cada una de las cuales forma parte de un círculo vicioso. Con el tiempo, el gasto en servicios sociales per cápita ha sido mayor en la costa que en la sierra, de modo que la brecha persiste no obstante irse reduciendo, además de que la mencionada brecha tiene una dimensión étnica. Por otra parte, los gastos hechos en salud y educación en la sierra han tenido como resultado la persistencia de una mayor brecha en la alfabetización y en otros indicadores sociales (podemos ver la alfabetización en

el cuadro 6.6). Esta brecha refleja varios aspectos interrelacionados entre sí: el impacto que la discriminación, la distancia y el aislamiento tienen en la calidad del servicio; el fracaso en lograr cambiar la estructura social; y el hecho de que los más educados tiendan a emigrar eventualmente a la costa. Con el tiempo, los niveles de alfabetización también se traducen en voz política de modo desigual, puesto que los más preparados políticamente emigran. Unos activos dados en el mercado laboral se tradujeron en ingresos desiguales debido a las diferencias en infraestructura y el acceso al mercado. Las diferencias en importancia política se reflejaron en continuas disparidades en la asignación de recursos.

Un punto de inflexión

Para finales de los años sesenta, el Perú había alcanzado un punto de inflexión. En términos políticos y económicos, el patrón de desarrollo del siglo y medio anterior ya no funcionaba. El modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones, que había producido un crecimiento razonable durante casi un siglo en relación simbiótica con el capital extranjero, había dejado de rendir frutos en términos políticos y económicos. Las relaciones con el capital extranjero estaban deteriorándose, hasta alcanzar un agudo punto de tensión en torno a la controversia generada por el contrato suscrito con la International Petroleum Company para que explotara los campos petrolíferos de La Brea-Pariñas (Thorp y Bertram 1978: 226). Y la presión social estaba creciendo en el campo, agravada por las tibias medidas de reforma agraria emprendidas por el gobierno de Fernando Belaunde Terry. El desalojo violento de quienes tomaban las tierras no constituía una respuesta satisfactoria.

La crisis de la economía de exportación fue una crisis de oferta, lo que reflejaba en parte las tensiones subyacentes generadas por los sentimientos nacionalistas incoherentes que espantaron a los inversionistas extranjeros, sin producir al mismo tiempo una vía alternativa. Hemos intentado mostrar que el mismo éxito y solidez del crecimiento impulsado por las exportaciones, que tenía como base a unas élites nacionales aliadas con el capital extranjero, resultaba un obstáculo para la mayor articulación de distintas posturas y la incorporación de intereses alternativos al sistema político. Al aflorar ahora este sentimiento nacionalista, dicha dimensión negativa llevó a la incoherencia: se trató del peor de todos los mundos posibles, puesto que los inversionistas extranjeros no tenían ninguna confianza en la coherencia o la estabilidad política, y la respuesta fue no invertir. La carencia resultante de inversiones en la minería significó la gestación de una crisis del lado de la oferta, en tanto que la falta de tierras disponibles en la costa y

la sobreexplotación de la pesca en el mar iban produciendo problemas similares en otros frentes.⁵⁴ Los torpes esfuerzos de estimular la industria y los años de sobrevaluación en épocas de abundancia exportadora habían dejado un sector industrial que no era competitivo y que en modo alguno iba a rescatar la nave con nuevos productos no tradicionales. Había una sensación omnipresente, que tenía estas realidades como base, de que la oligarquía tradicional del país había fracasado y de que se necesitaban un nuevo eje y una visión radical de reformas estructurales. Existía la difundida creencia de que, en términos políticos y económicos, el viejo modelo había entrado “en bancarrota”. En este modelo, la movilización popular que hablaba a nombre de los desposeídos era vivaz, pero seguía hallándose fragmentada y carecía de una voz política coherente. A partir de entonces y hasta el siglo actual, el Perú ha vivido una búsqueda frustrante de una vía que le lleve a un cambio significativo, que se inició con el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968. La forma en la que la búsqueda de soluciones y los fracasos que se produjeron en el camino interactuaron con la cuestión de la desigualdad grupal es lo que examinaremos en el siguiente capítulo.

54. Hemos mostrado en trabajos previos que cada uno de los elementos del problema de la oferta de las exportaciones era en realidad un problema de discontinuidad en la complejidad de la inversión y/o de la gestión estatal, para las cuales las décadas previas no habían preparado ni al Estado ni al sector privado. Véanse Thorp y Bertram 1978: capítulos 11, 12 y 14; y Thorp 1984.

LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA DESIGUALDAD GRUPAL (1968-1990)

Hemos visto que en la década de 1960, en el Perú las fuerzas del cambio solamente aparecieron en forma incoherente y fragmentada, aun cuando ciertas señales constructivas iban surgiendo. No fue solo que las protestas políticas en torno al problema de la tierra y a las cuestiones laborales fueran cada vez más vigorosas, sino que, además, con la introducción de las elecciones municipales en 1963 parecía posible el surgimiento de un movimiento que exigiera políticas que redujeran las desigualdades entre los grupos.

En este capítulo, exploramos los años de oportunidades perdidas y creciente caos que el Perú vivió entre 1968 y 1990. Mostramos cómo fue que los movimientos indígenas surgieron en las áreas rurales, por medio de organizaciones de base clasista y del desarrollo significativo de los partidos de izquierda. Explicamos también de qué manera, en el corto plazo, esta organización hizo que la movilización campesina fuera posible, pero, en cambio, en el largo plazo erosionó las posibilidades de que un movimiento indígena emergiera en los Andes. Mostramos además de qué forma la violencia política estalló, y cómo esta y las desigualdades de grupo interactuaban. Detallamos, por último, la manera en que la recesión económica y la hiperinflación se combinaron con la violencia política para empeorar las desigualdades grupales y desempoderar aún más a los actores políticos de base. Estas fueron las trágicas precondiciones de la era de Alberto Fujimori y la acentuación de las desigualdades horizontales y verticales que ella traería consigo.

Nuestra historia es así una de apertura y de cierre, y la clausura se dio fundamentalmente debido al vigor de los legados institucionales, que se expresaban bajo la forma de la falta de capacidad heredada del Estado, la cultura política

vertical y paternalista, y las normas de discriminación y prejuicio. Como dijimos en el capítulo 1, encontramos que las instituciones —formales e informales— y la política que yace detrás de ellas son lo que arraigan la desigualdad a lo largo del tiempo. Los legados institucionales tenían ahora poder para restringir, e incluso revertir, unas importantes aperturas al cambio.

Unos actores improbables —los militares— desempeñaron un papel primordial en el primer elemento de la apertura, esto es, la implementación de una reforma agraria radical. En la primera sección, mostraremos cómo esta reforma tuvo como base un análisis errado, así como la falta de convicción política de que los movimientos populares eran confiables, lo que condujo a una apertura retrasada y eventualmente a la clausura a medida de que se iban produciendo más conflictos. Las instituciones tradicionales del área rural no eran vencidas con tanta facilidad. En la segunda sección, veremos de qué manera se organizó el campesinado indígena, que alcanzó por primera vez un alto nivel de centralización. Intentaremos entonces explicar por qué ciertas identidades políticas colectivas se vieron reforzadas, en tanto que se impidió que otras lo fueran. De otro lado, otros actores —los miembros de la emergente izquierda— pasaron a respaldar a los grupos indígenas que estaban movilizándose, pero la formación de los dirigentes, en una sociedad vertical y paternalista, hizo que no resultara del todo sorprendente que su uso de estructuras de arriba-abajo no lograra fortalecer la capacidad o la identidad política de las organizaciones de base. El capítulo pasa entonces a mostrar cómo es que los distintos elementos adicionales de la clausura explican con creces la falta de progreso durante las dos décadas hasta 1990. Un movimiento guerrillero maoísta logró utilizar la vulnerabilidad generada por las desigualdades grupales y por la historia que hemos narrado para provocar una violencia terrible, lo que a su vez produjo la represión. Tanto en la acción como en la reacción, las instituciones heredadas de la discriminación étnica y el prejuicio tendrían un papel en el resultado: esta es la historia que veremos en la tercera sección. En la cuarta y quinta sección, mostramos cómo fue que la recesión económica y la mayor fragilidad de los partidos políticos llevaron a otros elementos adicionales de la clausura de oportunidades. La recesión económica reforzó —a partir de los patrones existentes de crecimiento y de capacidad limitada del sector público— la exclusión del sector rural de la fuerza laboral y su discriminación mediante los precios al productor, lo cual hizo que la movilización resultara más difícil dadas las necesidades de supervivencia. La quinta sección analiza la manera en que la violencia política y la evolución de los partidos mismos llevaron al cierre del espacio político, antes incluso de los acontecimientos de la era de Fujimori.

Lo que podemos observar en estas explicaciones es que las oportunidades fueron aprovechadas vigorosamente: no faltaron los intentos de alcanzar el cambio,

ya fuera por medios pacíficos o violentos, y hubo en efecto un relativo éxito en lograrlo, en concreto en el acceso a la tierra, a la voz (a través de la organización sindical) y a la educación. Pero el progreso no solo se vio obstaculizado por el legado institucional, bajo la forma de una falta de capacidad estatal heredada, la cultura política vertical y las normas de la discriminación y el prejuicio: el resultado neto de cada historia de clausura fue un empeoramiento real de la desigualdad, y de la horizontal en particular. Puede argumentarse que al final del periodo, el Estado era peor que al inicio del mismo; el empeoramiento se dio antes incluso de los acontecimientos de la década de 1990. Así, ocurrió una incrustación aún mayor de las desigualdades.

Las políticas contradictorias del Estado en el sector rural: el despertar de las expectativas y de la movilización

El gobierno militar que tomó el poder con un golpe en octubre de 1968 se hallaba profundamente imbuido de un análisis estructuralista, según el cual el núcleo del problema del desarrollo lo constituían la propiedad y la concentración del poder. La desigualdad podía y debía ser resuelta mediante la redistribución, tanto en la ciudad como en el campo. El papel de las estrategias detalladas de microdesarrollo con que complementar semejante enfoque fue trágicamente ignorado.

En consonancia con este análisis, el nuevo gobierno llevó a cabo una serie de nacionalizaciones significativas, entre ellas la de la International Petroleum Company y de lo que consideraba eran sectores claves con que dinamizar la industrialización, tales como minería, petróleo, electricidad y los ferrocarriles. La propiedad de los trabajadores fue introducida en todo el sector formal de la economía bajo la forma de las “comunidades industriales”, que buscaban que ellos tuvieran una participación progresivamente creciente en la propiedad, la gestión y las utilidades de las empresas (Thorpe y Bertram 1978: 302).

Pero para el sector rural, el aspecto mucho más fundamental de la política fue la reforma agraria. La experiencia que el Ejército vivió al enfrentar las olas de movilización y de guerrillas en la década de 1960, en el Cuzco en particular, persuadió a los militares de que para garantizar la seguridad nacional era necesario efectuar una reforma agraria seria (Lowenthal 1975). La ley de reforma agraria (N.º 17716) de 1969 fue sin duda radical y marcó el fin del sistema de hacienda, pero al mismo tiempo se hallaba también repleta de contradicciones. Ella prometía elocuentemente la tierra a los indígenas, pero la mayor parte de la misma no le fue repartida a ellos. Para la costa se diseñaron más bien las CAP como unidades productivas autogestionarias bajo el control de los trabajadores, en tanto que con

las haciendas tradicionales de la sierra —donde las comunidades de indígenas eran más numerosas— se crearon las grandes entidades conocidas como Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS), allí donde el terreno permitía establecerlas. Las SAIS incluían a los trabajadores de la antigua hacienda y solo a parte de la población circundante. Ellas sí reconocieron las tenencias comunales indígenas,¹ pero lo hicieron reorganizando a los “indígenas” en comunidades “campesinas”. Velasco condenaba el uso de términos étnicos, y más bien promovió una identificación de base clasista, ya sea como agricultores, trabajadores agrícolas o campesinos. Es discutible si estas políticas hicieron que la identificación étnica resultara algo menos probable o no, pero desde entonces tanto el Estado como la sociedad civil han empleado abrumadoramente el vocablo “campesino” para referirse a la población indígena de las áreas rurales. Nuestra solución a este problema fue usar el término “campesinos indígenas” para aludir a estos pueblos en el sector agrario o en las áreas rurales, o bien aludir colectivamente a ellos con el vocablo “comunidad”.²

Para 1974, la reforma agraria ya era un proceso frustrante. Apenas el 9 por ciento de las tierras fue repartido entre las comunidades campesinas indígenas y el 13 por ciento entre otros grupos del campo, en tanto que las nuevas SAIS recibieron el 43 por ciento (cuadro 7.1). Además, las SAIS y las CAP recibieron la mayor parte del valor total de las tierras y ganados. En 1974, el valor total redistribuido a las SAIS fue calculado en más de dos millones de soles, en tanto que el valor total repartido a las comunidades y a otros grupos rurales juntos era de apenas 47 mil soles (Arce, 1985: 84). Esto fue percibido como algo injusto y frustrante, con lo cual el campesinado indígena tanto dentro como fuera de las asociaciones estatales comenzó a advertir que las SAIS eran los nuevos hacendados, esto es, una nueva “hacienda estatal”. El cuadro 7.1 muestra la distribución estimada de tierras en hectáreas en 1974 y 1980.

Es más, las utilidades jamás fueron lo suficientemente significativas como para satisfacer las necesidades de las comunidades y los trabajadores agrícolas. Figueroa (1973) y Webb (1975) mostraron que las antiguas haciendas dependían

1. Fueron reconocidas como tales desde la reforma constitucional de 1920 (Davies 1974).

2. Siempre es difícil hablar de identidades, y ello a menudo tiene como resultado la adopción demasiado rotunda de una terminología, con todo lo que ello implica en términos de los supuestos y el discurso. Buscamos evitar esto lo mejor que pudimos, sin perder de vista la complejidad de la vida real. Los varones, mujeres y niños indígenas del campo se desplazaron como personas y como grupos. En el transcurso de esta evolución, construyeron nuevas identidades que eran más fluidas y más complejas, y en ocasiones internamente contradictorias, todo ello a menudo “en proceso”, como se lo explicaban a sí mismos.

CUADRO 7.1

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE TIERRA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA

Tipo de organización	1974		1980	
	Hectáreas	%	Hectáreas	%
agrícola				
CAP	1.588.498	32	2.173.447	25
Otros grupos rurales	646.039	13	1.893.352	22
Comunidades	442.967	9	857.399	10
SAIS	2.124.317	43	2.815.029	32
Particulares	125.149	3	685.203	8
Entidades estatales			376.164	4
Total (has)	4.926.970	100	8.800.594	100

Fuente: Arce, 1985; Ministerio de Agricultura, Dirección de Agricultura, 1992.

fuertemente de formas de trabajo precapitalistas. Una vez que se impusieron los pagos asalariados y una producción centralizada, les resultaba más difícil para las cooperativas alcanzar el nivel requerido de eficiencia y arrojar utilidades. La falta de servicios de respaldo adecuados, así como de comprensión técnica, significaba que las nuevas cooperativas y las SAIS tenían muy pocas posibilidades de ser viables económicamente, incluso sin el nivel de conflicto resultante.

En términos políticos, con la reforma agraria el gobierno buscaba crear un nuevo eslabón entre el campesinado indígena y el Estado, pero sin la participación de los partidos, de los cuales se consideraba que conformaban una estructura anticuada de patronazgo y de manipulación del campesinado (García-Sayán 1982). En 1972, se creó la Confederación Nacional Agraria (CNA) como el único órgano de expresión legítimo de los sectores agrícolas. A esta organización se integró a los trabajadores de las CAP y las SAIS, los agricultores independientes y las comunidades oficialmente reconocidas. En este nuevo orden de cosas, los sindicatos de base clasista ya existentes y más "autónomos", inscritos en el Ministerio de Trabajo, se quedaron sin papel alguno que cumplir. Los sindicatos de campesinos indígenas y sus federaciones regionales podían existir, pero se les privó formalmente de su capacidad de representar a dicho campesinado en toda forma oficial (Bourque y Palmer 1975). Este fue el caso de las federaciones creadas durante las agitaciones que precedieron al gobierno militar y que tenían

sólidos lazos con la izquierda, pero que no lograron crecer de modo efectivo hasta convertirse en organizaciones más grandes o de corte nacional.³

En el ámbito local, el gobierno creía que las nuevas cooperativas necesitaban de una organización comunal moderna. El estatuto que aquel aprobara obligó a las comunidades de campesinos a organizarse siguiendo el molde de las cooperativas y a reemplazar las funciones de la tradicional junta comunal con unos nuevos “consejos administrativos y de vigilancia”. También reservaba los cargos electos en las nuevas cooperativas a quienes pudieran leer y escribir en español (Bourque y Scott 1975: 190). Los técnicos tuvieron mucho poder dentro de estas cooperativas gracias a la influencia que ejercieron en la creación inicial de dichas estructuras, su acceso a la información, su representación exagerada en los comités de vigilancia y el nombramiento del gerente general por el gobierno. A menudo utilizaron su poder para ejercer una influencia clientelista sobre la dirigencia de las comunidades campesinas indígenas o de los trabajadores, recogiendo votos para así reducir los beneficios que les tocaban a otros grupos (Knight 1975). Además, la nueva estructura “moderna” no era funcional para la resolución de los problemas internos de la comunidad. El campesinado indígena estaba acostumbrado a organizarse en torno a la necesidad de repartir recursos tales como la tierra, el agua y los pastizales. Las organizaciones tradicionales resolvían problemas de acción colectiva y —en cierta medida— moderaban el acceso desigual a dichos recursos. Las nuevas organizaciones y representantes respondían a las directivas de la cooperativa, mas no necesariamente a los miembros de la comunidad.⁴

Los discursos contradictorios en torno a la redistribución de la tierra y las formas de representación fueron generando la frustración. “La tierra para el que la trabaja”, “el patrón no comerá más de tu pobreza”, y “democratización social con participación plena”: estos eran los lemas del gobierno revolucionario. Sin embargo, la tierra no fue redistribuida y las organizaciones comunales y locales fueron ignoradas.

En conclusión, durante estos siete años de experimentación, el gobierno militar fracasó en su intento de transformar y modernizar la sociedad en el campo. Yashar (2005) sostiene que las formas corporativas de relación entre Estado y campesinado también fueron desarrolladas en Ecuador y Bolivia. Al otorgar derechos civiles y sociales, estos regímenes inadvertidamente brindaron refugio a

3. Contribuyeron a la desmovilización tanto la incursión del movimiento guerrillero y la respuesta del Ejército, como la implementación de un programa anterior de reforma agraria en la zona.

4. Mediante una serie de testimonios, Mayer (2009) narra en forma sumamente vívida de qué manera los pueblos indígenas vivieron estos conflictos.

las comunidades de indígenas rurales que enfrentaban el control estatal (Yashar 2005: 57).⁵ En el Perú, el modelo “corporativo” de Velasco (1968-1975) finalmente libró a los pueblos indígenas del control “monopólico” del poder por parte de los hacendados locales gracias a una reforma agraria radical, e impuso modos corporativos de intermediación de intereses con el Estado de base clasista. Pero al mismo tiempo, la reforma agraria y su organización corporativa fueron consideradas un medio con el cual incorporar y controlar el campo, y en particular a las comunidades campesinas. Las cooperativas surgieron precisamente en aquellas zonas en donde más prevalecía el sistema de hacienda, y en donde el campesinado indígena tenía la memoria más viva de la explotación tradicional. Este campesinado pasó de luchar contra los hacendados a rechazar la intervención estatal. Las consecuencias de las reformas no fueron homogéneas en toda la sierra: en el norte se ganó una significativa autonomía local, en claro contraste con el sur, donde se creó la mayoría de las cooperativas (Paredes 2010, 2011). Probablemente, la consecuencia más anómala se produjo en Ayacucho, donde los mecanismos de explotación tradicionales fueron reproducidos por los campesinos indígenas más acomodados, que se beneficiaban con la redistribución desigual de activos, lo que proporcionó un terreno fértil para que Sendero Luminoso preparara su proyecto (CVR 2003).

Sin querer, la reforma dio motivos para el enfrentamiento en varias partes del país, sobre todo en la sierra sur. El Estado reconoció comunidades y promovió el derecho a la tierra y a la organización. El discurso creó expectativas, no solo en las comunidades campesinas indígenas, sino también en la sociedad en general. Dichas expectativas fueron satisfechas de modo desigual. En este contexto, las comunidades encontraron una razón legítima para su movilización. Las tomas de tierras comenzaron espontáneamente en varias partes del país, pero estos movimientos tuvieron su epicentro en la sierra sur, donde ahora el campesinado indígena comenzó también a construir federaciones de base clasista con un extenso respaldo de los partidos de izquierda, primero en las provincias, luego en sus regiones y finalmente de modo interregional. Estas fuerzas se vieron fortalecidas por la radicalización de la organización agraria “oficial”, la cual abandonó su papel “oficial” y adoptó un discurso contestatario (fue proscrita en 1976). Las comunidades de la sierra sur afiliadas a la CCP y a la CNA iniciaron luego un proceso de unificación. El potencial para la construcción de un movimiento de campesinos indígenas en la sierra jamás fue tan grande como en esta época.

5. Espacios dentro de las formas de intermediación de intereses de base clasista, en los cuales se brindan derechos civiles y sociales (mas no necesariamente políticos).

Un resultado inesperado para la izquierda en el Perú fue el colapso del gobierno militar, el retorno de las elecciones en 1980 y la incorporación de los partidos populares al sistema. Es más, la alta votación que los diversos grupos izquierdistas alcanzaron en las elecciones a la asamblea constituyente de 1978 fue una gran sorpresa para dichos partidos. Fue la segunda votación más alta que una alianza de partidos de izquierda había alcanzado en América Latina desde 1970 en Chile, y su más sólido respaldo provenía de la sierra sur. Ella indicaba el grado de expansión que la izquierda había alcanzado en la década anterior entre los campesinos de estas regiones. Había, en consecuencia, un creciente consenso en la dirigencia de que la izquierda debía participar en las elecciones como un frente único, pero los más radicales de estos grupos aún no habían renunciado a la idea de una revolución política (Sanborn 1991, Roberts 1992). Antes de considerar el fenómeno de la violencia, debemos reflexionar acerca del papel de la izquierda y preguntarnos si el surgimiento de una organización política podría cuestionar las desigualdades grupales.

La izquierda, el movimiento indígena de base clasista y el crecimiento de las redes

En la década de 1970, fue creciendo la idea de que el cambio era necesario, especialmente entre los jóvenes. Hemos visto que los partidos de izquierda aparecieron en el decenio anterior como grupos de presión importantes a favor de la reforma agraria. El repentino éxito de la Revolución cubana, la fragmentación del comunismo internacional, la evolución del pensamiento progresista en una parte de la Iglesia católica (la “opción preferencial por los pobres”) y la creciente conciencia de la necesidad del cambio en una duradera sociedad oligárquica, desempeñaron todos un papel en captar el interés y la imaginación de una población creciente de estudiantes universitarios de clase media en la década de 1970. En nuestras entrevistas, escuchamos una y otra vez historias de jóvenes estudiantes que optaron por la transformación y la justicia con un profundo y apasionado celo, al ver de cerca las realidades de un sistema injusto. Muchos narraron cómo unos docentes, sacerdotes o monjas progresistas les habían inspirado para trabajar en las áreas marginales, a menudo primero como catequistas, y que la experiencia había despertado en ellos su pasión por la justicia. Otros enfatizaban más bien la influencia ejercida por otros estudiantes y sus profesores en la universidad. Y otros más señalaron que para ellos, la insistencia de su partido en que se dirigieran al campo había constituido una experiencia formativa.⁶

6. Entrevistas con figuras políticas de los años ochenta (Lima y Cuzco, agosto de 2008).

El trabajo de estos tempranos grupos de izquierda en el medio rural llevó al primer intento de construir una organización de base clasista en esta zona.⁷ Gran parte de esta nueva organización fue el resultado del trabajo realizado por los jóvenes militantes de un partido conocido como Vanguardia Revolucionaria (VR) o “Vanguardia”.⁸ En 1974, un miembro activo de VR y dirigente de la Federación Campesina de Piura pasó a ser el nuevo presidente de la CCP, la Confederación Campesina del Perú: Andrés Luna Vargas. En su resolución final de dicho año, la CCP estableció que las “tomas de tierras” serían la estrategia principal de la acción política campesina (CCP 1974). Silva, de la Federación Campesina del Cuzco, nos describió este proceso en dicha zona del país:

La Federación Campesina del Cuzco, fundada en 1961, era prácticamente clandestina debido a la dirección política de esta época. El PCP-Federación Bandera Roja vio al gobierno militar como una opción fascista, con el resultado de que las organizaciones sociales de izquierda debían ser clandestinas. Pero tuvimos éxito en [...] reorganizar la Federación. Significó un duro trabajo desde 1971 para vencer una posición dogmática y ultraizquierdista. Tuvimos también que luchar con el Estado, que quería controlar a los campesinos a través de organizaciones corporativistas.

Según Del Mastro, la CNA y sus ligas agrarias se extendieron por las regiones del sur entre 1973 y 1975 (1979: 49). Sin embargo, después de 1974 la CCP experimentó un proceso de cambio y crecimiento, alcanzando más de doscientos mil miembros en 1977. El movimiento tuvo una fortaleza particular en la sierra sur, pero en los años ochenta se extendió a lo largo de los Andes (Paredes 2010, 2011).

El creciente conflicto con el Estado en torno a las cooperativas y la tierra le dio a Vanguardia la oportunidad de brindar a los campesinos indígenas una infraestructura organizativa, además de ayudarle a establecer lazos entre las comunidades. Estos jóvenes militantes de Vanguardia, que por lo general eran estudiantes universitarios, crearon redes, establecieron contactos con otras organizaciones,

7. Para su cuarto congreso, en mayo de 1974, la CCP contaba con un total de 336 delegados, que representaban a 144 organizaciones de base —federaciones, sindicatos, comunidades, cooperativas y otras más— provenientes de 13 departamentos.

8. Este grupo se fundó en 1965 y tuvo sus raíces en círculos de estudio intelectuales y en el movimiento estudiantil universitario. VR buscaba corregir los errores de grupos guerrilleros anteriores construyendo una organización partidaria más sustancial, estableciendo vínculos con organizaciones sociales —para así ganar un respaldo más amplio a sus causas revolucionarias— y desarrollando redes políticas significativas en el movimiento obrero, en particular en las industrias minera y de harina de pescado. A comienzos de la década de 1970, el partido trabajó vigorosamente con las organizaciones campesinas que eran autónomas respecto de la organización oficial velasquista, la CAN (SINAMOS 1976).

difundieron información mediante boletines y conferencias, y desarrollaron un repertorio efectivo de activismo político. Sin embargo, el tipo de organización que ayudaron a construir era vertical e ideológica en extremo, algo que con el paso del tiempo causaría daños incalculables a la posibilidad de construir organizaciones de base inclusivas.

Sería errado asumir que simplemente debido a la presencia de la izquierda en la sierra, el resultado fue la construcción de organizaciones e identidades políticas de base clasista. Como tan a menudo sucede, la historia es más complicada. Sostenemos que en los primeros años, la lucha por la tierra impulsó las movilizaciones y brindó la oportunidad para que Vanguardia reforzara una identidad clasista entre las organizaciones campesinas indígenas. El mencionado partido incorporó exitosamente la lucha por la tierra a su discurso marxista, en el cual esa batalla era el primer paso en la organización de un movimiento clasista, que buscaba fundarse sobre una alianza entre campesinos y obreros (véase Pease 1974: 32-43). Durante estos años, los jóvenes activistas de izquierda y los campesinos indígenas alcanzaron y mantuvieron este delicado equilibrio, desarrollando un ingenioso y complejo conjunto de alineaciones políticas (Paredes 2010, 2011). Como las tierras no fueron distribuidas, a ojos de los comuneros el Estado había pasado a ser el nuevo y aún más poderoso hacendado. “Wanuchun Asnu Cooperativa” (“Muerte al viejo asno de la cooperativa”) fue entonces el lema de la CCP que resonó por los Andes. Sin embargo, este marco hizo que la identidad de clase fuera más importante. Ella se expandió por la región, particularmente en el sur, pues era consistente con las incómodas experiencias que las comunidades habían tenido con las cooperativas, y porque no había nada más vivo para los pueblos indígenas que la lucha por la tierra. Esta postura, tan efectiva entre las comunidades de la región, resultaba, asimismo, conveniente para VR y otros grupos similares, como el MIR. Aunque la recuperación de la tierra y la revolución marxista-leninista son tradiciones distintas, VR fue creativa al incorporar la lucha por la tierra a su discurso marxista contrario al nuevo Estado “burgués”, que “solo” había reemplazado al viejo Estado “oligárquico”. Para las comunidades, la lucha por la tierra era una forma de empoderamiento, de ellas y sus organizaciones autónomas; para Vanguardia, la base del Estado popular que esperaba construir.

Otros partidos de izquierda que tenían presencia en el campo se opusieron a esta postura y consideraron que las tomas de tierras constituían un error. Pero más allá de la batalla por la tierra, la dirigencia de Vanguardia daba poca cabida al debate. Hoy en día, los actores confiesan que estaban demasiado embrollados en sus luchas ideológicas como para advertir los problemas cotidianos que los campesinos indígenas experimentaban con su creciente interacción con una economía de mercado (precios, crédito, comercialización, etc.). La dirigencia

del campesinado indígena gradualmente advirtió esta cuestión, pero no logró hacerse oír por sus aliados, y ni siquiera dentro de su propia organización.

En este contexto, el espacio para que los campesinos comenzaran a experimentar y a construir una identidad política distinta se redujo aún más. Los pueblos indígenas no construyen “naturalmente” identidades políticas indígenas: al igual que todas las personas, ellos comparten múltiples esferas que organizan la rutina diaria (clase social, religión, profesión, edad). Es el enfrentamiento —y la forma en que la gente interpreta, debate y construye explicaciones en su transcurso— lo que activa una esfera particular dentro de la cual los integrantes y los aliados forman y reconfiguran las identidades políticas. Los reducidos espacios abiertos al debate y la negociación, así como la falta de una interpretación que refleje su propia realidad, erosionaron la probabilidad de que los pueblos indígenas construyeran una identidad política autónoma que contara con el potencial para vincular sus reclamos de forma más amplia y brindara un sentido de apropiación sobre sus organizaciones. El lenguaje y las formas de la organización local conformaron siempre la base de toda coordinación y forma de acción tomada durante las movilizaciones por la tierra, pero fueron de algún modo invisibles. Según Óscar Mollohuanca, alcalde de Espinar entre 1998 y 2002 y miembro fundador del partido de base indígena M’inka, si bien en dicho lugar la ideología clasista predominaba entre los miembros del partido y en los eventos oficiales de la federación campesina, las comunidades no perdieron, en cambio, su naturaleza local indígena.⁹ La base de la organización fue levantada sobre las redes de parentesco y una comprensión particular del valor de la tierra. La lucha por esta última y por la autonomía organizativa fue una vigorosa fuente de identidad política durante estos años. Sin embargo, no había espacios abiertos de diálogo donde recrear los significados de su lucha sobre la base de los nuevos reclamos que los campesinos indígenas hacían. Como consecuencia, eran pocas las oportunidades para transformar la identidad política clasista, a pesar de que con el tiempo la identidad existente resultaba cada vez menos idónea.¹⁰ El testimonio de Inocencio Mamani, un dirigente cuzqueño entrevistado por García-Sayán (1982: 188), ilustra la trascendencia que la lucha por la tierra tenía para la identidad del grupo:

9. Entrevista en Espinar, Cuzco, agosto de 2008.

10. Para los aliados no campesinos, lo que estaba teniendo lugar era una lucha que serviría para crear una organización campesina, la cual sería utilizada posteriormente para fines “revolucionarios” en contra del Estado. Esta meta no estaba tan clara entre el campesinado y los dirigentes indígenas. Montoya (1998) sostiene que para los campesinos, la lucha por la tierra no fue únicamente un combate material en pos de derechos: ella era el símbolo de su despojo histórico como indios, de su exclusión de la sociedad y de la restauración de su cultura y origen como pueblo. Necesitamos contar con más investigaciones para así entender mejor este importante aspecto de la lucha.

La liberación sería para nuestros hijos, para que ellos crezcan bien sanos. Que los pueblos campesinos tengan casa no sólo con paja en donde no hay agua y se toma agua amarilla. No hay escuela y no hay carreteras y tampoco tenemos cómo atender nuestra salud pues no hay posta sanitaria. Ya llegará la hora de conseguir todo barato, las cosas de la tierra son baratas. Pero esas cosas del extranjero cuestan mucho más de lo que trabajamos. Cuesta el abono, la úrea y todo eso. Cuando nosotros sacamos la cuenta no tenemos para la semilla, no tenemos ganancias. Nosotros vendemos muy barato. Por todo eso, tenemos que seguir nuestra lucha. Para eso, todos los campesinos se organizarán bien, todos se juntarán como un solo hombre. Y así nada de explotación habrá. Cuando llegemos a la liberación y todos nos organicemos, iremos como un solo hombre. Las autoridades que hoy están en contra nuestra y que hoy están de parte del rico, ya no nos molestarán. Ellos están con los wiraqochas ahora. Entonces nosotros ocuparemos esos cargos.

Según Montoya (1989), las interrogantes en torno a la cultura, la lengua y el territorio de los pueblos indígenas no estuvieron del todo ausentes en las discusiones de la CCP, pero siempre terminaron excluidas de la agenda oficial. Luego del quinto congreso de la CCP en 1978, su rama en Puno, conocida bajo el nombre de “Túpak Katari”,¹¹ celebró una reunión en la cual sostuvieron que la CCP no reconocía a los pueblos quechuas y aimaras como la base de la nación peruana y como los principales actores en la lucha librada en el campo. La federación Túpak Katari continuó subrayando el papel de las naciones quechuas y aimaras en reuniones posteriores dentro de la CCP, pero fue sumamente marginada.¹²

La tesis oficial de un partido de “cuadros” insertados en las “masas”, y las diferencias reales y dramáticas existentes entre los primeros y la población campesina indígena, crearon sin querer una organización sumamente diferenciada, en la cual unos pocos dictaban la línea política, en tanto que los campesinos conformaban “las bases”. Si bien la organización vertical fue útil por la disciplina que brindó durante el gobierno militar y las tomas de tierras, los dirigentes indígenas quedaron abrumados y alienados por este tipo de organización al momento del retorno a la democracia. El nuevo sistema democrático inaugurado en 1980 trajo consigo el sufragio universal e incluyó a todas las fuerzas políticas, así como a la izquierda. Bajo las nuevas reglas, los dirigentes políticos y sociales colocaron sus esperanzas

11. “Túpak” se escribe con “k” en aimara y con “c” en quechua. El aimara es la lengua indígena en la mayor parte de la región de Puno.

12. En 1979 organizaron el “Primer Encuentro” de nacionalidades quechuas y aimaras y minorías amazónicas, junto con la Federación Campesina del departamento del Cuzco. Al año siguiente, se celebró un “Congreso de nacionalidades”, pero este convocó a menos representantes que el primer encuentro. En 1981, la Federación Túpak Katari fue tildada de “divisionista” por el comité ejecutivo de la CCP, el cual se atuvo a un discurso de clase durante la década de 1980 (Montoya 1989: 65).

de representación en los partidos políticos, en partícula en el frente Izquierda Unida. El nuevo sistema facilitó la absorción de los campesinos indígenas y de otras organizaciones sociales a la mediación de dichos partidos, dados los recursos organizativos y simbólicos que estos habían acumulado durante los años anteriores de movilización. El nuevo sistema era formalmente democrático, pero los partidos seguían siendo verticales, ideológicos y proclives al divisionismo. Nuestros informantes en el Cuzco, Anta y Espinar anotaron repetidas veces su frustración con la naturaleza autoritaria de los partidos de izquierda. Por ejemplo, Wilber Rojas, alcalde de Anta, en el departamento del Cuzco, nos contó cómo el dogmatismo de los partidos nacionales alienó a gente como él. La agenda era impuesta desde Lima y él no lograba que sus preocupaciones fueran debatidas. Crecencio Merma, en Espinar, ex dirigente campesino y regidor de la municipalidad, hizo una descripción similar. Merma describió cómo constantemente intentó promover la agenda de “las bases”: la necesidad de mejorar la productividad y de brindar empleo. Sin embargo, se le dijo repetidas veces que lo importante eran cuestiones tales como oponerse a Estados Unidos y a las fuerzas del imperialismo.¹³

Aún más, la fragilidad de este tipo de organización se hizo evidente cuando las disputas entre los partidos de izquierda resultaron dañinas para aquella. En efecto, los partidos intentaron conseguir respaldo para su propio empoderamiento dentro de Izquierda Unida. Así, a comienzos de la década de 1980, las disputas entre los partidos pasaron a ser un claro obstáculo para la construcción de espacios abiertos de debate entre los campesinos indígenas y otros grupos sociales que iban surgiendo dentro y fuera del sector rural. Sin estos espacios abiertos de comunicación, no es probable que florezcan la solidaridad y la cohesión cultural de cualquier tipo (étnica o clasista). Además, la izquierda hizo que los campesinos indígenas del sur tuvieran fácilmente a su disposición recursos organizativos para movilizarse en torno a las tierras; por ende, este campesinado no tuvo ninguna necesidad de desarrollar sus propias estructuras formales. Cuando la política electoral cuestionó las metas mutuas del campesinado indígena y la izquierda, y esta última se interesó más por la política partidaria/electoral que por la construcción de los movimientos campesinos indígenas, las organizaciones de estos últimos se encontraron con que no contaban con las capacidades organizativas o la cohesión necesarias para cambiar de camino.

La experiencia de la CCP contrasta con la del movimiento campesino indígena surgido en Cajamarca, que se propagó hacia zonas de la sierra en los vecinos departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde las dispu-

13. Entrevistas realizadas en el Cuzco, agosto de 2008.

tas en torno a la tierra quedaron resueltas con relativa rapidez para mediados de la década de 1970 (Paredes 2010, 2011). Las comunidades campesinas indígenas de Cajamarca y, en cierta medida también, las de la sierra de Piura se quedaron solas por primera vez cuando los hacendados se fueron. Los dirigentes se interesaron entonces por resolver sus problemas inmediatos y comunales, en particular el incremento en el robo del ganado, que alcanzó proporciones epidémicas en Cajamarca a mediados de la década de 1970 (Gitlitz y Rojas 1983, Gitlitz 1998). Así surgieron nuevas organizaciones —tales como las rondas o patrullas comunales—¹⁴ a escala local, sin que hubiese una influencia significativa de la izquierda. Al no contar con dicho respaldo, los campesinos indígenas de estas regiones debieron construir sus propias redes organizativas para así alcanzar sus metas. Esto contrasta con el sur, donde un pequeño número de cuadros comprometidos proporcionó la mediación. Las rondas de la sierra norte no alcanzaron los niveles organizativos de movimientos regionales ocurridos en Ecuador y Bolivia; sin embargo, en comparación con la sierra sur, donde la gente luchó durante décadas para levantar una organización más prominente, las rondas norteñas lograron pasar de una invisibilidad casi total a una significativa prominencia política, y ello en medio de un violento conflicto interno (véase la siguiente sección). Ellas no construyeron una identidad política indígena abierta, sino más bien una identidad de base cultural, para lo cual emplearon su sentido de solidaridad local, comunal e indígena. Las rondas fueron aceptadas como actores políticos por el Estado, lo que produjo la ampliación de la noción de ciudadanía que este tenía. Elementos tales como el derecho consuetudinario y las estructuras de gobierno comunal tuvieron que ser tomadas en serio y ser reconocidas.¹⁵ Sin embargo, las rondas fueron un movimiento regional que se topó con dificultades para cambiar de escala hasta convertirse en un movimiento nacional, puesto que no tuvo respuesta de parte del resto de la sierra. Esto afectó su vigor como movimiento regional.

En esta sección, hemos contrastado la evolución de la política “sobre el terreno” en distintas regiones, explorando siempre cuánto avanzaron los campesinos

14. Las describimos con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. Ellas desarrollaron rápidamente funciones comunales adicionales, entre ellas la justicia comunal.

15. En nuestras entrevistas escuchamos que los ronderos de Cajamarca no sienten que forman parte de una comunidad con los pueblos indígenas del sur. En dicha región, los campesinos han vivido un proceso más profundo de mestizaje racial y cultural. Ellos no hablan una lengua indígena ni viven tampoco según los principios de la propiedad comunal de la tierra, pero sí conservan diversas características comunales andinas en la reproducción de su vida cotidiana, tales como la lógica de la reciprocidad, así como vínculos, instituciones y valores comunales en el matrimonio, el trabajo, la producción y el trabajo en comunidad (Yrigoyen 2002).

indígenas en adquirir voz y liderazgo. Encontramos que el movimiento campesino indígena de la sierra sur pareció haberse agotado y quedado encerrado en su camino histórico. Las expectativas despertadas por las reformas de Velasco terminaron en una frustración a medida de que la “vieja forma de hacer las cosas” se reproducía y los burócratas estatales o los campesinos más acomodados asumían nuevos roles de poder. La lucha por la tierra hizo que la izquierda resultara sumamente atractiva a ojos del campesinado indígena. Pero sus patrones de comportamiento, verticales e ideológicos, no dejaron espacio para que los campesinos “aprendieran haciendo” y construyeran sus propias redes, así como sus propias identidades políticas. En cambio, en el norte, la movilización en torno a la cuestión de la tierra disminuyó, y para mediados de los años setenta la influencia de la izquierda cayó significativamente en el ámbito local y a escala comunal.¹⁶ Los ronderos crearon una poderosa identidad colectiva cuya existencia ha cuestionado el reconocimiento exclusivo de los derechos individuales del ciudadano y llevado a cierto grado de reconocimiento el derecho consuetudinario y las prácticas de gobierno comunales. Tales grupos lograron expandirse y movilizarse usando nuevas identidades, al mismo tiempo que el movimiento campesino indígena clausista en la sierra colapsaba. La carencia de refuerzos y la ausencia de experiencias comunes que respaldaran las redes y alianzas son elementos claves que explican el fracaso de la acción colectiva indígena en el Perú (Paredes 2010-2011).

El fenómeno de la violencia política

Irónicamente, el retorno a la democracia en 1980 coincidió con el estallido de una seria violencia política. En Ayacucho se estaba dando una dinámica particular.¹⁷ Unos intelectuales radicales, interesados en la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), alcanzaron su objetivo en 1959. El gobierno consideraba que la universidad era un nido de subversivos, razón por la cual intentó cortar los fondos. Una inmensa protesta tuvo éxito y llevó a la formación del Frente del Pueblo de Ayacucho en 1966, en reconocimiento a

16. La movilización en Piura comenzó en 1972 en el valle del Chira, y para 1974 se había extendido a las sierras de Morropón y Huancabamba. En Cajamarca, con el apoyo de la FENCAP, se fundó la federación campesina FEDECC, de orientación aprista. Sin embargo, la izquierda fue ganando influencia a partir de la década de 1970, y para 1973 la FEDECC estaba afiliada a la CCP. Entre 1973 y 1974, la FEDECC encabezó los choques con los funcionarios de la reforma agraria y la Policía en diversos lugares, como Huacataz, Pomobamba, la zona de Tual-Negritos-Manzanas y Chota. Para mediados de esta década, la movilización por las tierras ya había amainado en la sierra norte (García-Sayán 1982).

17. Este párrafo se apoya en Degregori 1990: 41-46.

que el problema de la represión iba mucho más allá de la universidad. Este fue el primero de tales frentes populares. Aquí también estuvo particularmente activa la incipiente CCP (Degregori 1990, Guzmán y Vargas 1981), lo que no sorprende puesto que Ayacucho era la base de Saturnino Paredes y su área de influencia inmediata. El movimiento de base en la universidad tendió a unir intereses urbanos y rurales, en lo que serían un análisis y una movilización cada vez más radicales, lo que contrastaba con la creciente línea divisoria entre lo urbano y lo rural que iba emergiendo en todos los demás lugares.

Fue aquí, en Ayacucho, una de las regiones más pobres de la sierra central, que la primera incursión de Sendero Luminoso se produjo el día de la elección presidencial, en un pequeño poblado. Los dos fenómenos parecen estar vinculados entre sí: el retorno a la democracia impulsó a parte de la izquierda al sistema legal y llevó al grupo más radical a la lucha armada.¹⁸ Sin embargo, la cultura de la división prosiguió durante los años ochenta y finalmente quebró la frágil unidad de la supuesta Izquierda Unida. No colaboró con la unidad la inmadurez que el movimiento tenía para cuando se produjo el retorno a la democracia en 1980.¹⁹

Los orígenes de Sendero están bien documentados en la universidad provincial de Huamanga, en Ayacucho. De allí el movimiento se propagó gradualmente por todo el departamento, así como a Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín y eventualmente a Lima, a mediados de la década de 1980. El movimiento fue creado por el liderazgo carismático y la fuerte convicción ideológica de Abimael Guzmán, tal como quedan reflejados en un discurso dado en 1980:

Nunca antes los hombres han tenido tan heroico destino... A estos hombres de hoy, estos hombres que respiran, laboran y combaten, les ha tocado la tarea de barrer a los reaccionarios de la faz de la tierra. Es la misión más luminosa y gloriosa jamás confiada a generación alguna.²⁰

18. Los razonamientos contrafácticos son difíciles, pero vale la pena al menos contemplar la posibilidad de que de haber continuado la dictadura, el Perú habría visto una guerra de guerrillas más del tipo centroamericano, menos extremista y de más amplia base (excluimos a Guatemala de esta comparación). La consecuencia crucial del momento en que estalló la violencia podría ser que la preocupación que el gobierno tenía con la amenaza del terrorismo impidió que se llegara a un acuerdo con el Ejército, el cual podría haberle retirado de modo más completo del escenario. Las Fuerzas Armadas conservaron su fortaleza, lo que tuvo las consecuencias que veremos más adelante.

19. Henry Pease, un ex senador y una figura política prominente de la izquierda, enfatizó esto en una entrevista (Lima, agosto de 2008).

20. Discurso de Abimael Guzmán en 1980 en la Primera Escuela Militar de Sendero. Citado en Starn et ál. 1995 (la cita ha sido retraducida del inglés).

La primera etapa en la preparación de una guerra popular en contra del Estado comprendía el reclutamiento de cuadros para la organización. Sendero no los buscó entre los campesinos indígenas, sino que más bien puso la mira en los jóvenes indígenas que emigraban a la ciudad en busca de educación y de algo mejor que la vida rural de sus padres.²¹ La dirigencia senderista inició su reclutamiento a comienzos de la década de 1970 entre los jóvenes estudiantes y los profesores de la Universidad de Huamanga. La estrategia consistía en implementar un “proyecto pedagógico” que presentaba una visión esquemática del mundo y de la historia que justificaba la violencia. Guzmán aprovechó su poder como director de Estudios Generales para introducir cursos inspirados por los manuales de marxismo-leninismo preparados por la Academia de Ciencias de la URSS (CVR 2003: V, 581). Con dichos medios, Sendero promovió una visión crítica de la sociedad peruana que contribuyó a la aceptación del papel de la violencia, tal como lo revela el siguiente testimonio:

[...] cuando ya ingresé a la Universidad, [encontré que] el materialismo dialéctico, el materialismo histórico te abre los ojos [...]. Comprendí más el proceso, el proceso de la lucha, que el pueblo siempre ha luchado y luchará y esa lucha misma sirve para transformar. Se estudió la revolución francesa, que ha sido sangrienta, que ha habido excesos, que ha sido violenta, sí, pero eso de qué sirvió, de transformar a la sociedad y eso es lo que pesa y ahora pues, si no se hubiera dado esa situación ¿cuántos años más hubieran pasado para que pueda devenir todo lo que es el capitalismo ahora? Hubiera demorado más; ellos han tenido trescientos años para tomar el poder y consolidarse en el poder.²²

Cuando Guzmán fue expulsado de la universidad en 1975, él y muchos de los dirigentes de Sendero iniciaron un intenso trabajo político en otras partes de la sociedad ayacuchana, en particular en las áreas rurales de las provincias pobres del centro del departamento (Vilcashuamán, Huancasancos, Cangallo y Víctor Fajardo).²³ El enfoque inicial aplicado en las comunidades campesinas indígenas fue también pedagógico. Portugal muestra que para expandir su proyecto en las

21. Este y los siguientes párrafos le deben bastante a Portugal (2008), *Working Paper* N.º 57, preparado para el proyecto y disponible en la página web del CRISE. Aquí se podrán encontrar muchos detalles que respaldan lo afirmado.

22. CVR 2003: V, 615 (estudiante 1985-1990, militante de Sendero, encarcelada en el penal de Santa Mónica en Lima).

23. “Entre los años 1977, 1978 y 1979 es bastante notorio que [los militantes de Sendero] viajaban específicamente a las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo a formar escuelas populares y captar estudiantes; al mismo tiempo que trabajaban en estas zonas, seguían consiguiendo militantes en la Universidad” (CVR 2003: V, 587. Presentaciones del taller “Universidad y violencia política”).

áreas rurales, Sendero empleó el gran número de alumnos de la Facultad de Educación que se habían convertido en militantes durante sus estudios universitarios (Portugal 2008). Muchos de ellos nacieron en los pueblos rurales en los que se afincaron como docentes, razón por la cual se les consideró “hijos” de la comunidad y se les aceptó con facilidad. Además, los estudiantes y docentes de otras provincias se establecieron en los mismos poblados rurales para reforzar el trabajo político de los profesores locales, donde permanecieron por largos periodos y tomaron parte en las labores comunales, para así ganarse la confianza de la gente. En algunos casos, hasta contrajeron matrimonio con personas del pueblo, acercándose más a la comunidad. Una vez que la población había dejado de verles como “forasteros”, iniciaban el adoctrinamiento formal por medio de las escuelas populares, las cuales enseñaban técnicas de guerra a la gente de la comunidad y a los estudiantes, formándoles para que se unieran al Ejército Guerrillero Popular, el brazo armado del partido (Portugal 2008).

El discurso avanzó rápidamente dada la naturaleza rígida y conflictiva de la sociedad rural ayacuchana, donde la reforma agraria había incrementado los conflictos.²⁴ Sendero logró aprovechar estos problemas y cuestionar la autoridad de las comunidades locales para así ganarse el respaldo de los campesinos indígenas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín durante los primeros tiempos del conflicto armado interno. El movimiento solamente debía exacerbar los conflictos existentes por tierras entre las comunidades, las disputas en torno al control de los recursos en las SAIS sobrevivientes y todo tipo de resentimientos en contra de los campesinos más acomodados, quienes se habían beneficiado con la redistribución desigual de activos en el transcurso de gobiernos anteriores. Durante los primeros tres años de lo que pronto sería una guerra, Sendero contó con un terreno fértil en el conflictivo medio rural, en el cual podía desarrollar sus planes (CVR 2003).

Su influencia pronto se extendió más allá de Ayacucho y las provincias vecinas. Las universidades presentaban un terreno fértil para el activismo político. La proliferación de partidos políticos de izquierda y las federaciones estudiantiles crearon un entorno de debate permanente. La situación, sin embargo, no era homogénea entre las universidades y dentro de ellas, y muchos estudiantes y profesores rechazaron el violento discurso senderista. Las universidades públicas, que contaban con una gran cantidad de alumnos provenientes de las provincias pobres del Perú, fueron las

24. Degregori (1990) muestra que allí donde se perturbaron las estructuras de poder tradicionales, ellas no fueron reemplazadas con nada que fuera semejante a las formas democráticas; la cultura de la dominación siguió siendo tan vigorosa que los campesinos más ricos podían aprovechar dichas perturbaciones para crear nuevas formas de dominación. Los conflictos resultantes favorecieron la penetración de Sendero.

más abiertas a la ideología subversiva. Este fue el caso de la UNSCH en Ayacucho, la UNCP en Huancayo, y de la UNI y San Marcos (UNMSM), ambas en Lima.

El trabajo político de Sendero, asimismo, se extendía más allá de las aulas. El partido pasó a tener el control estratégico de los comedores, las residencias universitarias y los servicios de transporte, los cuales fueron transformados gradualmente en espacios de debate y adoctrinamiento ideológico. El discurso enfatizaba la mejora de las raciones alimenticias y de los servicios de transporte, ganándose así la simpatía y el respaldo de los estudiantes, especialmente de los más pobres, que dependían de dichos servicios para sobrevivir.

Sendero también se ganó el respeto tanto de las poblaciones campesinas indígenas como de los estudiantes por la mano firme con que imponía el orden, aun cuando aplicaba métodos drásticos. Para los estudiantes, el énfasis estaba puesto en el castigo de los profesores ineficientes y corruptos. Las comunidades de campesinos indígenas inicialmente apoyaron a Sendero, en parte porque se vieron atraídas por su discurso de reestablecer el orden mediante el castigo público de los comuneros que quebraran sus normas (Portugal 2008). Posteriormente, sin embargo, este respaldo fue cayendo a medida que Sendero cometió errores tales como asesinar a dirigentes que aún gozaban de legitimidad en sus comunidades, y, en general, por no respetar las estructuras y costumbres comunales.

El movimiento podía, asimismo, recurrir a otra necesidad: la de autoridad y orden. Guzmán exigía una sumisión total, en un sentido sumamente personal: esto atraía en particular a los emigrantes jóvenes y pobres que vivían en las residencias universitarias o en departamentos alquilados, lejos de su hogar. Esto facilitó el proceso de conversión e identificación con el “nuevo padre” y la “nueva familia”.

Su atractivo también apelaba a un sentido de injusticia. “Elizabeth” muestra esto en los testimonios recogidos por la CVR: ella emigró de Ayacucho con sus padres por las tensiones que allí había. Habiendo trabajado primero como sirvienta, se dedicó al comercio ambulatorio vendiendo ropa. Al viajar a Huancayo se topó con los senderistas, quienes la persuadieron de que se les uniera. Ella lo hizo así “porque era joven y vio tantas injusticias que simpatizaba con el discurso senderista de luchar por la justicia social”.²⁵

Cuando el poder de la ideología y el uso de las relaciones de clientelaje resultaban insuficientes para ganarse adherentes, Sendero recurría al terror y la coerción como medios de cooptación. Los testimonios nos presentan demostraciones elocuentes de lo vulnerable que una sociedad no organizada, mal educada y frágil

25. CVR, Testimonio 700041. Mujer nacida en Ayacucho en 1963, trabajadora independiente, integrante de Sendero, encarcelada en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos.

—además de hallarse al borde de la subsistencia— era al arribo de Sendero. El testimonio de Armando, de Huanta, nos transmite la vivencia del desamparo (recuadro 7.1), así como las técnicas extremas de la violencia y la coerción.

Sendero no distinguía edad o género. También se abusaba de los niños y se les obligaba a unirse al partido. Según muchos testimonios, el secuestro y el empleo de niños en los enfrentamientos fue una práctica senderista generalizada y sistemática desde el inicio mismo del conflicto armado, lo que se intensificó entre 1983 y 1985, y 1987 y 1990. Según la base de datos de la CVR, el 20,5 por ciento de las personas secuestradas y reclutadas por Sendero, para los cuales sabemos su edad, eran niños; y de todas las acciones que el movimiento realizó en contra de niños, la leva y el secuestro comprendieron el 42 por ciento, el 80 por ciento del cual tuvo lugar en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín.

En suma, Sendero combinó el poder de la ideología con el suministro de beneficios materiales, lo que incluía el nombramiento de profesores, el transporte y la comida gratuitos en las universidades, salarios y la posibilidad de tener movilidad social, así como otros beneficios menos tangibles tales como el sentido de pertenecer a una comunidad y la oportunidad de hacer historia. Con el tiempo y bajo circunstancias especiales, Sendero pasó de la manipulación intelectual y clientelista al uso de la fuerza y la violencia físicas, propagando así una cultura del terror. El discurso jamás fue étnico, pero las personas oprimidas por las desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales resultaban particularmente vulnerables a él. Esta vulnerabilidad hundía sus raíces en su historia étnica y regional.

Nuestro énfasis en la vulnerabilidad queda confirmado con nuestro trabajo de campo en la sierra norte y sur. Nuestros informantes, tanto de Cajamarca como del Cuzco, nos dijeron que el nivel de organización comunal hizo que se tomaran las decisiones grupales de rechazar la violencia y, por ende, las propuestas senderistas. El rechazo surgió a partir de la vigorosa organización comunal que ya comentamos y, en el caso de Cajamarca, de la obra de sacerdotes y monjas progresistas de la Iglesia católica, que consolidaron una cultura de la no violencia (Muñoz, Paredes y Thorp 2007). En Ayacucho, en cambio, la organización comunal era débil, y además una situación particularmente conflictiva había emergido de entre las perversidades de la reforma agraria.

La respuesta de las autoridades y sus efectos retroalimentadores

La primera incursión de Sendero tuvo lugar el día en que Belaunde fue elegido en 1980. Pero nadie en Lima, y en especial en las sedes del poder, tenía siquiera una idea de cuán serio era este desafío: todo estaba sucediendo demasiado lejos. A Belaunde le tomó dos años y siete meses enviar a las Fuerzas Armadas. En el

RECUADRO 7.1
EL TESTIMONIO DE ARMANDO

Armando cuenta cómo tenía diez años cuando él y su familia, que vivían en Huanta, fueron capturados por unos cincuenta senderistas y llevados a la selva. Viajaron por varios días a pie y luego por barco, hasta llegar a un pequeño poblado.

“En ese lugar, los senderistas nos dijeron: “aquí van a trabajar” [...] estas son nuestras tierras porque el gobierno no nos va a dar comida. Nos agruparon al pelotón N. 1, a cargo del camarada Tiburcio [...] El pelotón estaba integrado por veinte personas, quienes contaban con herramientas de trabajo y 2 escopetas [...] Todas las mañanas, las familias salían en grupos al campo a cumplir las tareas asignadas por el jefe del grupo, y por las noches cumplían labores de vigilancia. Los días sábado y domingo por las tardes se reunían para estudiar unos libros grandes y rojos de marxismo, leninismo, maoísmo y pensamiento Gonzalo. Cuando llegaban después de una o dos semanas los guerrilleros, nos convocaron cualquier día a asamblea popular donde nos daban charlas, que podían durar todo el día; también nos enseñaron cómo debíamos escapar hacia el río o cómo escondernos si llegaran los militares”.

“En Anapati cultivábamos frijoles, yuca, maíz y todo tipo de frutas. Después de la cosecha distribuíamos parte de la comida a las guerrillas [...] los *senderistas* evaluaban el trabajo de los reclutas; si no llevaban a cabo su trabajo se les castigaba sin comida. Las personas más educadas del campamento pasaban a formar parte de la fuerza guerrillera”.

Su familia continuó orando y meditando según su religión, hasta que uno de los jefes del destacamento se enteró y les dijo: “aquí está prohibido profesar cualquier religión”. En estos campamentos “nos encontramos con personas de distintos lugares (Tambo, San Miguel, Huanta, etc.) que habían sido levados [¿llevados?] igual que nosotros [...]. Había familias que habían estado allí por años, y cansados de este tipo de vida, muchos escaparon”.

En 1992, Armando y su familia decidieron escapar por barco a través del río Ene. Los senderistas les estaban esperando en la boca del río: “[...] nos sacaron y colocaron una sogá alrededor del cuello de mis padres, primero colgaron a mi papá, luego a mi mamá. Mi hermano Vidal intentó huir y le dispararon en la espalda, mientras que otro me cogía. “Si intentas huir te vamos a matar como a tu hermano” [...] Comencé a llorar y no podía hablar [...]. Me llevaron de vuelta y me pusieron bajo la supervisión de la Sra. Tania, diciéndole: “tú te vas a encargar de este niño que no tiene padres”.

Fuente: Extractos de Portugal 2008: 57-58 (editados),
a partir de testimonios de la CVR.

ínterin, se dejó que la Policía enfrentara la situación, con unos recursos y preparación del todo inadecuados. Y cuando las Fuerzas Armadas entraron al escenario, aún no se había reconocido la naturaleza de la guerra. Sendero estaba atrayendo a toda la población de su principal zona de operaciones. Esto significaba que lo que se necesitaba era un plan para (volver a) ganarse el respaldo de la población, así como recursos adecuados para evitar los abusos contra los derechos humanos, es decir, un buen trabajo de inteligencia. En la realidad, no hubo un pleno respaldo del brazo legislativo del gobierno y los recursos fueron sumamente limitados. La persona que se opuso en forma más lúcida al ingreso de las Fuerzas Armadas fue nada menos que el general Luis Cisneros Vizquerra, el ministro de Guerra. Él entendió claramente que si no se contaba con la preparación y los recursos adecuados, el único resultado posible sería una matanza indiscriminada: “Matan 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas [...] y seguramente la policía dirá que los 60 eran senderistas [...] Creo que sería la peor alternativa [...]”.²⁶

Al no contar con inteligencia adecuada, las Fuerzas Armadas solamente podían intentar recuperar el control territorial. El análisis de la CVR sostiene que esto hizo que el bienio 1983-1984 fuera la etapa más letal del conflicto, con altos niveles de abusos, tal como lo evidencian muchos testimonios. Las estrategias represivas tuvieron múltiples causas; sin embargo, la CVR señala firmemente que los prejuicios étnicos desarrollados a lo largo del tiempo fueron en gran parte responsables de la severidad de los abusos. Ella atribuye el uso de la tortura por parte de los militares fundamentalmente a un servicio de inteligencia inadecuado, pero esto se dio en medio de una cultura que permitía la violencia y en donde el tratamiento dado a los “indios” podía ser más feroz, puesto que se les consideraba seres inferiores. Lo mismo valía para Sendero, que describió a las comunidades de indígenas como “carne de cañón”.²⁷

Esto, inevitablemente, produjo casos en los cuales la gente se unió a Sendero debido a los abusos cometidos por los militares. Un ejemplo conmovedor proviene de las detalladas historias de caso compiladas por Portocarrero (1998). Raúl tenía veinte años de edad; era un joven ingenuo, católico, obediente, idealista y serio. La hora de la verdad del compromiso real con la causa llegó en 1984, cuando fue arrestado y torturado.

26. Entrevista en *Qué Hacer* (1983), citada en CVR 2003: II, 256.

27. El análisis de la CVR concluyó en que ambos bandos usaron a la población indigna como “carne de cañón” y que era menos problemático torturar y asesinar si el objeto era inferior (2003: VIII, 114-115).

Otro ejemplo es el de Andrés, quien brindó su testimonio a la CVR.²⁸ Él cuenta que las banderas rojas con la hoz y el martillo comenzaron a aparecer en los árboles y en la cumbre de los cerros alrededor de 1981 y 1982. Los terroristas llegaron en 1983 y comenzaron a organizar a su comunidad, explicando las metas y objetivos de sus acciones en distintos distritos, e invitando a la población a que dejaran sus casas, abandonaran la comunidad y se escondieran en los cerros, pues señalaban que los militares les darían muerte. La población corrió a esconderse en las montañas, presionada por los senderistas y creyendo que la Policía o el Ejército irían tras ella; la gente llevaba consigo a sus hijos, además de comida, frazadas y plásticos para levantar tiendas precarias. Su madre hizo lo mismo para conservar su vida y la de sus hijos, y abandonó su casa y sus tierras.²⁹ Pasaron así muchas dificultades, huyendo del Ejército, la Policía y los ronderos.³⁰ En 1984, cuando Andrés tenía entre diez y once años, su familia regresó a su hogar para llevar más comida a las montañas. En el camino de vuelta, su madre y su cuñada fueron capturadas por el Ejército y los ronderos, recibieron una paliza y luego fueron llevadas a una casa abandonada:

[...] pude escuchar fuertes gritos y pedidos de piedad de muchas mujeres [...] como 18 personas eran, todas mujeres, allí concentraron en una casita, y yo estaba mirando del frente; los militares entraban y salían de esa casa y al día siguiente, metieron una ráfaga del patio; eran casi 40 soldados [...] Desde ese momento, atravesé una

28. CVR, Testimonio 720036. Varón, nacido en 1973 en Ayacucho, jefe de seguridad de Sendero, encarcelado en el Penal de Yanamilla en Ayacucho.

29. “Aproximadamente en el año 1981 a 1982, en los árboles y en la cima de los cerros aparecían izadas, banderas rojas con la hoz y el martillo [...] el año 1983, llegaron los subversivos y empezaron a organizar mi pueblo, explicándoles los fines y objetivos de sus acciones en las diversas circunscripciones del territorio nacional, e invitaron a toda la población a salir de sus casas, abandonar el pueblo y refugiarse en los montes y quebradas, argumentando que la represión vendría por ellos y les daría muerte [...] la población, al verse presionados a salir por los *senderistas* y creyendo que vendrían los policías o militares a darle muerte, fueron a los montes y quebradas llevando consigo a sus pequeños hijos, sus víveres, frazadas y plásticos para confeccionar carpas y pasar la noche [...]. Mi madre, también hizo lo mismo, quien por preservar la salud y vida de sus hijos, abandonando su casa, sus chacras, fue a los montes [...]” (CVR, Testimonio 720036. Varón, nacido en 1973 en Ayacucho, jefe de seguridad de Sendero, encarcelado en el Penal de Yanamilla en Ayacucho).

30. Los ronderos eran campesinos de las comunidades —que seguían de nombre al modelo que surgiera en el norte contra los robos— que, con el respaldo de los militares, se organizaron en rondas para proteger a sus comunidades de Sendero Luminoso. Sin embargo, y en total contraste con su pares septentrionales, la mayoría de las rondas fue controlada por el Ejército y no tuvo las características de autoayuda del modelo original.

situación crítica y no tuve a nadie a mi lado, pues con mi hermana chiquita, juntos andábamos y dormíamos juntos.³¹

En medio de su resentimiento, Andrés se unió a Sendero, culpando a los ronderos y a los soldados de la muerte de su madre. A partir de ese momento, colaboró con los senderistas, llevando a cabo tareas tales como el transporte de provisiones a distintos lugares, vigilancia y comunicaciones.

En esta sección, hemos mostrado cómo Sendero no fue en sí mismo un movimiento étnico, pero el lugar donde se originó y tuvo un enorme éxito inicial cuanta su propia historia. Sendero tuvo su origen y alcanzó un éxito sobresaliente en la movilización del pueblo indígena durante casi una década, en la región más indígena y profundamente desigual del Perú. Hemos sostenido, a partir de los testimonios recogidos por la CVR, que Sendero logró movilizarlos debido a la vulnerabilidad de la población indígena a su discurso, sus promesas y su forma de operación. Nos parece que no fue ninguna coincidencia que su atractivo se sintiera con mayor fuerza allí donde la cultura tradicional de dominación y dependencia aún era fuerte a pesar de la reforma agraria, y en donde la desigualdad, los resentimientos y los conflictos resultantes eran también altos. En efecto, el contexto nacional de las reformas incrementó las expectativas, y con ello también elevó, con el tiempo, el grado de frustración. La persistencia de la cultura tradicional de dominación no dejó ningún espacio para el tipo de organización de base que resistió a Sendero en otros lugares. Este se valió de la necesidad de contar con una autoridad legítima, un papel que el Estado jamás asumió plenamente después de la reforma agraria y del colapso de las viejas instituciones. Guzmán exigía una sumisión total, que hemos visto atraía en lugar de repeler. Sendero, asimismo, se aprovechó de las necesidades de los estudiantes, por ejemplo con el suministro de una “olla común” en los comedores universitarios. Con el tiempo, usó también cada vez más el chantaje y la coerción, como en el caso de Armando, citado en el recuadro 7.1. Pero por supuesto que el movimiento también resultaba atractivo para el sentido de injusticia que el pueblo tenía. Todos estos aspectos de la vulnerabilidad se relacionan con la desigualdad de grupo, aunque no de modo excluyente: quienes solamente sufrían la desigualdad vertical también podían ser vulnerables, y lo fueron.

Pero hay otro nivel más —que es crucial— en el análisis de la importancia de las desigualdades entre grupos. Hemos visto que esto también aparece reveladamente en los testimonios. La naturaleza de la reacción del Estado y la Policía,

31. CVR, Testimonio 720036. Varón, nacido en 1973 en Ayacucho, jefe de seguridad de Sendero, encarcelado en el Penal de Yanamilla en Ayacucho.

así como el propio comportamiento de Sendero, fueron *distintos* debido a la realidad de la discriminación y el prejuicio. Como ya mostramos, para los miembros de la CVR esta fue una característica de ambos bandos, los cuales fueron igualmente responsables de haber usado a la población indígena como “carne de cañón”. Un objeto “inferior” puede ser torturado, e incluso muerto, con mayor facilidad que alguien igual a uno. Esto yace en el centro de un círculo vicioso: las desigualdades horizontales facilitaron el reclutamiento para la violencia, dada la falta de alternativas y del grado de vulnerabilidad que presentaban los indígenas, y la violencia llevó al empeoramiento de las desigualdades grupales, en el peor de los casos a la muerte.

El impacto de la violencia política y la recesión sobre las desigualdades de grupo

La propagación de la violencia política llevó también a la recesión económica mediante su efecto sobre la inversión, aun cuando la crisis de la deuda y el mal manejo económico probablemente fueron causas más importantes. La importancia del creciente caos económico a mediados de la década de 1980 quedará clara en el siguiente capítulo, el cual muestra que dicho caos y la violencia política produjeron, juntos, una sensación de “falta de gobernabilidad” y de “desmoralización”, la cual constituyó la base del atractivo de las políticas dictatoriales y represivas de Fujimori, lo que tuvo un profundo efecto sobre el espacio político y ciertamente sobre las desigualdades. Por ahora, solamente necesitamos señalar que equipos sucesivos no lograron hacer frente a la crisis de larga duración en la oferta exportadora, además de que aquellos, ya fueran de izquierda o de derecha, terminaban cayendo en el “cortoplacismo”, manipulando los precios y restringiendo la demanda en un desesperado intento por restaurar el equilibrio de las cuentas externas una vez que los flujos de capital se revirtieron con el advenimiento de la crisis de la deuda en 1982. Esto reflejaba una falta de capacidad estatal heredada. El gobierno de Alan García (1985-1990) rechazó la recesión como herramienta y se concentró en el congelamiento de precios, lo que para 1987 produjo la hiperinflación.³² En 1990, el nuevo gobierno recibió una economía seriamente distorsionada y con una inflación que alcanzaba más del dos mil por ciento.

32. Esta fue una versión extrema del resultado usual de los llamados experimentos de estabilización “heterodoxa”, que intentan restringir la inflación congelando los precios allí donde los mecanismos de manejo y monitoreo económicos no son muy sofisticados. Los desequilibrios entre la demanda y la oferta crecen y los movimientos de los precios relativos son muy exagerados. El resultado en el Perú fue la hiperinflación debido a la falta de control del lado de la demanda, junto con unos instrumentos limitados con que controlar los precios.

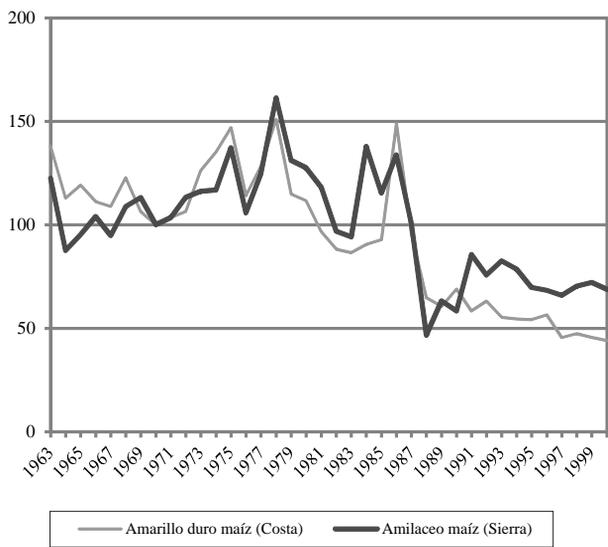
Enfrentado a una creciente población urbana necesitada, la asistencia alimentaria era una respuesta obvia, y la ayuda recibida con la PL 480 tuvo un papel importante, como parte del cortoplacismo que caracterizó la década.³³ Sin embargo, aunque estas importaciones tal vez ayudaron a aliviar la situación de las áreas urbanas en el corto plazo, ello fue a un gran costo para los campesinos indígenas, en particular en la sierra. Una consecuencia importante de la manipulación de los precios relativos y del uso de la PL 480 fue que los precios reales al productor fluctuaron enormemente y fueron cayendo con el tiempo (véase la figura 7.1). El estancamiento de los rendimientos en la sierra en el largo plazo queda sugerido por la figura 7.2, que toma al maíz “amiláceo” como una variable sustituta de la sierra y al “amarillo duro” como un cultivo de la costa. El deterioro de los rendimientos se vio, asimismo, afectado por una severa sequía. En 1983, el Perú se vio azotado por un Niño desastroso, el cual produjo inundaciones en el norte del país y una terrible sequía en la sierra sur.

Las áreas urbanas sufrieron enormemente con la recesión, incluso con la PL 480. Los emigrantes indígenas se encontraron luchando por la supervivencia, sobre todo en Lima, en un entorno cada vez más hostil. Como ya explicamos en el capítulo anterior, para 1960 la emigración ya era un elemento sumamente influyente. La población indígena arribaba a los centros urbanos, donde aprendía español, adquiría algo de educación y se adaptaba a una cultura dominante occidental-criolla como un medio con que mejorar su situación socioeconómica, pero usualmente se resistía a una aculturación total.³⁴ Ella necesitaba depender de la familia o del patronazgo, de modo que las viejas formas de las relaciones de patrón-cliente asumieron una nueva vida por necesidad. El sector informal urbano fue el principal recurso de los recién llegados para encontrar pequeñas oportunidades económicas, y la informalidad creció a un ritmo asombroso, floreciendo los empleos de subsistencia en la ilegalidad y en las muchas zonas grises fuera del sector formal. Esto se vio consolidado por el crecimiento de la economía ilegal: en el transcurso de la década de 1980, el crecimiento del tráfico internacional de estupefacientes arrastró al Perú a su centro, suministrando dólares pero contribuyendo también a la expansión de la economía informal/ilegal. Para finales de esta década, la cocaína era ya la más grande exportación del país.

33. PL 480 es la controversial ley norteamericana que permite “regalar” el excedente alimenticio de Estados Unidos a los países necesitados.

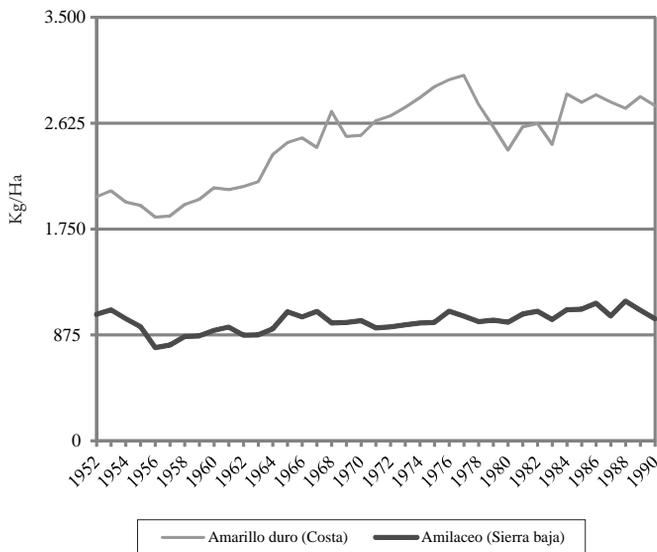
34. Estos migrantes indígenas construyeron y/o habían construido una nueva identidad para sí mismos, una nueva identidad “chola”. Este proceso se ha dado en una sociedad que aún no ha superado sus prejuicios; y sucede a menudo que en un intento por evitar la discriminación, ellos reproducen prácticas racistas y discriminadoras en contra de quienes son menos alfabetos y urbanos que ellos mismos.

FIGURA 7.1
 ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR REALES (1970 = 100)



Fuente: Ministerio de Agricultura y OXLAD

FIGURA 7.2
 BRECHA DE PRODUCTIVIDAD COSTA-SIERRA



Fuente: DGIA, Ministerio de Agricultura

Además, la inversión e incluso la producción diaria se vieron seriamente afectadas por la violencia hacia finales de los años ochenta, sobre todo a medida de que Sendero se desplazaba hacia Lima. La violencia tuvo, asimismo, impactos en las desigualdades socioeconómicas entre los grupos, en la medida en que las familias perdían a sus miembros, los rebaños y pertenencias eran saqueados por ambos bandos y las familias eran obligadas a desplazarse. La discriminación de los emigrantes de la sierra empeoró en el mercado laboral, puesto que pasaron a ser sospechosos de ser “terroristas”. Y con el proceso de desplazamiento, las desigualdades al interior de los grupos también se vieron exacerbadas. Aquellos emigrantes que podían vender tierras u otras propiedades en su lugar de origen podían comenzar de nuevo con mayor facilidad, lo que tuvo efectos acumulativos.

Exploraremos ahora el impacto que la recesión y la violencia política tuvieron en la movilización en el área urbano, y usaremos el ejemplo de los comedores populares para así explorar las perversidades de la movilización política, en su interacción con la economía y la escena política mayor.

El impacto de la recesión y la movilización de los emigrantes indígenas: un ejemplo en Lima

Un vívido ejemplo del impacto del deterioro que venimos describiendo proviene de una de las historias más excepcionales de la fortaleza y la organización de base con que nos encontramos entre los inmigrantes de Lima. En el siguiente capítulo, documentaremos casos de acción colectiva en los años noventa y cómo se vieron afectados por el cierre del sistema y la violencia política, pero uno de estos casos se vio afectado en forma tan clara por las tendencias de la década anterior que debemos adelantar brevemente la historia: se trata de los “comedores populares” (CP), que reunieron a mujeres inmigrantes indígenas y cholos que vivían en la periferia de Lima. Los primeros comedores aparecieron a finales de la década de 1970 y tuvieron su centro en la capital, pero eventualmente se propagaron a otros lugares.³⁵ Estas acciones colectivas inicialmente surgieron entre mujeres trabajadoras que se ayudaban mutuamente. La siguiente descripción nos dará una buena idea de estos comedores. Gloria Libia, una dirigente vecinal en El Agustino, un barrio de Lima, recuerda:

Al comienzo éramos una suerte de club de mujeres. Por ejemplo, enseñábamos a las señoras a leer y escribir, hacíamos trabajo de alfabetización. Entonces vimos las

35. Sara-Lafosse (1984) sitúa las primeras iniciativas en Comas y El Agustino en 1978 (se comenzó con desayunos infantiles y en 1979 se desarrolló la idea de un comedor).

necesidades de nuestras barriadas, por ejemplo yo y otras salíamos muy temprano en la mañana a trabajar en La Parada [el mercado] [...] Dejábamos [a] nuestros hijos a las 5 a.m. y solo volvíamos a la 1 p.m. para cocinar para ellos [...] En una de nuestras reuniones, una de nuestros miembros que había visto un comedor en otro barrio planteó la idea. Pensamos, ¿por qué no abrimos uno nosotras? (Schönwälder 2002: 158; traducción nuestra).

Para 1986, había 570 de estos comedores populares en Lima (Huamán 1987, cit. por Lora, 1996); hacia finales de la década, se calculaba que sumaban alrededor de un millar (Córdova y Gorriti 1989).

Este rápidamente pasó a ser un ejemplo serio de acción colectiva y construcción de una identidad política a partir de las necesidades compartidas de las mujeres migrantes. Como veremos en el siguiente capítulo, una proporción significativa de los comedores evolucionó de una actividad de supervivencia a niveles más estratégicos de análisis y acción políticos. Para finales de los años ochenta, Carmen Lora, que ciertamente es una vigorosa defensora de los CP, sostenía que la proporción “autónoma” del total de comedores era todavía del 60 por ciento.³⁶

Las mujeres de los comedores populares advirtieron rápidamente que la acción colectiva sería mucho más efectiva si los comedores individuales se conectaban entre sí.³⁷ Unas poderosas federaciones fueron surgiendo en las distintas regiones de Lima. Para 1989, había 42 “centrales” o agrupaciones, a las que pertenecían entre 15 y 40 comedores,³⁸ y en 1991 se formó una federación formal (la FECCPALC, Federación de Centrales de Comedores Populares Autónomos). Podemos apreciar la importancia de esta organización en los esfuerzos realizados por sucesivos gobiernos para evitarla y tratar directamente con los comedores. El mayor nivel de coordinación llevó a la consolidación gradual de una agenda política en torno a un programa alimentario que usaba ingredientes de producción nacional, que estaba ligado a medidas con que respaldar la agricultura de pequeña escala que producía dichos ingredientes, y que promovía formas indígenas de cocinar ingredientes locales saludables. La documentación preparada por el programa incluye un análisis sofisticado del problema causado por las importaciones de alimentos y los posibles “círculos virtuosos” que implica el fomento del

36. Lora 1996. Véanse también Blondet 2002; y Cueva y Millán 2000: 47.

37. Todos los que observaron los primeros CP quedaron impresionados con su capacidad para establecer redes y su organización. Violeta Sara-Lafosse, entrevista, Lima, 3 de diciembre de 2007.

38. Véase Lora 1996: 39. La autora alude a una evaluación de los CP, que documenta la efectividad de este paso a una estructura más centralizada (Lora 1996: 40).

consumo de productos andinos.³⁹ Sin embargo, la prensa interpretó esta solicitud como el pedido de un subsidio, un término emotivo dada la lucha impulsada multilateralmente contra prácticas como estas. En realidad, la demanda clave era la de un trato igual que el de los comedores apristas, los cuales venían recibiendo raciones gratuitas. El desarrollo de la agenda llevó a la primera marcha por alimentos en 1988: la “Protesta con Propuesta”.

Diversos actores desempeñaron papeles claves en el respaldo prestado a los comedores populares para articular y ampliar su agenda, y adquirir nuevas capacidades. Estos actores provenían de los partidos políticos, muchos de ellos de IU, y de las ONG. Fue particularmente significativo el éxito de IU en las elecciones municipales de Lima a comienzos de los años ochenta. La Municipalidad realizaría esfuerzos de desarrollo local en diversas barriadas de la capital, sobre todo en Villa El Salvador y El Agustino. Varios municipios le dieron una oficina en su local al comité distrital de los CP (v. g. San Martín de Porras; Lora 1996: 136).⁴⁰ Igualmente significativo, y recurriendo al mismo electorado de clase media progresista comprometida, fue que varias ONG fueron generosas con su tiempo y esfuerzos por ayudar a los CP a redactar la “propuesta”, al promover el establecimiento de redes y la educación.⁴¹

Hubo, sin embargo, que enfrentar serios obstáculos en el contexto político desempoderador en el cual la acción colectiva estaba teniendo lugar. A la magnífica “Protesta con Propuesta” se la hizo retroceder aplicando la violencia policial a mujeres y niños, para impedir que llegaran a Palacio de Gobierno. No hubo ninguna otra respuesta: la marcha habría de repetirse año tras año en forma de una protesta simbólica, y pronto pasó a ser conocida como la “protesta con propuesta sin respuesta”.⁴² De modo que un aspecto de la falta de poder de los grupos es simplemente la ausencia de canales: las mujeres no tenían ningún lugar efectivo a donde llevar su propuesta constructiva.

Otro ejemplo que muestra cómo los comedores populares lucharon en este contexto caótico proviene de la evocadora descripción que Schönwälder hiciera de la evolución de la política municipal en El Agustino, un barrio de Lima, en la década de 1980 (y 1990): la historia deja en claro cuán proclive a la división y a las sospechas era la política local (Schönwälder 2002). Lora tiene una bonita

39. Véase Lora 1996: 50 y apéndice 2.

40. Véase también Schönwälder 2002: 160 y ss.

41. Alternativa, FOVIDA y SEA son las que se mencionan con más frecuencia.

42. La historia de este movimiento fue narrada muy bien en Lora 1996: capítulo 6.

descripción de cómo la forma en que la gente común veía a los políticos locales y estos a organizaciones tales como los CP (interesados únicamente en sus propios y restringidos reclamos sectoriales) creó una barrera “sutil pero consistente” entre ellos (1996: 140). Las mujeres indígenas migrantes enfrentaban los mismos serios obstáculos que sus contrapartes en el campo: se hallaban inmersas en una red de mediación de los partidos políticos que era vertical y divisoria.

Otro punto de vulnerabilidad era la pobreza y la desesperada necesidad de ayuda alimentaria. Los CP autogestionarios existieron lado a lado con los que se hallaban bajo la influencia de los partidos políticos —Acción Popular y el APRA— desde comienzos de los años ochenta. La asistencia alimentaria constituyó un problema en el segundo gobierno de Belaunde y cada vez más en el de García. Los primeros comedores autónomos no recibían comida del Estado. Habría sido necesario contar con una extraordinaria clarividencia para advertir, a comienzos de los años ochenta, que luchar por las provisiones brindadas por la PL 480 en las mismas condiciones que los CP apristas era un camino peligroso. En efecto, la cultura de los derechos estuvo muy presente entre 1986 y 1987: la lucha por una ley que diera a todos los CP igual derecho a recibir la ayuda alimentaria parecía entonces una batalla importante.⁴³ Un analista y participante clave en el proceso anota que jamás se discutieron los problemas y peligros que presentaban las importaciones de la PL 480.⁴⁴ En 1988, al intensificarse la crisis, García decidió centralizar toda la distribución de la asistencia alimentaria, con lo cual se intensificaron las pugnas “por la manguera”. De modo que la naturaleza de la actividad, la supervivencia, no impidió pasar a una agenda más cuestionadora, pero sí la dejó terriblemente expuesta a las fuerzas políticas y a la presión de la competencia y la corrupción. Esto resultaría trágicamente evidente en la década de 1990.

Pero la peor forma de vulnerabilidad se daba respecto de Sendero. Algunos de los peores acontecimientos tuvieron lugar a comienzos de la siguiente década, pero ellos formaron parte intrínseca de la vulnerabilidad que venimos analizando aquí. Sendero, simplemente, no podía tolerar este ejemplo de éxito constructivo, y logró usar estas condiciones de vulnerabilidad y desconfianza para sembrar más discordia. Para esta agrupación, las dirigentes eran exactamente el tipo de persona en el cual debían poner la mira: ejemplos de autoayuda constructiva, que hacían de interfase entre el Estado y los pobres. Sendero utilizó las acusaciones

43. Entrevista con Carmen Lora, 27 de noviembre de 2007.

44. Cecilia Blondet, entrevista, Lima, 3 de diciembre de 2007. Blondet tuvo un papel prominente en el respaldo que las ONG prestaron al movimiento de los CP, y, como Ministra de la Mujer, trabajó con el gobierno de Toledo durante seis meses.

de corrupción para justificar los terribles asesinatos que llevó a cabo en Lima entre 1989 y 1991. De unos cien dirigentes de comunidad ejecutados por Sendero en el periodo 1989-1992, 24 fueron mujeres.⁴⁵ La dirigencia del movimiento fue debilitada salvajemente. El asesinato de María Elena Moyano, una lideresa del movimiento de los CP y teniente alcalde de Villa El Salvador, pasó a simbolizar esta opresión.

El colapso de la política y de los partidos en el decenio de 1980

Los problemas económicos y los horrores de la hiperinflación concentraron la atención del pueblo en las actividades de supervivencia a expensas de los objetivos políticos más estratégicos. Pero para la segunda mitad de los años ochenta, el efecto más fuerte sobre la movilización popular provino del impacto de la violencia política, que ahora estaba propagándose a nuevas zonas. La guerra originó que a la población indígena le resultara cada vez más difícil organizar sus comunidades por cualquier otra razón que no fuera la autodefensa.⁴⁶

El impacto fue mayor en las regiones centrales de la sierra y la Amazonía, y en Lima que en el resto del país. En el transcurso de la guerra no fueron solo las autoridades locales y dirigentes sociales quienes debieron enfrentar la intimidación y la represión, sino también los alcaldes, prefectos, gobernadores, tenientes de gobernador, jueces de paz locales y dirigentes de las zonas afectadas por el conflicto armado. Según la CVR (2003), aproximadamente 2267 personas que ocupaban cargos fueron asesinadas durante el conflicto, el 70 por ciento de ellas en apenas tres departamentos: Ayacucho, Huánuco y Junín. De estas, 1680 fueron víctimas de Sendero. La eliminación de un número tan grande de autoridades locales —la mayoría de ellas miembros de los partidos políticos que respaldaron al nuevo régimen democrático iniciado en 1980— constituyó un severo revés para la capacidad de intermediación política en las zonas afectadas por el conflicto armado.

45. Burt reporta una entrevista realizada en 1994 en San Juan de Lurigancho, en la cual una integrante del movimiento sostiene que el asesinato de una dirigente de un comedor local por parte de Sendero estaba justificado, puesto que ella estaba involucrada en la corrupción (1997: 303).

46. La feroz competencia librada por Sendero y las Fuerzas Armadas por el control de los espacios comunales obligó a la población a abandonar sus aldeas y pueblos. El grado de desplazamiento producido en aquellos años es uno de los elementos fundamentales para la comprensión de la destrucción de la organización comunal. No obstante ello, quienes se quedaron sintieron rápidamente la necesidad de defender sus comunidades. Durante el gobierno de Fujimori, se formaron y organizaron “rondas campesinas”, que contaron con el respaldo de los militares.

Además de la débil infraestructura organizativa que los campesinos indígenas heredaron de años anteriores, para finales de la década de 1980 comenzaron a tener que enfrentar también el acoso de sus dirigentes, un estado de emergencia en el país y restricciones a la libre asociación. Estos distintos aspectos se unieron para generar una situación en la cual las nuevas instituciones democráticas no lograban canalizar las fuerzas desde abajo a la esfera electoral, a diferencia de lo que sucediera exitosamente en Bolivia y en cierta medida en Ecuador (Van Cott 2005). Paradójicamente, el retorno a la democracia resultó ser un terreno más hostil para las movilizaciones indígenas que los años anteriores. Hemos explicado ya que durante la primera mitad de la década de 1980, las organizaciones campesinas indígenas fueron absorbidas por el poder de mediación vertical y divisivo de la izquierda. Para la segunda mitad de ese decenio, los partidos políticos tuvieron más dificultades para suministrar infraestructura alguna y trabajar por medio de las organizaciones sociales o sobre la base de las simpatías ideológicas. El radicalismo de Sendero tomó por sorpresa a los izquierdistas y finalmente obligó a todos los partidos de esta corriente a iniciar una discusión ideológica en torno a los medios y fines de la “revolución política”, con acusaciones mutuas de deslealtad a la causa “real” (Tanaka 1998). La creciente desconfianza eventualmente minó las bases de su nueva y frágil unidad, y para 1990 el proyecto de una izquierda unida en el país, que representara las demandas de los sectores populares —el campesinado indígena inclusive—, había llegado a su fin. La guerra también había afectado la capacidad de prestar apoyo de las ONG y otras organizaciones, como la Iglesia. Sin embargo, estas organizaciones —la Iglesia sobre todo— ya habían construido antes unas densas redes horizontales, las cuales, si bien resultaron dañadas, lograron sobrevivir durante la guerra. Estas organizaciones proporcionaron los únicos medios con que los campesinos indígenas pudieron hacer conocer su posición, en un contexto de creciente violencia y abusos de los derechos humanos.

Pero no era únicamente la violencia lo que estaba debilitando el sistema de partidos (Tanaka 1998). En términos políticos, hemos sostenido que el vigoroso auge de la izquierda fomentó la creación de redes y de alianzas, pero que la cultura de los partidos izquierdistas era autoritaria e ideológica; de modo que donde su influencia fue más grande, había poco espacio para la organización y la movilización indígenas endógenas en torno a las cuestiones que eran centrales para sus intereses. El clientelismo continuó siendo la cultura dominante, y tanto más a medida que la represión cerraba el espacio asociativo. El espacio en donde construir una voz y una identidad política indígenas estaba siendo comprimido constantemente.

Por último, y perversamente, el APRA, el partido más grande, se vio afectado de modo adverso por el retorno a la democracia, lo cual indicó que la dependencia

tradicional de las bases sindicales sería menos importante: la clave era la obtención de votos individuales. Esto incrementó la capacidad ya de por sí fuerte del clientelismo, a medida de que la compra de las lealtades individuales ganaba importancia: estamos pues ante una consecuencia paradójica y perniciosa de la apertura del sistema político.

En esta sección, hemos mostrado que las desigualdades políticas de grupo —el acceso y la capacidad para emplear dicho acceso— se vieron afectadas duramente por la violencia y la represión. Hemos indicado que la violencia llevó al cierre hasta de las señales más pequeñas de una emergente actividad política y de creación de redes entre los grupos indígenas gracias al desplazamiento de la población, así como a la introducción del temor y la desconfianza a medida de que los dirigentes eran asesinados. La dimensión insidiosa era la sensación de desconfianza y recelo, la cual queda mejor ejemplificada con la historia de los CP.

Conclusión

En este capítulo, hemos explorado cómo las señales de esperanza y las posibilidades de cambio que se apreciaron en la década de 1960 se vieron frustradas a lo largo de los dos decenios siguientes. Hubo efectivamente una creciente protesta política, especialmente por cuestiones relacionadas con la tierra, y esto llevó a una de las reformas agrarias más radicales de la época, aplicada por el gobierno militar de Velasco. Pero en la primera sección mostramos que la falta de capacidad estatal heredada llevó a resultados perversos, incrementando el conflicto en muchos lugares. A pesar de ser cierto que muchos terratenientes ya habían abandonado o vendido sus haciendas en las regiones más importantes, el Estado fue incapaz de presentarse y extender derechos al pueblo. La reforma más bien permitió a los campesinos más acomodados replicar tradiciones profundamente arraigadas de explotación y clientelismo, surgiendo entonces nuevos resentimientos, así como una percepción cada vez mayor de falta de autoridad, lo que le permitió a Sendero Luminoso efectuar un ingreso fructífero.

Como mostramos en la segunda sección, otra señal de esperanza fue el surgimiento de organizaciones clasistas entre los campesinos indígenas. El crecimiento del activismo político de izquierda en el campo, así como el creciente descontento con la manera en que el gobierno de Velasco llevaba a cabo la reforma agraria, desató una nueva fase de movilización indígena campesina, la cual tuvo como resultado la construcción de formas de organización más centralizadas y sofisticadas. Estos nuevos partidos de izquierda tenían un gran atractivo para

los activistas jóvenes con base en los centros urbanos, que para este momento tuvieron su primera experiencia radicalizadora con las desigualdades que la población indígena enfrentaba en el corazón de la sierra peruana. Hemos rastreado la siguiente perversidad: el gran respaldo prestado al establecimiento de redes y la mediación de intereses tuvo lugar en medio de una ideología y una práctica profundamente verticales. Esta cultura política vertical ayudó a la movilización en torno al reclamo de la tierra, pero dejó, en cambio, a muchos campesinos alienados y frustrados, en particular por la falta de sensibilidad de los partidos a las preocupaciones prácticas de los campesinos que estaban en problemas. Esto se sintió con mayor fuerza puesto que el contexto era de apertura a las instituciones y los discursos democráticos, pero la cultura de quienes practicaban la “nueva política” no cambió. Hemos indicado la importancia que esto tuvo contrastando el sur, donde la izquierda estuvo más activa, con el norte, donde el poder de los hacendados y las instituciones tradicionales ya se hallaba bastante mermado, y donde la izquierda no tuvo un papel importante. La organización campesina floreció en Cajamarca y en otros departamentos del norte en una forma más autónoma y saludable a escala local.

La importancia que esto tuvo se hizo evidente al aparecer Sendero (sección 3). El movimiento pudo alimentarse con el descontento de la sierra central, pero avanzó poco o nada en el norte. Hemos visto ya que la vulnerabilidad a la movilización provenía también del alto grado de desigualdad horizontal: las técnicas senderistas explotaban la necesidad, la frustración, la sensación de injusticia y el grado de inseguridad personal, así como la necesidad de “autoridad” y “orden”. Se formó así un aterrador círculo vicioso, las propias técnicas de reclutamiento de Sendero se fueron haciendo cada vez más coercitivas, en tanto que la respuesta oficial de la Policía y el Ejército era violenta dados los prejuicios y la discriminación heredados. De algún modo era más fácil dar muerte a alguien a quien se veía como inferior. La violencia aplicada por ambos bandos sirvió para agravar las desigualdades grupales.

Pero el círculo vicioso no se detuvo aquí. Como vimos en la cuarta parte, la violencia afectó la inversión e hizo que resultara más difícil aplicar un manejo económico coherente y prestar atención a los problemas de largo plazo. La recesión afectó de modo particularmente fuerte a las poblaciones marginales, y los migrantes provenientes de las zonas afectadas por la violencia tuvieron más problemas que todos los demás para conseguir empleo, pues siempre resultaban sospechosos de ser “terroristas”. La dureza de la recesión llevó nuevamente al pueblo a las actividades de supervivencia, en tanto que las organizaciones campesinas indígenas emergentes se encontraron con que su capacidad nunca muy grande de

establecer redes se veía ahora aún más restringida. Mostramos tanto el potencial como la tragedia de estos años con los CP: un caso de autoayuda constructiva, de parte de mujeres indígenas y cholos, en un formato excepcionalmente alentador, no obstante lo cual se vio dañado en última instancia por la desconfianza, por la misma necesidad de supervivencia y por la violencia terrorista (el siguiente capítulo sigue sus avatares con Fujimori). En la quinta sección, mostramos cómo la recesión y la represión cerraron el espacio político.

Vemos así que la evolución política y las respuestas —directas e indirectas— a la ruptura de la vieja hegemonía tuvieron como resultado —por diversos caminos— la clausura del espacio político, lo que obstaculizó de modo efectivo el potencial que el retorno a la democracia tenía para dar nueva voz a los pueblos indígenas. En lugar de ello, la respuesta de política temprana de la reforma agraria alimentó el conflicto rural, lo que Sendero logró capitalizar. La explosión de la violencia política produjo la represión con efectos acumulativos; y si bien la mayoría de los peruanos sufrió una pérdida de espacio y voz políticos —lo que se viviría con mayor fuerza en el siguiente decenio—, los pueblos indígenas resultaban particularmente vulnerables, etiquetados como estaban de “terroristas”.

Podemos captar gran parte de la profundidad de la incrustación de la desigualdad de grupo con estas interacciones entre la desigualdad y la violencia política. Vimos primero que la violencia política surgió a partir de las desigualdades de grupo —aunque no de modo exclusivo, puesto que hubo otras fuerzas— y reaccionó a ellas. En segundo lugar, apreciamos que la violencia política empeoró las desigualdades horizontales —principalmente mediante la represión que inducía—, en particular las de corte político y socioeconómico. Y vimos, en tercer lugar, cómo las desigualdades horizontales se vieron, asimismo, perpetuadas y agravadas con el fracaso en la construcción de políticas democráticas más saludables, en particular por la incapacidad de la izquierda emergente en facilitar la participación; con el fracaso en la resolución de la crisis económica; y con su agravamiento por medio de la hiperinflación.

LOS AÑOS DE FUJIMORI:

LA RECREACIÓN DE LA EXCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

El anterior capítulo dejó al Perú en un estado de crisis total, tanto en la economía como en la estructura política, al finalizar los años ochenta, lo que tuvo consecuencias institucionales negativas: una abrumadora anomia y fragmentación política, y una sensación de ingobernabilidad a medida de que la inflación y el terrorismo alcanzaban altos niveles. Este capítulo explora la salida de la crisis. Analizaremos las consecuencias institucionales tanto en la economía como en la estructura política, así como los resultados que aquella tuvo para las estructuras de exclusión, sobre todo para la gente indígena y chola. Si bien las capacidades del Estado se incrementaron en cierto sentido, las políticas tuvieron nuevos elementos de exclusión y características de arriba-abajo, y los incentivos para organizarse y participar se vieron mellados.

Los acontecimientos ocurridos en 1990 son bien conocidos. A medida de que se acercaban las elecciones, fue tal vez inevitable, dada la debilidad e incluso la pérdida de credibilidad de la política partidaria, que un *outsider* total, que no tenía un partido, captara la imaginación del público. Alberto Fujimori pasó de ser un total desconocido a estar en la cima de las encuestas en apenas tres semanas, y ganó en la segunda vuelta, irónicamente contando con un gran respaldo precisamente debido a que carecía de un partido y a su etnicidad nipona, lo que le convirtió en un *outsider* y por ende en uno de los “marginales” a ojos de la población indígena y chola. Por un tiempo, parecía que él estaba pensando en políticas económicas alternativas y más inclusivas, pero resultó que había tenido dos equipos trabajando sin que estos estuvieran al tanto de ello: uno, con sede en Miami, seguía líneas ortodoxas neoliberales; y el otro, ubicado en Lima, examinaba alternativas inclusivas. Su primer viaje al extranjero para hablar con los donantes le convenció de que debía optar por el equipo de Miami.

Vinieron entonces unas severas políticas de ajuste. Una de muchas ironías del destino es que la privatización atrajo al país flujos de capital mientras los precios de los minerales se recuperaban, lo que resultó oportuno para estimular el crecimiento y prevenir las reacciones negativas que típicamente caracterizan a dichas políticas. Entretanto, la captura de Guzmán y de una gran parte de la dirigencia senderista por parte de las fuerzas de inteligencia en 1992 tuvo un efecto dramático sobre la violencia, que llegó a su fin prácticamente de un día para el otro. El inmenso atractivo político de haber restaurado el orden en el frente económico tanto como en el político le prestó a Fujimori el respaldo necesario para proseguir con sus medidas represivas. El Congreso fue cerrado, y se celebraron “elecciones” en un clima y en una forma tal que constituían una burla. Mientras tanto, la economía retomó el crecimiento de “viejo tipo” impulsado por los productos primarios, pero en su peor encarnación desde el punto de vista de la equidad: un auge minero.

En la primera sección, esbozaremos la historia de las políticas neoliberales y el auge minero, así como las consecuencias para las desigualdades de grupo cuando políticas neoliberales cada vez más extremas se combinan con medidas sociales que van de arriba a abajo. En la segunda sección, mostraremos cómo la fragmentación y la pérdida de credibilidad de la política partidaria, y en particular la de la izquierda, alcanzaron su culminación en estos años. Dicho colapso brindó un espacio para el uso de la política étnica, pero los legados institucionales acumulados para ese momento hicieron que la dinámica política de la etnicidad resultara perversa en extremo, y que no pudiera brindar a los pueblos indígenas unos canales adecuados de representación política. En la tercera sección exploraremos, gracias a unos estudios a escala comunal, de qué manera la clausura del sistema político y la naturaleza de las instituciones y del manejo de políticas profundizaron la incrustación de la desigualdad gracias a su efecto sobre las acciones colectivas entre las poblaciones indígenas y cholas, y con ello sobre las perspectivas de una exitosa promoción del cambio en el ámbito de organizaciones de base. La cuarta sección presentará nuestras conclusiones.

Políticas neoliberales, políticas sociales de arriba-abajo y el retorno a la minería

Durante los dos primeros años del régimen de Fujimori, se aprobaron diversas leyes como sustento del nuevo modelo de “libre” mercado.¹ Se liberalizaron los

1. Para una descripción detallada, consúltense Jiménez, Aguilar y Kapsoli 1999, y Rojas 1996.

mercados laborales y de tierras.² Se aceleraron las privatizaciones con el objeto de generar ingresos fiscales, indicar un compromiso con el modelo de mercado y atraer el capital extranjero. Se comenzaron a crear cuerpos reguladores. La liberalización del comercio y la abolición de todo incentivo a las exportaciones no tradicionales eran señales claras de que el modelo inicialmente tendría como base las exportaciones tradicionales, esperándose, asimismo, que las presiones competitivas “puras” generaran nuevas oportunidades con el paso del tiempo. Entre las leyes importantes que implementaron el nuevo compromiso con el sector primario tenemos los decretos ley 662, que incentivó la inversión extranjera; 674, que promovió la privatización; y 818 (de 1996) que brindó el marco para inversiones a gran escala en recursos naturales.³

Un tema recurrente de este libro ha sido la necesidad de que el país cuente con un desarrollo institucional. Es importante señalar que Fujimori sí implementó algunos desarrollos institucionales significativos, pero sus reformas en respaldo del modelo económico se concentraron en la necesidad de financiamiento y control político, en desmedro del lado micro. Las reformas comprendieron un masivo corpus legal creado en los primeros años. Las reformas de organizaciones específicas se concentraron en la recaudación, con un profundo e inicialmente muy bien logrado cambio en el sistema de administración tributaria (SUNAT), así como en la agencia de aduanas (SUNAD).⁴ Sin embargo, las reformas no fueron complementadas con las que se necesitaban en el sistema de justicia o el mismo sistema tributario: es importante administrar mejor la recaudación de impuestos, pero el impacto de esta mejora será limitado si las contribuciones no están bien diseñadas o no se encuentran en el nivel requerido, y si la evasión no es castigada en forma apropiada y efectiva. Pero al menos la recaudación tributaria, como

2. Por ejemplo, las nuevas leyes laborales de 1992 le daban al gobierno mano libre para diluir las huelgas: las autoridades insistían en que estas fueran aprobadas con el voto secreto y notarial de los miembros del sindicato, y hacían que los sindicatos activos en los servicios públicos esenciales aseguraran el funcionamiento de los mismos durante toda huelga (*Andean Report*, 30 de julio de 1992). En 1991 se aprobaron leyes que relajaron las reglas en torno a la estabilidad laboral, permitiendo que los empleadores ofrecieran contratos temporales, horas mínimas de empleo y despidieran a sus trabajadores con mayor facilidad (*Perú Económico*, enero, vol. XIV, N.º 1, 1991).

3. Según la COPRI, para comienzos de 2000 lo recaudado con la privatización sumaba \$9,75 mil millones, en tanto que para 1999 se habían comprometido inversiones adicionales por un valor de \$7 mil millones (*Andean Report*, 2 de marzo de 1999).

4. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; SUNAD: Superintendencia Nacional de Aduanas.

porcentaje del PBI, subió de un nivel desastrosamente bajo en la primera mitad de 1990 (4,9 por ciento del PBI) a 13,4 por ciento en 1995.⁵

Como veremos en la segunda sección, con el tiempo la estrategia política pasó a ser cada vez más una de control, con pocos intentos de crear una base política, salvo en la medida de que ello fuera posible mediante el patronazgo. Para mediados del periodo presidencial, las medidas de gasto social quedaron subsumidas en una política de patronazgo por medio del Ministerio de la Presidencia, sobre todo en los programas de gasto de FONCODES y el PRONAA.⁶ Las políticas de control se fundieron con la corrupción, tal como posteriormente lo revelarían los “vladivideos”.⁷ El uso del patronazgo y la corrupción como herramientas políticas hizo imposible que se llevara a cabo la reforma del Poder Judicial. La creación del INDECOPI,⁸ la agencia gubernamental para la protección de la propiedad intelectual y la competencia, parece haber sido más una respuesta a la presión extranjera y al sentido común que un elemento integral en la construcción de instituciones (aunque sí obtuvo buenos resultados). La otra sorpresa institucional —la Defensoría del Pueblo— tuvo un origen algo similar. El nombramiento de Jorge Santistevan para dirigirla la hizo sorprendentemente vigorosa. Santistevan, un abogado que había estado trabajando fuera del Perú por algunos años, creó valientemente una institución con eficacia e integridad, que hizo lo que pudo para contener la ola de corrupción y abuso de los derechos. Sin embargo, en los últimos años del régimen incluso la SUNAT, el éxito institucional clave, fue subvertida en cierta medida con miras al control político, lo que con el tiempo hizo necesario contar con cada vez más medios de manipulación de la información.⁹

Elementos tales como el apoyo del lado de la oferta a la reestructuración ocasionada por los cortes arancelarios simplemente no formaron parte de un modelo

-
5. El incremento se debió en parte a la reducción de la inflación, lo que describimos más adelante. La inflación reduce el valor real de la recaudación tributaria porque las obligaciones tributarias usualmente se definen en términos nominales, así como por el incentivo que da para retrasar los pagos. Véase Durand y Thorp 1999.
 6. FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo del Perú; PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Para una relación útil, consúltese Tanaka y Trivelli 2002, y Thorp y Paredes 2010.
 7. Unas notables películas secretas, aparentemente filmadas por Montesinos, de numerosas conversaciones privadas en las cuales claramente se ofrecieron y aceptaron sobornos.
 8. El Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual.
 9. Francisco Durand, entrevista, Lima, 2 de junio de 2001. INDECOPI venía sufriendo una crítica parecida por razones similares justo cuando el régimen de Fujimori colapsó (Armando Cáceres, entrevista, Lima, mayo de 2001).

al que se consideraba debía estar ultracomprometido con el mercado, para así asegurar flujos continuos de capital. Todo instrumento de intervención y/o respaldo potencial fue desmontado en los primeros años. El sector de las PYME (pequeñas y medianas empresas) es de suma importancia en el Perú.¹⁰ Fuera del gobierno, el otro tipo de respaldo del lado de la oferta, en especial para este sector, puede provenir de la asesoría técnica, gerencial y de otro tipo suministrada por agentes de la sociedad civil, tales como las ONG. Estas últimas en modo alguno eran la categoría favorita de actor social del régimen.¹¹

Donde sí se avanzó fue en la infraestructura rural. Las carreteras, escuelas, clínicas, alcantarillado, electrificación y planes de irrigación de pequeña escala crecieron todos (Escobal y Ponce 2002). Pero la disponibilidad del crédito seguía siendo un problema, en especial en el sector rural. La abolición del Banco Agrario, sean cuales fueren sus defectos, no hizo nada por mejorar la disponibilidad del crédito para los pequeños productores rurales. Este crédito depende de los bancos, las grandes empresas, unas cuantas ONG y las cajas de ahorros rurales y municipales. Aunque las cajas municipales en particular lograron efectuar una contribución significativa,¹² el sistema era (y sigue siendo) del todo inadecuado.¹³

Una diferencia importante con bonanzas previas fue la superposición del auge minero con unas políticas neoliberales cada vez más fuertes. En el pasado, los desincentivos para otros sectores fueron fundamentalmente un resultado natural de una bonanza exportadora, lo que hizo que empresarios y recursos pasaran al sector en auge debido a los incentivos del mercado: el resultado acostumbrado de la “enfermedad holandesa”. En la década de 1990, la apertura y el incremento

10. Según PEMTEC (Pequeña Empresa, Tecnología y Sociedad), en 1995 el 59 por ciento de la fuerza laboral era empleada por pequeñas y medianas empresas (de 5 a 19 empleados) y este sector producía el 31 por ciento del PBI (*Perú Económico*, septiembre, vol. XIII, N.º 9, 1990).

11. Las ONG estuvieron bajo presión de Sendero Luminoso hasta 1992. El gobierno, a su vez, sospechaba ahora de ellas y las sometió a nuevos procesos de registro y monitoreo.

12. El desarrollo del sistema financiero municipal para las microempresas es una de las más impresionantes historias de éxito de la década de 1990. Establecidas con el sólido respaldo técnico de unas agencias de asistencia alemanas y detenidamente monitoreadas por ellas en su periodo inicial, las cajas han desarrollado una excelente capacidad para llegar a los microempresarios y apoyarlos, con unas tasas impresionantemente bajas de incumplimiento. Algunas han estado sujetas a interferencia política, pero en general su historial es bueno.

13. Figueroa (2001) respalda esta conclusión con los informes del trabajo de campo presentados en el capítulo 8. Se entrevistó a las agencias crediticias en las tres regiones del Perú. Estas entrevistas confirmaron que las cajas rurales no han sido tan exitosas como las municipales. Las primeras fueron creadas con el incentivo específico de que los dueños podrían prestarse dinero a sí mismos, lo que generó abusos significativos (entrevista con directores de la Caja Municipal de Arequipa.)

consiguiente en la presión de la competencia institucional conformaron una estrategia buscada deliberadamente para reparar el daño que políticas proteccionistas anteriores habían causado. En el primer auge del siglo XX, la reducción en la protección fue una consecuencia pura del impacto de la tasa de cambio sobre la rentabilidad de los sectores de exportación primarios. En el segundo auge, el gobierno de Odría descuidó la industria: al retirar los controles a las importaciones, que habían sido una fuente importante de descontento, ayudó a desincentivar la industria; sin embargo, abrir el sector industrial a la competencia no fue un objetivo de política principal (Thorp y Bertram 1978: capítulo 13). En la década de 1990, en cambio, la apertura fue el instrumento principal con el cual modernizar y sacudir la economía, y en realidad para llevar la estrategia más allá de la exportación de productos primarios. El arancel máximo fue reducido en dos etapas en el bienio 1990-1991: de 84 a 25 por ciento; para marzo de 1991, el arancel promedio era de 17 por ciento. Rojas menciona una tasa de protección efectiva de 123 por ciento en julio de 1990 y de 41 por ciento en diciembre de ese año.¹⁴ La consecuencia fue que una característica central del modelo sería una mayor competencia. Como veremos, la desindustrialización a lo largo de este periodo fue mucho más pronunciada dada la falta de medidas del lado de la oferta para apoyar una respuesta a las presiones competitivas.

Un ejemplo ilustrativo de los problemas que había para conseguir resultados con un trasfondo institucional débil, que tenía consecuencias para las desigualdades de grupo, es el de la liberalización del mercado de la leche y la reducción de aranceles a la importación de la leche en polvo. Con García hubo un único precio al productor, independientemente de su ubicación o calidad. En la práctica, esto proporcionaba un subsidio a los pequeños productores lejanos. Esta restricción llegó a su fin en 1990. Ello inicialmente favoreció a los productores indígenas de la sierra relativamente pequeños, puesto que la nueva escala de precios era por contenido de grasa, el cual era alto en estos productores. Sin embargo, los pequeños productores lejanos como los de la sierra de Arequipa se encontraron en serios problemas al introducirse sistemas más sofisticados, que pagaban por una calidad que tenía como base el conteo bacteriano, la cercanía y la cantidad. El modelo tuvo el efecto deseado de forzar un cambio en la mentalidad, pero sin contar con el respaldo apropiado en términos de una información de mercado confiable, una explicación de la importancia que tienen los estándares y así sucesivamente. Los pequeños nichos de mercados alternativos para productos tales como el orégano

14. Rojas 1996: 252, citando cifras del Banco Central; Jiménez, Aguilar y Kapsoli 1999: 30.

y la paprika son volatiles y fragiles, y presentan problemas de accion colectiva.¹⁵ No hubo ninguna asociacion de productores capaz de resolver tales obstaculos.

Otra diferencia con auges anteriores fue el incremento que se dio en el gasto social, algo tipico de toda Latinoamerica en ese entonces. Sin embargo, hemos descrito como fue que estos programas sociales fueron usados para obtener patronazgo. El FONCODES y el PRONAA, los dos programas claves, han sido evaluados extensamente: si bien en modo alguno no carecen de efectos sobre el bienestar, la calidad del gasto dejo mucho que desear, y su uso para cooptar significo que si bien las desigualdades horizontales socioeconomicas mejoraron en el corto plazo, no empoderaron en cambio a los grupos indigenas (Tanaka y Trivelli 2002, Vasquez 2000).

Una diferencia mas con auges anteriores fue el potencial que ofreca la nueva popularidad de las politicas de privatizacion, en particular porque la propiedad estatal se haba expandido significativamente, sobre todo con Velasco. Esto brindo oportunidades para atraer capital extranjero mas alla del sector exportador, lo que ayudo a solidificar la lealtad a esta opcion de politica.¹⁶

El logro significativo inmediato del ajuste de 1990 fue la estabilizacion de los precios. La inflacion cayo 7.650 por ciento en 1990 (hiperinflacion) a 74 por ciento en 1992 y 24 por ciento en 1994. De ahı en adelante continuo cayendo, acercandose a la estabilidad de los precios hacia finales de la decada. El segundo gran logro, significativo por su impacto sobre la confianza y la inversion, ademas de su efecto politico, fue la captura de Guzman en 1992 y el arresto de una parte importante de la dirigencia de Sendero Luminoso.

El mecanismo inicial de recuperacion fue el retorno a una estabilidad relativa que dio comienzo a un modesto crecimiento del consumo y la inversion en 1991-1993. Las importaciones subieron rapidamente con las medidas de liberalizacion de 1990-1991, consiguiendose un equilibrio inicial en las cuentas externas con el

15. Un ejemplo de un problema de accion colectiva es el siguiente: la produccion de oregano es un ejemplo. Para tener un producto de calidad, este debe secarse al sol; ademas, solo se envan las hojas grandes. Un pequeno productor describio que el tambien colocaba las hojas pequenas, pues la gente no lo advertıa y pagaba de todos modos. El no tena ninguna idea del dao de largo plazo que esto hace a los mercados (entrevista tomada de Alipio Montes Urday, Arequipa, junio de 2001).

16. Notese que la mayor participacion de capital extranjero que ingreso al Peru entre 1990 y 1998 se concentro en el sector de telecomunicaciones (27 por ciento de las inversiones extranjeras, o \$2.060 millones). El sector financiero recibo un considerable 10,5 por ciento del total: \$791,6 millones (Comision Nacional de Inversiones y Tecnologıas Extranjeras, citada en *Peru: Inversiones y Programas*, disponible en <<http://www.cideiber.com/infopaises/Peru/Peru-09-01.html>>, citado en Thorp y Zevallos 2002).

ingreso de flujos de capital de corto plazo, así como con el refinanciamiento de la deuda.

Entre 1994 y 1997, la economía ingresó otra vez en una fase de crecimiento impulsado por las exportaciones, en respuesta a los boyantes precios de los minerales y a las iniciativas de privatización con grandes proyectos de inversión; por encima de todo, destacó el inicio del auge del oro. Lo que predominó y brindó solvencia, permitiendo que las reservas crecieran vigorosamente, fueron los flujos de ingreso de capital extranjero de largo plazo.

Sin embargo, a medida de que los precios de los minerales y una renovada ola de inversión extranjera “resolvía” el lado económico de la crisis estructural, el “nuevo-viejo” camino de confiar en las exportaciones primarias y la inversión extranjera hizo que perduraran “nuevos-viejos” elementos de gran importancia para las desigualdades grupales y los conflictos potenciales. En el decenio de 1990, más de una tercera parte de las tierras comunales indígenas era sede de denuncios mineros, en tanto que más de la mitad de las seis mil comunidades vivía en zonas afectadas por la minería.¹⁷ Todas las nuevas exploraciones mineras que venían dándose involucraban la “adquisición” de tierras comunales: este no era un fenómeno nuevo, pero sí lo era su extensión. Para finales de la década de 1990, había unos cuarenta conflictos reales o inminentes en torno a las tierras y con aspectos violentos, todos los cuales concernían a poblaciones indígenas. Casi no existían mecanismos institucionales y normas formales o informales con que resolver estas cuestiones.¹⁸ La Defensoría del Pueblo,¹⁹ la innovación institucional más interesante y posiblemente la más importante del decenio de 1990, era renuente a intervenir: comenzaría a tener un papel relevante solo a mediados de la siguiente

17. Datos proporcionados por Cooperación, Lima.

18. Para una relación de las reformas institucionales efectuadas en este periodo y sus límites, véase Crabtree y Thomas, 1999. Para un análisis iluminador de por qué razón algunas reformas son tan difíciles de efectuar, consúltese Kaufman y Nelson 2004. En primer lugar, si bien se introdujeron algunas reformas institucionales necesarias, como una ley marco para el capital extranjero, la creación de la Defensoría del Pueblo y la reforma de la administración tributaria y aduanera, otras reformas cruciales, en cambio, faltaron. Para nuestro fin, unas ausencias importantes fueron las reformas del Poder Judicial y del mismo sistema tributario, esencial para que los pobres se beneficiaran con una mejor administración fiscal, así como las muchas medidas necesarias en el lado micro para que una vigorosa política de apertura a la economía internacional fuera cualquier cosa menos desastrosa.

19. La Defensoría del Pueblo fue inesperadamente efectiva bajo la dirección del abogado Jorge Santistevan. Probablemente contra lo que el régimen esperaba, él valientemente creó una organización eficaz y con integridad. Su oficina trabajó creativamente en cuestiones del acceso a los servicios y espacios públicos para las personas indígenas, pero no pudo contener la ola de corrupción y abuso de derechos. Véase Pegram 2006.

década, sobre todo en la disputa en torno al proyecto cuprífero de Río Blanco, en Piura. Y también sería solo en 2002 que el Ministerio de Energía y Minas crearía un departamento de asuntos sociales, el que perdería importancia en el Ministerio a medida de que ganaba relevancia el conseguir inversiones extranjeras.

Las cuestiones medioambientales asociadas con estas inversiones eran un tema clave, de gran incidencia en la desigualdad étnica, puesto que la amenaza principal era para las comunidades indígenas y las poblaciones urbanas y rurales que les rodeaban: una amenaza a la provisión de agua, al suministro de alimentos que dependía de ella para riego, al agua limpia y en ocasiones a su forma de vida.²⁰ En el decenio de 1990 se aprobó una legislación importante, por ejemplo, en torno a las normas que regían la responsabilidad de una de las compañías en asuntos medioambientales, pero su implementación continuó siendo el problema. Este es un ejemplo típico de cómo la incrustación de las desigualdades a lo largo del tiempo puede hacer que un problema sea casi imperceptible: dada la historia de la centralización en Lima, parecía “natural” celebrar allí audiencias públicas en torno a, digamos, la propuesta del plan medioambiental de una compañía. Esto, empero, ignoraba los costos reales y la falta de participación que la población indígena sufría debido a los costos de transporte, costos de oportunidad y a la falta de información.²¹

Otros aspectos de la política de recursos naturales, de extremo interés para la población indígena-chola de las provincias (los poblados tanto como las áreas rurales), fueron la distribución de la recaudación fiscal a los gobiernos locales y el incentivo y apoyo a los efectos de eslabonamiento local. En el frente tributario, si bien a comienzos de la década de 1990 el gobierno estaba otorgando toda suerte de incentivos al capital extranjero, sin buscar a su vez negociar beneficios para el ámbito local de la economía nacional, gradualmente unas sumas más significativas empezaron a ser transferidas con el “canon”.²² Pero el gasto de este dinero era con demasiada frecuencia el problema. En muchos casos, se acumulaban los saldos no invertidos. El fracaso del gasto se debió a varios factores, todos ellos importantes para el reforzamiento de la desigualdad horizontal.

20. Un ejemplo de ello es el proyecto para explotar el Cerro Quilish, en Yanacocha. Para la población local, esta es una montaña sagrada, de modo que la amenaza trascendió el suministro de agua.

21. Las campañas llevadas a cabo por las ONG gradualmente comenzaron a eliminar esta invisibilidad. El Proyecto Tambogrande fue un buen ejemplo de un caso en el cual las audiencias públicas no fueron anunciadas en forma adecuada, ni tampoco se facilitó la presencia de los más afectados.

22. El “canon” es el impuesto a la renta proveniente de recursos naturales, que es redistribuido por el gobierno central en el ámbito subnacional, siguiendo una fórmula acordada.

En primer lugar, el lado de la demanda de los efectos de eslabonamiento de la minería a gran escala era cada vez más limitado. Para los años noventa, la tecnología en este sector había crecido en escala y complejidad en comparación con el auge anterior, empleándose nuevos métodos de minería de tajo abierto y de extracción en el lugar (Kuramoto 1999: 27). Lo único que operaba en la dirección contraria era el creciente predominio de una administración “justo a tiempo”,²³ lo que generó un nuevo interés por los proveedores locales de insumos para así facilitar el tener bajos inventarios. El sector, asimismo, continuó sobrellevando el peso del sesgo hacia los proveedores internacionales, inherente a todo el sistema de estudios de factibilidad y financieros. La mayoría de los grandes proyectos requiere de un significativo financiamiento externo, el cual, cuando está ligado a fuentes oficiales, a menudo conlleva el requisito de comprar a los proveedores del país que proporciona el financiamiento. Los estudios de factibilidad de los inversionistas extranjeros excluían efectivamente a las firmas locales con los requisitos fijados, así como por las relaciones preexistentes con los proveedores.²⁴ A finales de la década de 1990, la cuenta de importaciones del sector minero sumaba el 12 por ciento del PBI; si tan solo una pequeña parte de esto pudiese haber sido suministrada localmente, ello habría tenido significativos efectos multiplicadores y de eslabonamiento.

Con respecto a la oferta de los eslabonamientos, el sector clave para la respuesta local es la ingeniería ligera. Desafortunadamente, en el Perú ella ya había entrado en crisis debido al estancamiento de la minería en el decenio de 1980.²⁵ La liberalización de las importaciones en la década siguiente solo incrementó aún más la presión sobre este sector.

Pero la historia no trata exclusivamente de la oferta local. El gobierno local también importa, y se requiere de esfuerzos e iniciativas del mismo en los ámbitos

23 ‘Justo a tiempo’ (en inglés ‘*Just in time*’) es el nuevo sistema internacional de organización de la producción que depende de proveedores locales para la provisión de insumos, para economizar en inventarios

24. FIMA S.A. es una excepción interesante al fracaso general, pero, significativamente, tiene sede en Lima. Esta empresa se ha convertido en una exitosa proveedora de insumos al sector minero gracias a sus alianzas estratégicas y a su diversificación (Kuramoto 1999). Sin embargo, sus gerentes dan fe del gran impacto que el financiamiento con condiciones tiene en sus compras, en lo que a las fuentes permitidas se refiere (“financiamiento atado”). Ellos calculan que la gran minería peruana solo compra localmente el 10 por ciento de lo que podría adquirir de no ser por los acuerdos de financiamiento. Entrevista con Eduardo Carrero y Wilfredo Cáceres (FIMA S.A.), Lima, 26 de junio de 2001.

25. Aunque algunas empresas se rescataron a sí mismas pasándose al sector de la harina de pescado. Entrevista con Eduardo Carrero y Wilfredo Cáceres (FIMA S.A.), Lima, 26 de junio de 2001. FIMA tomó la delantera en la innovación, para así estar en condiciones de abastecer al sector de la harina de pescado.

nacional y regional para brindar una infraestructura de apoyo —financiera, física y técnica—, y probablemente también una “visión” para la región. En lugar de ello, los gobiernos locales sufrieron debido a una severa falta de capacidad. Además, enfrentaban una burocracia restrictiva impuesta desde el centro: el sistema del SNIP para el monitoreo de la inversión pública.²⁶ En lugar de trabas burocráticas, lo que se necesitaba era la cooperación de los gobiernos nacional y regionales en infraestructura y en el suministro de oportunidades de mercado. En la tercera sección, examinaremos un ejemplo conmovedor de las dificultades que enfrenta el gasto local de desarrollo, en el contexto de la mina de Tintaya. Otro ejemplo es el caso de la mina aurífera de Yanacocha, en Cajamarca, la más grande de Latinoamérica. Aunque la compañía reconoció el valor político de las compras locales, lo que tomó un tiempo considerable, sus esfuerzos por animar a un grupo local para que organizara una compañía que retirara tierra (CONGECASA) terminó en un desastre. Las capacidades locales organizativas y empresariales, y su nivel de experiencia, no eran adecuados para aprovechar la situación, lo que tuvo como resultado que hasta los alimentos debían ser traídos de fuera. Por razones económicas, la mina necesitaba comprar al por mayor. Para producir una respuesta adecuada en la oferta, habría sido necesario contar con una política de desarrollo sumamente sistemática, coherente y de apoyo de parte del gobierno.²⁷

Un aspecto adicional que estorbaba tales desarrollos locales fue la forma en que las políticas neoliberales adoptadas a partir de 1990 interactuaron con la continua centralización de la economía y el gobierno en Lima. Este centralismo se incrementó con Fujimori, y fue revertido tan solo brevemente y de modo limitado después de 2000.²⁸ La combinación de políticas comerciales y centralización en la capital redujo significativamente las posibilidades de que se dieran efectos de encadenamiento productivo a partir de la minería, o en realidad cualquier otro estímulo al desarrollo local que beneficiara a las poblaciones provinciales cholas e indígenas urbanas.²⁹

26. El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, introducido y manejado por el Ministerio de Economía para administrar la inversión pública.

27. Que esto no es algo imposible lo vemos a partir de un estudio de caso chileno. En Rancagua, un grupo de pequeñas empresas apoyadas por SERCOTEC, la agencia nacional de apoyo técnico, formó una asociación, AEMET, “para criticar (cortésmente) a CODELCO”. Tuvieron éxito y su esfuerzo transformó la forma en que trabajan. Ahora están encontrando otros clientes (Angell, Lowden y Thorp 2001). Para CONGECASA, véase Thorp y Zevallos 2002.

28. Véanse los capítulos anteriores. Fuentes fundamentales con respecto a esta cuestión son Gonzáles de Olarte 1982, 1992 y 2000; Iguíñiz 1984; y Cotler 1994.

29. El tipo de proceso que tenemos en mente es la forma en que con la liberalización, las empresas han tendido a pasar su abastecimiento a Lima o al extranjero, de modo que las firmas locales han tenido

De este modo, si bien en principio parecía que un modelo de base regional y dirigido por exportaciones primarias —en combinación con la liberalización del comercio—, que atacó una estructura industrial previa algo centralizada, beneficiaría a la población cholo-indígena de las provincias —en tanto que su contraparte de Lima sufriría relativamente—, en realidad esto no fue lo que sucedió. Las fuerzas centrípetas significaron beneficios para Lima en el comercio e incluso en el procesamiento en relación con las provincias, en tanto que los problemas con los eslabonamientos limitaron severamente los efectos multiplicadores de los proyectos de exportación de la sierra (es posible que la agricultura de exportación de la costa haya estado más abierta a tales procesos). Pero tal vez de mayor relevancia para nosotros, es que una vez más las preocupaciones de los distintos segmentos de las poblaciones indígena y chola se vieron divididas. Por muchas razones, los viejos días en que los mineros en huelga recibían el respaldo de sus compañeros sindicalistas de Lima hacía tiempo que habían pasado, y en su reemplazo surgió una gran fragmentación.

La clausura de la política

Alberto Fujimori —hijo de inmigrantes japoneses y un *outsider* con respecto al sistema de partidos— puso fin a la estructura partidaria tradicional. En 1992, disolvió el Congreso con un masivo respaldo popular y pasó a ser el caso emblemático de un nuevo fenómeno político en América Latina: la “democradura”, una dictadura democrática, tal como lo definiera Levitsky (1999). Para finales de 1993, se había restaurado el Congreso, con una composición en la cual Fujimori tenía una gran mayoría; se había aprobado también una nueva Constitución; y varios grupos nuevos y competidores, que se llamaban a sí mismos “independientes” y “apolíticos”, reemplazaron a los partidos “tradicionales” con una estrategia pragmática antes que ideológica. Fujimori también buscaba ganar otras formas de apoyo electoral: él fue el primer candidato presidencial importante en el Perú que utilizó la etnicidad de forma significativa para crear una empatía con el público (Madrid 2009). (La etnicidad sería usada, posteriormente, de modo aún más amplio por Alejandro Toledo y, más recientemente, por Ollanta Humala). El nuevo Congreso y la Constitución de 1993 le dieron a Fujimori una gran libertad para

que cerrar o mudarse. Un ejemplo clásico es la planta de leche evaporada Gloria de Arequipa. Ella, durante años, toleró el “doble coste del transporte” de llevar láminas de metal desde Lima y devolver las latas llenas. La lógica económica se hizo abrumadora cuando finalmente tuvo que enfrentar tanto la competencia doméstica, por primera vez en muchos años, así como las importaciones más baratas de leche en polvo: en 1999 se cerró la planta y se abrió una nueva en Lima.

poner fin a la guerra interna a cualquier costo y para que reorganizara la economía radicalmente, como vimos ya en la sección anterior.³⁰ En 1995, fue reelegido con casi las dos terceras partes de los sufragios, en unas elecciones aceptadas tanto por la comunidad nacional como la internacional. Su segundo gobierno tuvo menos aprobación y los peligros para el sistema democrático rápidamente se hicieron evidentes: las Fuerzas Armadas actuaron por medio de acuerdos turbios con Vladimiro Montesinos, el asesor más importante de Fujimori; los periodistas independientes y los líderes de la oposición fueron sometidos a un feroz acoso, y hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Fujimori accedió a un tercer mandato, pero ya no gozaba del respaldo popular, y la limpieza de las elecciones fue puesta en duda. Unos claros cargos de corrupción, junto con las movilizaciones que se llevaron a cabo en las calles, pusieron fin a su tercer gobierno. Renunció en noviembre de 2000 vía fax desde Malasia, camino a Japón. Luego del colapso del régimen de Fujimori, la frágil pero persistente democracia peruana ha garantizado una serie de elecciones genuinamente competitivas, cada una de las cuales produjo una transferencia pacífica del poder, todo ello en el contexto de una bonanza económica impulsada por los altos precios de los minerales.³¹

Hemos mostrado que para finales de los años ochenta estaba claro el colapso del sistema de partidos, y que el proyecto de una agrupación de izquierda que canalizara las demandas de la población —los campesinos indígenas inclusive— había fracasado por completo (véase cuadro 8.1 y Tanaka 1998). Lo que siguió en 1990 con la elección de Alberto Fujimori fue un modelo de organización electoral en el cual los nuevos partidos independientes eran poco más que etiquetas o vehículos de políticos individuales, provenientes de todo el espectro ideológico, que dejaban sus partidos establecidos para unirse a uno de los supuestos proyectos “desideologizados” y “pragmáticos” (Cameron y Levitsky 2003). El resultado fue una fragmentación aún mayor de la política en todo ámbito. En el plano nacional, la relación con los medios y el desarrollo de una imagen pública pasaron a ser un elemento esencial para las elecciones presidenciales y parlamentarias (Conaghan 2002, Tanaka 1998). A escala municipal, el nuevo modelo electoral, junto con la organización política fuertemente fragmentada del país (195 municipios provinciales y 1833 distritales), hizo que en el Perú la política resultara en extremo desarticulada, en particular en aquellas zonas donde viven los pueblos indígenas.

30. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR 2003) preparó un extenso informe con respecto a la reforma política.

31. Luego de un breve periodo de transición, bajo el liderazgo de Valentín Paniagua, quien asumió el mando en noviembre de 2000, resultaron elegidos primero Alejandro Toledo en 2001 y luego Alan García en 2006.

CUADRO 8.1

===== RESULTADOS ELECTORALES EN MUNICIPIOS PROVINCIALES (1980-1993) =====
 (PORCENTAJE DE VOTOS EMITIDOS)

	1980	1983	1986	1989	1993
Izquierda Unida (IU)	23	29	31	18	4
Acción Popular (AP)	36	17			13
APRA	22	33	47	20	12
Partido Popular Cristiano (PPC)	11	14	14		5
Otros (independientes)	8	7	4	30	66
Fredemo (coalición de derecha) ^a				32	
	100	100	100	100	100

Fuente: Tuesta 2001.

Nota: ^a Acción Popular y el Partido Popular Cristiano participaron en la elección de 1989 como parte del Fredemo, una coalición de derecha.

La figura 8.1 muestra cómo el predominio de estos fragmentados partidos locales es mayor en aquellas regiones de fuerte naturaleza indígena. La figura 8.1 muestra también el incremento de las organizaciones políticas locales en las zonas periféricas de la sierra central y sur, las zonas más afectadas por la guerra interna y donde más está concentrada la población indígena. El pico de 1995 refleja el descenso en el clima de temor una vez que la guerra llegó a su fin, así como las crecientes demandas de autonomía local que surgieron como reacción al intento de Fujimori por conseguir el control del campo y de los barrios urbanos pobres luego de los estrechos resultados alcanzados en el referendo de 1993.³² Los alcaldes locales cuestionaron la forma centralizada en que el Ministerio de la Presidencia estaba implementando el ambicioso plan de gasto social. Para debilitar esta ola opositora a escala edil, en 1996 Fujimori creó una organización política municipal, Vamos Vecino, que participó en las elecciones de 1998. En dichos comicios, esta agrupación tuvo éxito gracias a un vigoroso respaldo del gobierno,

32. Los municipios experimentaron una significativa revitalización durante los dos últimos tercios de los años noventa, no obstante el interés de Fujimori por controlarlos. Se convirtieron entonces en las instituciones del Estado en las cuales más confían los ciudadanos. La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) fue claramente la oposición más importante al gobierno de Fujimori durante estos años y hasta 1998.

pero su popularidad colapsó en el año 2000 y una vez más volvieron a proliferar los partidos locales.

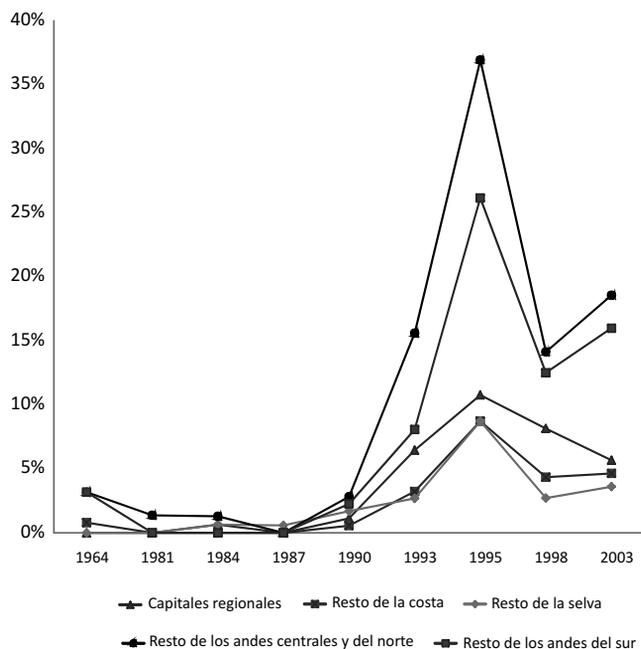
En esta cultura política pragmática y en un contexto de gran fragmentación, los candidatos presidenciales han hecho un mayor uso de la política étnica. Vimos ya cómo después de Fujimori, otros candidatos como Toledo y Humala emplearon diversos elementos étnicos en sus campañas, y al hacer esto politizaron los resentimientos étnicos en una forma que era novedosa en el Perú. Ellos usaron vestimentas, dichos y lenguas indígenas, e invocaron símbolos culturales nativos. También llamaron la atención sobre su propia etnicidad y contrastaron sus antecedentes con los de sus rivales.³³ Aún más importante es que —como vimos en el capítulo 3 de este libro— ellos reclutaron numerosos candidatos indígenas y cholos en sus campañas. Las nuevas instituciones electorales vienen mejorando estas prácticas políticas con miras a expandir la representación, pero los resultados se encuentran constreñidos por los legados institucionales que han emergido. Los políticos han utilizado los discursos étnicos para construir vínculos con los votantes, e incluso han llevado consigo un pequeño número de dirigentes indígenas a la esfera política. Sin embargo, dichos esfuerzos no han contado con el respaldo de formas organizativas más institucionalizadas de la acción colectiva, y han fracasado, por ende, a la hora de establecer lazos duraderos con la población indígena, así como de brindar respuestas a sus demandas.

Esto sucedió también a escala local. A partir de 1995 encontramos partidos políticos con nombres en lengua indígena, o que hacen referencia específica a su identidad campesina. Este era un fenómeno político nuevo en el ámbito provincial, puesto que hasta ese entonces la identidad “quechua” o “campesina” había sido mayormente un fenómeno de asuntos intracomunales, esto es, de un espacio aún más local que el distrital. Hubo tres de estos grupos en 1995, siete en 1998 y 15 en 2001. Todos ellos triunfaron en provincias de la periferia serrana. De estos 25 grupos, 20 estaban localizados en la sierra sur, tres en Cajamarca y uno en Piura (Huancabamba). En 2003, el Frente Popular Llapanchik tenía tres alcaldes en Apurímac, en tanto que MINCAP e INTI ganaron dos alcaldías en Huancavelica. Hasta 2003 ninguno de estos grupos había vuelto a ser elegido con el mismo nombre, excepción hecha del Movimiento Campesino Atusparia, que ganó la municipalidad de Sihuas tres veces consecutivas.

33. Véase el próximo libro de Raúl Madrid, *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*.

FIGURA 8.1

==== PORCENTAJE DE MUNICIPIOS PROVINCIALES A CARGO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS LOCALES



Fuente: Paredes 2008.

La fragmentación política a escala local es el resultado de 15 años de guerra interna y de una política nacional que intentó controlar esta política local en lugar de abrir canales que prestaran un acceso a la población. Las elecciones municipales de 2002 revelaron los niveles más altos jamás vistos de fragmentación política. El 83 por ciento de los grupos que competían por las alcaldías provinciales estaba conformado por organizaciones locales, 13 por ciento por organizaciones regionales y apenas cuatro por ciento estaba ligado a partidos políticos nacionales. La fragmentación era más fuerte en aquellas provincias donde vive la mayoría de los indígenas, en particular en la sierra central y sur (JNE 2007). En 2006 mejoró la situación con respecto a la fragmentación, lo que llevó a que hubiese expectativas de asociaciones a escala regional. En dicho año, el 43 por ciento de todos los grupos que competían por las alcaldías provinciales estaba asociado a un movimiento regional, el 41 por ciento permaneció como organizaciones locales y el 16

por ciento estaba asociado a un partido nacional, ya fuera por membresía o por alianza electoral.³⁴

En conclusión, el nuevo modelo electoral que surgiera después de la década de 1990 hizo que la participación indígena resultara aún más difícil. Los pueblos indígenas, y en realidad todos los peruanos, enfrentaban un sistema político al que resultaba problemático manejar fuera de sus propios espacios locales. Como explicaremos en la siguiente sección, alcanzar la política nacional y regional requiere de recursos económicos, conexiones con el *establishment* político y de los medios, así como participar en relaciones de clientelismo con aquellos que ya han alcanzado popularidad política. En este contexto, los candidatos usan las demandas de los pueblos indígenas para conseguir respaldo electoral durante las campañas nacionales, pero dichas prácticas no construyen formas de representación que tengan que rendir cuentas. La siguiente sección explica de qué manera esto produjo la desilusión y el escepticismo respecto del potencial de la democracia y el actual modelo de partidos.

La acción comunal y su contexto después de 1990

Para explorar aún más las dificultades que los pueblos indígenas y cholos tienen para alcanzar una voz efectiva en el contexto político posterior a 1990, llevamos a cabo una serie de estudios a escala comunal sobre la acción colectiva o su ausencia.³⁵ Los resultados fueron presentados cabalmente en otra publicación;³⁶ aquí solamente resumiremos nuestras principales observaciones. Mostraremos, en primer lugar, los trágicos resultados, en términos de desconfianza y temor, debidos al legado de la violencia política y la forma en que fue reprimida, así como al divisionismo que documentamos en el sistema político. Detallaremos, en consecuencia, que en el ámbito local el sistema era impenetrable a todo intento de cambio, en formas que hicieron que se perdiera un promisorio activismo en el plano comunal. En segundo lugar, mostraremos cómo fue que la carencia de capacidades gerenciales y administrativas en el ámbito local, así como la falta de vínculos efectivos entre este y el nacional en las estructuras donde se diseñan

34. Mil cuatrocientas organizaciones que compitieron en las elecciones regionales de 2002 no tomaron parte en las de 2006. Quinientos veintidós nuevas agrupaciones intervinieron en 2006 y apenas 38 organizaciones continuaron participando después de 2002.

35. Dichos estudios fueron llevados a cabo en colaboración con Ismael Muñoz, de la PUCP.

36. Para una relación más completa, remitimos al lector al texto en el cual nos basamos (Muñoz, Paredes y Thorp 2007).

las políticas, produjo frustración y descontento incluso allí donde los resultados iniciales parecían ser prometedores.

Para interpretar nuestros resultados, debemos presentar brevemente el contexto de nuestros distintos casos, así como la naturaleza de la acción colectiva que estábamos observando. Hemos indicado ya cómo la dinámica regional de la movilización política varió en los importantes decenios transcurridos entre 1960 y 1980. Hemos visto el impacto de las reformas de Velasco, las cuales crearon aperturas económicas y sociales para comunidades antes dominadas por los hacendados, y que les liberaron de sus condiciones laborales semifeudales. Sin embargo, la distribución de la tierra y las políticas concomitantes que regulaban las organizaciones comunales³⁷ afectaron de distinto modo a los pueblos en diferentes regiones. Las federaciones campesinas de la sierra sur y las rondas del norte representan reacciones específicas y diferentes a las políticas contradictorias del Estado corporativo y su prolongación en los años ochenta. La evolución de la parte más pobre de la sierra central —y de Ayacucho en particular— es, sin embargo, una historia de movilización negativa y forma parte de otro proceso: el surgimiento de Sendero.

Para explorar la importancia de esta diversidad regional en el nuevo contexto del decenio de 1990, tomamos ejemplos procedentes de tres regiones de la sierra, así como diversas experiencias de poblaciones indígenas/cholas de Lima. Los tres casos de la sierra eran todos pueblos de mediano tamaño, junto con el campo circundante, y representan diferentes trayectorias de movilización política, así como distintas experiencias con la violencia política.

Nuestro primer caso era una elección obvia, al menos con respecto a su tipo: hay muchos como él. Descábamos contar con uno que ejemplificara la sierra sur, con una actividad significativa en términos de la federación campesina y de la presencia de partidos políticos. Queríamos también tener una zona de comunidades indígenas que se hubiesen visto muy afectadas por la presencia de la minería, para reflejar así el hecho de que un ochenta por ciento de las comunidades de la sierra cuenta con yacimientos de minerales. Tomamos a Espinar, que se encuentra en la sierra alta del departamento del Cuzco, a una altura de cuatro mil metros y con una población de 57 mil habitantes, además de una gran mina —Tintaya— que fuera nacionalizada por el gobierno de Velasco y que posteriormente fue nuevamente vendida al sector privado. Espinar tiene la población más homogénea de nuestros casos: es étnicamente indígena y quechuahablante, y es una de las bases más importantes de la Confederación Nacional Campesina, además de muy pobre.

37. Como los códigos introducidos a comienzos de la década de 1970, que regulaban a cooperativas y comunidades, y que estipulaban, por ejemplo, quién podía beneficiarse con los planes crediticios.

Nuestro segundo caso en los Andes fue elegido para que ejemplificara la sierra norte, con su prosperidad algo mayor y un menor papel de los actores políticos nacionales: Bambamarca, en Cajamarca, situada a una altura de 2.700 metros y con una población de 76 mil personas, también es una zona minera y de producción ganadera y de productos lácteos. Aquí la población es relativamente homogénea, no es quechuahablante, y es de origen indígena pero de tez más clara que en el sur. La división de las grandes haciendas se dio “naturalmente” en esta zona, por así decirlo, puesto que los latifundios fueron vendidos o parcelados. Dado que la tierra estaba en todo caso siendo dividida, las comunidades no tuvieron necesidad de movilizarse de inmediato, y tuvieron aliados que eran menos verticales, coercitivos o dominantes que los de las comunidades del sur. Ellas pudieron construir esferas autónomas en las cuales los actores eran capaces de crear nuevos grupos que no tuvieran un discurso de clase como base, y lograron organizarse a sí mismas en defensa de sus derechos como parte de las rondas, unos grupos formados culturalmente.³⁸ Estas son organizaciones comunales que tuvieron su origen en las patrullas formadas contra los abigeos. Las rondas evolucionaron gradualmente hasta convertirse en una fuente de identidad y de compromiso: si se les pregunta cómo es que se identifican a sí mismos, los jornaleros y agricultores con los cuales hablamos decían unánimemente: “somos ronderos”.

Para nuestro tercer caso, era esencial tomar uno en Ayacucho, la “cuna” de la peor violencia política que el Perú haya conocido, y la zona de menor movilización política a escala regional. Hemos subrayado cuán conflictivo resultó el impacto de la reforma agraria. Hemos visto el desarrollo sumamente limitado de las organizaciones campesinas y el grado de diferenciación interna. Tomamos a Huanta, una ciudad de 65 mil habitantes, un lugar que resultó arrastrado profundamente a la violencia con diez mil muertos entre 1980 y 1992. Esta ciudad se halla a casi tres mil metros de altura. Las sierras que la rodean son altas y las tierras cultivadas se extienden desde los 2.500 a los 3.500 metros. En el capítulo 2

38. Estas organizaciones comunales tuvieron su origen como patrullas contra los abigeos. Como vimos en el capítulo anterior, las rondas son ahora una institución comunal. La primera del nuevo tipo fue fundada en 1976 en Cuyumalca, en la provincia de Chota. Durante los siguientes tres años, cientos de otras comunidades de esta provincia y de las vecinas de Hualgayoc y Cutervo formaron sus propias rondas, las que se propagaron hacia las zonas de la sierra de los vecinos departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Piura. Uno de los comuneros de mayor edad de la ronda de Bambamarca nos dijo que antes de 1978, cuando ellas no existían, los campesinos no podían enfrentarse a los bandoleros debido a su aislamiento, y estos, por ejemplo, amenazaban con poner la mira en sus casas si denunciaban que la de uno de sus vecinos estaba siendo robada. Por dicha razón, las autoridades de diversas comunidades y jóvenes catequistas —como él en ese entonces— pidieron que la comunidad formara una ronda, como la que se había creado en Chota (entrevista a Neptalí Vásquez, abril de 2005).

ya reportamos los materiales de nuestras entrevistas referidas a la diferenciación interna y los prejuicios, en particular la imagen fuertemente negativa que la gente del pueblo tiene de los “chutos”: según muchos huantinos, gente ignorante no civilizada y apestosa, que vive en las partes altas.

Además, para captar con mayor plenitud la dinámica urbana de la acción colectiva de los migrantes indígenas, o la falta de la misma, incluimos a San Juan de Lurigancho, un distrito de inmigrantes en Lima, y específicamente a dos asentamientos dentro de él conformados fundamentalmente por personas desplazadas por la violencia desde Huanta, en Ayacucho: Huanta Uno, de población mayormente de clase media y mestiza, y Huanta Dos, de indígenas/cholas pobres. Este cuarto caso, el de los huantinos en Lima, refleja la estructura diferenciada de Huanta, pero en la capital la diferenciación toma la forma de dos asentamientos separados físicamente, los que, como veremos, tienen cierto grado de diferenciación interna.

También estudiamos un fenómeno de acción colectiva que se encuentra en todas las áreas urbanas del Perú, aun cuando nuestras entrevistas tuvieron a Lima como base: los CP, un notable ejemplo de acción y de autoayuda colectiva, que tuvo su inicio a finales de la década de 1970 entre las mujeres indígenas/cholas de dos de las barriadas de Lima, y que se propagó hasta convertirse en un fenómeno nacional (ya presentamos este caso en el capítulo 7).³⁹ Lo elegimos debido al vigor de la promesa y el impacto inicial del movimiento, y porque nuestros primeros estudios de la acción colectiva en la sierra arrojaron poca o ninguna evidencia de la presencia de mujeres indígenas con papeles de liderazgo. Nos parecía importante reflexionar sobre al menos un caso en el cual las mujeres indígenas y cholas tomaron la iniciativa. En cuanto a la cuestión que venimos considerando —el grado de diferenciación—, el movimiento fue inicialmente algo homogéneo, pero con el tiempo se hizo más diferenciado, como luego explicaremos.

La sierra sur: Espinar

El ejemplo de acción colectiva en el cual nos concentramos tiene su sede en la gran mina de cobre y oro de Tintaya. Los catalizadores típicos de la acción colectiva son la percepción de la injusticia y de las necesidades materiales, y usualmente hay algún agente externo al que le cabe algún papel. Así, en Espinar, la acción colectiva focalizada en la mina se vio facilitada por una organización de base y por las ONG.

39. Esto se basa en Thorp 2009.

La mina fue nacionalizada durante el gobierno de Velasco. La compañía estatal siguió una política de expropiación de las tierras de las comunidades campesinas, con una compensación inadecuada y una provisión alternativa pobre.⁴⁰

El 21 de mayo de 1990 es el día que más se recuerda en la historia reciente de la provincia (y el que se conmemora cada año). Nuestros entrevistados nos contaron que entre veinte y treinta mil personas se movilizaron en contra de la mina bajo la dirección de la FUCAE —la rama local de la federación campesina, cuyo crecimiento en los años ochenta describimos con anterioridad— y del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, una organización cívica creada para defender a la provincia en cuestiones tales como el impaco de la minería. Se arrojaron bombas incendiarias, se originó un incendio dentro de la mina, se amenazó al personal de la misma y se tomó de rehenes a tres personas. No se produjo ninguna muerte. Se tuvo éxito en captar la atención del gobierno central, y un resultado positivo fue la electrificación de la ciudad de Espinar. No hubo, sin embargo, ningún avance en los problemas de la comunidad rural, tales como el acceso a la tierra y la contaminación del agua.

La mina fue privatizada en la década de 1990. BHP Billiton fue su propietaria hasta 2006, cuando fue comprada por Xstrata, su actual dueño. En este periodo, las comunidades rurales afectadas comenzaron a organizarse de modo más efectivo, y en 1999 crearon CORECAMI-Cuzco (Coordinadora Regional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Le prestó su respaldo CONACAMI, la organización nacional de las comunidades que se han visto afectadas por la minería; asimismo, comenzaron también a involucrarse las ONG, tanto locales como internacionales. En el ámbito internacional, la Community Aid Abroad (CAA), una integrante australiana de Oxfam International, comenzó a trabajar con la compañía matriz BHP Billiton en la responsabilidad social corporativa.⁴¹ Una iniciativa particularmente interesante de la CAA fue llevar a un grupo de altos ejecutivos a un trabajo de campo en la India, para que vieran de primera mano las consecuencias medioambientales y sociales de un gran proyecto minero, a través de los ojos de la población afectada. El director ejecutivo de Tintaya en ese

40. Por ejemplo, la comunidad de Tintaya Marquiri perdió todas sus tierras. El recuerdo colectivo es que “nos sacaron de nuestras casas y las destruyeron”. Entrevista con Aquilino Ccapa y Eduardo Cutimerma, dirigentes de Tintaya Marquiri, 4 de agosto de 2005.

41. La CAA creó una “defensora minera”, un miembro del personal (en este caso una mujer) cuyo trabajo a dedicación exclusiva era reunirse con todas las partes para intentar la reconciliación en estos conflictos. La defensora dedicó muchos meses al caso de Tintaya.

entonces tomó parte en esta visita y la describió como un punto de inflexión, tanto para él personalmente como para la compañía.⁴²

Veremos posteriormente que el desenlace final no fue tan bueno, pero el resultado intermedio fue sorprendente: contra toda expectativa, durante los tres años de 2000 a 2002, las conversaciones avanzaron significativamente. Se estableció una “mesa de diálogo” y la compañía llegó a dos acuerdos: en el primero, se comprometió a pagar US \$1,5 millones anualmente a la Municipalidad para proyectos de desarrollo local; y en el segundo, alcanzado con las comunidades rurales, propuso el reparto de 2.368 hectáreas de tierra, la consulta de futuras exploraciones con las comunidades y un fondo de trescientos mil dólares anuales, por tres años en primera instancia, para los proyectos comunitarios.

La sierra norte: Bambamarca

En Bambamarca, el impulso para la acción colectiva provino de la pobreza, la vulnerabilidad y una forma distinta de fracaso estatal, que en este caso giraba en torno a la incapacidad de la Policía y del sistema de justicia. El estado generalizado de desorden y abigeato en la década de 1980 llevó a la formación de un fenómeno excepcional: las rondas. Describimos ya de qué manera estos grupos comunales gradualmente evolucionaron hasta convertirse en una fuente de identidad y compromiso. Esta identidad gira en torno al orgullo de ser eficaz y al reconocimiento de su importante papel en la comunidad. Varios de los ronderos que entrevistamos dijeron estar orgullosos de que la ronda hubiese resuelto efectivamente los problemas del abigeato, las disputas en torno a linderos e incluso los conflictos domésticos, en forma rápida y casi sin costo adicional:

[...] vamos directamente al lugar en cuestión con los actores involucrados en las disputas por los linderos, y en una tarde arreglamos el problema y dictamos una sentencia que es respetada [...] los procesos legales solo desperdician tiempo y dinero, y tal vez incluso la vida porque a veces los litigantes se atacan mutuamente.⁴³

De este modo, en muchos lugares las rondas se han convertido en instituciones que administran justicia dentro de la comunidad en diversas cuestiones y que funcionan como una fuente de educación, autoestima y respeto, así como de formación en responsabilidad y toma de conciencia social dentro de las

42. Entrevista con Lucio Ríos, gerente general de la mina de Tintaya en ese entonces (4 de septiembre de 2005).

43. Entrevista con Jesús Llamoctanta de El Tambo, en Bambamarca (4 de marzo de 2005).

comunidades. También son importantes como un factor que explica la ausencia de conflictos violentos y que han asumido cada vez más problemas, tales como la forma en que enfrentar a una empresa cuya mina viene causando contaminación ambiental. Este tipo de problema ha hecho que las rondas trabajen de la mano con la asamblea de la comunidad y el comité de riego, así como con otras comunidades y rondas que enfrentan la misma situación. El caso más notable fue el prolongado conflicto provocado por la contaminación y el daño causado a los bancos de peces en el río Llaucano por la compañía minera Yanacocha. Esto derivó en una inmensa manifestación organizada en 2001 por las rondas de Bambamarca. Este parece ser un caso genuino de evolución a una mayor comprensión de la agenda necesaria, del interés práctico al estratégico,⁴⁴ pero en última instancia generó pocos avances reales en el tema en cuestión.

Lo que hizo que los ronderos fueran un movimiento particularmente significativo es que lograron pasar de ser un ente casi invisible a otro con un accionar político prominente, y ello en medio del violento conflicto interno del país.⁴⁵ Como se sostuvo en el capítulo anterior, los ronderos han creado un significativo actor político regional, cuyo reconocimiento ha movido al Estado a adoptar una noción de ciudadanía con raíces culturales más amplias y heterogéneas, además de dar cabida al mismo tiempo a esferas autónomas de derechos políticos y gobierno tradicional.⁴⁶

Huanta

Nuestro tercer estudio de caso en la sierra ejemplifica la *ausencia* de la acción colectiva: Huanta. La urgencia de dicha acción, debido a la necesidad, fue más severa en Ayacucho que en nuestros dos casos anteriores. Sin embargo, no había ninguna tradición de acción colectiva de naturaleza constructiva en una sociedad en donde

44. Encontramos sumamente útil la distinción entre interés práctico y estratégico trazada por Molyneux, 1985.

45. La inmensa violencia precipitada por Sendero Luminoso, la agrupación de inspiración maoísta que se levantara a comienzos de la década de 1980, no movilizó a vastos sectores de los indígenas, quienes rápidamente rechazaron su discurso autoritario. Sin embargo, la etnicidad tuvo un papel clave en la forma en que la violencia se desplegó, siendo el 75 por ciento de los muertos en el conflicto personas de origen indígena.

46. Los ronderos de Cajamarca no sienten ningún vínculo común con la población indígena del sur. En dicha región, los campesinos han experimentado un proceso de *mestizaje* racial y cultural más profundo. Sin embargo, como se ha señalado antes sí conservan costumbres comunales andinas (Yrigoyen 2002).

predominaban las tradiciones de dominación, jerarquía y pasividad. La reforma agraria se llevó a cabo, pero no se creó la institución conflictiva de las SAIS, probablemente porque al momento de la reforma no existía ninguna hacienda importante. El número de conflictos entre las comunidades era sumamente alto, pero ellos tendían a ser personales y de pequeña escala. No se establecieron las redes que podrían haber hecho que la gente pasara de un descontento personal a una agenda más amplia. Las personas y las familias optaron por la emigración como una solución a los problemas económicos y luego a la violencia, debilitando aún más el tejido social, puesto que los más capaces típicamente eran los primeros en partir. En consecuencia, casi ningún movimiento colectivo emergió a partir del conflicto armado que asoló el departamento y produjo diez mil víctimas, sobre todo indígenas. Como sostuvimos en el capítulo anterior, nos parece que esto se explica con el hecho de que el surgimiento de Sendero coincidió con un proceso gradual, pero bastante avanzado, de pérdida de identidad y población regionales.

La acción colectiva en Lima

Nuestros últimos estudios de caso conciernen a zonas de asentamiento indígena en Lima, ocupadas por emigrantes de la sierra. Tomamos un interesante caso doble de emigrantes de Huanta. Esto nos brindó un laboratorio inusual donde analizar aún más la forma en que la acción colectiva varía según la dotación previa de capacidades, puesto que los emigrantes formaron naturalmente dos asentamientos: Huanta Uno, que comprende a la clase media de ex “notables” del valle, que a menudo también contaban con familias y propiedades en Huanta ciudad, y que típicamente ya se habían identificado a sí mismos como mestizos; y Huanta Dos, campesinos serranos e indígenas que habían huido de una severa experiencia de violencia en busca de refugio, inicialmente con parientes en algún lugar de Lima. Luego examinaremos los CP como un ejemplo de mujeres que dirigen la acción colectiva, fundamentalmente mujeres mestizas que movilizaban a indígenas.

Pasando primero a los emigrantes de Huanta, los dos asentamientos surgieron en 1984 a partir de la iniciativa del doctor Venegas, alcalde de San Juan de Lurigancho y él mismo un huantino. La población de Huanta Uno —unas trescientas familias— estaba conformada por profesionales, con una gran representación de maestros: 86 según uno de nuestros informantes. La gente tenía propiedades en la ciudad de Huanta, las cuales lograron vender para financiar su establecimiento en Lima. Huanta Dos, conformado originalmente por unas 360 familias, comprendía a pequeños parceleros o comuneros, algunos cultivadores de coca provenientes de la ceja de selva, y personas que habían tenido una experiencia mucho

más traumática con la violencia, con parientes muertos o desaparecidos, ganado destruido y tierras abandonadas.

El impulso inicial para la acción colectiva fue paralelo en ambos grupos: la necesidad de establecerse con vivienda, servicios básicos y condiciones de vida, en una situación en donde todos enfrentaban ser discriminados como posibles terroristas por el hecho de ser ayacuchanos. Todos los informantes contaban cuán difícil era —y es aún hoy— conseguir empleo por dicha razón. En todos los casos estudiados en Lima, el papel de los actores externos tuvo menor importancia que en nuestros casos en la sierra. En San Juan de Lurigancho, la acción colectiva fue desde el inicio de naturaleza “meso”: se trató de iniciativas para conseguir servicios básicos, y posteriormente en Huanta Uno también una mejor educación y calidad de vida urbana. Aquí ningún agente externo desempeñó papel alguno: los mismos pobladores fueron agentes decididos e independientes.

Dado el deficiente historial de acciones colectivas constructivas realizadas en Huanta a lo largo del tiempo, resultó una sorpresa encontrar con cuánto vigor ambas comunidades se organizaron para en su primer año inscribir a su “junta directiva”, preparar elecciones y estatutos, e iniciar gestiones para conseguir agua, alcantarillado y electricidad. Ambos grupos tuvieron éxito. En nuestras entrevistas, quedó claro que lo que impulsó a la comunidad fue la calidad esencial de los bienes colectivos, y que ella estaba, asimismo, unida por su percepción de hallarse amenazada por un mundo hostil.

Sin embargo, eran marcadas las diferencias existentes entre Huanta Uno y Huanta Dos en su capacidad para formar una agenda y pasar más allá de las necesidades prácticas, lo que a su vez explica en parte los distintos resultados: Huanta Dos tuvo menos éxito y tuvo que luchar mucho más para conseguir sus objetivos.

Como es bien conocido, en nuestro segundo caso en Lima, los primeros comedores populares también se generaron de modo autónomo, aunque contando a menudo con el apoyo de las parroquias y cada vez más con el de las ONG. Es importante dejar en claro que la etiqueta de *comedor* encubre una gran diversidad: como los primeros comedores autónomos funcionaron, los partidos comenzaron a ver su valor en términos políticos y crearon los suyos. Estos eran cualquier cosa menos independientes. Hemos visto que en la década de 1980 hubo comedores acciopopulistas y apristas. Fujimori se subió al coche en los años noventa. Aquí nos interesa estudiar los casos genuinamente autónomos. Como ya mencionamos, Carmen Lora (1996) sostiene que para finales de los años ochenta, la parte “autónoma” de la población total de los CP comprendía el 60 por ciento de los mismos.

Estos comedores autónomos rápidamente crecieron y pasaron a tener una agenda más amplia y hasta intereses estratégicos. En primer lugar, las mujeres

que iniciaban la acción colectiva porque veían el valor que tenía combinar sus recursos y esfuerzos (turnarse para cocinar, comprar al por mayor), rápidamente encontraron que necesitaban capacitarse para manejar el dinero, efectuar las compras, establecer dietas, etc. Las clases de alfabetización y de diversas capacidades tuvieron una gran demanda. A partir de esto, surgieron las discusiones sobre cuestiones familiares, violencia doméstica y temas tales como el manejo de pequeñas empresas, todo lo cual fue elevando su conciencia ciudadana.

En segundo lugar, como las condiciones se fueron haciendo más duras con el colapso del intento de García de superar la inflación de 1986-1987, las mujeres advirtieron que debían entender el mundo a cuya merced tan evidentemente estaban. De modo que se añadieron nuevos elementos a las clases y debates.

En tercer lugar, y como se señaló en el capítulo anterior, los distintos comedores comenzaron a reconocer el poder que tiene la colectividad, de modo que se formaron federaciones: en 1991 se fundó una federación formal (la FECCPALC, Federación de Centrales de Comedores Populares Autogestionados). La historia de la “Protesta con Propuesta sin Respuesta” fue contada ya en el capítulo 6. De la calidad y la importancia del nivel de capacidad organizativa da fe una encuesta sobre la imagen de las mujeres como actores políticos efectuada en 1997, y que Blondet cita como una demostración de que

[...] la experiencia que estas mujeres obtuvieron en las organizaciones sociales, políticas y sindicales durante los últimos quince años, fue vital para que construyeran una imagen de sí mismas como eficientes, desarrollaran su autoestima y ganaran confianza en su capacidad —y la de otras mujeres— para asumir cargos de responsabilidad pública. (Citado en Molyneux y Razavi 2002: 283, nota 8)

Estas historias limeñas fortalecen las evidencias procedentes de la sierra: con la única y muy importante excepción de Ayacucho, e incluso durante el clima de deterioro de los años de Fujimori, no encontramos evidencia alguna de que los problemas de la acción colectiva, del tipo olsoniano, hayan formado parte de la explicación de la incrustación de la desigualdad. La gente sí se organizó, sí construyó a partir de experiencias previas y sí colaboró; y la sensación de una identidad, necesidad y amenaza compartidas les unió exitosamente. Y, sin embargo, en el Perú el proceso de incrementar la escala, de unir lugares desvinculados, de crear identidades más amplias y, finalmente, de penetrar en la política formal parece ser casi imposible y una causa inmediata de la desilusión.

El análisis de los casos

La historia general de nuestros casos es una de poco o ningún éxito en los resultados, a menudo ni siquiera dentro de sus propios contextos, pero es también notable que jamás lograron unir sus acciones con otras y alcanzar un impacto más amplio. Podía haber un éxito “intermedio”: aprender haciendo, adquirir habilidades y tener la capacidad de una agenda práctica de corto plazo a otra más estratégica. Sin embargo, como no fueron capaces de establecer vínculos y alianzas, fracasaron en sus intentos de cambiar el alcance de la desigualdad grupal. Analizamos las causas como el resultado de la naturaleza compleja, divisiva y perversa del sistema político tal como existe hoy en día, interactuando con el legado de la violencia. En dos casos, esta debilidad se debió a la falta de la mediación necesaria —en la organización o en ocasiones tan solo en la comprensión de las necesidades de política— entre el ámbito local y el nacional. A medida de que los partidos políticos se debilitaban o colapsaban junto con las formas tempranas de las organizaciones de base, estas formas eran reemplazadas rápidamente con un sistema estrecho, personalista y de base clientelista, siendo el resultado una falta de intermediación positiva y efectiva.

Si bien en la mayoría de los casos encontramos evidencias del trágico efecto del divisionismo de la política local y de la violencia política, que conformaron el contexto hasta 1992 y que dejaron un legado que tiñó a todos los noventa, fue obviamente en Huanta que la violencia política tuvo un mayor impacto en la acción colectiva. En esta provincia, hubo millares de muertes en este periodo. Sendero amenazaba a las autoridades, y la gente desaparecía debido a las medidas tomadas por ambos bandos. El nivel de violencia era un serio obstáculo para la acción colectiva, sobre todo en la esfera política. Además, las Fuerzas Armadas ahora controlaban la forma en que la población se organizaba a sí misma, principalmente por medio de los comités de autodefensa (CVR 2003). Estos desempeñaron un papel importante en el enfrentamiento con Sendero, en especial entre las comunidades de altura, si es que lograban sobrevivir a los asaltos iniciales del movimiento terrorista y el Ejército. Otros grupos aprendieron técnicas de supervivencia entre los dos fuegos, obedeciendo solo de palabra a ambos.

La situación cambió desde mediados de los noventa, con el fin del conflicto armado. Hoy en día las comunidades campesinas tienen un marcado resentimiento respecto de Sendero por su papel en el estallido de la violencia.⁴⁷ En el centro

47. Al momento de escribir estas líneas, había ciertas evidencias de una renovada presencia y reclutamiento por parte de Sendero, aunque con un vínculo nuevo y ominoso con el narcotráfico.

urbano de Huanta, el accionar político ha vuelto a iniciarse, pero sin ningún nuevo esfuerzo evidente en resolver el problema de la falta de capacidad para la vida pública. De este modo, la administración estatal es débil y la población continúa estando alienada de la vida política. Entretanto, las comunidades de las zonas altas permanecen aisladas y con pocas oportunidades de participar en las decisiones públicas que les afectan, y luchan constantemente para no estar bajo la opresión de las comunidades ubicadas a una menor altitud. Un ejemplo de ello es Huayllay, a la que visitamos en el transcurso de nuestro trabajo de campo en Ayacucho, en 2005.

Mientras se libraba el conflicto armado, las únicas organizaciones visibles fueron los comités de autodefensa. Estos son hoy menos evidentes, y muchas otras organizaciones tienen más dinamismo: por ejemplo, los “clubes de madres”, los “comités del vaso de leche” y las asociaciones de productores. Pero la acción colectiva sigue siendo débil: la gente encuentra que los otros son “egoístas”, que no están dispuestos a invertir su tiempo en organizar los asuntos comunales. El presidente de la asociación de cultivadores de frutas del valle de Huanta nos dijo lo siguiente:

Los agricultores no participan; hay apatía y falta de interés. Ellos creen que trabajando solos pueden progresar, pero eso es imposible. Hay demasiado egoísmo y envidia; mi casa ha sido robada y se llevaron mis cosas. Los agricultores no tienen ninguna asociación específica a la cual pertenecen. Lo que hay es desconfianza, probablemente debido a los problemas sociales aquí.⁴⁸

La CVR fue recibida con aprobación, pero es de resaltar que no surgió ninguna acción colectiva que presionara al Estado para que implementara las recomendaciones que beneficiarían a Huanta.

La violencia interactuó con la superpuesta diferenciación étnica y de clase de Huanta, lo que le permitió influir sobre las debilidades de la acción colectiva, sustentando así la incrustación de la desigualdad. Los conflictos a los que la diferenciación dio lugar permitieron el ingreso de Sendero, y la inmensa escalada resultante de la violencia inhibió casi por completo la acción colectiva pacífica. En esta debilidad subsiguiente, la diferenciación, continua y acentuada, fue un elemento que por derecho generaba el recelo y la desconfianza.

Ahora bien, como hemos visto, el legado de la violencia fue la agudización de la desconfianza y el divisionismo. Esto también fue sumamente evidente en Huanta Dos e hizo que la acción colectiva fuera más difícil. Ello quedó en evidencia con las descripciones dadas acerca de la discordia surgida en torno a la

48. Entrevista con Héctor Merino Gutiérrez, presidente de la Asociación de Criadores de Fruta del valle de Huanta (13 de mayo de 2005).

guardería y el comedor popular, tal como los miembros del grupo lo recordaban. Pero a medida de que narraban lo sucedido, era claro en su relato que, al igual que en nuestros otros casos, gran parte del divisionismo se debía a otros factores, además del legado de la violencia: por encima de todo tenía su origen en la forma en que las agencias estatales ingresan al escenario y como resultado de la debilidad/fragilidad de las instituciones (por ejemplo, los derechos de propiedad).

Los habitantes de Huanta Dos encontraron que el sistema era impenetrable. En nuestras discusiones, *parecía* como si sus habitantes *únicamente* hubiesen tenido marchas y protestas como estrategia.⁴⁹ Ellos encontraban sumamente difícil, frustrante y oscuro el mundo de los “trámites”, esto es, el papeleo oficial. El secretario general narra que siempre algo faltaba en los papeles y se desperdiciaba otro día más. El mundo en el cual tienen que operar es ajeno e inamistoso, y ellos no tienen estrategias buenas con las cuales hacerle frente. Esta sensación de hallarse inermes se agravó con el hecho de que se sentían abandonados por su auspiciador inicial, el doctor Óscar Venegas, aunque la versión de este último es que era imposible trabajar con ellos. La población de Huanta Dos quería más terrenos y promovieron que les dieran los de sus vecinos: el asentamiento José Carlos Mariátegui. El alcalde indicó que se trataba de una argumentación sin sustento. Y cuando los habitantes de Huanta Dos realizaron una marcha de protesta, fueron fácilmente timados.⁵⁰

El contraste con Huanta Uno resulta ilustrativo: aquí encontramos muchos casos de capacidad para manejar tanto el sistema como las divisiones internas. Esto se debe en parte a que a un estándar de ingreso más alto sí lograron manejar sus relaciones con los funcionarios en formas que resultaban menos divisivas que en Huanta Dos. Ello se debió parcialmente al nivel educativo: el estándar más alto de Huanta Uno les permitió a sus habitantes manejar la incoherencia institucional. Aunque no eran acomodados, en modo alguno, según los estándares de

49. Pero en esto eran buenos. Uno de los miembros del grupo al que entrevistamos nos hizo una descripción brillante de lo sucedido en el Día Internacional de la Mujer en 1985, cuando tuvieron que obligar a la Municipalidad de Lima a prestarles atención, puesto que Venegas se rehusaba a reconocerlos. Ellos aprovecharon una gran reunión organizada en la capital para celebrar el día, se infiltraron en pequeños grupos en el municipio llevando sigilosamente provisiones para poder iniciar una huelga de hambre, y colocaron cuidadosamente a mujeres y niños en los márgenes del grupo. Para las 8 p.m., habían logrado ser reconocidos (entrevista grupal con la comunidad de Huanta Dos, 8 de noviembre de 2005).

50. El Dr. Venegas nos cuenta que una vez que se inició la marcha, los habitantes de Mariátegui, alertados por su personal, se apresuraron a destruir todo el asentamiento de Huanta Dos. Cuando la marcha llegó a su oficina y se les dijo que Huanta Dos ya no existía, regresaron, asustados, para intentar defender lo que quedaba (entrevista con Óscar Venegas, 18 de agosto de 2005).

Lima, Huanta Uno contaba con una alta concentración de profesionales. En las entrevistas, la gente revelaba toda una estrategia acerca de cómo establecer amistad con personas influyentes. Ellos trataban con los burócratas invitándoles a la comunidad, mostrándoles la hospitalidad ayacuchana, su comida y música. Así pues, sabían bien cuán importante es tener resistencia y perseverancia al buscar sus metas.

Sin embargo, aunque eran menos marcadas, las divisiones de Huanta Uno sí tuvieron sus costos. Ellas aparecieron debido a la aparentemente inevitable incursión en la política, lo cual —según Venegas— sembró la discordia y llevó al colapso de una significativa potencial asistencia externa.⁵¹

La impenetrabilidad del sistema apareció en todos los casos en donde encontramos acciones colectivas, pero con particular fuerza en Bambamarca. A pesar de haber llevado a cabo una acción colectiva sumamente exitosa a escala comunal, bajo la forma de las rondas y del reconocimiento de sus derechos tradicionales, no quedan claros, en cambio, los resultados de sus intentos de alcanzar una mayor influencia en los niveles meso y macro, tanto en la política como la economía (lo que contrasta con su éxito al micronivel en reducir los costos y riesgos, protegiendo los activos campesinos de los hurtos). El caso más notable fue el conflicto en torno a la contaminación y el daño a los bancos de peces del río Llaucano, provocado por la compañía minera Yanacocha, un problema que estalló en 2001 y que no ha producido ningún resultado real, lo que tal vez sorprende dada la fortaleza del movimiento rondero.⁵² Lo que concluimos a partir de nuestro análisis es que el meollo del problema es el papel negativo que los partidos políticos tienen en las rondas, debido al tipo de divisiones partidarias que venimos describiendo. El papel negativo ganó fuerza debido a la inexistencia de cualquier desempeño

51. Él nos contó que estaba a punto de llegar a un acuerdo con la familia real holandesa cuando un desagradable incidente se produjo durante la visita de su representante, de modo que todo el acuerdo se vino abajo (entrevista con Óscar Venegas, 18 de agosto de 2005).

52. En 2001, los ronderos de Bambamarca, Chota y Chugur organizaron una manifestación en la plaza de armas de Cajamarca para protestar por la muerte de truchas en el río Llaucano a causa del desagüe ácido de la mina de Yanacocha. Ellos bloquearon la carretera e incendiaron las oficinas de la minera. Se creó entonces una mesa de diálogo, sin que se alcanzara resultado alguno. En 2002, las rondas nuevamente tomaron la plaza de armas de Cajamarca y bloquearon la carretera a la mina por cuatro días. En este caso, protestaban porque el informe gubernamental del caso del río Llaucano insistía en que las truchas habían muerto por asfixia y no por contaminación. Se estableció entonces otra mesa de diálogo para mitigar las tensiones, pero sin que se llegara a resultado alguno. Por último, en 2004 las rondas tuvieron un papel clave en las movilizaciones desplegadas en contra de la exploración de un nuevo centro minero en Cajamarca. La protesta duró dos semanas y Yanacocha, en consecuencia, renunció a su permiso de exploración. El conflicto, sin embargo, aún está vigente.

positivo previo, en contraste con la historia de la sierra sur. Los esfuerzos que partidos políticos como el APRA y Patria Roja hicieron para hacerse del control de las rondas en esta etapa tardía, e imponer su discurso político, fueron sumamente criticados por los ronderos. En las entrevistas, la gente describía el agudo divisionismo que las campañas electorales tenían debido a la competencia entre el APRA, Patria Roja y AP. Los esfuerzos realizados por los ronderos para conseguir que su propio candidato fuera elegido alcalde de Bambamarca hicieron que el prestigio de la ronda cayera, debido a las divisiones y los resentimientos personales resultantes. Un éxito inusual fue que en una muestra de unidad, los ronderos de la provincia de Hualgayoc lograron conformar un solo “frente” que unió a distintas agrupaciones políticas y que ha perdurado desde 1990 hasta el día de hoy. Pero nuestros informantes eran todos profundamente conscientes de los peligros de las divisiones partidarias y del daño que ellas podrían causar.⁵³ Una idea frecuente era que las cosas podrían complicarse si es que se metían “a la política”, lo que invariablemente significaba unirse a algún partido en particular y ser arrastrados al mundo mezquino de la competencia partidaria.⁵⁴ Así, este inusual éxito a escala regional aún no ha logrado establecer alianzas más allá de su región.

Y, sin embargo, sin dichos vínculos las influencias e ideas continúan siendo limitadas. Nos llamó la atención la falta de conciencia que las personas mostraban con respecto a la relación existente entre sus problemas como agricultores y la cuestión nacional de la importación de leche en polvo, un tema que frecuentemente ha aparecido en nuestra relación histórica. El progreso real en la obvia ventaja comparativa de Cajamarca —la industria lechera— radicaría en modificar el impacto que un auge minero tiene sobre la agricultura en el ámbito nacional. Resulta interesante, y probablemente es muy importante, que la gente a menudo parecía ser del todo inconsciente de la necesidad de tomar medidas a una escala “superior”. Aparentemente, no siempre es fácil ver el cuadro nacional cuando uno se encuentra inmerso en lo local si no se cuenta también con unas estructuras transcomunales adecuadas, a las que pueda usarse como vehículos con los cuales difundir y procesar información e ideas desde lo micro a lo macro, y viceversa.

53. Según Zarzar (1991), a comienzos de la década de 1990 cuatro federaciones regionales sostenían representar a las rondas de Bambamarca, dos de ellas vinculadas al APRA y dos a facciones de izquierda. Aunque los ronderos sí llegaron a unificarse, el nuevo presidente electo de la federación unificada (de izquierda) fue secuestrado por un comité de ronderos insatisfechos con la unificación.

54. Según Starn (1999) y Gitlitz (1983), las rondas tienen un consenso significativo a escala comunal, pero se enfrentan entre sí en el ámbito regional. El centro de estos conflictos a menudo es una competencia partidaria (APRA, Patria Roja, Acción Popular) por los cargos regionales y para alcanzar el predominio de su discurso.

Esto refleja, una vez más, la ausencia de intermediarios o de redes, que son quienes podrían establecer tales lazos.

La impenetrabilidad, el divisionismo y la desconfianza también fueron temas claves en el caso de Espinar y del acuerdo con la compañía minera. A pesar de la victoria aparente del acuerdo alcanzado con la empresa, los beneficios reales resultaron ser frágiles y limitados. El 21 de mayo de 2005 —el mismo mes y día que en 1990— fue ocasión para realizar una manifestación masiva, en esta oportunidad con unas dos mil personas que nuevamente llevaban bombas incendiarias y lanzaban amenazas. Cuando el alcalde intentó intervenir, se le tomó de rehén.

¿Qué salió mal? En el transcurso de años de pacientes negociaciones, las comunidades han construido un nivel de confianza, de capacidad de negociación y un sentido de su propia valía que son “bienes” reales. Sin embargo, los beneficios aún no son lo suficientemente significativos como para permitirles confiar en que las frustraciones se pueden manejar, en tanto que el papel cada vez más divisivo de la compañía minera, el nuevo actor multinacional, viene interactuando con el clientelismo de los partidos políticos a pesar del buen inicio de las negociaciones. Aquí, el análisis de Espinar corre directamente en paralelo con nuestras conclusiones acerca de Bambamarca, en donde la naturaleza del sistema de la política local y la falta de confianza que las comunidades tienen en él son responsables de no haya resultados exitosos. Como vimos, el papel del sistema político inicialmente fue positivo en el rol del alcalde de Mink'a. Las organizaciones locales, como la FUCAE y el Frente, también contribuyeron. Pero con el tiempo se impusieron las características tradicionales del sistema peruano, algo que fue respaldado por el papel de la multinacional. Algunos consideran que el alcalde de Mink'a perdió la siguiente elección “porque a la gente de la ciudad no le gustó que trabajara tan diligentemente para la gente del campo”. El siguiente alcalde fue del partido aprista y no generó confianza. La imagen que surgió en varias entrevistas fue que los “dirigentes de los partidos políticos hacen promesas durante las elecciones pero después se olvidan de las comunidades”.⁵⁵ La Municipalidad sostiene que la comunidad cuenta con el dinero de la compañía y no necesita de ella, lo que viene a ser una falacia puesto que hay necesidades de coordinación, infraestructura y planificación que requieren del concurso del sector público.⁵⁶ Las comunidades sienten que no tienen voz en el fondo establecido por medio de la comunidad, en tanto que se considera ampliamente que Xstrata, la compañía actualmente dueña

55. Entrevista con Aquilino Ccapa, de Tintaya Marquiri, 4 de octubre de 2005.

56. Entrevista con la presidenta de la asamblea de Tintaya Marquiri, Marta Chirme, Espinar, 13 de agosto de 2008.

de la mina, tiene al alcalde en su bolsillo y lleva a cabo una vigorosa campaña por medio de la radio y de sobornos.⁵⁷ La FUCAE, la rama local de la ya desacreditada CCP, se vio debilitada aún más por su fracaso en resistir a la minera luego de su lucha inicialmente vigorosa.⁵⁸ Los proyectos específicos a financiar con el subsidio de la compañía requieren de contribuciones en especie de la comunidad; con el auge en el precio de los minerales, la idea de que la compañía “tiene suficientes recursos” alimentó la resistencia a la colaboración, y los reducidos niveles de interacción no fomentaron la confianza.⁵⁹ De este modo, el dinero permanece sin usar por la falta de consenso y el inadecuado cumplimiento de las condiciones impuestas para su desembolso.

Sin embargo, en el transcurso de las entrevistas se nos hizo evidente otro punto importante. Un desarrollo local como este también necesita del gobierno *nacional*, lo que evidentemente no se dio. Se considera que la violencia cuidadosamente controlada capta la atención del gobierno nacional y la dirige sobre una zona enormemente descuidada.⁶⁰ En 1990 y 2005, los ministros viajaron a Espinar y los reflectores de los medios nacionales estuvieron volcados sobre esta región. Sin embargo —y esto es de la mayor importancia—, en ningún momento llegó un respaldo serio del gobierno central para trabajar en una capacidad de absorción de fondos cada vez mayor, ni tampoco hubo ningún programa nacional para respaldar nuevas inversiones.

La historia en el caso de los CP está igualmente repleta de luces y sombras, de violencia, sospechas y desconfianza. El primer impacto del nuevo gobierno fue el fujishock: hubo, en consecuencia, una expansión masiva en el número de estos comedores, en respuesta a necesidades extremas. Para finales de 1991, se daban cifras tan altas de hasta siete mil CP tan solo en Lima. Para las ONG que trabajaban construyendo capacidades y prestando apoyo, resultaba imposible hacer algo más que apenas cubrir ligeramente estas necesidades. En consecuencia, muchos se quedaron sin respaldo institucional alguno en medio de un contexto

57. Entrevista con David Álvarez y Alberto Chani Chani, miembros del Frene, Espinar, 11 de agosto de 2008.

58. Entrevista con Óscar Mollehuanca, ex alcalde de Espinar, Espinar, 11 de agosto de 2008.

59. El ex director a cargo de las relaciones comunales solía pasar tiempo “sobre el terreno”, atendiendo los pareceres de los miembros de la comunidad. La administración de Xstrata no ha visto la importancia que tiene construir la confianza de este modo.

60. Nuestros entrevistados explicaron cuál era la forma correcta de evaluar la violencia: la suficiente como para conseguir atención a escala nacional, pero no demasiada como para arriesgarse a sufrir la represión.

aterrador. En palabras de una cuidadosa observadora de esta expansión, y que participó en ella,

[...] era imposible promover, a la escala requerida, espacios de reflexión, de formación de consciencia crítica, de valoración de relaciones de afecto y amistad en la experiencia organizativa, y forzar comportamientos de solidaridad y apoyo como sí lo fue en las primeras generaciones de integrantes de los comedores. (Lora 1996: 31)

En consecuencia, a medida de que el movimiento crecía, también lo hacía el grado de diferenciación y, con ello, la susceptibilidad a la desconfianza. Esto interactuó con la naturaleza de la política local. Las pocas mujeres cholos/indígenas educadas conformaban la dirigencia, en tanto que el grueso de las integrantes tenía muy poca educación. Si ellas veían que sus dirigentes trataban con “otro mundo”, desconfiaban rápidamente, no comprendían y esperaban lo peor. No ayudó el papel central que el reparto de alimentos tenía en la acción colectiva: esto fácilmente dejaba a las dirigentes expuestas a los cargos de malversación y hacía que fueran vulnerables a las caídas en el suministro de alimentos, con lo cual no podían abastecer a sus miembros.

Además, aquí entró en juego otro aspecto del sistema. Parte del deterioro político que se dio con Fujimori fue el uso de estrategias de cooptación, dada su falta de base política. La cooptación caracterizó su relación con los CP de modo sumamente nocivo. Él creó un Ministerio de la Mujer, pero le dio un “discurso maternalista” que tenía como base “el papel que las mujeres desempeñaban y desempeñan, y debieran desempeñar, como madres “naturales” y cuidadoras de la familia y de la comunidad” (Boesten 2003: 117). Con “ofertas”, Fujimori pidió a la gente que se presentara en las “elecciones” que siguieron a su clausura del Congreso: se trataba de promesas implícitas de asistencia a cambio de apoyo político.⁶¹

Los alimentos llegaron con mandiles y gorros de cocina naranjas, el color del movimiento del Fujimori, y con el logo del PRONAA, y había la obligación de pintar al comedor con una pintura anaranjada repartida por el Estado y poner PRONAA en su fachada. En la fachada debía también colgarse un gran cuadro de Alberto Fujimori, el héroe de la nación [...] la lealtad al gobierno era impuesta con la amenaza [...] del retiro del apoyo alimentario. (Boesten 2003: 118)

Apenas si sorprende que para mediados de los años noventa, un movimiento de autoayuda que alguna vez fuera vital, estuviera débil y explotado.

A esto se sumó otro debilitamiento: debido a la crisis, más mujeres estaban buscando trabajo, y con el creciente nivel educativo —al menos en Lima— se

61. Para una relación detallada, véase Blondet 2002: 303.

fue dando una diferenciación cada vez mayor, con lo cual creció el potencial para las divisiones. El número cada vez más grande de inmigrantes de segunda generación probablemente ayudó al cambio en los valores. A medida de que algunas mujeres estaban más ocupadas, ellas comenzaron a subcontratar a otras personas a cambio de dinero. De este modo, surgieron las “socias pasivas” y las “socias activas”. El PRONAA, la agencia gubernamental que repartía los alimentos, deliberadamente se focalizó en estas últimas y las alentó para que se hicieran elegir como dirigentes.⁶² Según Lora, las socias pasivas gradualmente se fueron alejando y las activas quedaron más sujetas al PRONAA. Toda la cultura se fue desplazando y orientándose más a la obtención de alimentos. Las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo por el comportamiento del PRONAA no obtuvieron respuesta alguna.⁶³

Aún más importante era que Sendero no podía tolerar este ejemplo de éxito y logró usar las condiciones de vulnerabilidad y desconfianza para sembrar más discordia. Como indicamos en el capítulo 7, para Sendero, las dirigentes eran exactamente el tipo de persona sobre las cuales debía ponerse la mira: ejemplos de autoayuda constructiva, que hacían de interfase entre el Estado y los pobres. Sendero implementó una política sistemática de asesinatos, como ya dijimos, lo que tuvo importantes consecuencias para el movimiento y las ONG que lo apoyaban. María Elena Moreno y otras pagaron con su vida. Otras mujeres dedicadas a los CP tuvieron que pensar en la seguridad de su familia y reducir sus actividades.

Como resultado de todos estos factores, los años de 1994 a 1996 fueron desastrosos: un actor y testigo importante del proceso cree que en aquellos años todos los CP fueron seducidos.⁶⁴ Las técnicas seguidas eran simples: “cuando el ómnibus llegaba para llevarte a una manifestación, tenías que subirte o no conseguías los víveres”.⁶⁵ Después de 1996, se inició la lucha de respuesta y el trabajo para que las integrantes de los comedores tomaran conciencia. “No pierdas tu identidad por un saco de papas o una bolsa de arroz”.⁶⁶ Pero en 1998 llegó la que sería una nueva oportunidad y a la vez una nueva amenaza: la “ley de cuotas”, según la cual

62. Entrevista con Carmen Lora, Lima, 27 de noviembre de 2007.

63. Entrevista con Josefina Huamán, Lima, 30 de noviembre de 2007.

64. Entrevista con Benedicta Serrano, Lima, 29 de noviembre de 2007. Ella terminó su mandato como presidenta de la junta directiva de la Federación de Comedores Populares en 1994. Volveremos luego a su carrera posterior.

65. Entrevista con Maruja Barrig, Lima, 27 de noviembre de 2007.

66. Entrevista con Benedicta Serrano, Lima, 29 de noviembre de 2007.

en las elecciones municipales el 25 por ciento de los candidatos en una lista debía estar conformado por mujeres (véase Blondet 2002). Un número considerable de las viejas dirigentes entraron ahora en la política, algunas de ellas con bastantes escrúpulos, puesto que era ampliamente conocido que las “elecciones” no eran sino una fachada para un régimen nada democrático.⁶⁷

Vemos así que la combinación de un clima de temor y violencia, presiones económicas y estrategias políticas de cooptación y soborno sirvió para debilitar la cultura de ayuda mutua y responsabilidad compartida, lo cual, junto con el imperativo de la supervivencia, reforzó la vulnerabilidad para la manipulación y la división. Otro elemento más que debilitó al movimiento fue el fracaso, o la naturaleza endeble, de muchos intentos de introducir una actividad productiva en los CP: las microempresas. Esto a menudo no salía bien. Si bien es posible hacer que las dos lógicas de la solidaridad y la del mercado encajen entre sí, esto no sucederá sin un cuidado considerable.⁶⁸

El hecho sorprendente es que muchos CP autónomos sobrevivieron —y existen hasta el día de hoy— incluso bajo un severo ataque tanto de Sendero como del sistema político clientelista, y expuestos como estaban además a las contradicciones de la interfase con el mercado.

Conclusiones

Este capítulo ha mostrado que la crisis de gobernabilidad y la crisis económica fueron ambas resueltas durante los primeros años del gobierno de Fujimori, cuando se restauró el “orden” y se reinició el crecimiento económico. Pero las rutas que llevaron a ambos resultados interactuaron entre sí, de diversos modos, para reforzar la exclusión y el grado de desigualdad tanto vertical como horizontal.

El feroz ajuste inicial debilitó a movimientos sociales tales como los CP. La combinación del alza en los precios de los minerales y un compromiso global con las políticas neoliberales significaron nuevos e inmensos proyectos mineros con tecnología y propiedad extranjeras, lo que requería de políticas micro afinadas y apoyo técnico y profesional, precisamente cuando estas políticas no recibían ninguna atención dentro de la nueva lógica. Una frustración cada vez mayor llevó a

67. En la entrevista, Benedicta Serrano describió elocuentemente sus dudas. Finalmente, decidió que la postura de un sabio asesor personal era correcta: “la política pasa en el interior. Entra pero no permitas que te manchen”.

68. Entrevista con Virginia Vargas, Lima, 3 de diciembre de 2007.

repetidos conflictos violentos, un estado de cosas que se extendió hasta la siguiente década, con casos como los de Yanacocha y Tintaya. Los intentos de efectuar unas reformas institucionales necesarias se concentraron en la recaudación, con iniciativas del lado medioambiental que carecían de la implementación y del afinamiento necesarios para que tuvieran un impacto. Toda mínima posibilidad remanente de una retroalimentación correctiva se perdió cuando Fujimori cerró la política al disolver el Congreso. La carencia de una base política institucional de parte del presidente incrementó su dependencia de Montesinos y su manipulación subterránea, en tanto que la red de clientelismo y corrupción se hizo más fuerte, dañando todavía más a los movimientos sociales, tal como lo mostrara el caso de los CP. El tipo de política étnica que surgiera en este periodo se vio configurado por la forma en que en esta época los legados institucionales interactuaron con un terreno hostil para la acción colectiva de los pueblos indígenas.

Quienes se hallaban en los márgenes fueron los que más sufrieron a medida de que estas interacciones se iban haciendo más letales. La población indígena y chola de Huanta Dos perdió en comparación con sus vecinos de Huanta Uno. Las protestas por el comportamiento de las compañías consiguieron poco, puesto que las inyecciones de dinero, ya fuera del canon o de las firmas que intentaban ganarse la buena voluntad de las comunidades, se toparon con una capacidad de gasto limitada e ineficaz. Las acusaciones de contaminación medioambiental u otros daños se mantuvieron sin resolver ante la limitada capacidad negociadora y la debilidad de las comunidades. Hemos sostenido que el sufrimiento catalizó unas protestas vigorosas y a menudo constructivas, pero los intentos de penetrar el sistema y cambiarlo se toparon con las barreras del mesonivel clientelista y a menudo corrupto de la política. Los intermediarios y las redes que podrían haber construido vínculos no existían. Los grupos se dividieron y se hicieron temerosos y recelosos, mientras intentaban abrirse camino en la política local. Y el desenlace de la violencia estaba en todas partes. El legado de la violencia y la represión perduró incluso con la victoria sobre Sendero, para debilitar aún más los movimientos sociales en todos los ámbitos de la política por medio de la desconfianza, el temor y el recelo.

CONCLUSIONES

En julio de 2006, el recién electo Congreso del Perú abrió su primera sesión con una controversia, cuando dos congresistas, María Sumire e Hilaria Supa, insistieron en usar su lengua original —el quechua— para jurar su cargo. Cuando Sumire hizo el juramento en quechua, el presidente de la ceremonia la interrumpió dos veces y le pidió en tres ocasiones que repitiera el juramento. Algunos parlamentarios manifestaron su insatisfacción: “Si estoy en Machu Picchu y no entiendo quechua me tengo que conformar, pero en el Congreso, la lengua oficial es el español”.¹ Según el artículo N.º 48 de la Constitución del Perú, las lenguas indígenas son oficiales en los territorios en donde ellas predominan. Si bien en el Congreso la mayoría de sus miembros habla español, Sumire y Supa sostenían representar al gran número de indígenas y quechuahablantes del Perú. Algunos diarios cubrieron la noticia por un par de días, pero la controversia en general quedó en el ámbito de la anécdota.

María Sumire e Hilaria Supa, elegidas en 2006, son, junto con Paulina Arpa-si, elegida en 2001, personajes atípicos del Congreso peruano. Su exigencia de hablar en su lengua indígena, su vestimenta nativa y sus propuestas son usualmente consideradas por sus colegas parlamentarios y en los medios nacionales como una pintoresca irrelevancia. Su soledad es emblemática de lo débil que es la política indígena en el Perú, y de cuán limitada es la presencia de una voz indígena en

1. Martha Hildebrandt fue presidenta del Congreso de La República entre julio de 1999 y noviembre de 2000. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua.

la corriente principal de la política. De algún modo es también representativa de cuán difícil ha sido la lucha por reconfigurar las desigualdades de grupo en el Perú: en los primeros años del siglo XXI, las demandas indígenas se hicieron “irrelevantes”. Fue solo en 2009 que los conflictos en torno a los recursos naturales comenzaron a hacer que una parte de la agenda le pareciera a algunos peligrosamente relevante, y con el potencial de tener un fuerte desenlace negativo.

Este libro ha sostenido que solo podemos entender este estado de cosas a la luz de la historia, así como del profundo enraizamiento de la desigualdad entre grupos que se da a medida de que los acontecimientos socioeconómicos interactúan con las actitudes sociales, la geografía y la violencia política. El enraizamiento se da mediante la creación y la reproducción de instituciones. En la primera sección de este capítulo final, resumimos nuestro análisis del crecimiento y el enraizamiento de las desigualdades. Parte del proceso de enraizamiento es el fracaso de las fuerzas del cambio en cristalizar y penetrar el sistema político no obstante las nuevas características de “apertura” política. Reflexionamos sobre el fracaso en el desarrollo de una política indígena y por qué razón la acción colectiva parecía tener un impacto tan limitado. En la segunda sección, volvemos sobre la contribución más conceptual de nuestro análisis: el valor de la perspectiva de las desigualdades grupales u horizontales; la importancia de buscar las interacciones entre los factores económicos, políticos, sociales y geográficos; y la necesidad de mantener tanto la estructura como la agencia en una saludable tensión. Concluimos con nuestra perspectiva del cambio: ¿el vaso está medio vacío o medio lleno?

Las desigualdades grupales de larga duración en el Perú

La vía del crecimiento y el enraizamiento de las desigualdades grupales

El enraizamiento de las desigualdades grupales en el Perú no puede analizarse por separado del tipo de crecimiento de la economía y la sociedad, puesto que lo que lleva a cabo el enraizamiento es precisamente la interacción de los factores económicos, geográficos, sociales y políticos con las instituciones. Así, el hecho de haberse concentrado la economía y la estructura política juntas en la costa, y específicamente en Lima, ha originado políticas e instituciones que configuraron y reconfiguraron la discriminación, tanto contra la sierra —con una cultura que enfatizaba en su poca importancia y su limitado potencial— como dentro de ella —en contra de los pueblos indígenas—.

Hemos visto que la evolución del periodo colonial fue extremadamente desfavorable para la equidad grupal que nos interesa. El patrón de crecimiento

económico que surgió, a partir de las dotaciones de recursos y de los intereses de los colonizadores, utilizó abiertamente la discriminación, el prejuicio y la explotación en una forma étnica del todo racional y rentable, lo cual solidificó un sistema social con que apoyar lo económico. El modo de interacción de sociedad y economía significaba que la necesidad de mano de obra generaba una necesidad de control, lo que llevó a la perturbación de elementos de la identidad por medio de las reducciones, del uso de la religión para conservar el control y el cultivo de la ambigüedad en la posición de los mestizos. Todos estos elementos significaban que eran infinitesimales las posibilidades de que surgieran unas fuerzas políticas exitosas que cuestionaran la situación. Cuando se produjeron los levantamientos en el Cuzco en el siglo XVIII, los actores no tenían ni fuerza ni recursos, y la reacción dejó a los pueblos indígenas en peor situación. La represión llevó a la eliminación de los jefes originales. El Perú no habría de ver unas demandas políticas indígenas que negociar dentro del sistema colonial.

Con la Independencia, la confirmación de Lima como la capital (en lugar de una ciudad en la sierra) y el predominio de las élites blancas de la costa reforzaron un tipo de crecimiento económico y una secuencia de productos de exportación que jamás necesitaron que la sierra o su población indígena fueran productivas, sino tan solo que suministraran mano de obra barata. Para el siglo XX, la eliminación gradual de los cultivos de exportación rentables producidos en la sierra y la selva, como el caucho, la lana y la coca, que cayeron debido al debilitamiento de los mercados internacionales, enraizó aún más a la sierra en su papel como proveedor de mano de obra barata para la costa. La minería mantuvo su arraigo en los Andes, pero con el tiempo ella usó menos trabajadores en sus operaciones y fue comprando cada vez más sus insumos en el extranjero o en Lima. Para las élites de la costa, resultaba racional importar alimentos, pero para la sierra ello era desastroso. El papel que el capital extranjero tenía en la economía agravaba la tendencia a buscar la integración con el sistema internacional en formas que minaban a la sierra. Las políticas de adquisición de las empresas multinacionales consolidaron el daño que venían infligiendo los controles de precios y la apertura a las importaciones, a medida de que las importaciones de leche en polvo y harina de trigo fina brindaban soluciones de corto plazo a dificultades en la oferta.

El desplazamiento del eje político a la costa y la falta de interés que las élites costeñas tenían por la sierra permitieron que el dominio que ejercían los gamonales, mediadores tradicionales de esta región se mantuviera y renovara. De esta manera el “gamonalismo” —los “sátrapas” de la sierra, frecuentemente mestizos situados entre dos mundos, que tenían el monopolio local del poder— surgió y se incrustó. El funcionamiento de las relaciones de poder involucraba un persuasivo

método de cooptación, que arrastraba a personas que veían su propio camino hacia el progreso como algo que era posible desplazando a su vez a sus paisanos. De este modo, surgió una “doble desigualdad grupal” que tenía como base las jerarquías regionales y étnicas. En este nuevo contexto, las normas formales e informales divergían, puesto que las políticas y el discurso formales pasaban a ser los de la libertad de mercado y la igualdad de todos, mientras que informalmente persistían y triunfaban las normas de la sociedad colonial. Se dio entonces un fuerte desplazamiento en la estructura y el funcionamiento político y económico del Perú, con el surgimiento de Lima como la ciudad preeminente, desplazamiento este que daría forma a la evolución de organizaciones, instituciones y de políticas. La dinámica política y económica del primer siglo y medio después de la Independencia abrió un inmenso divorcio entre la costa y la sierra-selva, entre blancos-mestizos e indígenas. Hemos visto que en el siglo XIX aún había oportunidades rentables para algunos productos de la sierra, pero la evolución de las relaciones de poder dejó a los pueblos indígenas con relativamente pocos beneficios. En ningún lugar resultó esto más vívido que en el auge lanero del sur a finales del siglo XIX.

La Guerra con Chile, entre 1879 y 1883, marcó una discontinuidad en la evolución de las instituciones. El choque que significó para la élite advertir que “la amenaza real era el indio y no Chile” confirmó las actitudes de discriminación y prejuicio, y creó además una nueva “norma”: la “inclusión” y la “integración” políticas, pero mediante la educación y la higiene. La asimilación era necesaria para civilizar la amenaza, en un contexto profundamente paternalista y prejuicioso. De este modo, el sistema educativo se revela como parte también del problema, así como de la solución, reforzando las normas y creando diferencias reales, especialmente para las mujeres indígenas, situación esta que persistió hasta el periodo contemporáneo. La idea de que la escuela muy probablemente es el lugar donde se abusará de las niñas indígenas fue desapareciendo con suma lentitud, y el sistema educativo aún no hace lo suficiente como para empoderar a los estudiantes indígenas con unas capacidades y autoestima comparables con las de blancos y mestizos.

A medida de que la prosperidad de la sierra sufría, la población iba optando por emigrar. La élite mestiza, que podría haber negociado a favor de mejores servicios e infraestructura, se fue afincando cada vez más en Lima. La población indígena más educada y empresarial se mudó, primero a los pequeños poblados de la sierra, y luego, a partir de la década de 1940, a la costa y a Lima en gran número. Así, el daño que la Colonia y la Independencia infligieron a la dirigencia indígena se vio agravado por la dinámica del crecimiento económico después de la emancipación, y con mayor fuerza a medida de que las décadas iban pasando.

La interacción de la economía y la política significó que los pueblos indígenas vieron que el camino a la prosperidad pasaba por la emigración, para buscar educación y empleo en la costa, debilitando así las fuerzas endógenas del cambio, que podrían haber luchado por un papel autónomo más fuerte de la sierra. Con el tiempo, este proceso fue fragmentando a la población indígena. Surgió entonces una nueva y crucial brecha dentro de esta misma población: entre el indígena rural y el cholo urbano. Un aspecto importante del enraizamiento de las normas es que los prejuicios y el enraizamiento son algo característico dentro de los grupos y entre ellos, y se superponen a los emergentes y divergentes intereses materiales, un fenómeno que fue ganando importancia a medida de que transcurría el siglo XX, y que se agudizó aún más al iniciarse el último y más grande auge exportador primario del siglo, que comenzó en su última década y ganó fuerza en la primera década del siglo XXI.

A lo largo de todos estos años, se fue dando una interacción particularmente perversa en la forma en que el capital extranjero se relacionaba con las élites locales, brindándoles oportunidades y llevando a cabo muchas de las funciones que en otros lugares efectúa el Estado. Las élites locales desarrollaron una relación simbiótica con empresas extranjeras que era rentable y les servía de apoyo; lo que necesitaban del Estado era orden, un manejo económico prudente y tasas de cambio que favorecieran las exportaciones, no un Estado desarrollista para diversificar la economía y fomentar oportunidades en otros lugares. Esto tuvo consecuencias de larga duración para la política que configuró el Estado y sus posibilidades de aprender haciendo, y fue responsable de la falta de una respuesta estatal adecuada a los retos del desarrollo de la sierra, incluso cuando sí existía la voluntad política. Las élites con buena voluntad percibían un problema en las desigualdades grupales y propusieron la educación como solución, pero no lograron entender que ella se superponía a la desigualdad y la discriminación, reforzándolas de muchas formas y pasando así a formar parte del problema. Pero el mito de la educación como solución perduró durante más de un siglo —respaldado además por el pensamiento, la asesoría y el dinero internacionales—, permitiendo así que las personas de buena voluntad creyeran que estaban en vías de resolver las desigualdades grupales.

Unos cambios dramáticos se produjeron en el último tercio del siglo XX, con lo que parecía ser cierta apertura de las posibilidades. La discontinuidad que el régimen de Velasco representó en sí mismo, y el estancamiento económico y político al cual respondía, abrieron una época de cambios y de acciones radicales que podrían haber reconfigurado las desigualdades grupales. Sin embargo, hemos mostrado de qué manera las políticas interactuaron con las características

económicas y sociales para producir resultados perversos. La política nueva más significativa de los años setenta fue una reforma agraria radical, la cual incrementó terriblemente los conflictos y resentimientos, y otorgó a Sendero Luminoso un punto de entrada, sobre todo en Ayacucho y en los departamentos circundantes. Aunque Sendero jamás usó un discurso étnico, sus tácticas y mensaje explotaron la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, una vulnerabilidad arraigada en la explotación y la dominación previas. La cultura de la discriminación y el prejuicio permitió que tanto la violencia política como su represión aparecieran como “legítimas”, produciendo un sufrimiento desproporcionado a los pueblos indígenas. Las viejas normas de la discriminación y el prejuicio se vieron reforzadas con la asociación establecida entre “indígena” y “terrorista”. En el transcurso del mismo periodo, el surgimiento de un serio movimiento legal de izquierda se vio trastornado por el recurso a las armas y a qué posición tomar con respecto a Sendero: esto llegó encima del fracaso previo de la izquierda en movilizar exitosamente a los pobladores rurales. A pesar del significativo respaldo que prestase al establecimiento de redes y a la organización, el trabajo realizado por la izquierda en el sur desafortunadamente ayudó a construir una estructura vertical e ideológica antes que un foro para la conciencia y la organización indígenas.

Entretanto, el legado de un Estado ineficaz, que se desarrolló a partir de la naturaleza de la economía de exportación, fue agravado por las crisis internacionales y los desastres naturales, en tanto que para finales de los años ochenta la hiperinflación se sumó a la violencia terrorista, lo que creó una creciente pobreza urbana y unos precios inestables y en general desfavorables para los productores rurales. A lo largo de estos años, la combinación de recesión económica y violencia política fue debilitando las estructuras democráticas y el sistema de partidos. Si bien estos fueron “males” para todos los peruanos, la incapacidad para encontrar alternativas viables para la sierra y crear una presencia estatal efectiva en ella, así como oportunidades laborales en toda la economía, contribuyó a atrapar con aún mayor firmeza a la población indígena y chola en su situación de exclusión.

El “fujishock” produjo una abrupta estabilización y un agudo giro hacia las políticas neoliberales, auspiciado por un auge minero más una clausura política. Cada elemento de este escenario significó un incremento en las desigualdades horizontales, a medida de que la emigración forzada inflaba al sector informal urbano, que las comunidades indígenas se veían desplazadas por las compañías mineras y que toda voz política residual o actividad constructiva de autoayuda era reprimida o cooptada. El único factor compensador —que no bastaba— fue una construcción significativa de infraestructura en la sierra. El giro de vuelta hacia una economía extractiva llevó a las comunidades indígenas a nuevas formas

de conflicto y a casos de fracaso estatal, en tanto que las instituciones heredadas del pasado tendían a reproducir y consolidar la desigualdad. Hasta lo que inicialmente parecía ser un éxito, a menudo fracasaba luego. Como vimos, un buen ejemplo de ello fue el acuerdo al que se llegó en Espinar en torno a la mina de Tintaya. Los buenos resultados iniciales se tradujeron en unos pagos generosos a las comunidades afectadas, las cuales luego tuvieron que luchar dadas las macro/microestructuras heredadas y la carencia de capacidades locales, además de normas “negativas” que también habían heredado, como el recelo y la desconfianza.

La acción colectiva indígena y la impenetrabilidad del sistema político

La sección anterior describió el proceso de acumulación histórica que produjo la economía y la política contemporáneas; asimismo, el terreno en el que la acción colectiva de los pueblos indígenas y otros podrían haberse desarrollado, y cambiado la situación de persistente desigualdad. Una hipótesis temprana del presente estudio fue que la debilidad de las organizaciones políticas indígenas podría tener su origen en una ausencia de acción colectiva en el micro y el meso-nivel, pero aprendimos que esto no era así. Más bien se trató de todo lo contrario: ciertamente, no podemos concluir que alguna debilidad fundamental en la propensión a la acción colectiva entre los pueblos indígenas explica la durabilidad de las desigualdades grupales. Encontramos unos casos impresionantes de acciones colectivas vigorosas y bien organizadas, que fueron resultado del liderazgo, la necesidad inmediata y un fuerte sentido de comunidad, dado los bajos niveles de diferenciación allí donde estos existían. Los catalizadores tendían a ser importantes en las experiencias provinciales, aunque no tanto en Lima. Las vigorosas identidades grupales de los ronderos y la fuerza del agravio comunal percibido en el caso de Espinar se vieron complementados por un nivel relativamente bajo de diferenciación. Por su parte, Bambamarca fue escenario, al igual que los CP, de un importante papel que el ala progresista de la Iglesia desempeñó junto con las ONG. En el caso de Espinar, en la sierra meridional, un temprano papel positivo de los partidos políticos en la creación de redes y el apoyo a la federación campesina se debilitó con el tiempo y eventualmente pasó a ser negativo.

La necesidad percibida y el “aprender haciendo” también le permitieron a un grupo profundizar su agenda más allá de las cuestiones prácticas inmediatas, tales como la seguridad o el alimento para los hijos. De este modo, las mujeres de los comedores encontraron sobre la marcha qué capacidades necesitaban y se propusieron adquirirlas. El contexto mismo de “grupo” en el comedor naturalmente

llevó a las reflexiones colectivas, que en ocasiones contaron con el apoyo de las ONG. Los ronderos también vivieron experiencias similares, observando y gradualmente comprendiendo distintos niveles de injusticia. Las experiencias se acumularon con el paso del tiempo, y ayudó el que hubiese un lugar y la oportunidad de discutir (para ellos, fue el marco de la asamblea comunal).

No obstante ello, cuando la acción colectiva intentaba pasar del micronivel al siguiente usualmente fracasaba, debido al contexto institucional y a la naturaleza de la política. La razón principal de esta situación, que se desprende de estos casos, es que para alcanzar el cambio con éxito, el nivel de acción comunal necesita interactuar con un nivel intermedio. Si este último nivel está controlado por partidos políticos fragmentados, corruptos o que son proclives al personalismo y el favoritismo, entonces las conexiones se complican y resulta difícil levantar estructuras transcomunales. La creciente población chola de la costa podría haber redefinido el rostro de la política y transmitido fuerza a la acción colectiva indígena, pero no fue así... o todavía no. Hemos explicado que la principal corriente del modelo político —que es centrista y tiene su base en Lima— siempre fue clientelista y personalista. Pero al menos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo partidos políticos significativos, con muchos seguidores. Mas en la medida de que el modelo económico entraba en crisis, se fue considerando también que el sistema político no lograba brindar una solución. El sistema tradicional de partidos comenzó a verse amenazado y fue quedando cada vez más desacreditado a partir del golpe militar de Velasco. La coincidencia del retorno a la democracia y al mercado paradójicamente debilitó aún más al APRA, el partido más prominente.

Hemos visto que, en realidad, el Estado democrático de comienzos de la década de 1980 se relacionaba con las organizaciones indígenas a través de la mediación paternalista y vertical de los partidos políticos. Esta mediación perversa —y la de los partidos de izquierda en particular— fue posible gracias a los recursos organizativos y simbólicos que ellos habían acumulado. También explicamos que las medidas que Velasco siguió con respecto a la tierra y a la supresión de la política partidaria animaron una asociación fundacional entre la izquierda y las organizaciones de los pueblos indígenas, lo que tuvo fuertes consecuencias en la orientación sumamente ideologizada y clasista de las identidades políticas indígenas y la verticalidad de sus organizaciones. Son muchas las consecuencias que el periodo democrático de los años ochenta tuvo, pero a dos de ellas les tocó un papel central en el enraizamiento de la desigualdad: unas débiles estructuras organizativas autónomas y la desilusión con la acción política colectiva. Tras el colapso de los partidos, justo cuando más se les necesitaba, las estructuras se

hallaban tan débiles que otras formas de clientelismo se desarrollaron y fueron aceptadas. Dichas formas estaban fragmentadas, eran inmediatas, de corto plazo y pragmáticas. Entretanto, la desilusión era evidente: los dirigentes como Crecencio Merma no se sentían motivados para asumir el riesgo de las nuevas lealtades, ni tampoco querían que se desconfiara de ellos en un contexto en el cual toda la política era calificada como algo “sucio”. La forma en que el Estado se relacionó con los pueblos indígenas, rechazó y patrocinó sus organizaciones, creó una esfera de movilización en donde la característica principal fue la polarización, pudiendo eventualmente producirse la violencia. Sin una representación que rinda cuentas, es probable que en lugar de abrir la puerta a una nueva vía, la política y el conflicto étnicos, tal como van surgiendo, solamente alimentarán el enraizamiento de la desigualdad.

De este modo, en el ámbito de las bases, las protestas políticas incipientes o confinadas regionalmente se hallaban fragmentadas y divididas. Aunque algunos de los grupos lograron superar gran parte del daño resultante del divisionismo generado por la reforma agraria de Velasco, y dar señales de una posible movilización nacional, lo que no hubo fue la mediación requerida. Es más, las tempranas asociaciones establecidas con la izquierda inhibieron la construcción de una mediación autónoma. La alternativa de un partido de izquierda saludable se topó con una ciénaga de dogmatismo e ideología excesivos; y no solo se dividió profundamente a su vez y fue —como vimos— incapaz de abrir nuevos espacios de liderazgo indígena, sino que tampoco logró elaborar soluciones pragmáticas que atendieran las necesidades que las poblaciones marginales (en los centros urbanos o el campo) tenían de oportunidades económicas.

El legado de la violencia política y la represión que ella generó, interactuó con la fragmentación de los movimientos sociales y la naturaleza de la política misma. El temor a organizarse, debido a la amenaza de las represalias o la represión, acentuó el papel de las relaciones de clientelaje. Las sospechas y el divisionismo generados por la guerra debilitaron la organización. Con el retorno de la democracia en el año 2000, fueron pocas las opciones que había. Los partidos y los candidatos iban y venían. El respaldo al fujimorismo se mantuvo fuerte, sobre todo en las áreas rurales, pues Fujimori había puesto orden y construido escuelas y hospitales. Los candidatos progresistas de izquierda recibieron un apoyo minúsculo en las elecciones del nuevo siglo. Ollanta Humala reunió votos hasta el punto de aterrorizar a la clase media de Lima en las elecciones de 2006.

Contribuciones al análisis de la desigualdad

La relevancia de la desigualdad grupal u horizontal

Dentro de todo lo anterior, podemos rastrear la relevancia de los grupos, y en ello también la importancia de su posición relativa política, socioeconómica y cultural. Concluimos, por ende, que para desplazar a la desigualdad, necesitamos medir y monitorear las desigualdades de grupo y entender, en la medida de lo posible, las dinámicas de las interacciones grupales.

La política, claro está, tiene a los grupos como base. Las desigualdades de los colectivos políticos importan en sí mismas, pero, además, si un grupo no logra representar sus intereses, entonces la posibilidad de que se remedien las desigualdades de todo tipo que dicho grupo sufre se reducen bastante. Hemos visto la importancia que tiene la ausencia acumulativa, en el sistema peruano, de una política indígena o de una voz política de estas poblaciones. Una historia que levantó una cultura de la discriminación, el clientelismo y la verticalidad, incrementó las posibilidades contrarias al surgimiento de cuestionamientos grupales de dicho sistema, salvo por la violencia. Hemos visto que el resultado, cuando ciertos grupos llegaron a percibir a esta como la única vía de escape, fue una represión terrible, la cual se vio acrecentada por las desigualdades grupales y por la cultura del prejuicio en el cual están incrustadas. Semejante violencia y represión retroalimentaron los prejuicios y la discriminación, y debilitaron severamente los movimientos sociales.

Un segundo aspecto de la importancia de los grupos, que ha resultado de crucial importancia en el enraizamiento de la desigualdad, es determinar dónde se superponen las desigualdades grupales. Sufrir conjuntamente una desigualdad política, socioeconómica y cultural hace que resulte más difícil salir de ellas, que la incidencia de la frustración sea mayor y que, en consecuencia, la posibilidad de la violencia sea más alta (este es un hallazgo del CRISE; véase Stewart 2008). Pero además, la pertenencia a grupos superpuestos y discriminados puede generar un enraizamiento aún más profundo. Por ejemplo, como vimos, en el Perú la etnicidad y las desigualdades de clase se superponen en gran medida. Sendero usó una retórica clasista para lograr movilizarse. El hecho de la superposición significa que quienes respondieron a la retórica en las regiones claves en donde Sendero operaba eran predominantemente indígenas; y, como hemos mostrado, eran vulnerables a las técnicas de reclutamiento senderista debido precisamente a su situación. Su etnicidad significó entonces que el trato que sufrió, tanto a manos del Ejército como de la Policía y del mismo Sendero, fuera particularmente

despiadado: un profundo y maligno círculo vicioso que emanaba de la superposición de las desigualdades y de la profundidad que la discriminación y los prejuicios tienen en la sociedad peruana.

Otro ejemplo más de superposición, y que, por lo mismo, tiene una mayor significación, es la vinculación que establecimos entre desigualdad regional y desigualdad étnica. La sierra fue discriminada durante varias décadas cruciales en el diseño de las políticas nacionales y por las actitudes de la élite costeña blanca/mestiza; pero los indígenas que vivían en la sierra se vieron doblemente discriminados y desiguales, pues sufrían también la carga del gamonalismo y se hallaban subordinados y carentes de respeto, a menudo abusados y explotados.

Otro ejemplo de esta superposición es la de etnicidad y género. Las mujeres indígenas tienen niveles más bajos de educación y menos oportunidades que sus contrapartes masculinas. A medida de que los varones indígenas encontraban empleo en los pueblos, las mujeres se quedaban atrás para cuidar las tierras. Su bajo nivel educativo y limitado español expusieron a los comedores a las divisiones internas y la desconfianza. Las actitudes familiares limitaban los papeles y expectativas de las hijas. Hoy en día, les va mejor a las muchachas indígenas que a sus madres con respecto a los años de estudio, pero los niveles educativos de las mujeres indígenas adultas jóvenes continúan mostrando los efectos de la historia. Estas niñas podrían aún no estar yendo a la escuela: recordemos a aquella mujer a la cual el abuso que sufriera cuando niña, hizo que mantuviera a sus hijas en casa. E incluso en la actualidad, la cultura incrustada por medio de la escuela podría todavía no ser empoderadora.

Un aspecto más de la necesidad de contar con un análisis de base grupal es la importancia de la discriminación y el prejuicio, algo que siempre es una cuestión de grupos. A uno puede *disgustarle* una persona y por ello podría tratarla de modo injusto; si uno *discrimina* es debido a las características grupales. Hemos visto que la discriminación y los prejuicios han sido la clave de la impotencia de la educación a la hora de cambiar el equilibrio de las capacidades y el poder. Mostramos que una situación de desigualdad, desigualdades horizontales superpuestas y discriminación erosionó el poder de la educación. Eventualmente, hubo un avance significativo en ella, e incluso durante largo tiempo fue el instrumento favorito de las agencias de desarrollo y multilaterales. Actualmente, los varones indígenas se encuentran cerca de sus contrapartes blancas/mestizas en años de estudio en secundaria y primaria, e incluso vienen avanzando en el nivel terciario. Y, sin embargo, esto hasta ahora no se refleja, como sería de esperar, en oportunidades económicas o en su presencia en puestos profesionales y en el sector público.

La discriminación puede consolidar un modelo económico de modo “conveniente”: esto era cierto en el sistema colonial, pero puede también serlo hoy. Hemos visto cuán empinada se ha vuelto con el tiempo la pirámide de las oportunidades laborales: el empleo tiene que ser racionado y hay ciertas evidencias de discriminación directa en el mercado laboral por motivos étnicos (Ñopo et ál. 2004). Aún más omnipresente es el efecto indirecto del respaldo a un sistema que brinda una construcción de capacidades desigual y respalda la “inferioridad” de los productos de la agricultura indígena, prefiriendo otros, como la harina fina de trigo. Hemos visto que los mismos migrantes absorben y reproducen la discriminación, tal como lo hiciera el mecánico automotriz del capítulo 2 cuando sus paisanos deseaban comprar un carro. Las preciosas oportunidades económicas deben conservarse.

La importancia del tiempo

Las estructuras políticas y sociales que han interactuado con la estructura económica a lo largo de la experiencia histórica de las sociedades, han configurado las instituciones y normas que reproducen las desigualdades de grupo, y también han inhibido la creación de aquellas instituciones que podrían haber protegido los intereses de los excluidos o de los que lo eran parcialmente. En el transcurso del tiempo se han dado cambios; sin embargo, cada periodo de cambio ha hecho que las desigualdades grupales sean diferentes, más complejas y a menudo que estén más escondidas, pero no las ha removido. Hemos visto el poder de los actores que intentaron promover la educación a comienzos del siglo XX, el fin de los hacendados y el logro de la reforma agraria en los años setenta, y la consecución del voto indígena en los años ochenta. Sin embargo, las políticas educativas se vieron minadas por el gamonalismo, la reforma agraria por la falta de capacidad estatal para llevar nuevas formas de oportunidad y autoridad a la sierra, y el sufragio por la verticalidad de la mediación política. Los actores intentaron el cambio y lo produjeron, tanto intencional como involuntariamente. Pero los legados institucionales de cada periodo previo, al interactuar con las estructuras de la economía y la geografía, con las instituciones, con la dinámica de la cultura y los actores, no evitaron el cambio, sino que lo llevaron por una vía perversa.

Fue así que en el transcurso del tiempo, los agentes interactuaron con las estructuras y fueron configurados por ellas tanto como las configuraron. Para entender cómo pensar en políticas que podrían respaldar el cambio constructor de igualdades, dado un conjunto tan poderoso de fuerzas estructurales, sostuvimos que necesitamos comprender cabalmente los legados históricos y cómo es que

ellos dieron forma a los actores y sus respuestas, y les condicionaron a lo largo del tiempo. Esta es la tarea que intentamos emprender en este libro. No obstante ello, también enfatizamos la necesidad de equilibrar —en una tensión saludable— los elementos de la estructura y la agencia. De este modo, nuestra comprensión fue fundamentalmente institucional y estructural, pero sí ofrecimos un espacio genuino para el papel de actores fuertes que podrían haber cambiado el rumbo. Fue la interacción de la estructura, las instituciones y la voluntad, lo que configuró la vida, década a década, en una dirección en la cual muchos agentes potenciales del cambio constructivo quedaron desempoderados.

¿El vaso está medio vacío o medio lleno?

Por último, ¿hay razones para tener esperanza? Hemos visto el peso de la historia negativa: al parecer, algo más que un vaso medio vacío. Y, sin embargo, hay señales de cambio. Abrimos el libro con la historia del café cerrado por INDECOPI: tales medidas han proseguido y ahora la Defensoría viene monitoreando puntos de tensión en torno a la minería, para así impedir que las desigualdades entre grupos estallen en un conflicto abierto. Los conflictos, efectivamente, estallaron en la zona que cae fuera de este libro: en la selva, en torno al petróleo. Las repercusiones políticas de la violencia resultante aún se sienten al momento en que escribimos estas líneas. Fujimori fue a juicio y fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos, y una encuesta temprana mostró que el 55 por ciento de la población aprobaba el juicio. Se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en 2003 ella presentó exitosamente su informe con ocho mil páginas de testimonios y análisis extraordinarios. El cuestionamiento de los pueblos a las compañías mineras con respecto al daño que infligen a su subsistencia es vigoroso en muchos lugares. María Sumire, Hilaria Supa y Paulina Arpasi llegaron al Congreso como mujeres indígenas. Los programas de autoalfabetización vienen generando una nueva forma de compromiso y empoderamiento en las comunidades indígenas. Gastón Acurio viene encabezando un giro cultural que valora los tradicionales ingredientes peruanos en la cocina, lo que no resulta poca cosa cuando recordamos la importancia que las políticas de importación de alimentos en las últimas décadas tuvieron para nuestros círculos viciosos. Consideramos que tales actos y actores importantes son fenómenos que podrían cambiar el rostro del Perú, en caso de recibir un liderazgo.

Pero no se llegará a generar una reducción significativa de la desigualdad a menos que se enfrente la profundidad del enraizamiento de las desigualdades grupales. Las interacciones del modelo económico y la estructura geográfica del

país, el *modus operandi* de las instituciones y sus legados configurados por una historia específica, y la debilidad heredada de las políticas y, en particular, de la capacidad del sistema para dar voz a los grupos marginales, persisten todos hoy y se refuerzan mutuamente. Las fuerzas internacionales, así como la historia, continúan estorbando la modificación de la dependencia minera o dificultando la propagación de sus beneficios de modo más amplio entre grupos. La presencia de múltiples discriminaciones aún estorban el florecimiento democrático que todos quisiéramos ver. Y todavía quedan dos difíciles aspectos centrales: la necesidad de contar con un modelo económico que brinde más oportunidades económicas a los grupos marginados, y la necesidad de revivir la organización y la vida partidaria en un modo tal que suministre oportunidades políticas.

BIBLIOGRAFÍA

AINSWORTH, Philip

- 1920 "Indian Legislation in Peru". En *The Hispanic American Historical Review* 3: 509-534.

ALBERTI, Giorgio y Rodrigo SÁNCHEZ

- 1974 *Poder y conflicto social en el valle del Mantaro, 1900-1974*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal y Sinesio LÓPEZ, eds.

- 2005 *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

ALLPORT, Gordon

- 1954 *The Nature of Prejudice*. Cambridge: Addison-Wesley Pub.

ALVARADO, Javier

- 1989 "Instrumentos de Política en la Reforma Agraria". En *Debate Agrario* 7: 33-61. Lima: Cepes.

ANDEAN REPORT

- 1992 *Andean Report*, vol. 30, julio. Londres: Latin American Monthly Newsletters.
1999 *Andean Report*, vol. 2, marzo. Londres: Latin American Monthly Newsletters.

ANDERSON, Benedict

- 1983 *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Londres: Verso.

ANGELL, Allan; Pamela LOWDEN y Rosemary THORP

- 2001 *Decentralizing Development: The Political Economy of Institutional Change in Colombia and Chile*. Nueva York; Oxford: Oxford University Press.

ANSIÓN, Juan

- 2006 "Education in Peru: Builder of Democracy or Reproducer of Inequalities?". Disponible en: <<http://www.crise.ox.ac.uk/workshops.shtml#latam>>.

APEL, Karen

- 1957 *De la hacienda a la comunidad: la sierra de Piura 1934-1990*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos e Instituto Francés de Estudios Andinos.

ARCE, Elmer

- 1985 "Comunidades campesinas y políticas del Estado: Década del 70". En *Socialismo y Participación* 12: 81-91. Lima: Cedep.

ARES, Berta y Serge GRUZINSKI

- 1997 *Entre dos mundos: Fronteras culturales y agentes mediadores*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

ASSADOURIAN, Carlos

- 1994 *Transiciones hacia el sistema colonial andino*. México, D.F.: Colegio de México y Fideicomiso Historia de las Américas; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

BALIBAR, Etienne

- 1991 "Is there a Neo-Racism?". En Balibar, E. et ál., eds., *Race, Nation, Class. Ambiguous Identities*; pp. 17-18. Londres; Nueva York: Verso.

BARRÓN, Manuel

- 2008 "Gender and Ethnic Inequalities in Latin America: A Multidimensional Comparison of Bolivia, Guatemala and Peru". Disponible en: <<http://www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtrnl>>.

BARTH, Fredrik

- 1969 *Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference*. Bergen: Universitetsforlaget; Londres: Allen & Unwin.

BASADRE, Jorge

- 1980 *Elecciones y centralismo en el Perú: Apuntes para un esquema histórico*. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

BASADRE, Jorge y Ernesto YEPES

- 2003 *Memoria y destino del Perú: Textos esenciales*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

BATES, Robert

- 1971 *Unions, Parties and Political Development. A Study of Minev in Zambia*. New Haven: Yale University Press.

BATES, Robert; Rui de FIGUEIREDO y Barry WEINGAST

- 1998 "The Politics of Interpretation: Rationality, Culture and Transition". En *Politics and Society* 26:4; pp. 603-642.

BEDFORD, Robert y David SNOW

- 2000 "Framing Processes and Social Movements and Assessment". En *Annual Review of Sociology* 26; pp. 611-639.

BLONDET, Cecilia

- 2002 "The Devil's Deal: Women's Political Participation and Authoritarianism in Peru". En Molyneux, M. et ál., eds., *Gender Justice, Development and Rights*; pp. 277-305. Nueva York; Oxford: Oxford University Press.

BOESTEN, Jelke

- 2003 "Poor Women in Peru: Reproducers of Poverty and Poverty Relievers". En *Women's Studies Quarterly* 31: 3/4; pp. 113-128.

BOURQUE, Susan y David PALMER

- 1975 "Transforming the Rural Sector: Government Policy and Peasant Response". En Lowenthal, A., ed., *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule*; pp. 179-219. Princeton: Princeton University Press.

BOURRICAUD, François

- 1970 *Power and Society in Contemporary Peru*. Traducción de Paul Stevenson. Londres: Faber.

BRASS, Paul

- 1997 *Theft of an Idol: Text and Context in the Representation of Collective Violence*. Princeton: Princeton University Press.

BRODSKY, Jacobo y Jacob OSER

- 1968 "Land Tenure in Peru: A CIDA Study". En *American Journal of Economics and Sociology* 27:4; pp. 405-421.

BROWN, Kendall

- 2008 "La transformación de la Real Hacienda peruana bajo los Borbones: el caso de Arequipa". En Espinoza, A. et ál., eds., *Arequipa a través del tiempo. Política, cultura y sociedad*. Arequipa: Centro de Estudios Arequipeños y Universidad Nacional de San Agustín.

BRUBAKER, Roger; Mara LOVEMAN y Peter STAMATOV

- 2004 "Ethnicity as Cognition". En *Theory and Society* 33:1: 31-64.

BURGA, Manuel y Alberto FLORES-GALINDO

- 1979 *Apogeo y crisis de la República Aristocrática: Oligarquía, aprismo y comunismo, 1895-1931*. Lima: Ediciones Rikchay.

BURT, Jo Marie

- 1997 "Political Violence and the Grassroots in Lima, Peru". En Chalmers, D. et ál., eds., *The New Politics of Inequality in Latin America: Rethinking Participation and Representation*; pp. 281-309. Oxford; Nueva York: Oxford University Press.

CABALLERO, José María

- 1981 *Economía agraria de la sierra peruana antes de la Reforma Agraria de 1969*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CADENA, Marisol de la

- 2000 *Indigenous mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991*. Durham: Duke University Press.

CAMERON, Maxwell y Steven LEVITSKY

- 2003 "Democracy Without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori's Peru". En *Latin American Politics and Society* 45:3: 1-33.

CÁNEPA, Gisela

- 1998 *Máscara, transformación e identidad en los Andes: la fiesta de la Virgen del Carmen, Paucartambo, Cuzco*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 2008 "The Fluidity of Ethnic Identities in Peru". Disponible en: <www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtm>.

CARAVEDO, Baltazar

- 1976 *Burguesía e industria en el Perú, 1933-1945*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- 1978 *Desarrollo desigual y lucha política en el Perú, 1948-1956: la burguesía arequipeña y el Estado peruano*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CARRIÓN, Julio y Patricia ZÁRATE

- 2006 *La cultura política de la democracia en el Perú: 2006*. Nashville: Universidad de Vanderbilt; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CCP-Confederación Campesina del Perú

- 1974 “Selección de las Conclusiones del IV Congreso de la Confederación Campesina del Perú”. En Pease, Henry, comp., *Material de trabajo del curso Realidad Social Peruana*; pp. 32-43. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

- 1975 “Informes y mociones del II Congreso Extraordinario Nacional Campesino, 18 a 20 de julio”. Querecotillo (Piura): CCP.

COHEN, Jean L.

- 1985 “Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements”. En *Social Research* 52:4: 663-716.

CONAGHAN, Catherine

- 2002 “Cashing in on Authoritarianism: Media Collusion in Fujimori’s Peru”. *Harvard International Journal of Press/Politics* 7:1: 115-125.

CONGRESO NACIONAL DEL PERÚ

- [2011] “Lista de Congresistas de la República, 1992-2011”. Disponible en: <www.congreso.gob.pe/organizacion/pleno.asp?mode=Pleno>.

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

- 2004 “Informe de consejeros nombrados 1995-2004”. Disponible en: <<http://www.cnm.gob.pe/cnm>> (última consulta: 2007).

CONTRERAS, Carlos

- 1988 “Estado republicano y tributo indígena en la sierra central en la post Independencia”. En *Revista de Indias* 48: 182/183: 517-550.

- 1996 *Maestros, mistis y campesinos en el Perú rural del siglo XX*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- 1996a “La descentralización fiscal en el Perú después de la Guerra con Chile, 1886-1895”. En *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad* 67/68: 203-231.

- 2000 “Bolivia, 1900-39: Mining, Railways and Education”. En Cárdenas, E. et ál., eds., *An Economic History of Twentieth-Century Latin America*,

volume 1: The Export Age: The Latin American Economies in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries; pp. 188-216. Londres: Palgrave McMillan.

CONTRERAS, Carlos y Marcos CUETO

1999 *Historia del Perú contemporáneo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales.

COOK, Noble David

1981 *Demographic Collapse: Indian Peru, 1520-1620*. Cambridge: Cambridge University Press.

CÓRDOVA, Patricia y Carmen Luz GORRITI

1989 *Apuntes para una interpretación del movimiento de mujeres: los Comedores Comunales y los Comités del Vaso de Leche en Lima*. Lima: SUMBI.

COTLEAR, Daniel

1989 *Desarrollo campesino en los Andes: Cambio tecnológico y transformación social en las comunidades de la sierra del Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

COTLER, Julio

1970 "La mecánica de la dominación interna y del cambio social en el Perú". En Matos Mar, J. et ál., eds., *El Perú actual, sociedad y política*; pp. 47-87. México D.F.: Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México.

1994 *Política y sociedad en el Perú: cambios y continuidades*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

1995 "Political Parties and the Problems of Democratic Consolidation". En Mainwaring, S. et ál., eds., *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*; pp. 323-353. Stanford, CA: Stanford University Press.

COTLER, Julio y Felipe PORTOCARRERO

1976 "Organizaciones campesinas en el Perú". En Matos Mar, J., ed., *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú*; pp. 267-310. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CRABTREE, John y Jim THOMAS

1998 *Fujimori's Peru: The Political Economy*. Londres: Institute of Latin American Studies.

CRAIG, Wesley

- 1969 "Peru: The Peasant Movement of La Convención". En Landsberger, H. A., ed., *Latin American Peasant Movements*; pp. 274-296. Ithaca: Cornell University Press.

CUETO, Marcos

- 1997 *El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CUETO, Santiago; Enrique JACOBY y Ernesto POLLITT

- 1997 "Time on Task and Educational Activities in Rural Schools in Peru". En *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* 27:3: 105-120.

CUEVA, Beteta H. y Millan FALCONI

- 2000 *The Women's Food Organizations and their Relationship with the Government*. Lima: Ford Foundation y Pontificia Universidad Católica del Perú.

CVR-COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

- 2003 *Informe final*, IX tomos. Disponible en: <www.cverdad.org.pe>.

DAVIES, Thomas Davies

- 1974 *Indian Integration in Peru. A Half Century of Experience, 1900-1948*. Lincoln: University of Nebraska Press.

DEERE, Carmen D.

- 1990 *Household and Class Relations: Peasants and Landlords in Northern Peru*. Berkeley, CA: University of California Press.

DEGREGORI, Carlos Iván

- 1990 *El surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho, 1969-1979*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- 1992 "Campesinado andino y violencia. Balance de una década de estudios en Perú". En Degregori, Carlos Iván et ál., eds., *El problema agrario en debate, SEPIA IV*; pp. 413-439. Lima: SEPIA.

DEGREGORI, Carlos Iván y Cecilia BLONDET y Nicolás LYNCH

- 1986 *Conquistadores de un Nuevo Mundo: de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

DEW, Edward M.

- 1969 *Politics in the Altiplano: The Dynamics of Change in Rural Peru*. Austin: Institute of Latin American Studies y University of Texas Press.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DEL PERÚ

- 1945 *Extracto estadístico. Resultados de 1943*. Lima: Dirección Nacional de Estadística y Censos.
- 1965 *Primer censo nacional agropecuario de 1961*. Lima: Dirección Nacional de Estadística y Censos.
- 1966 *Resultados de los censos nacionales de población, vivienda y agropecuario de 1961*. Lima: Dirección Nacional de Estadística y Censos.
- 1969 *Anuario estadístico del Perú. 1966*. Lima: Dirección Nacional de Estadística y Censos.

DRAKE, Paul W.

- 1989 *The Money Doctor in the Andes: the Kemmerer Mission, 1923-1933*. Durham: Duke University Press.

DURAND, Francisco y Rosemary THORP

- 1999 "La reforma tributaria: análisis del experimento SUNAT". En Crabtree, J. et ál., eds., *El Perú de Fujimori*; pp. 379-408, Lima: Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos.

ELSTER, Jon

- 1999 *Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.

ESCOBAL, Javier y Carmen PONCE

- 2002 *The Benefits of Rural Roads: Enhancing Income Opportunities for the Rural Poor*. Lima: Grade.

EWIG, Christina

- 2004 "Piecemeal but Innovative: Health Sector Reform in Peru". En Kaufman, R. et ál., eds., *Crucial Needs, Weak Incentives: Social Sector Reform, Democratization, and Globalization in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press y Woodrow Wilson Centre.

FIGUEROA, Adolfo

- 1973 *El impacto de las reformas actuales sobre la distribución de ingresos en el Perú*. Lima: CISEPA.
- 2001 *Reformas en sociedades desiguales: la experiencia peruana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 2001a "Social Exclusion as a Distribution Theory". En Gacitua, E., et ál., eds., *Social Exclusion and Poverty Reduction in Latin America*. Washington, D. C.: The World Bank.

- 2008 "Education, Labour Markets and Inequality in Peru". Disponible en: <www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtml>.
- FIGUEROA, Adolfo y Manuel BARRÓN
- 2005 "Inequality, Ethnicity and Social Disorder in Peru". Disponible en: <www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtml>.
- FISHER, John Robert
- 1977 *Silver Mines and Silver Miners in Colonial Peru, 1776-1824*. Liverpool: Centre for Latin-American Studies y University of Liverpool Press.
- FLORES-GALINDO, Alberto
- 1976 *Túpac Amaru II-1780. Sociedad colonial y sublevaciones populares*. Lima: Retablo de Papel Ediciones.
- 1986 *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes*. Ciudad de La Habana: Ediciones Casa de las Américas.
- FRANCO, Carlos
- 1991 *Imágenes de la sociedad peruana: La otra modernidad*. Lima: Cedep.
- FROST, Michelle; Renata FORSTE y David HASS
- 2005 "Maternal Education and Child Nutritional Status in Bolivia: Finding the Links". *Social Science and Medicine* 60:2: 395-440.
- GAMSON, William A.
- 1992 *Talking Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GARCÍA, María Elena
- 2003 "The Politics of Community: Education, Indigenous Rights, and Ethnic Mobilization in Peru". En *Latin American Perspectives* 30: (70): 70-95.
- 2005 *Making Indigenous Citizens: Identities, Education, and Multicultural Development in Peru*. Stanford: Stanford University Press.
- GARCÍA-SAYÁN, Diego
- 1982 *Tomas de tierras en el Perú*. Lima: Cepes.
- GEERTZ, Clifford
- 1973 *The Interpretation of Cultures; Selected Essays*. Nueva York: Basic Books.
- GELLNER, Ernest
- 1983 *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.

GITLITZ, John

- 1998 "Decadencia y supervivencia de las rondas campesinas del norte del Perú". *Debate Agrario* 20: 23-53. Lima: Cepes.

GITLITZ, John y Telmo ROJAS

- 1983 "Peasant Vigilante Committees in Northern Peru". En *Journal of Latin American Studies* 15 (1): 163-197.

GLAVE, Luis Miguel

- 1992 *Vida, símbolos y batallas: creación y recreación de la comunidad indígena, Cusco, siglos XVI-XX*. Lima: Fondo de Cultura Económica.

GOLTE, Jürgen y Norma ADAMS

- 1990 *Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

GONZALES, Michael Joseph

- 1980 *Cayaltí. The Formation of a Rural Proletariat on a Peruvian Sugar Cane Plantation, 1875-1933*. Tesis doctoral. University of California, Berkeley.

GONZÁLES DE OLARTE, Efraín

- 1982 *Economías regionales del Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- 1992 *La economía regional de Lima: crecimiento, urbanización y clases populares*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- 2000 *Neocentralismo y neoliberalismo en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

GOOTENBERG, Paúl

- 1991 *Between Silver and Guano: Commercial Policy and the State in Post Independence Peru*. Princeton: Princeton University Press.
- 2008 *Andean Cocaine: The Making of a Global Drug*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

GREEN, Donald y Rachel SEHER

- 2003 "What Role does Prejudice Play in Ethnic Conflict?". *Annual Review of Political Science*, 6: 509-531.

GUZMÁN, Virginia y Virginia VARGAS

- 1981 *El campesinado en la historia: cronología de los movimientos campesinos, 1956-1964*. Lima: Ideas.

HALL, Gillette y Anthony PATRINOS

- 2006 *Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in Latin America*. Nueva York: Palgrave Macmillan.

HALL, Peter y Rosemary TAYLOR

- 1996 "Political Science and the Three Institutionalisms". IMIFG Scientific Advisory Board Discussion Paper 96/6. *Political Studies*, XLIV: 936-957.

HAMILTON, David y J. SHERMAN

- 1994 "Stereotypes". En Srull, T. R. et ál., eds., *Handbook of Social Cognition*; pp. 1-68. New Jersey: L. Erlbaum Associates.

HOBBSAWM, Erick

- 1969 "A Case of Neo-Feudalism: La Convención, Peru". En *Journal of Latin American Studies* 1(1): 31-50.

HOGG, Michael y Dominic ABRAMS

- 1988 *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. Londres: Routledge.

HOGG, Michael y Craig MCGARTY

- 1990 "Self-Categorization and Social Identity". En Abrams, D. et ál., eds., *Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

HUAMÁN, Josefina

- 1987 "Economía y organización en los comedores". Galer, N. et ál., eds., *Mujer y comedores populares*. Lima: SEPADC.

HUNT, Shane

- 1974 *Direct Foreign Investment in Peru: New Rules for an Old Game*. Princeton: Princeton University Press.
- 1973 *Growth and Guano in Nineteenth Century Peru*. Princeton: Princeton University Press.
- 1977 *Real Wages and Economic Growth in Peru 1900-1940*. Boston: Boston University.

IBARRA, Hernán

- 2002 "Gamonalismo y dominación en los Andes". En *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 14; pp. 137-147. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

IGUÍÑIZ, Javier

- 1984 “Ciclos económicos y región en el Perú: 1971-1981”. En *Allpanchis Phuturinqa* 23; Cuzco: Instituto de Pastoral Andina, CBC.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

- [1965] *Censo Nacional 1961*. Lima: Dirección Nacional de Estadística y Censos
- 2001 *Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)*. Disponible en <www.inei.gob.pe>.
- 2002 *Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)*. Disponible en <www.inei.gob.pe>.
- 2003 *Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (EHAHO)*. *Condiciones de vida en el Perú*. Disponible en <www.inei.gob.pe>.

ISAACS, Harold

- 1975 “Basic Group Identity: The Idols of the Tribe”. En Glazer, N. et ál., eds., *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press.

JACOBSEN, Niels

- 1997 “Liberalism and Indian Communities in Peru, 1821-1920”. En Jackson, R. H., ed., *Liberals, the Church, and Indian Peasants: Corporate Lands and the Challenge of Reform in Nineteenth-Century Spanish America*. Nuevo México: University of New Mexico Press.
- 2002 “Pensamiento económico y políticas económicas en el Perú, 1885-1899: los límites de la ortodoxia liberal”. En Contreras, C. et ál., eds., *Estado y mercado en la formación de la economía peruana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

JIMÉNEZ, Félix; Giovanna AGUILAR y Javier KAPSOLI

- 1999 *De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social.

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

- 2003 “Direcciones y teléfonos de alcaldes provinciales a nivel nacional (2002-2006)”. Datos del Consejo Nacional de Descentralización, Lima.
- 2006 “Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales del 2006”. Lima: JNE.
- 2007 *Elecciones Municipales 2006*. Lima: JNE.

KAPSOLI, Wilfredo

- 1987 *Los movimientos campesinos en el Perú*. Lima: Ediciones Atusparia.

KAUFMAN, Stuart

- 2001 *Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War*. Ithaca; Londres: Cornell University Press.

KAUFMAN, Robert y Joan NELSON

- 2004 *Crucial Needs, Weak Incentives: Social Sector Reform, Democratization and Globalization in Latin America*. Washington, D. C.: Woodrow Wilson Center Press y Johns Hopkins University Press.

KLARÉN, Peter

- 1976 *Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- 2000 *Peru: Society and Nationhood in the Andes*. Nueva York; Oxford: Oxford University Press.

KNIGHT, Peter Titcomb

- 1975 "New Forms of Economic Organization in Peru: Towards Workers' Self-Management". En Lowenthal, A., ed., *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule*; Princeton: Princeton University Press.

KURAMOTO, Juana

- 1999 *Las aglomeraciones productivas alrededor de la minería: el caso de la minera Yanacocha S.A.* Lima: Grade.

LAITIN, David

- 1986 *Hegemony and Culture: Politics and Religious Change among the Yoruba*. Chicago: University of Chicago Press.

LAJO, Manuel

- 1983 *Alternativa agraria y alimentaria: diagnóstico y propuesta para el Perú*. Piura: Centro de Investigaciones y Promoción del Campesinado.

LARSON, Brooke

- 2004 *Trials of Nation Making: Liberalism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910*. Cambridge: Cambridge University Press.

LAVALLÉ, Bernard

- 2004 *Les Autorités Indigènes entre Deux Mondes: Solidarité Ethnique et Compromission Coloniales*. París: CRAEC Université de la Sorbonne Nouvelle.

LEVITSKY, Steven

- 1999 "Fujimori and Post-Party Politics in Peru". En *Journal of Democracy* 10 (3): 78-92.

LÓPEZ, Sinesio

1997 *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas.

LONG, Norman y Bryan ROBERTS

1978 *Peasant Cooperation and Capitalist Expansion in Central Peru*. Austin, TX: Institute of Latin American Studies, University of Texas Press.

LORA, Carmen

1996 *Creciendo en dignidad: movimiento de comedores autogestionarios*. Lima: Bartolomé de las Casas.

LOVELL, Peggy A.

1999 "Development and the Persistence of Racial Inequality in Brazil: 1950-1991". En *The Journal of Developing Areas* 33 (3): 395-418.

LOW, Elaine

1976 "The Effect of Foreign Capital on Peruvian Entrepreneurship". Tesis doctoral. University of Oxford.

LOWENTHAL, Abraham F.

1975 *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule*, Princeton: Princeton University Press.

MADRID, Raúl

[e/p] *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press. [En prensa.]

MALLON, Florencia

1983 *The Defense of Community in Peru's Central Highland: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940*. Princeton: Princeton University Press.

1987 "Nationalist and Anti-State Coalitions in the War of the Pacific: Junín 1870-1902". En Stern, S., ed., *Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th-20th Century*; pp. 232-279. Madison: University of Wisconsin Press.

1992 "Indian Communities, Political Cultures, and the State in Latin America, 1780-1990". En *Journal of Latin American Studies* 24 (Quincentenary Supplement): 35-53.

1995 *Peasant and Nation: the Making of Postcolonial Mexico and Peru*. Berkeley, CA: University of California Press.

MANRIQUE, Nelson

- 1981 *Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile*. Lima: Centro de Investigación y Capacitación, y Editora Ital Perú.
- 1987 *Mercado interno y región: La sierra central, 1820-1930*. Lima: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- 1988 *Yawar Mayu: Sociedades terratenientes serranas, 1879-1910*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos y DESCO.
- 2002 *El tiempo del miedo: La violencia política en el Perú, 1980-1996*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

MARTÍNEZ, Patricia

- 2004 *La libertad femenina de dar lugar a Dios. Discursos religiosos del poder y formas de libertad religiosa desde la Baja Edad Media hasta el Perú colonial*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Movimiento Manuela Ramos.

MARTÍNEZ-ALIER, Juana

- 1977 *Haciendas, Plantations, and Collective Farms: Agrarian Class Societies, Cuba and Peru*. Londres: Frank Cass.

MASTRO, Marco del

- 1979 "El movimiento campesino cusqueño: 1968-1978". Tesis de licenciatura en Sociología. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

MATOS MAR, José y José Manuel MEJÍA

- 1980 *Reforma agraria: logros y contradicciones, 1969-1979*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

MAYER, Enrique

- 2009 *Ugly Stories of the Peruvian Agrarian Reform*. Durham: Duke University Press [Edición en español: *Cuentos feos de la Reforma Agraria*. Lima: IEP-CEPES, 2009].

MCADAM, Doug; Sidney TARROW y Charles TILLY

- 2001 *Dynamics of Contention. Cambridge Studies in Contentious Politics*. Cambridge; Nueva York: Cambridge University Press.

McEVOY, Carmen

- 1999 *Forjando la nación. Ensayos de historia republicana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Sewanee: University of the South.

MÉNDEZ, Cecilia

- 1996 "Incas, Sí; Indios, No: Notes on Peruvian Creole Nationalism and its Contemporary Crises" En *Journal of Latin American Studies* 8:1; pp. 197-225.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERÚ

- 2007 "Factores asociados al rendimiento estudiantil. Resultados de la Evaluación Nacional 2004". Mimeo. Lima: Unidad de Medición de la Calidad Educativa.

MOLYNEUX, Maxine

- 1985 "Mobilisation without Emancipation? Women's Interests, the State and Revolution in Nicaragua". En Molyneux, M., ed., *Women's Movements in International Perspective: Latin America and Beyond*. Londres: Palgrave, Institute of Latin American Studies y London University Press.

MOLYNEUX, Maxine y Shahrashoub RAZAVI

- 2002 *Gender Justice, Development and Rights*. Oxford: Oxford University Press.

MONTOYA, Rodrigo

- 1989 *Lucha por la tierra, reformas agrarias y capitalismo en el Perú del siglo XX*. Lima: Mosca Azul Editores.
- 1992 *Al borde del naufragio: Democracia, violencia y problema étnico en el Perú*. Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.
- 1998 *Multiculturalidad y política: Derechos indígenas, ciudadanos y humanos*. Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.

MÖRNER, Magnus

- 1980 *Estratificación social hispanoamericana durante el periodo colonial*. Estocolmo: Institute for Latin American Studies.

MUÑOZ, Ismael; Maritza PAREDES y Rosemary THORP

- 2006 *Acción colectiva, violencia política y etnicidad en el Perú*, Cuaderno de Investigación Política N.º 1, documento de trabajo, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 2007 "Group Inequalities and the Nature and Power of Collective Action: Case Studies from Peru". En *World Development* 35:11; pp. 1929-1946.

NORTH, Douglas Cecil

- 1990 *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge; Nueva York: Cambridge University Press.

NUGENT, Guillermo

1992 *El laberinto de la choledad*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

O'DONNELL, Guillermo

1999 "Delegative Democracy". En O'Donnell, G., ed., *Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

ÑOPO, Hugo; Jaime SAAVEDRA y Máximo TORERO

2004 *Ethnicity and Earnings in Urban Peru*. Bonn: Institute for the Study of Labour.

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

1998 "Padrón electoral". Disponible en: <www.onpe.gob.pe>.

2001 "Padrón electoral". Disponible en <www.onpe.gob.pe>.

O'PHELAN, Scarlett

1985 *Rebellions and Revolts in Eighteenth Century Peru and Upper Peru*. Köln: Böhlau.

PAREDES, Maritza

2007 "Fluid Identities: Exploring Ethnicity in Peru". Disponible en: <www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtml>.

2008 *Weak Indigenous Politics in Peru*, Serie de documentos de trabajo de CRISE, n.º 33. Oxford: Universidad de Oxford.

2010 "En una arena hostil: la politización de lo indígena en el Perú". En Meléndez, C. y A. Vergara, *El Perú Político en perspectiva comparada*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

2011 "Indigenous Politics and the Legacy of the Left", en John Crabtree (ed.), *Fractured Politics: Peruvian Democracy Past and Present*. Londres: Institute for the Study of the Americas.

PEGRAM, Thomas

2006 "Accounting for the Strength and Survival of the Ombudsman: The Case of the Peruvian "Defensoría del Pueblo", 1996-2001". M. Phil dissertation. University of Oxford.

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS, PHR

2007 *Deadly Delays: Maternal Mortality in Peru. A Rights Based Approach to Safe Motherhood*. Washington: PHR.

PIERSON, Paul

- 2004 *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis*. Princeton: Princeton University Press.

PLANAS, Mariela y Néstor VALDIVIA

- 2007 “Qualitative Report” preparado como parte del proyecto “‘Raising Awareness on the Connections between Race/Ethnicity, Discrimination, Poverty and Health Inequalities in Peru’, GRADE/ FASPA and the *Alianza para la Equidad en Salud*, AES)”, Lima.

PLATT, Tristan

- 1982 *Estado boliviano y ayllu andino: Tierra y tributo en el norte de Potosí*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

PNUD-PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PERÚ

- 2005 “La democracia en el Perú. Volumen 1”. Disponible en: <www.pnud.org.pe/frmPubDetail.aspx?id=41>.

PORTOCARRERO, Gonzalo

- 1983 *De Bustamante a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional 1945-1950*. Lima: Mosca Azul Editores.
- 1993 *Racismo y mestizaje*. Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.
- 1998 *Razones de sangre: Aproximaciones a la violencia política*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 2004 *Rostros criollos del mal: Cultura y transgresión en la sociedad peruana*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

PORTOCARRERO, Felipe

- 2006 “Wealth and Philanthropy: The Economic Elite in Peru, 1916-1960”. Tesis doctoral. Universidad de Oxford.

PORTUGAL, Andrea

- 2008 “Voices from the War: Exploring the Motivation of Sendero Luminoso Militants”. Disponible en <www.crise.ox.ac.uk/pubs.shtml>.

PORTUGAL, Edilberto

- 2004 *Tiempos nuevos para la alfabetización en el Perú*. Lima: Intermediate Technology Development Group, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible, y CARE-Perú.

QUIJANO, Aníbal

- 1980 *Dominación y cultura: Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú*. Lima: Mosca Azul Editores.

RÉNIQUE, José Luis

- 2004 *La batalla por Puno: Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos, 1866-1995*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; SUR, Casa de Estudios del Socialismo; y Centro Peruano de Estudios Sociales.

RIVERA, Iván

- 1979 *Los determinantes de la calidad de la educación en el Perú. Un estudio ECIEL*. Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, Pontificia Universidad Católica del Perú.

ROBERTS, Kenneth

- 1992 "In Search of a New Identity: Dictatorship, Democracy and the Evolution of the Left in Chile and Peru". Tesis doctoral. Stanford University.

ROJAS, Jorge

- 1996 *Las políticas comerciales y cambiarias en el Perú, 1960-1995*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

ROSTWOROWSKI, María

- 1993 *Ensayos de historia andina: Élités, etnias, recursos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú.

SALA I VILA, Núria

- 1996 *Y se armó el tole tole. Tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1784-1814*. Ayacucho: Instituto de Estudios Regionales José María Arguedas.

SAMAÑIEGO, Carlos

- 1974 "Local Social and Economic Differentiation and Peasant Movements in the Central Sierra of Peru". Tesis doctoral. University of Manchester.

SANBORN, Cynthia

- 1991 "The Democratic Left and the Persistence of Populism in Peru: 1975-1990". Tesis doctoral. Harvard University.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas

- 1974 *The Population in Latin America: A History*. Berkeley: University of California Press.

SANTOS-GRANERO, Fernando y Frederica BARCLAY

2002 *La frontera domesticada: Historia económica y social de Loreto, 1850-2000*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

SARA-LAFOSSE, Violeta

1984 *Los comedores y la promoción de la Mujer*. Lima: SUMBI.

SCHMIDT, Gregory

1984 "State, Society, and the Policy Process: Planning, Decentralization, and Public Investment in Peru, 1956-1980". Tesis doctoral. Cornell University.

SCHÖNWALDER, Gerd

2002 *Linking Civil Society and the State: Urban Popular Movements, the Left, and Local Government in Peru, 1980-1992*. Pennsylvania: University Park: Pennsylvania State University Press.

SEARLE, John

1995 *The Construction of Social Reality*. Nueva York: The Free Press.

SEN, Amartya

2006 *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. Nueva York: Norton and Co.

SERULNIKOV, Sergio

2006 *Conflictos sociales e insurrección en el mundo andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

SILVA, N.V.

1992 "Racial Discrimination in Income" (ponencia presentada en el seminario internacional "Labor Market Roots of Poverty and Inequality" del 12 al 14 de agosto, en Río de Janeiro).

SILVERBLATT, Irene

1987 *Moon, Sun, and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru*, Princeton: Princeton University Press.

SINAMOS

1976 *Vanguardia Revolucionaria. Reseña histórica, concepciones políticas y lineamientos estratégicos de VR, VR-proletario y PCR*. Lima: Sistema Nacional de Movilización Social.

SPALDING, Karen

1984 *Huarochiri: An Andean Society under Inca and Spanish Rule*. Stanford: Stanford University Press.

STARN, Orin

- 1999 "I dreamed of Foxes and Hawks: Reflections on Peasant Protests, New Social Movements and the Rondas Campesinas of Northern Peru". En Escobar, A. y Álvarez, S., eds., *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder: Westview Press.

STARN, Orin; Carlos Iván DEGREGORI y Robin KIRK

- 1995 *The Peru Reader: History, Culture, Politics*. Durham: Duke University Press.

STAVIG, Ward

- 1999 *The World of Tupac Amaru. Conflicts, Community and Identity in Colonial Peru*. Lincoln: University of Nebraska Press.

STEIN, William

- 1988 *Levantamiento de Atusparia: El movimiento popular ancashino de 1885: Un estudio de documentos*. Traducido por Jessica McLauchlan. Lima: Mosca Azul Editores.

STERN, Steve

- 1987 *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press.
- 1993 *Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest: Huamanga to 1640*. Madison: University of Wisconsin Press.
- 1998 *Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995*. Durham: Duke University Press.

STEWART, Frances

- 2008 *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies*. Basingstoke; Nueva York: Palgrave Macmillan.

SULMONT, David

- 2006 "Race, Ethnicity and Political Action in Peru: An Analysis of the 2005 CRISE Perceptions Survey in Peru". Disponible en: <www.crise.ox.ac.uk/workshops.shtml#latam>.
- 2010 "Race, Ethnicity, and Political Action in Peru". [De próxima aparición en la página web del CRISE.]

SZEMINSKI, Jan

- 1987 "Why Kill the Spaniards? New Perspectives on Andean Insurrectionary Ideology in the 18th Century". En Stern, Steve, ed., *Resistance, Rebellion*

and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries.
Madison: University of Wisconsin Press.

TAMAYO, Gonzalo y Pedro FRANCKE

- 1997 "Análisis del gasto público en salud" (ponencia presentada en el Seminario de Modernización del Sistema de Financiamiento de Salud). Lima: Ministerio de Salud.

TANAKA, Martín

- 1998 *Espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú en perspectiva comparada, 1980-1995.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TANAKA, Martín y Carolina TRIVELLI

- 2002 *Las trampas de la focalización y la participación. Pobreza y políticas sociales en el Perú durante la década de Fujimori.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TANDETER, Enrique

- 1992 *Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826.* Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

TARROW, Sidney

- 1983 *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest.* Ithaca: Cornell University Press.
- 1994 *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics.* Cambridge; Nueva York: Cambridge University Press.

THELEN, Kathleen

- 2003 "How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis". En Mahoney, J. et ál., eds., *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*; pp. 208-240. Nueva York: Cambridge University Press.

THOMSON, Sinclair

- 2002 *We Alone Will Rule: Native Andean Politics in the Age of Insurgency.* Madison; Londres: University of Wisconsin Press.

THORP, Rosemary

- 1991 *Economic Management and Economic Development in Peru and Colombia.* Londres: Macmillan.
- 1998 *Progress, Poverty and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20th Century.* Washington; Baltimore: Johns Hopkins University Press, Banco Interamericano de Desarrollo y Unión Europea.

- 2000 *Has the Coffee Federation become Redundant?: Collective Action and the Market in Colombian Development*. Helsinki: United Nations University y World Institute for Development Economics Research.
- 2010 “Acción colectiva y exclusiones sobrepuestas en un mundo Sigma”. En Jiménez, F., ed., *Teoría económica y desarrollo social: Exclusión, desigualdad y democracia. Homenaje a Adolfo Figueroa*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- THORP, Rosemary y Geoffrey BERTRAM
- 1978 *Peru, 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*. Londres: Macmillan.
- THORP, Rosemary y Maritza PAREDES
- 2010 “La Inequidad Étnica y sus Implicaciones para la Políticas Sociales”. En Portocarrero, Felipe; Enrique Vázquez y Gustavo Yamada (eds.), *Políticas Sociales: Nuevos Desafíos*. Lima: Universidad del Pacífico.
- THORP, Rosemary y Graciela ZEVALLOS
- 2002 *The Economic Policies of The Fujimori Years: A Return To The Past?* Oxford: University of Oxford Press.
- THURNER, Marx
- 1997 *From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nation Making in Andean Peru*. Durham; Londres: Duke University Press.
- TRIVELLI, Carolina
- 2005 *Los hogares indígenas y la pobreza en el Perú. Una mirada a partir de la información cuantitativa*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- TUESTA, Fernando
- 1994 *Perú político en cifras: 1821-2001*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- TULLIS, F. Lamond
- 1970 *Lord and Peasant in Peru: A Paradigm of Political and Social Change*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- VAN COTT, Donna Lee
- 1994 *Indigenous Peoples and Democracy in Latin America*. Nueva York: St Martin's Press, Inter-American Dialogue.
- 2000 *The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

- 2005 *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*. Nueva York, Cambridge: Cambridge University Press.
- VAN DE BERGHE, Pierre
1981 *The Ethnic Phenomenon*. Nueva York: Elsevier.
- VARGAS LLOSA, Mario
1990 "Question of Conquest. What Columbus Wrought, and What He Did Not", *Harper's Magazine*. Disponible en: <<http://harpers.org/archive/1990/12/0007669>>
- VÁSQUEZ, Enrique y Gustavo RIESCO
2000 "Los programas sociales que 'alimentan' a medio Perú". En Portocarrero, F., ed., *Políticas sociales en el Perú. Nuevos aportes*; pp. 89-152. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- WALKER, Charles H.
1999 *Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican Peru 1780-1840*. Durham: Duke University Press.
- WEBB, Richard
1974 "Government Policy and the Distribution of Income in Peru 1963-1973". Tesis doctoral. Harvard University.
- WEBB, Richard y Adolfo FIGUEROA
1975 *Distribución del ingreso en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- YASHAR, Deborah
2005 *Contesting Citizenship in Latin America. The Rise of Indigenous Movements and the Post Liberal Challenge*. Nueva York: Cambridge University Press.
- YRIGOYEN, Raquel
2002 "Rondas campesinas y pluralismo legal: Necesidad de reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo hacia una ley de rondas campesinas". En *Defensoría del Pueblo: Hacia una ley de rondas campesinas*. Lima: Defensoría del Pueblo.
- ZARZAR, Alonso
1991 "Las rondas campesinas de Cajamarca: ¿de la autodefensa al autogobierno?". En Pásara, Luis, ed., *La otra cara de la Luna: Nuevos actores sociales en el Perú*. Buenos Aires: Editorial CEDYS.

NOTA SOBRE LAS AUTORAS Y LOS COLABORADORES

Carlos Contreras es profesor de economía en la PUCP. También fue miembro del Departamento de Economía de la UNMSM y director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos. Se doctoró en el Colegio de México. Entre sus principales obras figuran *El aprendizaje del capitalismo. Estudios de historia económica y social del Perú republicano* (2004) y (con Marcos Cueto) *Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas por la independencia hasta el presente* (4.ª edición: 2007).

Adolfo Figueroa es profesor emérito de economía en la PUCP. Actualmente es investigador principal de Centrum, el centro de negocios de dicha universidad. Entre sus publicaciones figuran *Capitalist Development and the Peasant Economy in Peru* (Cambridge University Press, 1984; reimpresión en 2008) y *A Unified Theory of Capitalist Development* (Buenos Aires: Cengage Learning Publishers, 2009).

Maritza Paredes es investigadora visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Brown y candidata a doctora por la Universidad de Oxford. Su tesis doctoral compara históricamente los efectos de la minería en la formación de los Estados en Bolivia, Chile y Perú. Es coautora (con R. Thorp, S. Battistelli, Y. Guichaoua, y J. C. Orihuela) del libro *The Developmental Challenges of Mining and Oil: Lessons from Africa and Latin America* (en prensa, Palgrave, 2012). Es autora de artículos en libros y revistas sobre la política de la etnicidad y la formación del Estado en los Andes.

David Sulmont es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y director de estudios de la maestría de sociología de dicha universidad. Fue también director de investigaciones del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2004-2009). Entre 2001 y 2003 fue nombrado jefe de la unidad de análisis de datos y fue un miembro del comité editorial de la CVR (2001-2003). Sus campos de investigación son la opinión pública, el comportamiento electoral, los derechos humanos y la raza y las cuestiones étnicas.

Rosemary Thorp ha consumado su carrera académica enseñando en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Tiene también los títulos de Doctora Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesora ad Honórem de la Universidad del Pacífico, en Lima. Ha sido la presidenta de Oxfam GB 2002-2006. Es la autora de numerosos libros sobre América Latina, y, sobre todo, el Perú, incluyendo *Perú 1890-1977: Crecimiento y economía política en una economía abierta* (con Geoff Bertram). Su trabajo más reciente (con Maritza Paredes, Jose Carlos Orihuela, Stefania Battistelli e Yvan Guichaoua) estudia los desafíos del sector extractivo en América Latina y África (*The Developmental Challenges of Mining and Oil: Lessons from Africa and Latin America* (en prensa, Palgrave, 2012).

Este libro explora la desigualdad, en particular, la que sufre la población indígena andina. Su eje es el análisis de la persistencia y la profundidad de dicha desigualdad mediante una investigación histórica de las interrelaciones entre política, economía, geografía y cultura.

El concepto impulsor es la desigualdad entre grupos. Este marco analítico en sí refiere a todas las dimensiones de la desigualdad, no solo al aspecto económico. Las autoras encuentran que el enraizamiento de la desigualdad entre grupos se da mediante la creación y la reproducción de instituciones que interactúan sin patrón de crecimiento primario-exportador, actitudes sociales de discriminación, y la impenetrabilidad del sistema político, no obstante las nuevas características de “apertura”.

En colaboración con:

Carlos Contreras

Adolfo Figueroa

Ismael Muñoz

David Sulmont

